

Enrique Moradiellos

1936

Los mitos de la guerra civil



se

Lectulandia

1936 constituye una mirada historiográfica ponderada sobre la Guerra Civil que asoló España entre julio de 1936 y abril de 1939. Aquella brutal contienda fratricida fue un profundo cisma de extrema violencia en la convivencia de una sociedad atravesada por múltiples líneas de fractura interna que aún hoy requiere un análisis sereno.

Enrique Moradiellos

1936

Los mitos de la Guerra Civil

ePub r1.0

Titivillus 13.12.2020

Título original: 1936
Enrique Moradiellos, 2004

Editor digital: Titivillus
ePub base r2.1

A LA MEMORIA DE MIS FAMILIARES, QUE SUFRIERON EL INFORTUNIO DE VIVIR Y
COMBATIR EN AMBOS BANDOS DE LA GUERRA CIVIL

*«What's your proposal? To build the just city? I will.
I agree. Or is it the suicide pact, the romantic
Death? Very well, I accept, for
I am your choice, your decisions. Yes, I am Spain».*
(...)

*On that arid square, that fragment nipped off from hot
Africa, soldered so crudely to inventive Europe;
On that tableland scored by rivers,
Our thoughts have bodies; the menacing shapes of our fever
Are precise and alive
«¿Qué os proponéis? ¿Edificar la ciudad justa? Bien.
De acuerdo. ¿O un pacto suicida, una muerte romántica?
Muy bien, lo acepto; porque
soy vuestro gusto, vuestra decisión. Sí, yo soy España».*
(...)

*En esa yerma parcela, ese pedazo arrancado a la ardiente
África y soldado con crudeza a la Europa creadora;
en esa meseta surcada de ríos,
nuestro pensamiento se hace carne;
las formas inquietantes de nuestra fiebre
cobran vida y nitidez.*

W. H. AUDEN, «Spain» (1937)

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,
Cuando asqueados de la bajeza humana,
Cuando iracundos de la dureza humana:
Este hombre solo, este acto solo, esta fe sola,
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.

LUIS CERNUDA, «1936» (1961)

—¿Qué es una guerra civil?
—Matanza entre discrepantes.
Atención: cada viviente
podría ser fusilado
bajo el mismo crimen único.
Pude yo también morir.

JORGE GUILLÉN, «Final» (1973)

PREFACIO

Si se presta la debida atención, aún puede escucharse el eco del estruendo lejano del fragor de los combates: un ruido ensordecedor de metralla y cañones que eclipsó las palabras y segó tantas vidas humanas. Todo comenzó hace poco menos de setenta años (67, para ser más exactos, desde el mes de julio de 2003) y tan sólo duró dos años, ocho meses y quince días. La detonación inicial se produjo el 17 de julio de 1936 con una extensa sublevación militar contra el gobierno de la República iniciada en el Protectorado español de Marruecos y rápidamente propagada por las guarniciones peninsulares, insulares y coloniales de España. Su terminación oficial cobró la forma de un parte de guerra triunfal emitido el 1 de abril de 1939 por el general Francisco Franco Bahamonde (Ferrol, 1892-Madrid, 1975) desde su Cuartel General del Generalísimo en la ciudad de Burgos.

Todavía viven algunos protagonistas y testigos, relevantes o anónimos, de lo que fue un enorme cataclismo en el seno de la sociedad española con una cosecha mínima de 300 000 muertos (sólo la mitad en operaciones bélicas, el resto víctimas de la represión en retaguardia), otros 300 000 exiliados definitivos y más de 270 000 prisioneros políticos en las cárceles en el primer aniversario del final de la contienda. Y también persisten aún no pocas huellas y vestigios, tanto físicos como psicológicos, de su corta pero intensa existencia y duración.

Claros exponentes de las huellas materiales son, a título de mero ejemplo impresionista, la villa destruida de Belchite en el centro de Aragón; las invocaciones a generales victoriosos o mártires de la Cruzada que siguen poblando los callejeros de muchas ciudades españolas (sólo la capital cántabra cuenta con treinta vías urbanas dedicadas a personajes o instituciones del bando vencedor); y el Arco de Triunfo en la entrada de la Ciudad Universitaria de Madrid con su expresiva dedicatoria latina: «Fundada por la generosidad del Rey, restaurada por el Caudillo de los españoles, la sede de los estudios matritenses florece en la presencia de Dios»^[1]. También lo son las tres grandes obras inspiradas en la contienda española que han pasado a ser clásicos canónicos de la novelística universal del siglo xx: *La*

esperanza, del francés André Malraux (publicada en 1937), *Homenaje a Cataluña*, del británico George Orwell (que vio la luz en 1938), y *¿Por quién doblan las campanas?*, del norteamericano Ernest Hemingway (editada en 1940^[2]).

La persistencia de vestigios psicológicos se comprueba igualmente en los resultados de las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas entre la ciudadanía sobre la memoria de la guerra civil y el olvido o recuerdo de sus «divisiones y rencores». En diciembre del año 2000 el 51 % de los encuestados (2486 españoles mayores de dieciocho años de ambos sexos y de 46 provincias) consideraban que «No se han olvidado», frente a un 43 % que opinaba lo contrario. Era un resultado que mostraba una ligera variación respecto de otra encuesta del año 1995 entre 2478 encuestados que había dado el siguiente panorama: 48 %, «Sí se han olvidado»; 41,6 % «No se han olvidado»^[3].

También se demuestra esa vitalidad actual del fenómeno en la declaración aprobada por el Congreso de los Diputados, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, el 20 de noviembre de 2002, vigésimo séptimo aniversario de la muerte del general Franco. A tenor de la misma, inspirándose en el deseo de «Paz, Piedad y Perdón» expresado en plena guerra por el presidente de la República, Manuel Azaña, los diputados españoles expresaban su «reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron posteriormente la represión de la dictadura franquista»^[4].

Parece comprensible, en consecuencia, que un fenómeno histórico de tanta actualidad latente, patente o difusa como es la guerra civil española de 1936-1939 siga suscitando el interés de los historiadores (tanto españoles como, ya en menor medida que antes, extranjeros). Y, del mismo modo, resulta lógico y razonable que continúe ejerciendo una especie de fascinación entre los lectores legos o duchos en la materia (mayormente españoles, pero también todavía extranjeros). Sobre todo, por los múltiples interrogantes que plantea la polifacética entidad de la contienda y las correlativas e inagotables demandas de respuestas y explicaciones sobre la misma. Y no es para menos dicho interés historiográfico ni dicha fascinación pública. Como mínimo por dos razones estrechamente ligadas.

En primer lugar, porque el conflicto fratricida de la década de los años treinta del siglo xx constituye, sin ningún género de dudas, el acontecimiento central y decisorio de la historia contemporánea española: «el punto crítico del siglo xx» (Julio Aróstegui); «una cesura traumática para la sociedad

española» (Walther L. Bernecker); «la condensación de todos los debates políticos de la primera mitad de nuestro siglo» (Santos Juliá); «la culminación de una serie de accidentadas luchas entre las fuerzas de la reforma y las de la reacción» (Paul Preston); «el más profundo desgarró moral que han conocido (los españoles) como pueblo» (Alberto Reig Tapia); «una ruptura cronológica» (Carlos Seco Serrano); «un tajo asestado a la convivencia de la sociedad española» (Manuel Tuñón de Lara^[5]).

Fue, por tanto, un acontecimiento tan central y crucial para todas las generaciones españolas del último siglo recién clausurado que se ha llegado a decir con propiedad que «vive en nosotros» como una herida «cicatrizada» pero todavía sensible y sentida (Javier Tusell^[6]).

Además de esa importancia indisputada para la propia historia española, la guerra civil también arrastra una cualidad notable y reveladora: constituye el fenómeno histórico español de mayor transcendencia internacional en los dos últimos siglos por su intensa repercusión exterior, sobrepasando incluso a los otros tres hitos que podrían hacerle mínima sombra y competencia: la Guerra de Independencia frente a Napoleón en 1808-1814; el Desastre colonial y la guerra hispano-norteamericana de 1898; y la pacífica Transición política de la dictadura franquista a la democracia entre 1975 y 1978^[7].

Ese impacto externo de la contienda española fue agudamente percibido desde el mismo inicio de las hostilidades por los analistas diplomáticos occidentales: «Creo que la importancia para Europa de los sucesos españoles se incrementa a medida que se prolongan en el tiempo» (informe reservado remitido a Berlín por el conde Welczeck, embajador alemán en París, el 2 de agosto de 1936^[8]); «Es una de las amenazas más graves, si no la más grave, que el mundo ha tenido que enfrentar desde la Gran Guerra» (juicio confidencial de *sir* George Mounsey, alto funcionario del Foreign Office británico, el 15 de agosto de 1936^[9]).

Y su condición de símbolo y emblema del vigoroso paradigma antifascista que en vísperas de la Segunda Guerra Mundial estaba suplantando al previo paradigma anticomunista dominante en Occidente, ha sido recientemente recordado por el escritor norteamericano Arthur Miller:

No hubo ningún otro acontecimiento tan trascendental para mi generación en nuestra formación de la conciencia del mundo. Para muchos fue nuestro rito de iniciación al siglo XX, probablemente el peor siglo de la historia. (...) La palabra «España» en los años treinta era explosiva^[10].

Probablemente sea éste de Arthur Miller uno de los más recientes ejemplos de esa consideración de la guerra española como la «última causa buena» de las

generaciones europeas de la centuria recién agotada. Una tradición intelectual cuyo origen pudiera estar en el poema de 1937 de W. H. Auden que figura en la apertura de esta obra y algunos de cuyos hitos más destacables son Arthur Koestler («España fue el último aldabonazo en la conciencia moribunda de Europa») o Albert Camus («Los hombres de mi generación han tenido a España en su corazón... En España aprendimos que uno puede tener razón y sin embargo ser vencido»^[11]).

LOS PERDURABLES MITOS SOBRE LA GUERRA

Habida cuenta de esa doble importancia y transcendencia histórica señalada, cabe comprender la génesis durante el conflicto y la persistencia posterior de un modelo de interpretación de la guerra civil española que se articulaba sobre un esquema de dualismo tan épico como maniqueo. En otras palabras: sobre un verdadero *mito* por su condición de relato y representación que organiza y trata de explicar la realidad tratada como una acción extraordinaria a cargo de protagonistas sobresalientes (individuales o colectivos) bajo un formato idealizado, ritualizado, de perfiles nítidos y rotundos y sin atisbos de duda, incertidumbre o contradicción. Ya en 1954 decía Hans-Georg Gadamer que, desde la Grecia clásica y hasta la actualidad, «la relación entre mito y *logos* (razón)» es «la que existe entre el pensamiento que tiene que rendir cuentas y la leyenda transmitida sin discusión», de modo que «el mito está concebido en este contexto como el concepto opuesto a la explicación racional del mundo»^[1].

Esta duradera representación conceptual de la guerra como un mito de combate heroico a vida o muerte entre dos bandos contendientes (uno «bueno», el otro «malo») se apoyaba en la existencia de aquellas «dos Españas» definidas por una línea de frente pero cuyo origen era anterior a las propias hostilidades, según una variada fórmula retórica acuñada en las décadas de entre siglos: la «España legal» frente a la «España real»; la «España joven» frente a la «España vieja», la «España tradicional» frente a la «España moderna», etc^[2].

La simplificación dicotómica inherente a este esquema de interpretación como gesta heroica y maniquea tenía mucho que ver con las necesidades de movilización y unificación de cada bando combatiente y resultaba de notoria utilidad explicativa y justificativa de cara a la retaguardia interior tanto como al ámbito exterior. Así, al menos, lo había previsto y afirmado el escritor y poeta gaditano José María Pemán (1897-1981), un ferviente propagandista de

la causa insurgente liderada por el general Franco: «Las masas son cortas de vista y sólo perciben los colores crudos y decisivos: negro y rojo»^[3].

Precisamente Pemán, ya en plena guerra civil, habría de ser uno de los formuladores y divulgadores de la imagen dicotómica más extendida y aplaudida en el bando franquista. Era una visión centrada exclusivamente en las dimensiones nacionales y religiosas del conflicto y tomó cuerpo lírico en su *Poema de la Bestia y el Ángel* (elaborado durante 1937 y publicado en 1938). Aunque el título ya fuera revelador, el tono y cariz de esa interpretación dualista, épica y fuertemente maniquea se aprecia sobradamente en algunas estrofas del mismo:

*Otra vez sobre el libro azul que baña
la luz naciente en oro ensangrentado,
el dedo del Señor ha decretado
un destino de estrella, para España.
(...)
San Jorge frente al dragón,
San Miguel frente a Satán.
(...)
Y el enemigo sigue siendo el mismo
Oriente pecador.
No hay más: Carne o Espíritu.
No hay más: Luzbel o Dios^[4].*

Esa interpretación dicotómica y de contenidos épicos no quedaba reducida a las proclamas literarias de los propagandistas bélicos, ni mucho menos. Formaba parte integral también del universo mental e ideológico de los círculos militares y políticos que dirigían la insurrección y que conformarían la elite gobernante del incipiente régimen franquista. Baste un mero ejemplo para demostrar la amplia extensión de esa cosmovisión de la guerra civil como una contienda «por Dios y por España» frente a un enemigo demonizado y apátrida (por estar al servicio del comunismo internacional y ser dirigido desde Moscú).

El 13 de agosto de 1936, Isidro Gomá, cardenal primado de la Iglesia española y arzobispo de Toledo, remitió a la Santa Sede el que sería su primer informe reservado y confidencial sobre la guerra española en curso. La posterior sacralización del esfuerzo bélico franquista como una verdadera Cruzada religiosa y nacional estaba ya implícita en su descripción de ambos bandos:

En conjunto puede decirse que el movimiento (insurreccional) es una fuerte protesta de la conciencia nacional y del sentimiento patrio contra la legislación y procedimientos del Gobierno de este último quinquenio, que paso a paso llevaron a España al borde del abismo marxista y comunista.

(...) Puede afirmarse que en la actualidad luchan España y la anti-España, la religión y el ateísmo, la civilización cristiana y la barbarie^[5].

Apenas un día después de redactado ese informe confidencial, una alocución radiada del canónigo magistral de Salamanca, Aniceto de Castro Albarrán (luego impresa y difundida), daba publicidad a esa interpretación religiosa y patriótica. No en vano, el mencionado canónigo se interrogaba abiertamente sobre si las operaciones en curso eran «una guerra santa o una execrable militarada». Y su respuesta no admitía duda alguna: «Es una lucha por Dios y por la Patria. (...) Será nuestro grito el grito de los cruzados: ¡Dios lo quiere!»^[6].

Frente a la interpretación insurgente y franquista, el bando republicano, por supuesto, no tardó en elaborar y producir su propia imagen alternativa de la naturaleza y significado del conflicto fratricida en curso. Tendría el mismo formato dualista y análogos tintes heroicos y maniqueos. Pero, a diferencia de los contornos nacionales y religiosos predominantes en el campo enemigo, la lectura mayoritaria en la zona republicana tendería a centrarse en aspectos clasistas y político-ideológicos de la contienda: la resistencia del «pueblo» frente a los «privilegiados» y sus valedores extranjeros «invasores» (la Italia fascista y la Alemania nazi); de los «demócratas», «republicanos» y «antifascistas» frente a los «reaccionarios», «monárquicos» y «fascistas».

Así, por ejemplo, cabe considerar que el poeta zamorano León Felipe (1884-1968) adelantó su réplica literaria a José María Pemán en un artículo en prosa publicado en el diario madrileño *El Sol* el 14 de noviembre de 1936:

Hay dos Españas: la de los generales bastardos y traidores y la de los poetas hijos de la tierra y de la historia verdadera; la España de Franco y la España de Machado. La de la hombría y la del señorito degenerado, la del Cid y la de los infantes de Carrión, la de los privilegios de la rapiña y la de la justicia luminosa^[7].

Y aunque las organizaciones políticas y sindicales leales a la República (u hostiles a la sublevación) carecieran de la férrea unanimidad interpretativa de sus enemigos (como veremos con posterioridad), podría aceptarse que la siguiente declaración de José Díaz, secretario general del Partido Comunista de España, hace justicia a la interpretación (en clave clasista y política) predominante en sus filas a la altura del año 1938:

El punto de partida de la guerra que hoy se libra en España es la sublevación de las castas reaccionarias, dirigidas por los generales traidores, contra la enorme mayoría del pueblo que, basándose en la Constitución y en la ley republicana, querían resolver de una vez y para siempre los problemas de la revolución democrática^[8].

Incluso los adversarios más radicales del comunismo ortodoxo estalinista en las filas republicanas no dejaron de aceptar buena parte de esa interpretación clasista alentada por el PCE y la Internacional Comunista. El propio León Trotsky, al comentar los últimos estertores de la guerra civil en febrero de 1939, recogía la idea de una mayoría del «pueblo» haciendo frente a militares, «propietarios» y potencias «capitalistas» como clave de lectura de la crisis bélica española:

En el bando de Franco no hay ni un Ejército poderoso ni apoyo popular. Sólo está la codicia de propietarios dispuestos a ahogar en sangre a tres cuartas partes de la población, aunque sólo sea para mantener su dominio sobre la parte restante superviviente. Sin embargo, esta ferocidad caníbal no era bastante para ganar la victoria sobre el heroico proletariado español. (...)

Las clases poseedoras de todos los países capitalistas, tanto fascistas como democráticos, se alinearon como era natural con el bando de Franco. La burguesía española se había pasado en bloque al bando de Franco^[9].

Estas visiones contrapuestas (y ambas dualistas, épicas y maniqueas) sobre el carácter y sentido de la guerra civil española fueron intensamente divulgadas durante las hostilidades y tuvieron una prolongada vida y vigencia con posterioridad, tanto en el plano del discurso público como en el ámbito historiográfico. No en vano, el supuesto enfrentamiento entre dos mitológicas y cuasi-eternas Españas que habían combatido a muerte entre 1936 y 1939 servía para legitimar moralmente las opciones políticas y evitaba mayores afanes críticos (sobre todo en relación con los defectos y carencias del propio bando).

En todo caso, la persistencia de la interpretación de la guerra civil como una gesta heroica y maniquea fue particularmente intensa en el bando franquista en razón de su propia victoria y de la longeva duración del régimen político triunfante en el conflicto. Basta comprobar, al respecto, la notable identidad de dos publicaciones oficiales en dos momentos bien distintos de su existencia: la ingente *Historia de la Cruzada Española* (dirigida por el periodista Joaquín Arrarás Iribarren y publicada en Madrid en ocho volúmenes por Ediciones Españolas entre 1939 y 1943) y la más breve *Síntesis histórica de la Guerra de Liberación* (publicada en Madrid por el Servicio Histórico Militar del Estado Mayor Central del Ejército en 1968).

Por el contrario, la intensidad de las divisiones internas en el bando derrotado y la fragmentación orgánica y geográfica del exilio republicano crearon dificultades casi insalvables para conformar una visión unitaria y compartida del fenómeno bélico más allá de su mínima condición de «guerra antifascista». Así se comprueba, por ejemplo, en el contenido de tres versiones muy contrapuestas, si no antitéticas: la del presidente Manuel

Azaña (recogida en sus artículos de 1939 posteriormente publicados como *Causas de la guerra de España*); la del dirigente anarquista Diego Abad de Santillán (*Por qué perdimos la guerra. Una contribución a la historia de la tragedia española*, de 1940); y la tardía historia «oficial» del Partido Comunista de España dirigida por Dolores Ibárruri (*Guerra y revolución en España*, aparecida entre 1966 y 1977^[10]).

En el caso franquista, la persistencia inalterada de la visión dualista original fue producto de la imposición de una férrea censura militar en el tratamiento de lo que se denominó oficialmente la «Guerra de Liberación» (contra el comunismo) o la «Cruzada Española» (contra el ateísmo). El prefacio del decreto de 23 de septiembre de 1941 sobre las «Obras referentes a la Guerra de Liberación o su Preparación» afirmaba que, «estando tan reciente la terminación de la campaña, pudiera suceder que al enjuiciar, se desvirtuase la significación del Movimiento Nacional o padeciese la verdad histórica». Por consiguiente, se disponía:

Artículo 1.º Las entidades y personas civiles y militares, autores, editores o traductores de obras en las que se trate de la campaña de nuestra Cruzada, o que en cualquier forma o extensión se refieran al aspecto militar o preparación de la misma, la someterán a la previa autorización del Ministerio del Ejército, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones que regulan toda clase de publicaciones.

Artículo 2.º Queda prohibido a editores, impresores y establecimientos comerciales, editar ni poner a la venta obras de esta clase que, a partir de la publicación de este Decreto, no lleven el «visado» del Ministerio del Ejército. (*Boletín Oficial del Estado*, 24 y 25 de septiembre de 1941).

Habría que esperar hasta 1964 (con motivo de la celebración oficial del «XXV Aniversario de la Paz de Franco») para que esa estricta vigilancia militar sobre las interpretaciones históricas de la guerra fuera eliminada como parte del programa de remozamiento y apertura tecnocrática del régimen franquista auspiciado por Manuel Fraga Iribarne desde el Ministerio de Información y Turismo.

Al mismo tiempo, Fraga también creaba en el seno de su ministerio una «Sección de Estudios de la Guerra de España» que pasaría a estar dirigida por un funcionario e historiador muy prolífico: Ricardo de la Cierva. Las publicaciones de la nueva entidad, por expreso deseo de su director, comenzaron a utilizar el más aséptico vocablo «guerra de España» con preferencia a «Cruzada» y «Guerra de Liberación», pero sin admitir inicialmente el término «guerra civil» por sus connotaciones de equidad entre bandos combatientes y reconocimiento de fractura interna y endógena del propio país^[11]. Ya había dejado suficientemente claro el motivo en 1945 el padre redentorista Andrés Goy, autor de un texto oficial de formación

religiosa y patriótica para los jóvenes escolares: «No era aquella guerra civil, porque no es guerra civil la que mantiene la autoridad contra los ladrones, asesinos e incendiarios: eran los momentos del ser o no ser del alma española»^[12].

Ambas medidas «aperturistas» trataban de responder a las demandas del nuevo perfil de la visión y memoria de los españoles sobre la contienda civil, muy transformada por los profundos cambios socioeconómicos que estaba experimentando la sociedad durante el decenio «desarrollista» y por las nuevas concepciones abrigadas sobre aquel fenómeno histórico. De hecho, no cabe duda de que por entonces un nuevo modelo interpretativo estaba suplantando a la previa imagen dualista de la gesta heroica y maniquea.

Se trataba de una concepción quizá igualmente dualista en formato (seguían presentes las dos «Españas»), pero que concebía el conflicto como una «tragedia colectiva» vergonzante y vergonzosa. Era una visión de la guerra civil como una inmensa «locura colectiva» y como un rotundo «fracaso» conjunto de todos los españoles («Todos fuimos culpables, en mayor o menor grado»), sin claros tintes heroicos que loar y con muchos componentes trágicos que lamentar. En cierto sentido, parecía ser la triunfal reactualización de las viejas tesis de Miguel de Unamuno en 1936 sobre la guerra «incivil» en curso: «Entre marxistas y fascistas, entre los hunos y los hotros, van a dejar a España inválida de espíritu»^[13].

Por supuesto, la transición desde el mito de la gesta heroica al mito de la locura trágica fue lenta, progresiva y quizá nunca completa (en el sentido de que no desterró la supervivencia de los mitos iniciales en ámbitos minoritarios). Pero sus orígenes son bien perceptibles ya en la década de los años cincuenta con la publicación (y el enorme e inesperado éxito) de la novela de José María Gironella *Los cipreses creen en Dios* (1953), que versaba sobre los antecedentes inmediatos de la contienda y mostraba (hecho insólito hasta entonces) la existencia de republicanos honestos y bienintencionados: «Gironella fue el primer novelista que planteó el sentimiento de la guerra como una gran catástrofe» (según el historiador Fernando García de Cortázar^[14]).

Igualmente resulta perceptible ese nuevo ánimo y discurso en la adopción por el Partido Comunista de España en junio de 1956 de la política de «reconciliación nacional» para derribar el franquismo «pacíficamente». Justo en aquel mismo año, testigo de una de las primeras y más graves crisis internas del régimen, también la muy minoritaria oposición democratacristiana articulada por Manuel Giménez Fernández, exministro de

la CEDA, declaraba su voluntad de «dar al olvido esa catástrofe, a cuyo fin se esforzará por borrar todo recuerdo de la contienda» (manifiesto de octubre de 1956).

Al año siguiente, era el Partido Socialista Obrero Español el que reconocía que las nuevas generaciones del interior de España guardaban «remoto recuerdo» de la guerra y comenzaban a definirla como «inútil matanza fratricida» (*El Socialista*, 22 de agosto de 1957). Lo mismo, casi exactamente, que haría dos años más tarde la también minoritaria y selecta oposición monárquica afecta al pretendiente exiliado en Portugal, don Juan de Borbón: «creemos que una guerra civil es una inmensa tragedia sobre la que no cabe fundar el porvenir» (Joaquín Satrústegui en la presentación de *Unión Española* en el Hotel Menfis de Madrid el 29 de enero de 1959). Incluso el semanario *Ecclesia*, portavoz de la cauta jerarquía episcopal española, empezaba a reflejar los aires preconciarios impuestos por el nuevo Papa Juan XXIII y expresaba en 1959 su deseo de «llegar a la reconciliación de todos los españoles»^[15].

La principal y decisiva consecuencia política e ideológica, a la altura de los años sesenta, de esa mayoritaria conversión popular de la gesta heroica en una locura trágica fue el eclipse de los odios y rencores del pasado en favor de una básica lección moral asumida y compartida para el futuro: «Nunca más la guerra civil» (o lo que es lo mismo: «Ante todo y, sobre todo, paz»). Se trataba de una transformación de principios de cultura cívica (al compás del inevitable reemplazo biológico generacional) que renunciaba a la inculpación ajena para reconocer la culpabilidad colectiva del comportamiento brutal de los españoles en la contienda. El consecuente arrepentimiento y propósito de enmienda implicaba, a su vez, cierta amnesia en la medida en que el perdón recíproco exige el olvido voluntario y, en su corolario lógico, la amnistía.

Una muestra clara de esa nueva actitud popular se refleja en el éxito del llamado «cine de reconciliación», en el que se enmarcan, con distinto grado de compromiso, películas como *La venganza*, de Juan Antonio Bardem (1957), *La fiel infantería*, de Pedro Lazaga (1959), o *Tierra de todos*, de Antonio Isasi Isasmendi (1961^[16]). En esta última, por ejemplo, dos soldados enemigos extraviados se ven en la obligación de ayudar a una mujer embarazada que está a punto de dar a luz en medio de una mortífera batalla. Cuando ambos la transportan en una improvisada camilla al hospital, una bomba acaba con sus vidas. Pero sobre el cráter del proyectil nacerá el bebé, símbolo de una España nueva.

La significación alegórica y el mensaje político es aún más explícito en la película de Bardem, un militante comunista clandestino que propagaba la nueva política de reconciliación nacional. En la misma, un escritor caminante (protagonizado por Fernando Rey) se encuentra con los dos protagonistas (emblemas de los dos bandos) y pronuncia ante ellos una reflexión moral que podría considerarse la clave de toda la obra:

Que muchas veces los enemigos lo son por estar apartados y sin hablar, y no por otra cosa. Porque nadie puede vivir solo, ni nadie está solo, y cada hombre debe contar con su vecino. Y, así, la mejor palabra es *amigo*, que quiere decir lo contrario de egoísta. Al amigo se le conoce porque olvida, y si ha de perdonar, perdona. (...) Esta tierra nuestra, lo que conozco de ella, es grande y hermosa. A ratos, buena. A ratos, mala..., y en ella estamos todos juntos. Todos somos vecinos, y todos podemos ser amigos. Por eso, nadie puede sembrar cizaña y llamar a unos buenos y a otros malos. Porque de todo hay, y mezclado. Se me antoja que todos formamos una gran cuadrilla, cada uno con sus cosas por dentro, pero todos juntos. Todos a la par. Todos segando la misma mies^[17].

Si fuera preciso tratar de cuantificar el grado de implantación popular de esa nueva visión trágica y doliente de la guerra, cabría recurrir al apoyo recibido por el decreto gubernamental de 31 de marzo de 1969 que declaraba prescritos «los delitos cometidos con anterioridad a la fecha del 1 de abril de 1939»: de los 1953 encuestados por el Instituto de Opinión Pública, un 77 % lo consideraba «muy bien» o «bien», sólo un 6,5 % lo veía «regular» o «mal», en tanto que un mero 14,4 % optaba por no opinar^[18].

Como han señalado numerosos autores y analistas, en esa lección moral sobre la culpabilidad colectiva en la locura de la tragedia española se encontraban los firmes orígenes culturales y antecedentes sociales que hicieron viable la gran operación política de desmantelamiento del régimen franquista y de transición pacífica hacia la democracia que se pondría en marcha tras el fallecimiento del general Franco el 20 de noviembre de 1975^[19].

Es significativo que los sectores más intransigentes del régimen franquista fueran los que más se resistían a esa tendencia revisionista sobre el carácter de la guerra, porque ponía en cuestión la legitimidad de la victoria que fundamentaba el propio régimen. El almirante Luis Carrero Blanco, vicepresidente del gobierno y auténtico *alter ego* de Franco desde 1941, anotó para su Caudillo a principios del año 1970: «El tópico de que ya no hay que hablar de la guerra es una manifestación más del opio que se quiere dar a la generación que no la conoció»^[20].

Y serían los sectores más aperturistas del propio franquismo los que replicarían al hombre fuerte del inmovilismo y recogerían la voluntad dominante por entonces en la sociedad española. En palabras de Manuel

Fraga Iribarne en 1972: «[ha] llegado el momento no sólo del perdón mutuo, sino del olvido, de ese olvido generoso del corazón que deja intacta la experiencia»^[21].

LA TAREA DESACRALIZADORA DE LA PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA

El encomiable valor moral y utilidad funcional durante la transición democrática de esa lección histórica implícita en el «Nunca más» resulta incontestable. Y, sin embargo, cabe subrayar que en sus presupuestos, formato y contenido seguía siendo una manera de tratar el problema histórico real de modo sustancialmente mitificado y, por ende, distorsionado y sacralizado.

En todo caso, y no es pura coincidencia, justo a principios de la década de los años sesenta comenzaba a desplegar su vuelo una nueva historiografía sobre la guerra civil más científica, solvente y rigurosa. Se trataba de una nueva perspectiva menos lastrada por el compromiso político declarado (ya fuera «antifascista» prorrepblicano o «anticomunista» profranquista) y necesariamente desacralizadora en sus pretensiones de búsqueda de la cruda verdad (Tzvetan Tódorov: «quien dice historia dice sacrilegio»^[1]).

Por razones claras y evidentes (de libertad de expresión, seguridad jurídica y libre acceso a fuentes informativas), lo haría desde el extranjero y con bastantes problemas para llegar al interior de España (en virtud de la vigilancia de la censura y de la policía de aduanas). Significativamente, la primera edición de 1963 del conocido «manual» de *Introducción a la historia de España* de «Ubieto, Regla, Jover» (por sus autores: Antonio Ubieto, Juan Reglá y José María Jover) terminaba su periplo justo en 1931 y sin abordar siquiera la época republicana y, aún menos, la de la guerra civil^[2]. Dados estos antecedentes, el impacto de esta nueva historiografía en España (y fuera de ella) sería tal que habría de llevar a las ya señaladas modificaciones sobre censura militar y esfuerzo aperturista al tratar de la «Guerra de España».

No sería justo desconocer que las novedosas perspectivas historiográficas inauguradas en la década de los sesenta contaban con dos antecedentes

inmediatos y sumamente influyentes.

Por un lado, *El laberinto español*, la densa obra del escritor británico Gerald Brenan publicada en inglés en plena guerra mundial (1943) y oportunamente traducida y publicada en español en 1962 por Ruedo Ibérico, la magna institución cultural del exilio republicano en París. Cualesquiera que fueran sus defectos y carencias interpretativas, el trabajo de Brenan suponía una ruptura neta con la literatura previa sobre el tema por su voluntad ecuánime de búsqueda de explicaciones inmanentes y materiales sobre la contienda, apelando a una rica variedad de datos económicos y sociales y huyendo de los estereotipos sobre la violencia innata de los españoles y su incapacidad para la vida pacífica en democracia^[3].

El segundo antecedente cabría encontrarlo en la más breve pero no menos enjundiosa y divulgada *Historia de España* del hispanista francés Pierre Vilar. Su obra, que contenía un crucial capítulo V sobre «las crisis contemporáneas» (de 1917 a 1939), fue publicada originalmente en 1946 y sería traducida y editada en español, también en París y en medios republicanos exiliados, sólo un año más tarde que la de Brenan (en 1963).

Sin embargo, no parece haber duda de que el punto de arranque de esa nueva historiografía sobre la contienda española fue la aparición del libro titulado *La guerra civil española* firmado por el hispanista británico Hugh Thomas, publicado simultáneamente en inglés y francés en el año 1961. Traducido al español seis años después (y a casi todos los principales idiomas del mundo), el estudio de Thomas era una voluminosa y minuciosa crónica del conflicto escrita desde perspectivas liberal-democráticas y con propósito de imparcialidad y distanciamiento respecto de las pasiones partidistas aún vigentes. En consonancia con el empirismo definitorio de la historiografía británica, el libro, con un destacado estilo narrativo y una vasta apoyatura en literatura testimonial y fuentes hemerográficas, presentaba el fenómeno bélico como resultado de acciones y omisiones de hombres, grupos políticos y organizaciones sociales, y no como un fenómeno exigido por la evolución orgánica de estructuras históricas anónimas y suprasubjetivas.

En gran medida, esas cualidades estilísticas y conceptuales le proporcionaron el enorme éxito de audiencia y lectores que no tuvieron otras dos obras aparecidas en el mismo año de 1961: el estudio de los hispanistas franceses Pierre Broué y Émile Témime *La Révolution et la Guerre d'Espagne* (una visión mucho más analítico-estructural y de abierto compromiso político filotrotskyista y antiestalinista); y el trabajo del hispanista galés Burnett Bolloten *The Grand Camouflage. The Communist Conspiracy*

in the Spanish Civil War (un minucioso análisis bastante parcial sobre las actividades comunistas en la guerra de simpatías filoanarquistas y profunda prevención antisoviética).

A partir de esas tres obras señeras del año 1961, la producción bibliográfica sobre la guerra civil a cargo de historiadores extranjeros (o de algún exiliado español) no dejó de crecer a lo largo de toda la década, con contribuciones generalistas tanto como monográficas de gran alcance y transcendencia para la conceptualización del fenómeno bélico: Dante A. Puzzo (*Spain and the Great Powers*, Nueva York, Columbia University Press, 1962); Carlos M. Rama (*La crisis española del siglo xx*, México, Fondo de Cultura Económica, 1962); Herbert R. Southworth (*El mito de la Cruzada de Franco*, París, Ruedo Ibérico, 1963); Gabriel Jackson (*The Spanish Republic and the Civil War*, Princeton, Princeton University Press, 1965); Raymond Carr (*Spain, 1808-1939*, Oxford, Oxford University Press, 1966); Manuel Tuñón de Lara (*La España del siglo xx*, París, Librería Española, 1966); Stanley G. Payne (*Politics and the Military in Modern Spain*, Stanford, Stanford University Press, 1967); César M. Lorenzo (*Les anarchistes espagnols et le pouvoir*, París, Seuil, 1969); Edward Malefakis (*Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain*, Ann Arbor, Michigan University Press, 1970); Guy Hermet (*Les communistes en Espagne*, París, Armand Colin, 1971).

Como era natural y previsible, esa hegemonía de la producción historiográfica extranjera (sobre todo anglo-norteamericana) sobre la guerra civil empezó a remitir a medida que la crisis final de la dictadura franquista permitía a los historiadores españoles ajenos al régimen adentrarse en el «desierto inexplorado» de ese período y en sus antecedentes (la Segunda República) y consecuentes (la Dictadura de Franco). Señala al respecto Julián Casanova con acierto:

... cuando aparecieron los primeros libros de esos autores angloamericanos, sus resultados sólo podían compararse con los de las obras de los propagandistas del régimen de Franco. O, dicho de otra forma, ningún historiador español alejado de los presupuestos de la historiografía franquista había penetrado todavía en el análisis profundo del conflicto^[4].

Basta comprobar esa renuncia obligada de la historiografía española a abordar el tema atendiendo al número (dos de nueve) y filiación (franquista) de los únicos colaboradores españoles que participaron en una importante obra colectiva dirigida por el hispanista británico Raymond Carr y publicada en un año clave del tardofranquismo: *Estudios sobre la República y la guerra civil española* (Barcelona, Ariel, 1973).

Y cabe recordar que, dos años antes, las autoridades franquistas habían prohibido y retirado de la circulación un libro oficial titulado *El Banco de España. Una historia económica* (Madrid, Banco de España, 1970). El motivo era que en él se incluía una sustantiva colaboración del profesor Juan Sardá sobre la economía española entre 1931 y 1962 en la que había una referencia sobre el uso del oro en la guerra civil totalmente inaceptable (por ir contra el mito del «oro de Moscú» robado y dilapidado por los republicanos): «el tesoro español entregado a la URSS fue efectivamente gastado en su totalidad por el Gobierno de la República durante la guerra» (p. 436).

Sin duda, un hito claro en este proceso de recuperación historiográfica del tema por parte de autores españoles no vinculados al régimen fue la autorización gubernativa para que se publicara el libro del economista (y dirigente comunista clandestino) Ramón Tamames, que formaba parte de una divulgada colección de historia de España y abarcaba el período titulado (tan extraña como asépticamente): *La República. La era de Franco* (Madrid, Alianza, 1973).

Ese mismo año y el siguiente verían la luz otras cuatro obras relevantes sobre el período bélico, ambas relativas a materias sumamente «sensibles» para la ideología franquista, que se convertirían en canónicas: un trabajo del historiador económico Josep Maria Bricall que abordaba un aspecto de la gestión autonómica en la Cataluña republicana en guerra (*Política económica de la Generalitat*, Barcelona, Nova Terra, 1973); una enciclopédica investigación de un militar y excombatiente franquista, Ramón Salas Larrazábal, sobre la génesis y actuación del Ejército republicano (*Historia del Ejército Popular de la República*, Madrid, Editora Nacional, 1973, 4 volúmenes); un análisis de otro historiador económico, Ángel Viñas Martín, sobre la génesis y entidad de la ayuda hitleriana a la sublevación franquista (*La Alemania nazi y el 18 de julio*, Madrid, Alianza, 1974); y un estudio de Andreu Castells sobre los voluntarios extranjeros que combatieron al servicio de la República (*Las Brigadas Internacionales de la guerra de España*, Barcelona, Ariel, 1974).

Por supuesto, el final de la dictadura y el restablecimiento de la democracia y las libertades civiles a partir de 1975 permitió un cambio sustancial e irreversible en la situación. A partir de entonces, y sobre todo en torno al sexenio 1981-1986 (marcado por la celebración de dos cincuentenarios: el de la proclamación de la República y el del comienzo de la guerra civil), se produjo una verdadera eclosión bibliográfica, cuantitativa tanto como cualitativa, en la producción historiográfica sobre la guerra civil.

En ese último año citado, el hispanista británico Paul Preston se hacía eco de una estimación según la cual se habían escrito sobre la guerra civil, en España y en el extranjero, «alrededor de quince mil libros». Y añadía acertadamente: «un epitafio literario equiparable al de la Segunda Guerra Mundial»^[5]. Diez años más tarde, un estimable trabajo del Centro de Información y Documentación Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas registraba más de 3500 referencias bibliográficas (españolas y extranjeras) publicadas entre 1975 y 1996 sobre la guerra civil: 1848 libros y 1749 artículos^[6].

No es éste el lugar ni el momento de hacer repaso a esa crecida bibliografía ni de ponderar sus logros y virtudes (o acaso defectos y vicios). Baste señalar que dicha multiplicación de investigaciones historiográficas sólo fue posible gracias a las nuevas condiciones sociopolíticas imperantes después de 1975 y tras las elecciones generales de junio de 1977 (con la correlativa democratización de las estructuras universitarias, ampliación de los recursos financieros disponibles y patrocinio de diversas instituciones y organismos autónomos), y por el firme respaldo prestado por tres fenómenos previos y coetáneos.

El primero, la configuración de una difusa «escuela» en torno a Manuel Tuñón de Lara, legataria intelectual de los coloquios iniciados en la Universidad de Pau en 1970 y concentrada básicamente en el análisis de los años treinta. Uno de los frutos de este fenómeno fue la publicación del libro editado por Tuñón y sus colaboradores bajo el título: *La guerra civil. 50 años después* (Barcelona, Labor, 1985).

El segundo, la afloración de una nueva generación de historiadores españoles formados básicamente en ámbitos universitarios extranjeros e impregnados de las nuevas tendencias metodológicas e historiológicas dominantes en esos lares. Ejemplos relevantes de este fenómeno pudieran ser Juan Pablo Fusi, *El problema vasco durante la II República* (Madrid, Turner, 1979); Enric Ucelay-Da Cal, *La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l'etapa republicana, 1931-1939* (Barcelona, La Magrana, 1982); y Alberto Reig Tapia, *Ideología e historia. Sobre la represión franquista en la guerra civil* (Madrid, Akal, 1984).

Y, finalmente, la irresistible aparición de una corriente de investigaciones historiográficas de ámbito territorial circunscrito (local, provincial, regional y autonómico) que muy pronto se convirtió en claramente hegemónica en virtud del apoyo recibido por las instituciones políticas y culturales correspondientes a esos ámbitos administrativos. Entre los mejores trabajos de esta índole, a

título ilustrativo, cabría citar los libros de Julio Aróstegui y Jesús Martínez, *La Junta de Defensa de Madrid* (Madrid, Comunidad Autónoma, 1984); Julián Casanova, *Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938* (Madrid, Siglo XXI, 1985); y Josep Maria Solé i Sabaté, *La repressió franquista a Catalunya, 1938-1953* (Barcelona, Edicions 62, 1985).

Desde esas fechas del cincuentenario y hasta el presente, el caudal de datos e informaciones aportado por las investigaciones sobre la guerra civil, junto con los debates y polémicas auspiciados a la par y correlativamente, ha permitido avances sustanciales en la tentativa de comprensión historiográfica del fenómeno bélico y de su polifacética entidad y naturaleza. En general, salvando obligados matices, cabría decir que ese cúmulo de trabajos monográficos o generalistas ha ido arrumbando sin remisión las visiones más unívocas y simplistas sobre la contienda en favor de esquemas interpretativos más pluralistas y necesariamente más complejos. Sin que por ello hayan desaparecido aquéllas. Véanse, como contrafigura probatoria, las dos obras recientes y reiterativas del publicista Pío Moa Rodríguez: *El derrumbe de la Segunda República y la guerra civil* (Madrid, Encuentro, 2001); y *Los mitos de la guerra civil* (Madrid, La Esfera de los Libros, 2003).

Si tratáramos de hacer un breve repaso exclusivamente de las más importantes visiones historiográficas generales sobre la guerra civil publicadas tras el restablecimiento de la democracia, probablemente habría que comenzar con una tentativa de cuantificación de sus aspectos materiales emprendida por un excombatiente en el bando franquista y reputado historiador militar: el general de aviación Ramón Salas Larrazábal: *Los datos exactos de la guerra civil* (Madrid, Rioduero, 1980).

A continuación, resultaría inexcusable la mención del trabajo colectivo dirigido por un maestro de historiadores regresado del exilio en Francia, Manuel Tuñón de Lara, que fue responsable de una obra hecha con sus colaboradores españoles (Julio Aróstegui, Gabriel Cardona, Ángel Viñas y Josep Maria Bricall) y publicada con ocasión del cincuentenario del conflicto: *La guerra civil española. 50 años después* (Barcelona, Labor, 1985).

También con ese pretexto conmemorativo, el citado general Salas Larrazábal y su hermano, igualmente militar, Jesús Salas Larrazábal, editaron su propia visión compartida del fenómeno: *Historia general de la guerra civil* (Madrid, Rialp, 1986). Y en esa misma coyuntura de conmemoraciones fue publicada una obra colectiva de gran calidad y muy amplia cobertura temática: *La guerra civil. Historia 16* (Madrid, Historia 16, 1986, 24 vols.). Con un carácter más divulgativo, breve e interpretativo, por esas mismas

fechas vio la luz el trabajo dirigido por el hispanista norteamericano Edward Malefakis bajo el título *La guerra de España* (Madrid, El País, 1986, 21 fascículos).

Diez años después de la avalancha de publicaciones del cincuentenario, la lista de obras generales se amplió con el añadido de un estudio dirigido por Javier Tusell y Stanley G. Payne: *La guerra civil. Una nueva visión del conflicto que dividió España* (Madrid, Temas de Hoy, 1996). También apareció entonces una magna obra en siete volúmenes (con doce vídeos de acompañamiento) dirigida por Luis Palacios Bañuelos: *La guerra civil española* (Tudela, Edilibro-Club Internacional del Libro, 1996). Y con ocasión del sesenta aniversario de la terminación de la contienda se publicaron otras dos síntesis panorámicas: la dirigida por el historiador y militar Miguel Alonso Baquer, *La guerra civil. Sesenta años después* (Madrid, Actas, 1999); y la firmada por Ricardo Recio Cardona, *Rojo y azul. Imágenes de la guerra civil española* (Madrid, Almena, 1999).

Entre las obras de las dos últimas décadas debidas a autores individuales, cabría destacar las publicadas con ocasión del cincuentenario del estallido del conflicto por cinco historiadores de sensibilidad muy diferente y hasta contrastada: el decano del hispanismo británico y profeso liberal, sir Raymond Carr (*La tragedia española. La guerra civil en perspectiva*, Madrid, Alianza, 1986); el prolífico y profranquista Ricardo de la Cierva (*Nueva y definitiva historia de la guerra civil*, Madrid, ABC, 1986); el mucho más ecuaníme historiador andaluz José Manuel Cuenca Toribio (*La guerra civil de 1936*, Madrid, Espasa Calpe, 1986); y el maestro de los hispanistas franceses y templado exponente de la historiografía marxista, Pierre Vilar (*La guerra civil española*, Barcelona, Crítica, 1986). Con posterioridad a esas contribuciones, las obras de autor individual más destacables y rigurosas podrían ser las publicadas por el hispanista germano Walther L. Bernecker (*Guerra en España*, Madrid, Síntesis, 1996); por Julio Aróstegui (*La guerra civil. La ruptura democrática*, Madrid, Historia 16, 1997); y por el hispanista británico Paul Preston (*La guerra civil española*, Barcelona, Plaza y Janés, 2000).

Y no sería posible dejar de mencionar en este listado generalista cuatro trabajos de un orden algo distinto. Ante todo, dos diccionarios temáticos y biográficos sobre la guerra civil de indudable utilidad a pesar de sus carencias específicas. Por orden de aparición cronológica, el primero de ellos está editado por un notable hispanista norteamericano que encabeza un selecto equipo de historiadores participantes: James W. Cortada (editor), *Historical*

Dictionary of the Spanish Civil War (Westport, Conn., Greenwood Press, 1982). El segundo es responsabilidad individual de un único autor español: Manuel Rubio Cabeza, *Diccionario de la guerra civil española* (Barcelona, Planeta, 1987, 2 vols.). Con un carácter de diccionario enciclopédico similar, pero incluyendo además útiles documentos y fotografías, cabría citar el trabajo dirigido por Rafael Borrás, *Crónica de la Guerra Civil Española* (Barcelona, Plaza y Janés-Círculo de Lectores, 1996). Finalmente, debe registrarse el recién aparecido volumen editado por Jesús de Miguel y Antonio Sánchez, que constituye una especie de dietario del conflicto profusamente ilustrado: *La guerra civil española día a día* (Madrid, Libsa, 2004).

No tendría sentido, ni sería posible, tratar de resumir o sintetizar en estas páginas esas nuevas perspectivas sobre el conflicto derivadas de más de un cuarto de siglo de estudios e investigaciones sin cortapisas políticas y en un clima de libertad intelectual y debate razonado. Sin embargo, tampoco sería admisible orillar la exposición sumaria de algunas de sus líneas básicas de configuración y desarrollo. Sobre todo, por lo que hace a cuatro cuestiones prioritarias de obligada atención por parte de una historiografía atenta a su condición de filtro crítico y depurativo para la edificación y persistencia de una mínima conciencia histórica racionalista entre la ciudadanía:

1.º la pertinencia o futilidad de considerar la guerra como manifestación extrema del conflicto latente entre las «dos Españas»;

2.º el juicio sobre la inevitabilidad o contingencia de la contienda y la consecuente atribución de responsabilidades o culpas;

3.º las razones explicativas de la victoria total lograda por el bando franquista y la derrota absoluta cosechada por la República; y

4.º la valoración de la incidencia del contexto internacional en el desencadenamiento, curso y desenlace de la propia contienda fratricida.

LAS TRES ESPAÑAS DE 1936

La persistencia de la imagen de las «dos Españas» como causa última de la guerra civil es más que notable en la conciencia pública y en algunos escritores y publicistas de mayor o menor éxito. Sin ir más lejos, la recientemente fallecida escritora extremeña Dulce Chacón, autora de una novela de éxito sobre testimonios de los vencidos (*La voz dormida*, Madrid, Alfaguara, 2002), declaraba con aplomo a un diario nacional sobre el tema en noviembre de 2002: «El conflicto entre las dos Españas no ha terminado»^[1]. Y pocas semanas después, la solemne declaración aprobada por unanimidad en el Congreso de Diputados sobre «reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil» encabezaba su texto con la cita de un muy famoso verso de Antonio Machado: «Españolito que vienes / al mundo, te guarde Dios / Una de las dos Españas / ha de helarte el corazón»^[2].

Varios años antes, con ocasión del cincuentenario, en 1986, una casi desconocida encuesta entre 1065 personas efectuada por la Fundación Salvador Seguí (por encargo de la Confederación Nacional del Trabajo) ofreció los siguientes resultados sobre su concepto de la guerra civil: el 40,8 % la consideró «una guerra entre derechas e izquierdas»; un 30,6 % la percibía como «un conflicto armado entre clases sociales»; el 16,3 % la veía como «una guerra contra el fascismo»; y un mero 2,2 % la interpretaba como «una cruzada contra el ateísmo y el materialismo»^[3].

A tenor de esas respuestas y de otros síntomas análogos, resulta incuestionable el elevado grado de dualismo alternativo en las concepciones populares sobre la guerra civil, refrendado como está por el hecho evidente de que la contienda configuró un frente de lucha que dividió sin remedio en dos campos enemigos a la sociedad y al territorio español. Y, no obstante, quizá el mayor logro de la investigación historiográfica más reciente consiste en haber demostrado la patente inadecuación de ese esquema binario para comprender cabalmente la génesis, estallido, curso y desenlace del propio conflicto. Como

ha señalado Julián Casanova certeramente: «aquella no era únicamente una España dividida entre izquierda y derecha, oligarcas y pueblo, o socialistas y cedistas». Porque la guerra civil estaría conformada por «muchas guerras» paralelas y latentes, todas ellas de origen previo a julio de 1936. En palabras de Santos Juliá:

Lo que ocurrió fue desde luego lucha de clases por las armas, en la que alguien podía morir por cubrirse la cabeza con un sombrero o calzarse con alpargatas los pies, pero no fue en menor medida guerra de religión, de nacionalismos enfrentados, guerra entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo^[4].

En efecto, no cabe duda de que los frentes de combate tallados en julio de 1936 dividieron en dos a la sociedad y al territorio español. Y tampoco cabe duda de que esa división fáctica tomó cuerpo sobre la base de las dos Españas bien reales que se habían ido articulando desde el punto de vista geográfico, productivo, ocupacional y de poblamiento a lo largo de todo el siglo XIX y durante el primer tercio del siglo XX.

No en vano, como se verá con mayor detalle posteriormente, la República y sus partidarios se hicieron fuertes en aquella España básicamente urbana (la zona centro constituida por el eje Madrid-Barcelona-Valencia y la franja norteña desde la cuenca minera asturiana a Bilbao), empleada sobre todo en actividades económicas de carácter industrial o terciario, con una estructura socio-ocupacional notablemente diversificada, con población mayoritariamente alfabetizada e inmersa en un marco cultural pluralista, que era partícipe de un proceso de modernización lento pero sistemático.

Por su parte, la insurrección militar se consolidó de inmediato en aquella España básicamente rural (el bloque noroccidental desde Galicia a Aragón, pasando por Navarra y Castilla la Vieja, con su extensión en el foco andaluz en torno a Sevilla), ocupada principalmente en actividades productivas agrarias y ganaderas, con una estructura socio-ocupacional menos diversificada, donde predominaba la población analfabeta y las formas culturales más tradicionales, y cuya dinámica económica era precaria y atrasada en comparación con las zonas modernizadas.

Para hacer visibles esas dos Españas geográfico-sociales bastaría contrastar la situación existente en el campo minifundista gallego, en la zona cerealícola leonesa o en las dehesas latifundistas cacereñas, con la situación imperante en áreas de aglomeración urbana como eran la capital madrileña, la industriosa ría de Bilbao o las comarcas fabriles en torno a Barcelona.

Aceptada la existencia de esa España dual (una en vías de modernización, otra estancada en el atraso), hay un grave obstáculo para trasponer la misma

al plano del protagonismo político y de la actuación social. Porque sobre la base física de esas «dos Españas» no surgían dos proyectos políticos con sus respectivos apoyos sociales, sino tres núcleos de proyectos políticos muy distintos y antagónicos: el reformista democrático; el reaccionario autoritario o totalitario; y el revolucionario colectivizador. Era exactamente la misma tríada de modelos que habían surgido en Europa al compás del impacto devastador de la Gran Guerra de 1914-1918 y que competían para lograr la estabilización política e institucional de los traumatizados países continentales a tono con sus respectivos apoyos sociales e intereses económicos.

Esos tres núcleos de proyectos de reestructuración del Estado y de las relaciones sociales quedarían definidos sumariamente por las «Tres Erres» políticas que iban a dominar el período de entreguerras (1919-1939): Reforma, Reacción o Revolución. Y esa tríada antagónica, con sus peculiares y cambiantes relaciones recíprocas, iba a protagonizar la silenciosa y espasmódica «guerra civil europea» librada durante ese veintenio: «las palabras que más se escuchaban en los numerosos mítines (en esos años) eran “lucha”; “batalla” y “el enemigo”»^[5]. No en vano, como ha señalado certeramente el historiador británico Donald C. Watt:

La guerra civil que comenzó en Europa al tiempo que las campanas anunciaban el armisticio [de la Primera Guerra Mundial el 11 de noviembre de 1918] era en esencia un conflicto triangular: los conservadores tradicionales y los demócratas, sostenedores del Estado de Derecho, afrontaban el desafío simultáneo de los nuevos reaccionarios de la derecha antiparlamentaria y de los revolucionarios de la izquierda antiburguesa^[6].

El proyecto reformista, especialmente arraigado en las clases medias burguesas de tradición liberal-constitucionalista (y triunfante en Francia, Gran Bretaña y los países nórdicos, por ejemplo), pretendía estabilizar la situación posbélica mediante una democratización del sistema político que conciliara el funcionamiento básico de la economía capitalista con la integración de las clases obreras y populares en la gestión del Estado. En esencia, era un proyecto de construcción de un Estado democrático basado en la colaboración de clases y en el reparto de cargas y beneficios entre la ciudadanía, con el sufragio electoral universal y la política de provisión de servicios sociales como mecanismos fundamentales de participación, integración y cohesión sociopolítica.

Por su parte, la alternativa revolucionaria, de matriz básicamente obrera y en menor medida campesina, era radicalmente antiburguesa y apostaba por la destrucción de la economía capitalista y su sustitución por un régimen comunista ortodoxo (en la versión de los bolcheviques vencedores en Rusia

en 1917) o vagamente libertario y colectivista. En cualquier caso, como demostraba la experiencia bolchevique y soviética, suponía la construcción de un Estado bajo férreo control de un partido-vanguardia supuestamente representativo de las clases anteriormente sometidas que ejercía el poder sin cortapisas ni limitaciones en virtud de su propia legitimidad revolucionaria.

Finalmente, el modelo reaccionario pretendía acabar con la amenaza subversiva al *statu quo* que atemorizaba a sectores de las clases medias y altas mediante la anulación de la autonomía operativa de las clases obreras y su drástica supeditación, normalmente *manu militari*, a un programa de integralismo nacionalista de carácter autoritario (como en la Polonia del mariscal Pilsudski desde 1918 o en el Portugal de Salazar desde 1926) o totalitario fascista (como en la Italia de Mussolini desde 1922 o en la Alemania de Hitler desde 1933). Se trataba, por tanto, de un proyecto de Estado superador del antagonismo de clases por medio de la imposición de una disciplina sociolaboral de impronta militar y que en la versión fascista exigía el control estatal por un partido único animado por una ideología ultranacionalista y dirigido por un líder carismático dotado de plenos poderes.

En el caso español, esa dura pugna y competencia entre las «Tres Erres» políticas de la Europa de entreguerras tenía su origen inmediato en la misma etapa bélica que en el resto de los países continentales: la grave crisis del verano de 1917, en pleno momento cumbre de la Primera Guerra Mundial, que rompió los precarios equilibrios de la monarquía liberal-parlamentaria restaurada en 1874 y a pesar de que España había permanecido neutral en la contienda por mera impotencia^[7].

También cobró la forma de análogas alternativas políticas y doctrinales: un monarquismo católico y cada vez más autoritario y ultranacionalista que sostendría la dictadura militar del general Miguel Primo de Rivera entre 1923 y 1930; una corriente democrática que se articularía durante esa etapa sobre la colaboración entre el republicanismo burgués y el movimiento obrero socialista con el refuerzo de los nacionalismos periféricos (sobre todo el catalanista); y una tendencia revolucionaria y proclamadamente internacionalista que se aglutinaría mucho más en torno al anarcosindicalismo que al minoritario comunismo de inspiración soviética.

Desde luego, como en el resto de Europa, los respectivos apoyos sociales de esa tríada de alternativas se distribuían por las «dos Españas» de modo general aunque desigual. Así, en los albores de los años treinta del siglo XX, la España de la modernización productiva será el escenario principal de actuación de los reformistas que se nutren de las clases medias urbanas y de

los segmentos de las clases obreras cualificadas profesionalmente, pero también contará con la presencia de reaccionarios que abundan en sus barrios acomodados y entre sectores populares de fidelidad religiosa tradicional, del mismo modo que sentirá el creciente empuje de los revolucionarios implantados entre las clases obreras sin cualificación o expuestas al azote del desempleo. Por su parte, la España rural y atrasada había visto y vería crecer sobre su suelo a reaccionarios que se reclutaban entre los grandes, medianos y pequeños campesinos propietarios, y a revolucionarios que proliferaban entre la población jornalera de las tierras de latifundio, con una menor presencia global de los elementos reformistas procedentes del campesinado no terrateniente ni proletarizado (muy abundantes, sin embargo, entre los *rabassaires* vitivinícolas catalanes, los cultivadores hortofrutícolas levantinos y los agricultores y ganaderos asturianos en contacto con las zonas fabriles de la región).

Esa fragmentada y plural realidad sociopolítica se plasmó por vez primera en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que conllevaron la caída de la monarquía del rey Alfonso XIII y la súbita y pacífica proclamación de la Segunda República. No en vano, sus resultados fueron tan reveladores como inesperados: las candidaturas de la conjunción republicano-socialista triunfaron ampliamente en cuarenta y una de las cincuenta capitales de provincia y en la mayor parte de los municipios urbanos, siendo superados por las candidaturas oficiales y monárquicas sólo en distritos rurales y semiurbanos. El veredicto de las urnas fue bien interpretado por Raymond Carr: «la “masa” (las grandes circunscripciones) y la “inteligencia” (los votantes urbanos “ilustrados”) habían rechazado a un rey todavía aceptable para la opinión rural»^[8].

En definitiva, la dinámica sociopolítica presente en España en la época de entreguerras no era una mera lucha dual o binaria («una España contra otra»), sino una pugna triangular que reproducía en pequeña escala la existente en toda Europa y cuyos apoyos y soportes respectivos se encontraban tanto en la zona de la modernización como en la del atraso. La transcendental peculiaridad del caso español respecto del europeo residiría en que, a diferencia de otros países continentales, en España ninguno de esos proyectos de estabilización en pugna lograría la fuerza suficiente para imponerse a los otros dos de modo definitivo e incontestado.

De hecho, durante el quinquenio democrático republicano de 1931-1936 fue alcanzándose un equilibrio inestable, un empate virtual de apoyos y capacidades (y de resistencias e incapacidades), entre las fuerzas dispares de

la alternativa reformista (en el poder durante el primer bienio de 1931-1933) y su contrafigura borrosamente reaccionaria (en el poder durante el segundo bienio de 1934-1935). Un empate y equilibrio inestable que hizo así imposible la estabilización del país tanto por la similar potencia respectiva de ambos contrarios (y su compartida incapacidad para reclutar otros apoyos fuera de los propios) como por la presencia de ese tercio excluido revolucionario, enfrentado a los dos por igual y volcado en su propia estrategia insurreccional. Sin menospreciar el hecho, también singularmente español, de que cada una de esas alternativas evidenciaron una notable diversidad interna (en términos de partidos y grupos operativos tanto como de proyectos y tácticas propias) que dificultó notoriamente su propia capacidad de actuación.

Como apuntó en su día José Varela Ortega, la dinámica política de la Segunda República pareció configurarse como una especie de tenaza con dos brazos y un mismo objetivo que batir: «Reacción y Revolución frente a Reforma»^[9]. Con una circunstancia agravante de gran calado: según transcurría el quinquenio, las fuerzas reformistas verían menguar sus filas y entidad a medida que la crisis económica acentuaba su impacto disolvente sobre las relaciones sociales y propiciaba una polarización política favorable a los extremos del espectro.

El progresivo debilitamiento del reformismo democrático fue un hecho innegable a pesar de que la conjunción republicano-socialista había revalidado sus apoyos en las elecciones generales de junio de 1931, que le dieron una mayoría parlamentaria suficiente para tratar de acometer su amplísimo programa de reformas institucionales y sociales de orden democrático^[10]. No obstante, la elaboración del texto constitucional fue fracturando la alianza original de abril de 1931 en virtud de las agudas diferencias sobre el alcance reformador que habría de dar al régimen en aspectos socioeconómicos y políticos. En diciembre de 1931, al aprobarse una Constitución democrática con artículos de tinte anticlerical, Niceto Alcalá-Zamora, exministro monárquico, católico y conservador que actuaba como presidente del gobierno, abandonó su cargo y la coalición junto a su pequeño partido de notables. Poco después, también dejó el gobierno el Partido Radical liderado por Alejandro Lerroux, un grupo mucho más numeroso de perfil centroderechista, en disconformidad con la continuidad socialista en el gabinete y decidido a convertirse en la oposición moderada dentro de la República.

Tras esas fracturas iniciales, Manuel Azaña, el más prestigioso de los líderes de la izquierda republicana, formó nuevo gobierno con tres ministros socialistas: Indalecio Prieto (Obras Públicas), Francisco Largo Caballero (Trabajo) y Fernando de los Ríos (Educación). Para tratar de paliar el efecto debilitador de las deserciones, Azaña propuso y consiguió que Alcalá-Zamora fuera elegido primer presidente de la República con los votos de la antigua mayoría gubernamental. A partir de entonces, desde diciembre de 1931 y hasta septiembre de 1933, el gobierno presidido por Azaña acometería un programa de reformas estructurales de orden institucional y social. En el plano institucional emprendió una triple tarea: conseguir la plena secularización mediante la tajante separación entre Iglesia católica y Estado; consolidar la primacía del poder civil mediante una intensa reforma del Ejército para eliminar la tentación pretoriana; y modificar la estructura centralista y uniformista del Estado mediante la posibilidad de conceder Estatutos de Autonomía a las regiones «históricas» (lo que se materializaría en septiembre de 1932 con la aprobación del Estatuto catalán). En el campo social, el gabinete acometería medidas de gran alcance (leyes de protección obrera, salario mínimo, divorcio, coeducación de sexos...) y, sobre todo, llevaría adelante, en septiembre de 1932, la Ley de Reforma Agraria en el sur latifundista, que preveía la expropiación forzosa con indemnización a terratenientes de cierta cantidad de tierras destinadas al asentamiento de campesinos jornaleros.

A lo largo de 1933, el impulso reformador del gabinete azañista había perdido pulso y vigor. En gran medida, porque a la altura de ese año empezaron a notarse crudamente en España los efectos de la depresión económica internacional con su cosecha de restricciones financieras, contracción de los fondos disponibles para políticas de provisión social y reforma agraria, aumento de la tasa del paro obrero (especialmente jornalero) e intensificación de la militancia laboral y sindical^[11]. Sin embargo, la causa principal del desgaste gubernativo tuvo que ver con el renovado fuego cruzado que supuso la intensificación de la tenaza creada por el insurreccionalismo revolucionario anarquista y por la resistencia parlamentaria conservadora y reaccionaria.

El brazo izquierdo de la tenaza se articulaba en torno a la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), el viejo sindicato anarquista que había resurgido tras la dictadura como organización de masas (unos 535 000 afiliados en junio de 1931) y estaba bien implantado en el campo de Andalucía y el área industrial de Cataluña. Su dirección había pasado a manos de la Federación

Anarquista Ibérica (FAI), responsable de la estrategia insurreccional que fue jalonando todo el bienio de huelgas e incidentes armados. Sólo la huelga general de enero de 1933, duramente reprimida, había ocasionado varios muertos (muchos de ellos en Casas Viejas, Cádiz) y una considerable pérdida de prestigio del gobierno entre las clases obreras y jornaleras. En comparación con el acoso cenetista y faísta, la simultánea oposición del Partido Comunista de España (PCE) era relativamente poco importante dada su limitada militancia y su escasa implantación obrera: menos de 12 000 militantes en 1932 concentrados en algunos puntos de Vizcaya, Asturias y Sevilla^[12].

El brazo derecho de la tenaza estaba vertebrado básicamente por la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), un partido de nuevo cuño que agrupaba a las masas católicas bajo la dirección de José María Gil-Robles. Declarándose «accidentalista» respecto a la forma de gobierno, la CEDA renunciaba al uso de la fuerza, aceptaba la vía electoral para llegar al poder y pretendía reformar la Constitución en sentido autoritario y corporativo para garantizar tres objetivos: mantener el orden social, respetar la propiedad privada y salvaguardar los derechos de la religión católica^[13]. Al lado de la eficaz resistencia parlamentaria cedista, la oposición derechista al gobierno también cobró la forma de una reacción violenta. Los grupos monárquicos, tanto partidarios del exiliado Alfonso XIII (Renovación Española) como fieles a la rama dinástica carlista (Comunión Tradicionalista), apostaron desde el principio por una estrategia golpista y militar que tuvo su oportunidad y fracaso el 10 de agosto de 1932, con la tentativa frustrada que encabezó el general José Sanjurjo. Todavía menos impacto tendría la actuación violenta de Falange Española, el pequeño partido fascista fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador^[14].

Cuando el desgaste de la coalición azañista se puso de manifiesto en el otoño de 1933 (evidenciado por sucesivas derrotas parlamentarias y crecientes tensiones internas con los ministros socialistas), el presidente Alcalá-Zamora optó por convocar nuevas elecciones en el mes de noviembre. Y precisamente el punto culminante en ese proceso de debilitamiento del reformismo democrático tuvo lugar entre las elecciones generales de noviembre de 1933 y la resolución de la crisis de octubre de 1934.

Con motivo de la primera circunstancia señalada, las candidaturas separadas de republicanos de izquierda y del PSOE sufrieron un desplome muy considerable en términos de escaños de diputados. Por el contrario, el

republicanismo conservador articulado en torno a Lerroux consiguió una notable representación parlamentaria, convirtiéndose en el segundo grupo por número de diputados. La sorpresa imprevista fue la fuerza electoral cosechada por la CEDA, que se alzó con el mayor número de escaños y se configuró como el mayor grupo parlamentario (algo superior al radical). Lerroux mostró en seguida su disposición a gobernar con el apoyo de la CEDA (que no podía gobernar en solitario y tampoco había manifestado su acatamiento leal de la Constitución). Esa decisión crucial supuso una ruptura política y orgánica casi irreversible en la amplia coalición reformista que había triunfado en abril de 1931. Entre otras cosas porque, frente a la esperanza lerrouxista de incorporar a la CEDA al marco constitucional democrático, el republicanismo de izquierda y el movimiento socialista desconfiaban de los propósitos últimos cedistas y temían que su triunfo electoral fuera el preludio para la implantación de un régimen autoritario en la línea del salazarismo portugués o de la dictadura católica austríaca (en vigor desde marzo de 1934 de la mano del canciller Dollfus y previo aplastamiento de los socialdemócratas en Viena).

La cruda retórica de la CEDA, pese a ser más autoritaria que fascista, no hacía nada para aliviar esos temores y recelos de sus adversarios. Muy al contrario, ya antes de lograr su triunfo electoral, Gil-Robles había reclamado para sí el mérito de la eficaz labor de desgaste del gabinete azañista y había definido su proyecto político con tintes autoritarios en una declaración rotunda en octubre de 1933:

Y seguimos nuestra táctica, y fuimos a las elecciones (municipales) en abril (de 1933) y, a consecuencia de ellas, conseguimos que el Gobierno de Azaña quedara vencido, y muerto, y vilipendiado. (...) Así fuimos minando a un Gobierno, vencimos al Parlamento en las elecciones, fuimos hundiendo la política de izquierda. (...)

Nuestra generación tiene encomendada una gran misión. Tiene que crear un espíritu nuevo, fundar un nuevo Estado, una Nación nueva; dejar la Patria depurada de masones, de judaizantes... Como soñar no está prohibido, soñad todos en común. (...)

El Poder sólo cuando venga íntegro.

Hay que ir a un Estado nuevo, y para ello se imponen deberes y sacrificios. ¡Qué importa que nos cueste hasta derramar sangre! Para eso nada de contubernios. No necesitamos el Poder con contubernios de nadie. Necesitamos el Poder íntegro y eso es lo que pedimos. Entre tanto no iremos al Gobierno en colaboración con nadie. Para realizar este ideal no vamos a detenernos en formas arcaicas. La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento el Parlamento o se somete o le hacemos desaparecer^[15].

Contrariando su declarada aversión al «contubernio», tras las elecciones Gil-Robles aceptó servir de apoyo parlamentario a un gobierno radical minoritario. La subsecuente colaboración radical-cedista no sólo tuvo como

resultado una progresiva dependencia del gabinete radical respecto de su socio mayor parlamentario (con episodios de escisión en el radicalismo por disconformidad con esa situación: en abril de 1934, Diego Martínez Barrio, lugarteniente de Lerroux, y veinte parlamentarios abandonan el partido para fundar Unión Republicana y abogar por la colaboración con la Izquierda Republicana de Azaña^[16]). Lo más grave fue que proporcionó estímulo, cobertura y apariencia de justificación a la progresiva radicalización de un sector socialista bien implantado en la Unión General de Trabajadores y acaudillado por su secretario general y exministro, Francisco Largo Caballero.

Sin duda, las raíces de esa radicalización ya estaban plantadas en el último año de colaboración gubernamental republicano-socialista y se nutrían de la frustración de las bases socialistas (sobre todo jornaleras del sur latifundista) por la lentitud de realización de las mejoras asociadas al régimen republicano y por la eficacia de la resistencia patronal ofrecida a las medidas de Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo. Pero la severa derrota electoral y la paralela victoria inesperada de la CEDA aumentaron la sensación de alarma y peligro (agravada por las noticias sobre el trágico destino sufrido por el movimiento socialista en Alemania y Austria). El efecto de la conversión «bolchevique» de Largo Caballero fue muy dañino para el PSOE porque sentó las bases de una división interna entre radicales y moderados (encabezados éstos por Indalecio Prieto) y dificultó notablemente la expectativa de una recomposición de la conjunción republicano-socialista para volver al poder por vía electoral. En todo caso, la retórica de la izquierda socialista de Largo Caballero durante la campaña electoral de 1933 no dejó de ser tan cruda y amenazante como la de Gil-Robles:

Yo no tengo gran fe, y ahora menos que antes, en que dentro de una democracia burguesa se pueda hacer Socialismo; pero hay que reconocer que dentro de una República, en el orden político, se pueden hacer muchísimas cosas y que la República española las ha hecho. Mas, sobre todo, hay algo que nos interesaba mucho a nosotros, y es que colaborando con la República podíamos evitar el triunfo de la Reacción. (...)

Nosotros sabíamos, y la experiencia lo está confirmando, que no es suficiente para la emancipación de la clase trabajadora una República burguesa. (...)

Que conste bien: el Partido Socialista va a la conquista del Poder, y va a la conquista, como digo, legalmente si puede ser. Nosotros deseamos que pueda ser legalmente, con arreglo a la Constitución, y si no, como podamos. Y, cuando eso ocurra, se gobernará como las circunstancias y las condiciones del país lo permitan. Lo que yo confieso es que si se gana la batalla no será para entregar el Poder al enemigo^[17].

No cabe duda de que la crisis de octubre de 1934 constituyó un jalón crucial en el deterioro de la vida sociopolítica republicana. El desencadenante de la misma fue la exigencia de Gil-Robles a Lerroux para entrar en el gobierno

con sus propios ministros como contrapartida a la continuidad de su apoyo parlamentario. El republicanismo de izquierda, por boca de Azaña, había advertido a Lerroux y al propio Alcalá-Zamora contra esa medida de «entrega» de la República a «los monárquicos, más o menos disfrazados»^[18]. El movimiento socialista, por inspiración de Largo Caballero y con el visto bueno de Prieto, había secundado la advertencia con un añadido crucial: si esa entrada en el gobierno se producía, «públicamente contrae el partido socialista el compromiso de desencadenar, en este caso, la revolución»^[19]. Así pues, a la altura de octubre de 1934, la colaboración ministerial cedista se había constituido en la piedra de toque de la coyuntura política, en particular para los dos grandes partidos del espectro político por razones bien apuntadas por Paul Preston:

Tanto el PSOE como la CEDA tenían confianza en que el aparato represivo del Estado podía ocuparse adecuadamente de la conspiración monárquica o de la subversión anarquista. Lo que realmente temía cada uno era que el otro llegase al poder legalmente y le diese al régimen un contenido legal y constitucional que dañase los intereses materiales de sus seguidores^[20].

La decisión de Lerroux de atender la exigencia de Gil-Robles y la aprobación presidencial de la medida condujeron a la formación de un nuevo gobierno de coalición radical-cedista el 4 de octubre de 1934. Ésa fue la señal para que los socialistas pusieran en marcha una huelga general indefinida de protesta en todo el país al día siguiente. También fue la señal para que el gobierno autónomo catalán, presidido por el líder de la Esquerra Republicana, Lluís Companys, aprovechara la ocasión y proclamara «el Estado Catalán dentro de la República Federal Española». Aunque el republicanismo de izquierda denunció la entrada de la CEDA en el gobierno, no secundó ninguna de ambas iniciativas porque no podía «cooperar ni directa ni indirectamente en actuación alguna que signifique un apartamiento violento del orden legal establecido». Ambas acciones fueron un verdadero fiasco rápidamente aplastado por las fuerzas de seguridad y por el Ejército sin graves dificultades: el general Domingo Batet consiguió la rendición de Companys en Barcelona sin apenas derramamiento de sangre y en poco más de veinticuatro horas^[21].

No obstante, en Asturias la huelga general socialista se convirtió en insurrección armada protagonizada por milicias mineras y al amparo de una alianza sindical entre la UGT y la CNT con el apoyo del Partido Comunista. El inesperado éxito inicial de los milicianos sobre la Guardia Civil en las poblaciones de las cuencas mineras desembocó en una verdadera revolución social (con su cosecha de varias decenas de muertes de «enemigos de clase»:

guardias, patronos y religiosos). Incluso permitió una sostenida incursión de las milicias sobre la capital regional, Oviedo, donde las fuerzas militares sostuvieron el frente hasta la llegada de refuerzos por vía marítima y terrestre. Las operaciones fueron coordinadas desde Madrid, en virtud del estado de guerra, por un joven general, Francisco Franco Bahamonde, que actuaba como asesor personal del ministro de la Guerra. Apenas quince días más tarde de iniciada la insurrección, ante el abrumador despliegue militar en la región (incluyendo el uso de la Legión y tropas de regulares indígenas), los líderes mineros socialistas y anarquistas cesaron su resistencia y capitularon incondicionalmente^[22].

La efímera revolución asturiana había terminado una quincena más tarde que la huelga general en el resto del país. Sin embargo, sus decisivos efectos tardarían mucho más en amortiguarse y desaparecer. Amplios sectores sociales conservadores y republicanos quedarían verdaderamente alarmados por la violencia de aquella experiencia revolucionaria y abrigarían serias dudas sobre la lealtad democrática y constitucional del movimiento socialista y del catalanismo de izquierdas. Por su parte, a la vista de las medidas de fuerza empleadas para acabar con la insurrección y con anteriores manifestaciones de protesta (la huelga general campesina del verano de 1934), extensos segmentos sociales obreros y jornaleros confirmarían su desconfianza hacia las vías políticas parlamentarias y nutrirían las filas de las bases militantes que forzaban la radicalización de los sindicatos.

En ese proceso de polarización fue reduciéndose aún más el ámbito de apoyos sociales y políticos del reformismo democrático. El fenómeno fue agravado por la práctica desintegración del Partido Radical a lo largo del año 1935, al compás del desmoronamiento de la coalición gobernante por divisiones en cuanto al alcance de las medidas contrarreformistas (por ejemplo, respecto a la aplicación de las sentencias de muerte dictadas contra los participantes en la insurrección asturiana). Para entonces, los líderes y seguidores del reformismo democrático estaban enfrentándose a un dilema crucial que fracturó no pocas de sus filas y de sus bases sociales. Aquellos sectores donde predominaba el temor a la reacción sobre el miedo a la revolución seguirían apostando por la vía de la cooperación con el movimiento socialista con la esperanza de reconducirlo hacia la legalidad y retomar la iniciativa política truncada en 1933. Aquellos sectores donde era superior el miedo a la revolución sobre el temor a la reacción persistirían en la necesidad de cooperar con la CEDA con la esperanza de lograr su apoyo para

la estabilización de la República y para superar la crisis institucional imperante.

Las respectivas opciones quedaron bien patentes en febrero de 1936, con motivo de las terceras elecciones generales celebradas durante el quinquenio republicano: mientras que el republicanismo de izquierda concurría a las urnas en coalición con los socialistas e incluso con los comunistas bajo la fórmula de Frente Popular, muchos náufragos del republicanismo radical y conservador aceptaban formar parte de coaliciones derechistas articuladas por la CEDA y con participación de monárquicos, falangistas y en algún caso carlistas. La reorganización de fuerzas operada a principios de 1936 no dejó de afectar igualmente, pero en menor medida, a las alternativas reaccionarias y revolucionarias: mientras que el nacionalismo vasco rompía su alianza táctica con el tradicionalismo carlista en el frente de la reacción, el comunismo de inspiración soviética abandonaba tácitamente el bando de la revolución en consonancia con los nuevos dictados de la Comintern.

En definitiva, parece indiscutible que el empate y equilibrio en el triángulo de fuerzas operantes en España alcanzó su cumbre máxima con ocasión de esas elecciones del 16 de febrero de 1936. Al final, los resultados electorales dieron el poder al Frente Popular sobre las antagonistas candidaturas «contrarrevolucionarias» por una apretada victoria (no superior a 200 000 votos populares) pero con una mayoría absoluta en las Cortes (278 escaños frente a 124 de las derechas y 51 de partidos centristas, en virtud del sistema electoral mayoritario). El posterior deterioro de la situación política (agravada por la debilidad de un gobierno exclusivamente republicano dada la negativa socialista a participar en el mismo) y la patente quiebra de la concordia social fueron bien percibidos por los responsables gubernamentales y acremente denunciados por los líderes antirrepublicanos. El 1 de mayo de 1936, Indalecio Prieto, firme partidario de que los socialistas cooperasen con los republicanos en el gobierno, pronunció un crucial discurso en Cuenca alertando sobre los riesgos de un golpe militar reaccionario y denunciando los peligros de la estéril movilización revolucionaria auspiciada por la izquierda largo-caballerista y el cenetismo:

No podemos negar, cualquiera que sea nuestra representación política y nuestra proximidad al Gobierno (...) que entre los elementos militares, en proporción y vastedad considerables, existen fermentos de subversión, deseos de alzarse contra el régimen republicano, no tanto seguramente por lo que el Frente Popular supone en su presente realidad, sino por lo que, predominando en la política de la nación, representa como esperanza para un futuro próximo. (...)

La convulsión de una revolución, con un resultado u otro, la puede soportar un país; lo que no puede soportar un país es la sangría constante del desorden público sin finalidad revolucionaria

inmediata; lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad^[23].

Ni el diagnóstico ni las advertencias eran baladíes, aunque estas últimas cayeran en saco roto por lo que respecta al anarcosindicalismo y a la tendencia largo-caballerista del PSOE-UGT. El primero, tras la clausura del congreso confederal de la CNT en Zaragoza el 15 de mayo, «se había encastillado en un universo de sueño», no concedía la mínima importancia al peligro golpista y esperaba la ocasión para ensayar en la práctica su programa de «concepto confederal del comunismo libertario»^[24]. La segunda, mediante resolución de la Agrupación del PSOE de Madrid, reiteraba su retórica revolucionaria el día 21 de mayo y desestimaba el riesgo de un golpe militar fiándose en la experiencia fracasada de Sanjurjo en 1932: «El proletariado no debe limitarse a defender la democracia burguesa, sino que debe asegurar por todos los medios la conquista del poder político con el fin de hacer la revolución social»^[25]. Todavía más insensatamente, el propio Largo Caballero, en plena huelga de la construcción madrileña, declararía públicamente a los obreros ugetistas del sector el 26 de junio de 1936:

Se nos está hablando todos los días del peligro de la reacción y del golpe de Estado. En efecto, estamos siempre ante ese peligro, pero yo tengo la pretensión de que si ahora no ha surgido no es debido a la política que algunos preconizan y propugnan sino a la actitud de la clase obrera (...). No se puede negar que un día puede amanecer con una dictadura. ¡Ah! Pero que tengan en cuenta los que lo hagan que al día siguiente, por muchos entorchados en la bocamanga, la producción no la harán ellos. (...) Si se quieren proporcionar el gusto de dar un golpe de Estado por sorpresa, que lo den (...). No conseguirán más que disfrutar unos días o unos meses de la satisfacción que pueda proporcionarles el mando. Porque no quiero suponer que nos vayan a cortar a todos las cabezas (*sic*^[26]).

Desde luego, Prieto acertaba al señalar que la persistente crisis de orden público y de conflictos laborales en la primavera de 1936 estaba engrosando las filas de los partidarios de cambiar el voto por las armas para dirimir los conflictos y resolver el empate imperante. Y esa sensación de crisis de autoridad no fue atajada, sino al contrario, por la destitución parlamentaria del presidente de la República, por la subsecuente elevación de Azaña a ese cargo y por el nombramiento de un gobierno exclusivamente republicano (sin presencia de socialistas, como deseaba Prieto) encabezado por Santiago Casares Quiroga.

Y, como el mismo Prieto había sugerido, hablar de armas, que no de votos, en esa coyuntura crítica implicaba necesariamente hablar del Ejército como corporación estatal encargada del monopolio del uso de las armas y del ejercicio de la violencia legítima. Para esas fechas, la amplia mayoría de los

militares españoles estaba mucho más cercana de los postulados reaccionarios que de los reformistas o, por supuesto, de los revolucionarios, en consonancia con la tradición militarista y pretoriana imperante en el Ejército español desde la crisis del Antiguo Régimen y la Guerra de la Independencia de 1808-1814^[27].

En realidad, una parte del generalato y un segmento amplísimo de la oficialidad estaban ya comprometidos con una conspiración militar dirigida técnicamente por el general Emilio Mola y apoyada por figuras tan reputadas como el general Francisco Franco (verdadero héroe de la opinión pública conservadora por su protagonismo en el aplastamiento de la insurrección de octubre de 1934 en Asturias). El perfil político de la conjura correspondía a las concepciones nacional-militaristas ya expuestas por José Calvo Sotelo, líder del monarquismo alfonsino, en una abierta apelación al golpe de fuerza antes de la consulta electoral:

Hoy el Ejército es la base de sustentación de la Patria. Ha subido de la categoría de brazo ejecutor, ciego, sordo y mudo, a la de columna vertebral, sin la cual no es posible la vida. (...) Cuando las hordas rojas del comunismo avanzan, sólo se concibe un freno: la fuerza del Estado y la transfusión de las virtudes militares —obediencia, disciplina y jerarquía— a la sociedad misma, para que ellas desalojen los fermentos malsanos que ha sembrado el marxismo. Por eso invoco al Ejército y pido al patriotismo que lo impulse^[28].



División de España. Finales de julio de 1936. (Fuente: Enrique Moradiellos, *La perfidia de Albión*, Madrid, Siglo XXI, 1996, p. 42).

En razón de esas fracturas y alineamientos previos, cuando finalmente estalló la amplia (pero no unánime) insurrección militar contra el gobierno

reformista del Frente Popular en la tarde del 17 de julio de 1936 se fue configurando en España una situación insólita y a la postre crucial: el golpe militar parcialmente fracasado en casi la mitad del país (precisamente aquella más urbanizada y modernizada) devino ineluctablemente en una cruenta guerra frontal entre reaccionarios, a un lado de las trincheras, y una combinación forzada e inestable de reformistas y revolucionarios, en el otro lado.

Miguel de Unamuno, desde su amargo retiro en la Salamanca insurrecta, apreció bien poco antes de su muerte que el enemigo de los militares sublevados no era sólo «el comunismo y la anarquía» reiteradamente denunciados: «Ésta es una campaña contra el liberalismo, no contra el bolchevismo. Todo el que fue ministro en la República, por de derecha que sea, está ya proscrito»^[29]. En el otro lado, Manuel Azaña, desde su privilegiado observatorio en Madrid, primero, y después en Barcelona, también dejó constancia de las hondas divisiones latentes en la retaguardia republicana: «En todas partes, los partidos obreros y los sindicatos acosan a los republicanos, prescinden de ellos cuanto pueden, los atacan. (...) Los republicanos se aguantan, protestan o se defienden como pueden. No pasan de ahí»^[30].

En efecto, sin atender a las «tres Españas» que estaban presentes antes de 1936 y al modo y manera en que sus respectivos proyectos sociopolíticos fueron letalmente afectados por el estallido de la guerra civil, no cabe entender la génesis y desarrollo del conflicto, ni la firme unidad alcanzada por el bando finalmente vencedor, ni las tensiones y fracturas que socavaron al bando postreramente derrotado. Porque, contra lo que pudiera parecer y a veces se sostiene injustificadamente, las «tres Españas», sus programas políticos y sus soportes humanos y sociales, no desaparecieron como tales en la catástrofe bélica y en el despliegue de los frentes de combate, sino que se reagruparon mal que bien en las respectivas retaguardias: notablemente bien las fuerzas reaccionarias en el bando insurgente (luego «franquista» o «nacionalista») y más mal que bien las fuerzas reformistas y revolucionarias en la zona gubernamental (también «republicana» o «frentepopulista»).

A su muy peculiar y poco matizada manera, Salvador de Madariaga, en su influyente obra titulada *España. Ensayo de historia contemporánea* (edición argentina de 1944), caracterizaría retrospectivamente aquella lucha triangular de preguerra como la «batalla de los tres Franciscos»: Francisco Largo Caballero, «caudillo del ala revolucionaria de la Unión General de Trabajadores, que no era comunista»; Francisco Franco Bahamonde,

«caudillo de la Unión General de Oficiales, que no era fascista»; y Francisco Giner de los Ríos, alma de la Institución Libre de Enseñanza y exponente de la «otra tradición española, la de la transacción razonable y el acuerdo mutuo». Según Madariaga, «el efecto combinado» del doble pronunciamiento del primero y el segundo fue la destrucción del legado del tercero, «el que era esperanza de España» y «fue la víctima de la acción violenta». Y añadía con no poco propósito desiderativo: «sin embargo, aunque todavía demasiado inorgánica para hacerse oír, la verdadera España estaba con Francisco Giner»^[31].

INEVITABILIDAD, CONTINGENCIA Y RESPONSABILIDADES

El debate sobre la inevitabilidad o contingencia de la guerra civil y, en su caso, la gradación en la atribución de responsabilidades políticas y morales (por no decir «culpabilidades») es tan antiguo como el propio conflicto y quizá más arduo que cualquier otro. Por supuesto, abundan afirmaciones más o menos interesadas en sostener el carácter inevitable de la guerra, sobre todo entre los políticos y dirigentes sociales protagonistas de la contienda, tanto del bando vencedor como del vencido. José María Gil-Robles fue rotundo al respecto en la intitulación de sus memorias políticas sobre la época republicana: *No fue posible la paz* (publicadas casi treinta años después de terminada la guerra, en 1968, por la editorial barcelonesa Ariel).

A título aún más ilustrativo, basta comprobar el texto concluyente y taxativo de una publicación oficial franquista titulada *El Frente Popular en España* (Madrid, Oficina Informativa Española, 1948), que no duda en atribuir la condición de «inevitable» al conflicto ni de achacar la total culpabilidad en la génesis del mismo a un enemigo antipatriota y al servicio de potencias extranjeras. Editada en pleno ostracismo internacional del régimen, la publicación formaba parte de la campaña para legitimar su continuidad sobre la base de la disyuntiva «O Franco o el caos» y en razón de su exclusivo carácter anticomunista y no filofascista (susceptible de ser mejor recibido por las potencias occidentales en el nuevo contexto de Guerra Fría):

Es, pues, evidente, indiscutible, axiomático y reconocido por todos, que el Frente Popular, conforme a los propósitos de quienes lo idearon, era el camino para ir a la dictadura roja, y el medio mejor y más seguro para hacer la revolución con un mínimo de riesgo y un máximo de posibilidades de triunfo. (...)

Por eso unos y otros, los que están decididos a instaurar la dictadura soviética, y los que se niegan a entregar a España como una presa al satanismo de Rusia (...), coinciden en que la guerra civil es inevitable^[1].

También es obligado reconocer que entre los testimonios de dirigentes del período bélico existen confesiones de responsabilidad y asunciones de grados de culpabilidad en un fenómeno «que no era inevitable». Así se advierte explícitamente en las memorias políticas del último jefe de gobierno radical-cedista disuelto en diciembre de 1935, el centrista Joaquín Chapaprieta: *La paz fue posible* (Barcelona, Ariel, 1972). Quizá uno de los ejemplos más francos y honestos, por la alta calidad y representatividad de su autor, sea el proporcionado por el doctor Juan Negrín, líder socialista de la facción moderada que se convirtió en jefe del gobierno republicano desde mayo de 1937 y hasta la derrota final. El 5 de septiembre de 1952, cuatro años antes de su fallecimiento, el doctor Negrín escribió una carta particular al periodista norteamericano Herbert Matthews relatándole sus frecuentes conversaciones en Londres con el escritor George Orwell durante su etapa de exiliado en Inglaterra entre 1940 y 1945:

Inquiría también por las causas de nuestra derrota, que yo sostuve y sostengo más se debió a nuestra inconmensurable incompetencia, a nuestra falta de moral, a las intrigas, celos y divisiones que corrompían la retaguardia, y por último a nuestra inmensa cobardía que a la carencia de armas. Cuando digo «nuestra», no me refiero naturalmente a los héroes que lucharon hasta la muerte, o sobrevivieron toda suerte de pruebas, ni a la pobre población civil, siempre hambrienta y al borde de la inanición. Me refiero a «nosotros», a los dirigentes irresponsables, quienes, incapaces de prevenir una guerra, que no era inevitable, nos rendimos vergonzosamente, cuando aún era posible luchar y vencer. Y conste que no distingo cuando repito «nosotros». Como en el pecado original, hay una solidaridad en la responsabilidad, y el único bautismo que puede lavarnos es el reconocimiento de nuestras faltas y errores comunes^[2].

Al margen de las afirmaciones interesadas o sinceras de los protagonistas, son muy escasas (por no decir nulas) las interpretaciones historiográficas que consideran que el conflicto estaba rígidamente «de-terminado» por los antecedentes y que era «in-evitable» por razones supremas de fuerza mayor (la «necesidad histórica»; el «peso insuperable de las estructuras»). Los historiadores, en virtud del carácter de su propia disciplina (ducha en el análisis retrospectivo del cambio histórico, con sus componentes azarosos e ingredientes fortuitos), suelen ser más proclives a considerar los fenómenos históricos como contingentes, configurados en el transcurso del tiempo por concatenación y confluencia, *hic et nunc*, aquí y ahora, de causas y motivaciones previas y diversas.

En otras palabras: casi todos asumen que el despliegue del curso histórico no recorre un camino de sentido único y obligatorio sino que fluye entre los senderos disponibles, más o menos transitables y cada uno con diversas direcciones. Y por eso no se inclinan a creer que esos fenómenos son producto exigido por alguna prescripción inmanente del pretérito ni tampoco

consideran que son derivados de ninguna finalidad teleológica. Recordaba al respecto el historiador francés Lucien Febvre ya en 1922: «En ninguna parte hay necesidades; en todas hay posibilidades; y el hombre, como dueño de estas posibilidades, es el juez de su utilización». Y ha escrito recientemente en igual sentido Raymond Carr:

¿Fue el estallido de la Guerra Civil inevitable? ... Siempre es posible construir escenarios alternativos. Isaiah Berlin sostiene que si a Lenin le hubiera caído un ladrillo en la cabeza en abril de 1917 no hubiera habido revolución bolchevique. Pero no le cayó ladrillo alguno^[3].

Cabría recordar, a propósito de este asunto de la inevitabilidad y la contingencia, las hermosas palabras escritas por León Tolstói en su novela *Guerra y paz* a la hora de calibrar las causas que provocaron en 1812 el sangriento conflicto entre la Francia del emperador Napoleón y la Rusia del zar Alejandro I (que se convertiría en la última y más desastrosa campaña napoleónica en la Europa continental). Descartando por insuficientes las explicaciones unicasales e individualistas, señalaba el escritor ruso al respecto:

¿Qué motivó aquel acontecimiento extraordinario? ¿Cuáles fueron las causas? Los historiadores afirman, con un aplomo infantil, que las causas de aquel hecho radicaban en la ofensa hecha al duque de Oldenburg, en la inobservancia del bloqueo continental, en la ambición de Napoleón Bonaparte, en la firme resistencia del zar Alejandro, en los errores de la diplomacia, etc. (...)

Era preciso que millones de hombres, en cuyas manos estaba la verdadera fuerza —los soldados que disparaban, los encargados de las provisiones y los que cargaban los cañones—, estuviesen de acuerdo para acatar la voluntad de individuos aislados, débiles, y que su unánime decisión fuera motivada por una multitud de causas complicadas y distintas^[4].

Sin embargo, la consecuente afirmación de que la guerra civil española no fue inevitable (es decir: *pudo* no haber sucedido) no excusa, sino que demanda, la explicación de por qué fue posible y cómo, de hecho, se convirtió en realidad sangrante e irreversible. Por lo que respecta a esta difícil dialéctica entre inevitabilidad y contingencia en la génesis de la contienda fratricida española, las interpretaciones más canónicas, tanto explícitas como implícitas, suelen organizar las causas y factores que hicieron posible el estallido de la contienda en una gradación intensional muy del gusto de la escuela histórica francesa:

1.º Causas «estructurales» o de «larga duración». Y se citan: el problema del latifundismo agrario meridional y la miseria de masas jornaleras agraviadas; la tensión entre débil autoridad civil y tentación militarista pretoriana; el pulso religioso-cultural entre clericalismo y anticlericalismo; el conflicto entre inercia estatal centralista y desafíos descentralizadores nacionalistas y

regionalistas; el desequilibrio geográfico del desarrollo industrial y las rigideces del sistema de relaciones laborales, etc.

2.º Causas «coyunturales» o de radio temporal «medio». Y se apela al impacto de la Gran Depresión de 1929 y a las dificultades de la Hacienda Pública para afrontar la crisis económica; al confusionismo del marco jurídico-constitucional vigente; a la excesiva fragmentación y polarización del sistema político cristalizado; a la debilidad u hostilidad de los instrumentos de acción estatal en manos del gobierno republicano (la administración, las fuerzas de seguridad); a las fracturas políticas e ideológicas en el seno de las fuerzas armadas; a la agudización de la escisión obrera entre revolucionarios y reformistas; a la irremisible quiebra de las clases medias en función de sus lealtades religiosas (católicas o anticlericales) o nacionales (españolas, vasquistas o catalanistas), etc.

3.º Causas «inmediatas» o «detonantes» y «catalizadoras», propias del «tiempo corto» de los «acontecimientos». Y se traen a colación: la insurrección socialista y catalanista de octubre de 1934; el frágil triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936; la destitución del presidente Alcalá-Zamora en abril y su sustitución por Azaña; la debilidad del ejecutivo presidido por Casares Quiroga desde mayo; el intenso movimiento huelguístico de mayo y junio; el asesinato del líder derechista José Calvo Sotelo el 13 de julio, etc.

El mayor o menor acento en unas u otras causas de esa tríada canónica sirve como criterio laxo para distinguir a los historiadores más «estructuralistas» (porque asumen que el marco estructural y su «de-terminación» coyuntural «condiciona» limitativamente las opciones disponibles en el tiempo corto por los sujetos históricos) de los más «contingentistas» (porque creen que dichos condicionantes configuran el marco plural de disyuntivas finitas que sólo las decisiones, acciones, omisiones o inhibiciones de los agentes humanos convierten en acontecimientos y fenómenos irreversibles).

Entre los primeros, quizá el historiador económico Jordi Palafox sea uno de los autores más destacados, coherentes y argumentativos. No en vano, su análisis sobre el «fracaso» de la política económica republicana hace especial hincapié en la gravedad e inmensidad de los problemas estructurales heredados (sobre todo los derivados del latifundismo agrario). Sirva como muestra esta cita:

La explicación que se defiende en estas páginas de lo que ocurrió en España desde abril de 1931 hasta comienzos de 1936 se vincula, pues, con los problemas económicos del largo plazo; con las

tensiones y los estrangulamientos generados por la forma específica de avance de la economía en la etapa anterior. (...)

Si la explicación de lo ocurrido entre 1931 y 1935 ha de ser vinculada a los problemas surgidos y consolidados en el largo plazo, la importancia de la escasez de transformaciones en la agricultura interior, y en especial la dedicada a la producción de cereales, durante la etapa que se inicia en 1892, consecuencia a su vez de su evolución en décadas previas, destaca con mayor nitidez. El mantenimiento, gracias a la protección, de tierras de cultivo con unos rendimientos muy bajos obstaculizó no sólo la propia modernización del conjunto del sector agrario, sino también la diversificación de la demanda de bienes manufacturados, que es un requisito para el desarrollo sostenido. Al tener que dedicar el conjunto de la población un porcentaje elevado de sus ingresos a adquirir los bienes alimentarios necesarios para su supervivencia, la demanda de otros tipos de productos progresó con mucha mayor lentitud. (...) Unas ínfimas condiciones de vida y de trabajo que, a su vez, tuvieron consecuencias nada despreciables sobre la virulencia del enfrentamiento social que se haría patente una vez que desapareció el corsé antidemocrático que dominó la sociedad española en las décadas anteriores al 14 de abril de 1931^[5].

Entre los historiadores «contingentistas», probablemente Santos Juliá merezca ser mencionado con plena justicia. Entre otras cosas, porque su acreditado análisis de la crisis sociopolítica española durante el primer semestre de 1936 remite a acciones, decisiones, omisiones e inhibiciones de grupos y personas para dar cuenta de la gravísima situación alcanzada en el verano de 1936. Véase si no su descripción del período:

Lo que antes de febrero (de 1936) se había mostrado como un excelente instrumento político para triunfar en unas elecciones (el Frente Popular), quedó reducido después al más débil posible de los instrumentos de gobierno: una parte sustancial de la fuerza de la coalición de izquierdas, la que provenía de la clase obrera (el PSOE y la UGT), se inhibió de la responsabilidad de gobernar. (...) De esta forma, el gobierno quedó desasistido por sus aliados naturales y hostigado desde la derecha por una envalentonada oposición monárquica que arrastraba ya con fuerza a los católicos y desde la izquierda por un sector del PSOE que, si había renunciado a la revolución, esperaba con impaciencia la hora de sustituir al gobierno republicano con uno exclusivamente socialista. (...)

Desde el mes de abril, y ante el desconcierto de los dos grandes partidos de la derecha y la izquierda, la iniciativa política había pasado, por una parte, a los sindicatos y por otra a los militares^[6].

En todo caso, la amplia mayoría o totalidad de los historiadores, tanto estructuralistas como contingentistas, suscribirían el juicio avanzado por el hispanista Shlomo Ben-Ami al impugnar la idea de que la República fue una especie de crónica de una guerra anunciada y mero «preludio a una catástrofe inevitable»:

La República había heredado graves divisiones sociales, religiosas y regionales. Pero la mera existencia de estos problemas no puede tomarse como una receta para el desastre inevitable. La implantación y consolidación inicial de la República representó la tentativa hasta entonces más firme y popular para crear un marco en el que los problemas fundamentales de España pudieran encontrar una solución democrática. El fracaso final de la República no estaba condicionado irreversiblemente por imperativos estructurales ni por las incapacidades intrínsecas de los

españoles para el autogobierno. Fue causado por las políticas, algunas claramente malas y otras muy inadecuadas, y por la reacción frente a ellas^[7].

La remisión a las políticas desplegadas en el quinquenio republicano como metafóricas «chispas» (causas detonadoras) que encienden la «mecha» (causas estructurales y coyunturales) de la guerra civil significa atribuir una responsabilidad prioritaria en su desencadenamiento a los agentes políticos y sociales más representativos y decisorios de la época. Afirma, por ejemplo, Ronald Fraser en el prólogo a su canónica historia oral de la guerra civil: «la guerra civil tuvo sus orígenes en cuestiones profundamente políticas, y la crisis que la precedió había polarizado y politizado a amplísimos sectores de la opinión pública»^[8].

Y esa consecuente atribución y gradación de responsabilidades (y «culpas») no deja de ser un ejercicio sumamente subjetivo y sometido a las preferencias político-ideológicas personales de cada analista, como es lógico y natural. Entre otras cosas, porque sólo puede tener «culpa» quien dispone de otra opción, quien tiene libre albedrío, ya que la culpa implica intención^[9]. Sin embargo, asumiendo ese irreductible componente interpretativo y hermenéutico claramente subjetivista, la mayor parte de la historiografía especializada ha llegado a varios acuerdos de mínimos sobre el particular.

En primer lugar, ha subrayado que la «ideología de la violencia» que se abrió paso en la política del quinquenio republicano (cuyos orígenes eran bastante anteriores al mismo) llegó a afectar a amplísimos sectores de la sociedad española y a sus elementos representativos y rectores. La idea de que era moralmente legítimo el uso de la violencia más extrema para imponer el triunfo de un modelo de orden sociopolítico no era privativo de los extremos del espectro político: «Creí justo recurrir a la violencia para transformar el mundo» (Manuel Tagüeña, militante comunista y futuro general republicano); «La violencia es consecuencia forzosa de toda creencia firme» (Eugenio Vegas Latapie, político monárquico autoritario y conspirador antirepublicano^[10]). Para ellos, desde luego, la violencia habría de ser la partera necesaria tanto del mundo futuro que anhelaba construir la revolución como del mundo pretérito que soñaba restaurar la reacción. Lo importante era que esa percepción también se extendía, sobre todo después de octubre de 1934, entre otros sectores normalmente más templados de la sociedad y del mundo político, como recordaría muy posteriormente el cardenal Vicente Enrique y Tarancón:

Creo que llegamos todos a convencernos de que el problema no tenía solución sin un enfrentamiento en la calle. Durante meses creo que toda España estaba a la espera de lo que iba a

ocurrir. Media España estaba contra la otra media, sin posibilidad de diálogo. Habían de ser las armas las que dijese la última palabra... Lo cierto es —hay que confesarlo con honradez— que todos confiábamos entonces en la violencia y juzgábamos que ésta era indispensable, echando, claro está, la culpa a los otros^[11].

El segundo acuerdo mínimo historiográfico concierne al contexto histórico que hizo posible en 1936 la operatividad de esa ideología de la violencia y su conversión en guerra civil. Porque para desencadenar y sostener un conflicto de esa envergadura no hubiera bastado el propósito beligerante de unos pocos (más o menos numerosos) capaces de promover algaradas, huelgas o incluso insurrecciones contra unas autoridades decididas y en condiciones de utilizar disciplinadamente los amplios recursos coactivos del Estado (y así lo demuestra el fiasco del golpe militar reaccionario del general Sanjurjo en agosto de 1932 y el fracaso de la huelga e insurrección socialista y catalanista en octubre de 1934). Para desencadenar y sostener ese tipo de contienda era requisito inexcusable la existencia de «profundas divisiones en la sociedad que permitan a cada bando lograr un amplio eco popular» y, además, que esas divisiones se extendieran a «unas fuerzas armadas poderosas y autónomas» hasta el punto de estar «lo bastante divididas» como para no poder aplastar al contrario^[12].

Y, como ya se ha señalado, lo que se hizo patente durante el quinquenio democrático republicano fue la presencia en España de un «singular equilibrio» entre reformistas, reaccionarios y revolucionarios que sí llegó a afectar a las fuerzas armadas en grado suficiente: un «equilibrio de incapacidades» y una «acumulación de impotencias» que hicieron virtualmente imposible estabilizar la situación mediante acciones políticas de amplia apoyatura social e institucional para resolver los conflictos polivalentes arrastrados por la sociedad española desde hacía tiempo^[13].

La mención de esas equilibradas capacidades e incapacidades o impotencias (políticas o de otro tipo: económicas, administrativas, culturales...) conduce obligadamente al espinoso y controvertido tema de señalar y graduar las principales responsabilidades en la gestación de las circunstancias que hicieron posible el estallido de la guerra. Y hay que partir del principio de que la búsqueda historiográfica de esas responsabilidades no adelanta nada asumiendo que las culpas son colectivas y equitativamente distribuidas («Todos fuimos culpables»), como pretendía el mito explicativo de la locura trágica y colectiva tan difundido desde los años cincuenta. Porque esa disolución de las responsabilidades singulares en la cuenta de las culpas colectivas (que son de todos en general y, por eso mismo, no son de nadie en particular) es sólo una forma de orillar y encubrir la responsabilidad, personal

e institucional, de los sujetos individuales o de las elites dirigentes de partidos y grupos sociales, de aquellos que de palabra y obra, con órdenes o consignas, actuaron y proporcionaron los motivos y los medios para el ulterior enfrentamiento mortal generalizado. Al respecto, no cabe sino corroborar la pertinencia de las palabras del editor y catalanista Joan Sales: «Per pueril que pugui semblar, la pregunta “qui ha començat?” és moralment decisiva»^[14].

Y esa obligada búsqueda historiográfica de responsables de carne y hueso, singulares o plurales, más allá de la genérica imputación a toda una sociedad, reduce el espectro de imputados significativamente: ¿Fueron los líderes intransigentes de las derechas reaccionarias que se negaron a cualquier reforma de la estructura social e institucional del país y apostaron por el golpe militar desde el principio? ¿Fueron las autoridades republicanas de izquierda por su propósito de ejecutar un vasto programa reformista en plazo mínimo y en plena crisis económica? ¿Fueron los dirigentes socialistas que abandonaron la conjunción con los republicanos para apostar por la movilización y la ilusión revolucionaria? ¿Fueron las derechas católicas que nunca se reconciliaron con la democracia y sólo ensayaron vías posibles para restablecer los privilegios perdidos por la Iglesia? ¿Fueron los movimientos anarquistas y comunistas que emplearon sus energías insurreccionales en dinamitar a todos los gobiernos sin tener capacidad para suplantarlos? ¿Fueron los generales reaccionarios y facciosos que traicionaron su juramento de lealtad constitucional y conspiraron para derribar violentamente el régimen republicano?

La lista de interrogantes podría extenderse mucho más y también los posibles reos de suprema culpabilidad individual (por su condición de representantes y máximos mandatarios de colectivos de peso): José Calvo Sotelo (líder de los monárquicos autoritarios de Renovación Española), Manuel Azaña (carismático dirigente del republicanismo de izquierda), Francisco Largo Caballero (cabeza del sindicalismo socialista radicalizado), José María Gil-Robles (artífice del gran partido católico de masas: la Confederación Española de Derechas Autónomas), Buenaventura Durruti (fundador de la Federación Anarquista Ibérica y prohombre del insurreccionalismo anarcosindicalista), Dolores Ibárruri (La Pasionaria, voz y emblema del comunismo ortodoxo prosoviético), José Antonio Primo de Rivera (hijo del dictador, admirador de Mussolini y fundador de la Falange Española), Francisco Franco Bahamonde (prototipo del militar africanista, héroe de la guerra de Marruecos y reputado jefe del Estado Mayor en 1935), etc.

Una posibilidad ensayable para escapar a esa excesiva singularización de las responsabilidades en la catástrofe consistiría en la gradación de las mismas en un sentido colectivo y que preste atención a las servidumbres impuestas por el pasado tanto como a la eficacia o ineficacia de los programas políticos puestos en acción con anterioridad al estallido del conflicto. Sobre el particular, a nuestro leal y falible saber y entender, las palabras del hispanista norteamericano Edward Malefakis con ocasión del cincuentenario de 1986 siguen siendo plenamente válidas y acertadas:

Si en 1936 no hubiese estallado un fogonazo, la mecha no se habría encendido (...). Si no ocurrió así en España, no fue a causa de la impaciencia de los republicanos, de los regionalistas, de las clases trabajadoras o de los intelectuales, todos los cuales estaban demasiado divididos para ser capaces de provocar una chispa lo bastante fuerte. La mayor responsabilidad recae sobre aquellos que no aceptaron un cambio social de tal magnitud y tenían a su disposición importantes medios técnicos de coerción y la disciplina para emplearlos de manera eficaz. Los conspiradores militares de 1936 no pretendían, claro está, provocar la chispa que envolvió a España en llamas. Sólo deseaban derribar al régimen progresista de la República. Lograron su propósito. Pero, al mismo tiempo, sumieron al país en la guerra civil más destructora de toda su historia^[15].

Efectivamente, lo que marcó la diferencia de España respecto del resto de los países continentales y abrió la vía a la guerra civil fue la situación del Ejército y su respuesta a la crisis sociopolítica imperante en la primavera y principios del fatídico verano de 1936. Sin la fractura relativa que había en su seno y sin la amplia conjura en marcha en favor de una intervención militar anticonstitucional, no hubiera sido posible el enfrentamiento fratricida por razones de mera falta de elementos de combate. Como ha señalado al respecto Santos Juliá recientemente:

Una guerra civil era impensable en el verano de 1936 sin esa fragmentación de la corporación militar, pues en ningún sitio, excepto en los cuarteles, había armas que tomar por más que no faltara gente dispuesta a empuñarlas. Cuando un ejército se sitúa en bloque al lado de la legalidad, no hay revolución que triunfe (...). Lo contrario también es verdad: cuando un ejército es unánime en su decisión de dar un golpe de Estado, no hay constitución ni pueblo en armas que resista (...). Lo que abre las puertas a la indeterminación es el golpe faccioso, el perpetrado por una facción del ejército^[16].

Ciertamente, si la sublevación militar iniciada el 17 de julio de 1936 hubiera sido un fenómeno general en todo el país, se habría asistido a una repetición, *mutatis mutandis* y más o menos cruenta, del pronunciamiento del 13 de septiembre de 1923 encabezado por el general Miguel Primo de Rivera. Así lo habían ideado y así lo esperaban los propios conjurados con grave exceso de optimismo, según reconocería con mucha posterioridad uno de sus colaboradores civiles más destacados, el jurista Ramón Serrano Suñer, diputado de la CEDA y cuñado del general Franco:

Aunque la hipótesis de la guerra civil estaba prevista, el designio del Movimiento (militar) no era precisamente el de encenderla, sino el de reaccionar ante la criminal claudicación del Gobierno republicano, asumiendo el poder mediante un incruento golpe de Estado^[17].

Sin embargo, en esta ocasión la operación golpista planeada por los conjurados no fue la tarea unánime de la corporación militar en tanto que tal y tuvo que enfrentar asimismo la oposición decidida (y muy pronto armada) de un movimiento obrero y sindical activo y fortalecido. Como apuntó Guillermo Cabanellas, hijo del general Miguel Cabanellas (el más antiguo y superior de los jefes militares sublevados), la guerra civil fue «el resultado de la división interna del país; pero, al mismo tiempo, de la del Ejército. Desunido, quebrantado en su disciplina, tiene en él origen la “guerra de España”»^[18].

En esa división crucial en el seno del Ejército estaba implícita la contingencia finalmente materializada: un golpe militar auspiciado y protagonizado por una facción de las fuerzas armadas resulta sólo parcialmente victorioso (o, lo que es lo mismo, parcialmente fracasado) y abre así las puertas a la guerra civil. En palabras del reputado historiador militar y excombatiente en las filas insurgentes, general Ramón Salas Larrazábal:

En general los conspiradores pecaron de superficialidad y optimismo; subestimaron al adversario y supervaloraron su propia influencia en las filas militares (...). De todas maneras, reconocidos estos fallos y otros muchos, si las fuerzas armadas se hubieran levantado en su totalidad o simplemente en la proporción que comúnmente aceptan los historiadores y publicistas, la rebelión hubiera triunfado con sorprendente facilidad^[19].

Una simple ojeada a la relación de fuerzas militares generada por el golpe a los cuatro días de su inicio confirma esa impresión de división prácticamente equitativa del Ejército sin ningún género de dudas (Cuadro I). Y por lo que respecta a los mandos de esa fuerza militar, el mismo Salas Larrazábal sostiene que se produjo un empate similar en número, si no en calidad: «en cuanto a efectivos, se produjo una situación de equilibrio, que se rompía a favor del bando nacional por la superior calidad de las fuerzas africanas»^[20].

De hecho, de los aproximadamente 16 000 generales y oficiales que formaban el Ejército español, la mitad quedó en una zona y la otra mitad en la enemiga: en torno a 7624 (el 49,6 %) en territorio republicano; el resto en territorio sublevado. Otra cosa es que esos militares estuvieran disponibles para ejercer el mando en su zona respectiva: de la cifra global de 7624 jefes y oficiales que quedaron en el área gubernamental, unos 1500 serían fusilados o asesinados por traidores o desafectos, otros 1500 sufrieron condena o encarcelamiento, unos 1000 lograron refugiarse en embajadas o esconderse hasta poder pasar al enemigo y tan sólo 3500 sirvieron efectivamente en las

filas del Ejército Popular de la República (de los cuales unos 500 darían su vida por la causa).

En el bando insurgente no fue preciso ni se registró una depuración tan profunda y amplia en la oficialidad y el generalato por razones de íntima convicción ideológica de los interesados o mera lealtad geográfica y corporativa. Pero, desde luego, fueron eliminados fulminantemente los mandos leales a la República: seis generales fueron fusilados o asesinados en los primeros días de la sublevación y otros dos al término de la guerra; y tres almirantes o contralmirantes fueron igualmente fusilados por análogo motivo al comienzo de la contienda^[21]. La sublevación comenzaba, así pues, como una verdadera guerra civil en el seno del propio Ejército y en las filas de sus mandos.

CUADRO I RELACIÓN DE FUERZAS MILITARES A FINALES DE JULIO DE 1936

<i>Unidades</i>	<i>Zona republicana</i>	<i>Zona insurgente</i>	<i>Total</i>
Ejército de Tierra	58 249	59 136	117 385
Ejército del Aire	3200	2107	5307
Marina	12 990	6996	19 986
Fuerzas de Orden Público	42 062	25 477	67 300
Ejército de África	—	47 127	47 127
Total general	116 501	140 604	257 105

Fuente: Ramón Salas Larrazábal, *Los datos exactos de la guerra civil*, Madrid, Rioduero, 1980, pp. 62-63.

Dos casos singulares contrapuestos dan idea de la intensidad de la fractura militar y de sus letales consecuencias internas: el destino de los generales de división Manuel Goded Llopis (1882-1936) y Domingo Batet Mestres (1872-1937).

El primero, que contaba con cincuenta y cuatro años, había hecho su carrera en Marruecos, fue el primer jefe del Estado Mayor Central de la República y desde marzo de 1936 era comandante militar de las islas Baleares. Sublevado con éxito en Mallorca el 18 de julio, se trasladó rápidamente a Barcelona para ponerse al frente de la insurrección en la ciudad condal. Incapaz de lograr el concurso de toda la tropa, tuvo que enfrentarse a las fuerzas de la Guardia Civil dirigidas por el general Aranguren en Cataluña y el coronel Escobar en Barcelona, asistidas por las milicias sindicales de la

CNT. Fracasado y acosado en la Capitanía General, acabó rindiéndose a las tropas leales el día 20 y, a petición de Lluís Companys, radiando una declaración en la que reconocía su derrota y recomendaba deponer las armas. Fue juzgado en Barcelona por un tribunal militar por el delito de sedición y rebelión y pasado por las armas el 12 de agosto de 1936^[22].

El segundo, con sesenta y cuatro años, había iniciado su carrera en Cuba y estaba al frente de la IV División Orgánica (Cataluña) durante la insurrección catalanista de octubre de 1934, que contribuyó a sofocar sin apenas derramamiento de sangre (lo que le valió la concesión de la Gran Cruz Laureada de San Fernando). Fue posteriormente jefe del Cuarto Militar del presidente de la República hasta la destitución parlamentaria de Alcalá-Zamora. Desde junio de 1936 era comandante de la VI División Orgánica (con sede en Burgos, que incorporaba las provincias de Santander, Logroño, Palencia, Navarra y las tres vascongadas). Opuesto a la sublevación, el 18 de julio fue detenido en la Capitanía General por sus subordinados bajo el mando de su jefe de Estado Mayor, el coronel Moreno Calderón. Encarcelado, juzgado y sentenciado por el delito de «rebelión militar», a pesar de las peticiones de clemencia de muchos de sus compañeros de corporación, fue pasado por las armas el 18 de febrero de 1937^[23].

RAZONES DE UNA VICTORIA ABSOLUTA Y CAUSAS DE UNA DERROTA TOTAL

La tercera cuestión palpitante suscitada por la guerra civil que debe abordarse ineluctablemente concierne a las razones y causas de su terminación final con una victoria absoluta y rotunda del bando franquista y la concomitante derrota total y sin paliativos del bando republicano. Desde luego, no era un resultado que estuviera implícito en la división de fuerzas configurada a finales de julio de 1936, cuando ambos bandos estaban virtualmente empatados y operaban bajo la amenaza de parálisis completa en vista de sus escasos medios materiales para seguir combatiendo y de la ausencia de fuentes de suministros militares suficientes para sostener un esfuerzo bélico de envergadura.

A este respecto, hay que recordar que cuatro días después del inicio de la sublevación, los militares sublevados sólo habían logrado implantar su dominio indiscutido sobre todas las colonias (Marruecos, Ifni, el Sahara y Guinea), una amplia zona del oeste y centro peninsular (Navarra, Álava, León, Castilla la Vieja, Galicia, Cáceres y la mitad de Aragón), un reducido núcleo andaluz (en torno a Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada) y en los archipiélagos de Canarias y Baleares (salvo la isla de Menorca).

Sin embargo, la rebelión había sido aplastada por un pequeño sector del Ejército fiel al gobierno, con ayuda de milicias obreras armadas urgentemente, en dos grandes zonas separadas entre sí: la zona centro-sur y este peninsular (incluyendo Madrid, Barcelona y la región catalana, además de Badajoz, La Mancha, Valencia y toda la costa mediterránea hasta Málaga) y una estrecha y aislada franja norteña (desde Guipúzcoa y Vizcaya en el País Vasco hasta toda Asturias, menos Oviedo, y la provincia intermedia de Santander^[1]).

El territorio decantado finalmente hacia el gobierno republicano era el más densamente poblado y urbanizado (englobando a unos 14,5 millones de

habitantes y a las principales ciudades), el más industrializado (incluyendo la siderometalurgia vasca, la minería asturiana y la industria textil y química catalana) y el de menores posibilidades agrarias y alimenticias (exceptuando los productos hortofrutícolas de la rica huerta levantina).

Por el contrario, el área en manos de los militares insurgentes tenía menos población y mayor poblamiento rural (unos 10 millones de habitantes), muy débil infraestructura industrial (aunque incluía las minas de piritas de Huelva y las minas de hierro marroquíes) e importantes recursos alimenticios agrarios y ganaderos (más de dos tercios de la producción triguera, la mayor parte de la patata y legumbres y poco más de la mitad del maíz).

No obstante, ese reparto genérico era especialmente gravoso para los intereses del bando republicano en virtud de su escisión geográfica y falta de conexión entre áreas industriales y zonas de consumo: ni el carbón asturiano ni el hierro vasco podían abastecer a la industria catalana o levantina ni los productos de ésta podían llegar a los mercados urbanos de la franja norteña leal. En palabras de Josep M. Bricall, «los rebeldes les habían arrebatado el mercado de su industria y los productos básicos para esta industria y para el consumo de la población»^[2].

En el orden financiero, la República tenía ventaja porque controlaba las sustanciales reservas de oro del Banco de España, cuya movilización serviría como medio de pago de los suministros importados del extranjero, en tanto que sus enemigos carecían de recursos constantes análogos y sólo disponían de sus posibilidades exportadoras para obtener divisas aplicables a las ineludibles compras exteriores. Esta ventaja inicial en recursos industriales y financieros por parte de la República hizo creer a algunos de sus dirigentes que la prueba de fuerza planteada por los sublevados podría ganarse. Así lo hizo explícito Indalecio Prieto en una alocución radiada el 8 de agosto de buscado tinte optimista (por más que la realidad conocida no fuera tan idílica):

¿De quién pueden estar las mayores posibilidades de triunfo en una guerra? De quien tenga más medios, de quien disponga de más elementos. Esto es evidentísimo... Pues bien: todo el oro de España, todos los recursos monetarios válidos en el extranjero, todos, absolutamente todos, están en poder del gobierno. (...) Todo el poder industrial de España... está en nuestras manos^[3].

En términos militares, como ya se ha visto, los sublevados contaban con la totalidad de las bien preparadas y pertrechadas fuerzas de Marruecos (especialmente el contingente humano de la temible Legión y de las Fuerzas de Regulares Indígenas: «los moros») y con la mitad de las fuerzas armadas existentes en la propia Península, con una estructura, equipo y cadena de

mando intactos y funcionalmente operativos. El mayor problema en este ámbito residía en las dificultades de transporte del llamado «Ejército de África» a la Península (habida cuenta de la falta de flota y aviones para llevarla a cabo), motivo por el cual el general Franco había emprendido sus propias gestiones para hacer posible la empresa mediante la solicitud del apoyo aéreo italiano y alemán. El 25 de julio, desde Tetuán, Franco solicitaba nuevamente al cónsul italiano en Tánger ese apoyo («doce aviones de transporte, diez aviones caza y diez aviones reconocimiento») y daba cuenta de la favorable situación militar presente: «Franco me asegura que con tal material y con fuerzas armadas y armas de que dispone es seguro éxito»^[4].

Frente a la relativa confianza militar que imperaba en el área sublevada, en la zona republicana las autoridades estaban realmente aterradas por la situación en su fuero interno. Tanto que Santiago Casares Quiroga dimitió de su cargo de jefe del ejecutivo el mismo día 18, el republicano moderado Diego Martínez Barrio fracasó en su efímero intento de formar un gobierno para mediar con los rebeldes aquella tarde-noche y, por último y por exclusión, el azañista José Giral tuvo que sustituirlo al frente de un nuevo gabinete exclusivamente republicano el 19 de julio de 1936.

Para entonces era evidente que el gobierno había sufrido la defección de más de la mitad del generalato y de cuatro quintas partes de la oficialidad, viéndose obligado a disolver la casi totalidad de sus unidades por decreto de aquel 19 de julio: «Quedan licenciadas las tropas cuyos cuadros de mando se han colocado frente a la legalidad republicana». Ese mismo día, muy consciente de su falta de medios y pertrechos bélicos, Giral remitía su demanda telegráfica de ayuda militar al nuevo gabinete del Frente Popular que había asumido el poder en Francia escasamente dos meses antes.

La gravedad de la situación se acentuaba porque, dada la ausencia de esos instrumentos coactivos, la defensa de la legalidad republicana había quedado en manos de milicias sindicales y populares improvisadas y a duras penas mandadas y dirigidas por los escasos mandos militares que se mantuvieron leales. Y había sido una combinación de esas fuerzas de seguridad leales y milicianos sindicales y partidistas la que había conseguido el aplastamiento de la sublevación en las grandes capitales y centros urbanos. Como reconocería después un periodista anarquista barcelonés que participó en los combates al lado de las fuerzas de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto:

La combinación fue decisiva. A pesar de su combatividad, de su espíritu revolucionario, la CNT sola no habría podido derrotar al ejército y a la policía juntos. De haber tenido que luchar contra ambos, en unas pocas horas no habría quedado ni uno de nosotros^[5].

No obstante la catástrofe que supuso la práctica disolución de su Ejército, la República pudo congratularse por retener en sus manos casi dos tercios de la minúscula fuerza aérea y algo más de la anticuada flota de guerra, cuya marinería se había amotinado contra los oficiales rebeldes y había implantado un bloqueo del Estrecho de Gibraltar para evitar el traslado de las decisivas tropas marroquíes al mando del general Franco.

En definitiva, aunque habían triunfado ampliamente en la España rural y agraria, el fracaso de los militares sublevados en las partes de España más modernizadas, incluyendo la propia capital del Estado (cuyo dominio conllevaba el reconocimiento jurídico internacional), les obligaba a emprender su conquista mediante verdaderas operaciones bélicas. El golpe militar parcialmente fallido devenía así en una verdadera y cruenta guerra civil. Y como ningún bando disponía de los medios y el equipo militar necesarios y suficientes para sostener un esfuerzo bélico de envergadura, ambos se vieron obligados a dirigirse de inmediato en demanda de ayuda a las potencias europeas más afines a sus postulados, abriendo así la vía al crucial proceso de internacionalización de la contienda.

La distribución inicial de fuerzas materiales entre los dos bandos contendientes ofrecía, por tanto, la imagen de un empate virtual imposible de alterar con la movilización de los recursos propios y endógenos. Y nada en esa situación coyuntural hacía presagiar una victoria total o una derrota sin paliativos por parte de ninguno de ambos contendientes.

Por si fuera poco, más adelante, en varias ocasiones durante el despliegue cronológico del conflicto (en virtud de razones internas tanto como exteriores), volvió a parecer sumamente improbable dicho final efectivo y tomó cuerpo como posibilidad viable la idea de una mediación internacional o una capitulación negociada para poner término al conflicto: en el verano de 1937, cuando las primeras ofensivas republicanas en Brunete y en Belchite demostraron la existencia de una máquina militar con cierta capacidad de ataque y maniobra (con el consecuente desánimo ítalo-germano y las paralelas gestiones anglo-francesas en pro de un armisticio); en el invierno de 1937-1938, cuando tiene lugar la única victoria ofensiva republicana con la ocupación efímera de la ciudad de Teruel (en el contexto de una tensión creciente de la entente anglo-francesa ante la anunciada anexión alemana de Austria); y en el verano de 1938, cuando el asalto republicano en la desembocadura del Ebro desbarata el avance franquista sobre Valencia y da origen a la batalla más larga y cruenta de toda la contienda española (en

vísperas de la grave crisis germano-checa que puso a Europa al borde de la guerra general).

Sin embargo, ni un armisticio, ni una mediación internacional, ni una capitulación negociada y condicionada pusieron término al conflicto fratricida. Y no fue así al final por varias razones difíciles de aquilatar y ponderar en su medida exacta. El presidente Azaña, ya en su exilio en Francia desde febrero de 1939, enumeraría con notable perspicacia las razones de la abrumadora derrota republicana (más que los motivos de la victoria total franquista):

El presidente considera que por orden de importancia, los enemigos del Gobierno republicano han sido cuatro. Primero, la Gran Bretaña [por su adhesión al embargo de armas prescrito por la política colectiva de No Intervención]; segundo, las disensiones políticas de los mismos grupos gubernamentales que provocaron una anarquía perniciosa que fue total [favorable] para las operaciones militares de Italia y Alemania en favor de los rebeldes; tercero, la intervención armada ítalo-germana; y cuarto, Franco^[6].

El juicio de los historiadores no está muy lejos de compartir y suscribir esas apreciaciones de testigos y protagonistas, aunque pueda alterar el orden de prioridades y el peso de cada factor. Así, al menos, se observa en el balance apuntado cuarenta años más tarde por Raymond Carr y Juan Pablo Fusi:

¿Por qué ganaron los nacionalistas? La respuesta, como en todas las guerras, es: un liderazgo y una disciplina superiores en el Ejército, y un esfuerzo militar respaldado por un gobierno de guerra unificado. Los nacionales fueron mejor ayudados que la República por sus simpatizantes extranjeros en cuanto a suministros de armas: la Legión Cóndor alemana y las tropas y el material italianos compensaron sobradamente la ayuda soviética al Frente Popular, que tan vital fue en las primeras fases de la guerra. Igualmente importantes fueron el disciplinado ejército africano bajo las órdenes de Franco y el adiestramiento superior de los ejércitos nacionales. (...) La disciplina militar de los nacionales era un reflejo de su unidad política: la debilidad militar del Frente Popular una consecuencia de sus luchas políticas intestinas^[7].

También es cierto que ese balance historiográfico no es unánimemente aceptado por todos los historiadores. A título de ejemplo relevante, el general Ramón Salas Larrazábal discrepa de que el apoyo ítalo-germano a Franco fuera superior en número o calidad a la ayuda soviética a la República e influyera crucialmente en el desenlace de la contienda. Y se inclina a resaltar como razones prioritarias del triunfo final nacionalista su superior eficacia administrativa y su mayor entusiasmo moral y arraigo popular^[8].

En todo caso, parece indudable que los factores apuntados por Azaña en 1939 y refrendados por Carr y Fusi en 1979 resultan inexcusables a la hora de tratar de explicar y dar cuenta y razón del modo y manera en que terminó la guerra civil. No en vano, ya a principios del siglo xx, un analista informado como era Winston Churchill había profetizado que «las guerras de los pueblos

serán más terribles que las guerras de los reyes». Y esto porque el novedoso concepto y realidad de «Guerra Total» que iba a imperar en la nueva centuria demandaría de las modernas sociedades industriales y de masas mucho más que las antiguas guerras de otras épocas previas y otras sociedades preindustriales: «no puede ser más que una lucha cruel que ... exigirá, durante años quizá, toda la población masculina de la nación, la suspensión completa de las industrias de paz y la concentración en un solo punto de toda la energía vital de la comunidad»^[9]. No otra cosa había predicho, algunos años antes, un notable estratega norteamericano al analizar las lecciones de la Guerra de Secesión (1861-1865) y de la Guerra Franco-Prusiana (1870):

La estrategia adecuada consiste en infligir golpes tan cruciales como sea posible al ejército enemigo y después en causar tanto sufrimiento a la población civil que ésta sólo aspire a la paz a todo precio y así presione a su gobierno para demandarla^[10].

Las profecías de Churchill y del general Sheridan se hicieron amarga realidad durante la Gran Guerra de 1914-1918, con su cosecha de millones de muertos y heridos. En ella, las capacidades militares estuvieron determinadas por la eficacia institucional, el aprovechamiento de los recursos económicos y la entidad y fortaleza del «frente interior»: la moral de la retaguardia civil y la disposición popular a asumir y soportar las privaciones y sacrificios exigidos por el esfuerzo de guerra. Precisamente esa cualidad de «Guerra Total» devastadora sería la principal lección derivada de la Gran Guerra. Así lo expresaría un militar español pocos años después, subrayando certeramente las enseñanzas derivadas de la reciente movilización general impuesta por el conflicto mundial en todos los países beligerantes, dada la necesidad de cubrir en lo posible la creciente brecha entre limitadas fuentes de abastecimiento militar y reposición demográfica e ingentes desgastes de material y de hombres exigidos por la Guerra Total: «Cesarán de construirse relojes, pianos, gramófonos, para dedicarse a la fabricación de espoletas, fusiles y proyectiles». Y todo ello con el objetivo de convertir a «la nación entera en una inmensa fábrica de material de guerra»^[11].

En efecto, al igual que había sucedido con los beligerantes de la Primera Guerra Mundial, los dos bandos combatientes en la contienda civil española tuvieron que hacer frente a tres grandes y graves problemas inducidos por la Guerra Total en el plano estratégico-militar, en el ámbito económico-institucional y en el orden político-ideológico. En gran medida, el éxito o fracaso de sus respectivos esfuerzos bélicos dependió de la acertada resolución de estas tres tareas básicas. A saber:

1.º la reconstrucción de un Ejército combatiente regular, con mando centralizado y jerarquizado, obediencia y disciplina en sus filas y una logística de suministros bélicos constantes y suficientes, a fin de sostener con vigor el frente de combate y conseguir ulteriormente la victoria sobre el enemigo o, al menos, evitar la derrota;

2.º la reconfiguración del aparato administrativo del Estado en un sentido fuertemente centralizado para explotar y hacer uso eficaz y planificado de todos los recursos económicos internos o externos del país, tanto humanos como materiales, en beneficio del esfuerzo de guerra y de las necesidades del frente de combate; y

3.º la articulación de unos «Fines de Guerra» comunes y compartidos por la gran mayoría de las fuerzas sociopolíticas representativas de la población civil de retaguardia y susceptibles de inspirar moralmente a esa misma población hasta el punto de justificar los grandes sacrificios de sangre y las hondas privaciones materiales demandados por esa cruenta y larga lucha fratricida.

A juzgar por el curso y desenlace de la guerra civil, parece evidente que el bando franquista fue superior al bando republicano en la imperiosa necesidad de configurar un Ejército combatiente bien abastecido, construir un Estado eficaz para regir la economía de guerra y sostener una Retaguardia civil unificada y moralmente comprometida con la causa bélica. Y, sin duda, el contexto internacional en el que se libró la contienda española impuso unas condiciones favorables y unos obstáculos insuperables a cada uno de los contendientes.

No en vano, sin la constante y sistemática ayuda militar, diplomática y financiera prestada por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, es harto difícil creer que el bando liderado por el general Franco hubiera podido obtener su rotunda victoria absoluta e incondicional. De igual modo, sin el asfixiante embargo de armas impuesto por la política europea de No Intervención y la consecuente inhibición de las grandes potencias democráticas occidentales, con su gravoso efecto en la capacidad militar, situación material y fortaleza moral, es altamente improbable que la República hubiera sufrido un desplome interno y una derrota militar tan total, completa y sin paliativos.

En este sentido, es bien revelador el juicio contenido en el siguiente informe confidencial elaborado por el agregado militar británico en España para conocimiento de las autoridades británicas:

Es casi superfluo recapitular las razones (de la victoria del general Franco). Éstas son, en primer lugar, la persistente superioridad material durante toda la guerra de las fuerzas nacionalistas en tierra y en el aire, y, en segundo lugar, la superior calidad de todos sus cuadros hasta hace nueve meses o posiblemente un año. (...)

Esta inferioridad material (de las tropas republicanas) no sólo es cuantitativa sino también cualitativa, como resultado de la multiplicidad de tipos (de armas). Fuera cual fuera el propósito imparcial y benévolo del Acuerdo de No Intervención, sus repercusiones en el problema de abastecimiento de armas de las fuerzas republicanas han sido, para decir lo mínimo, funestas y sin duda muy distintas de lo que se pretendía.

La ayuda material de Rusia, México y Checoslovaquia (a la República) nunca se ha equiparado en cantidad o calidad con la de Italia y Alemania (al general Franco). Otros países, con independencia de sus simpatías, se vieron refrenados por la actitud de Gran Bretaña. En esa situación, las armas que la República pudo comprar en otras partes han sido pocas, por vías dudosas y generalmente bajo cuerda. El material bélico así adquirido tuvo que ser pagado a precios altísimos y utilizado sin la ayuda de instructores cualificados en su funcionamiento. Tales medios de adquisición han dañado severamente los recursos financieros de los republicanos^[12].

El acierto de ese juicio del analista militar británico resulta corroborado por un informe remitido a Berlín por el embajador alemán en España, Eberhard von Stohrer, tras la ocupación de Cataluña y en vísperas del colapso de la resistencia republicana. A tenor del mismo, «las causas de la derrota roja» eran las siguientes:

La explicación de la decisiva victoria de Franco reside en la mejor moral de las tropas que luchan por la causa nacionalista, así como en su gran superioridad en el aire y en su mejor artillería y otro material de guerra. Los rojos, todavía sacudidos por la Batalla del Ebro y en gran medida lastrados por su escasez de material bélico y sus dificultades de suministros alimenticios, fueron incapaces de resistir la ofensiva^[13].

Todo lo anterior no quiere decir, ni mucho menos, que la política de No Intervención (la «traición de las democracias» que tanto denunciarían los líderes republicanos) fuera la razón única y exclusiva de la victoria de Franco y de la derrota de la República. De ningún modo parece posible o razonable suscribir este tipo de sencillas explicaciones unicasales y unilaterales. Frente a ese tipo de argumentaciones cabría subrayar, en todo caso, que tan importante en el desenlace de la guerra como esa persistente inhibición de la entente franco-británica habría sido la sistemática intervención italo-germana y las limitaciones de la asistencia soviética, por mencionar sólo a las dimensiones internacionales presentes y operantes en la contienda. De todos modos, a nuestro juicio, lo que sí resulta innegable es otra dimensión más compleja y transcendental de esta faceta del asunto. A saber: el hecho de que el contexto internacional conformado por la realidad práctica de la política europea de No Intervención incidió de manera directa y con resultados diferenciales sobre el esfuerzo de guerra de ambos bandos contendientes y sobre sus ineludibles tareas para hacer frente a la Guerra Total.

Dicho en otras palabras: los condicionamientos del marco internacional plantearon ventajas notorias e impusieron servidumbres sustanciales que cada uno de los bandos utilizó, sorteó o sobrellevó a fin de engrosar su capacidad de acción militar, fortalecer la moral de combate de su población civil de retaguardia, y acrecentar la eficacia de su aparato estatal y el aprovechamiento de sus recursos económicos. Y en este engarce y conexión dialéctica entre contexto internacional y circunstancias internas se fueron labrando las razones de una victoria total y los motivos de una derrota sin paliativos.

La justa ponderación de todos estos factores concurrentes a la hora de explicar el modo y manera de terminación de la guerra civil española cuenta con un precedente tentativo muy notable y distinguido. Se trata de la estimación realizada, apenas unos meses después de terminada la contienda, por el general Vicente Rojo Lluich (1894-1966), jefe del Estado Mayor Central del Ejército Popular de la República y auténtico estratega supremo del bando derrotado. Su balance, por eso mismo, tiene especial valor testimonial al proceder de quien fuera el antagonista fundamental que tuvo Franco en el plano militar durante la contienda. A juicio del general Rojo, «las causas del triunfo de Franco» se debían a un conjunto de razones correlacionadas que atendían a varios frentes distintos:

En el terreno militar, Franco ha triunfado:

- 1.º *Porque lo exigía la ciencia militar, el arte de la guerra. (...)*
- 2.º *Porque hemos carecido de los medios materiales indispensables para el sostenimiento de la lucha. (...)*
- 3.º *Porque nuestra dirección técnica de la guerra era defectuosa en todo el escalonamiento del mando. (...)*

En el terreno político, Franco ha triunfado:

- 1.º *Porque la República no se había fijado un fin político, propio de un pueblo dueño de sus destinos o que aspiraba a serlo. (...)*
- 2.º *Porque nuestro gobierno ha sido impotente por las influencias sobre él ejercidas para desarrollar una acción verdaderamente rectora de las actividades del país. (...)*
- 3.º *Porque nuestros errores diplomáticos le han dado el triunfo al adversario mucho antes de que pudiera producirse la derrota militar. (...)*

En el orden social y humano, Franco ha triunfado:

- 1.º *Porque ha logrado la superioridad moral en el exterior y en el interior. (...)*
- 2.º *Porque ha sabido asegurar una cooperación internacional permanente y pródiga^[14].*

Cabría discutir el orden de prelación y la importancia respectiva de cada una de esas razones expuestas por el general Rojo con el característico laconismo y contundencia castrense. Pero apenas cabe dudar que todas ellas tuvieron su parte correspondiente, mayor o menor, en la conformación del resultado final de la guerra civil con su victoria absoluta y su derrota total. Así lo permitiría corroborar un repaso más detallado y minucioso a las tres grandes dimensiones interiores operantes en la contienda y al contexto exterior determinante que actuó como marco envolvente y condicionante de la misma.

LA FACETA MILITAR Y ESTRATÉGICA

El mayor éxito que cosecharon los insurgentes sobre sus enemigos en la constitución de un Ejército regular combatiente se vio facilitado por el propio carácter de la sublevación. Como ha escrito certeramente al respecto el historiador militar Gabriel Cardona:

Desde los primeros momentos iniciales de la guerra civil española existió una diferencia cualitativa entre ambos bandos contendientes en el plano militar: los sublevados contaron con un Ejército mientras que los republicanos debieron organizarlo prácticamente desde cero, porque la sublevación de la mayor parte del Ejército derrumbó las instituciones de la República y permitió el estallido de la revolución^[1].

En efecto, en las zonas de España donde el golpe militar logró sus objetivos el poder quedó en manos de la cadena de mando del Ejército alzado, con arreglo a la preceptiva declaración del estado de guerra y previa depuración de elementos hostiles o indecisos en sus filas. El general Mola ya lo había advertido: «Para los compañeros que no son compañeros, el movimiento triunfante será inexorable». Tres generales de división y tres generales de brigada perderían la vida como consecuencia de su lealtad constitucional; otros dos más serían fusilados tras la victoria^[2].

La implacable militarización política y social consecuente respondía al objetivo de frenar las reformas gubernamentales y conjurar al mismo tiempo la amenaza de una revolución proletaria. La primera alocución radiofónica del general Gonzalo Queipo de Llano en Sevilla daba cuenta de esa combinación de motivos antirreformistas y contrarrevolucionarios que definía la sublevación militar en curso:

Sevillanos: ¡A las armas! La patria está en peligro y, para salvarla, unos hombres de corazón, unos cuantos generales, hemos asumido la responsabilidad de ponernos al frente de un movimiento salvador que triunfa por todas partes. El Ejército de África se apresta a trasladarse a España para tomar parte en la tarea de aplastar a ese gobierno indigno que se había propuesto destruir a España para convertirla en una colonia de Moscú... ¡Sevillanos!, la suerte está echada y decidida por nosotros, y es inútil que la canalla resista y produzca esa algarabía de gritos y tiros

que oís por todas partes. Tropas del Tercio y Regulares se encuentran ya camino de Sevilla, y en cuanto lleguen, esos alborotadores serán cazados como alimañas. ¡Viva España! ¡Viva la República!^[3]!

Para hacer visible la nueva autoridad, Mola constituyó en Burgos el 24 de julio de 1936 la Junta de Defensa Nacional, «que asume todos los Poderes del Estado y representa legítimamente al País ante las Potencias extranjeras» (según rezaba en el decreto del *Boletín Oficial del Estado* del día 25). Estaba presidida por el general Miguel Cabanellas en su condición de jefe más antiguo en el escalafón (habida cuenta de que el general José Sanjurjo había muerto en accidente de aviación en Portugal) e integrada por la plana mayor del generalato sublevado: Mola, Saliquet, Ponte, Dávila, Franco, Queipo de Llano, Orgaz, Gil Yuste, el almirante Moreno y los coroneles Montaner y Moreno Calderón (como secretarios). Sin embargo, la dirección de las operaciones bélicas no se sometió a mando único hasta finales de septiembre de 1936, con la elección por la Junta del general Franco, que estaba al frente del temible Ejército de África, como «Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire» y «Jefe del Gobierno del Estado Español», confiriéndole expresamente «todos los poderes del Nuevo Estado» (*Boletín Oficial del Estado* del día 30 de septiembre^[4]).

Ningún desafío de orden político o social hizo sombra a la exclusividad de un poder militar que, con Franco electo, tomaba rumbos de poder personal omnímodo (el primer decreto del nuevo Generalísimo estaba firmado en calidad de «Jefe del Estado» y creaba una Junta Técnica del Estado, *BOE* del 2 de octubre) y recibía el espaldarazo del reconocimiento oficial de la Italia fascista y la Alemania nazi el 18 de noviembre de 1936. Las milicias de voluntarios de la Falange y del tradicionalismo carlista (37 000 camisas azules y 22 000 requetés en octubre de 1936) fueron rígidamente encuadradas en la disciplina del Ejército y sometidas a la jerarquía militar y al mando de jefes y oficiales regulares.

Por lo que respecta a los partidos derechistas, su previa satelización en la primera mitad de 1936 les había privado de autonomía operativa (agravada por el asesinato de Calvo Sotelo y por el encarcelamiento y posterior fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera en zona republicana). Además, con la conversión del golpe militar en guerra regular, tanto los dirigentes como las bases de esos partidos asumieron que la emergencia bélica y la necesidad de vencer exigían la subordinación ciega a la autoridad y decisiones de los mandos militares y del Cuartel General del Generalísimo^[5].

En estas condiciones, el Ejército franquista contó con el aparato militar-institucional existente, aprovechó la potencia humana técnico-profesional disponible y obtuvo las garantías de suministros materiales suficientes para monopolizar la capacidad ofensiva estratégica desde el primer momento y hasta la victoriosa conclusión del conflicto.

Tras el fracaso de las tentativas iniciales para tomar Madrid por asalto frontal (noviembre de 1936) e indirecto (Batallas de la Carretera de La Coruña, del Jarama y de Guadalajara, en diciembre de 1936 y febrero y marzo de 1937, respectivamente), Franco daría un giro crucial a su estrategia bélica y optaría por librar una guerra de desgaste y agotamiento en el frente norteño, con el objetivo de derrotar gradualmente al enemigo mediante el quebrantamiento de su capacidad de resistencia gracias a una neta superioridad material y ofensiva: «Franco ganó la guerra y perdió una sola batalla: la de Madrid» (Gabriel Cardona^[6]).

Fue un cambio de estrategia que sus valedores italianos y alemanes no siempre apreciaron ni comprendieron por los graves costes y riesgos implícitos para ellos, suscitando en Roma y Berlín dudas sobre la competencia militar de Franco. En diciembre de 1936, tras el inesperado fracaso ante Madrid, el general Wilhelm Faupel, recién nombrado embajador alemán en España, informó confidencialmente a las autoridades nazis:

Personalmente, el general Franco es un soldado bravo y enérgico, con un fuerte sentido de la responsabilidad: un hombre que se hace querer desde el principio por su carácter abierto y decente, pero cuya experiencia y formación militar no le hacen apto para la dirección de las operaciones en su presente escala^[7].

También en Italia se manifestaron serias dudas sobre la capacidad militar del Generalísimo para dirigir con plena eficacia y según las modernas doctrinas estratégicas el esfuerzo bélico nacionalista. El conde de Ciano, yerno de Mussolini y su ministro de Asuntos Exteriores, anotaría en su diario privado el 20 de diciembre de 1937 la «inquietud» de los generales italianos destacados en España y sus «motivos»: «Franco no tiene idea de lo que es la síntesis en la guerra. Sus operaciones son tan sólo las de un magnífico comandante de batallón»^[8].

Sin embargo, sobre este controvertido tema, hay que recordar un aspecto determinante: el Caudillo español no actuaba bajo meras consideraciones militares ni perseguía una victoria rápida al estilo *Blitzkrieg* [guerra relámpago] o *guerra celere*, como pretendían los estrategas y gobernantes germanos e italianos. Su pretensión era mucho más amplia y profunda: aprovechar las operaciones bélicas para proceder a la extirpación física y total

de un enemigo considerado como la anti-España. En palabras propias de Franco en febrero de 1937 al teniente coronel Emilio Faldella, segundo jefe del contingente de fuerzas militares italianas que servía a sus órdenes:

En una guerra civil, es preferible una ocupación sistemática de territorio, acompañada por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje el país aún infestado de adversarios^[9].

Apenas dos meses después, ante la insistencia de Mussolini en la necesidad de apurar el tiempo y agilizar las operaciones, Franco volvió a repetir al embajador fascista las razones de su nueva estrategia militar supeditada a un fin político de «limpieza» y «redención» de enemigos y desafectos:

Debemos realizar la tarea, necesariamente lenta, de redención y pacificación, sin la cual la ocupación militar sería totalmente inútil. La redención moral de las zonas ocupadas será larga y difícil, porque en España las raíces del anarquismo son antiguas y profundas. (...) Querido embajador, puedo asegurarle que no tengo interés en el territorio, sino en los habitantes. La reconquista del territorio es el medio, la redención de los habitantes, el fin. (...) No tomaré la capital ni siquiera una hora antes de lo necesario: primero debo tener la certeza de poder fundar un nuevo régimen^[10].

En abierto contraste con lo sucedido en el bando insurgente, el acosado gobierno republicano sufrió la defección de más de la mitad del generalato y de cuatro quintas partes de la oficialidad, viéndose obligado a disolver los restos del Ejército y quedando sus defensas en manos de una multiplicidad de milicias sindicales y populares improvisadas y a duras penas mandadas y dirigidas por los escasos mandos militares que se mantuvieron leales (y previa depuración de los mandos hostiles o sospechosos: 21 generales fueron fusilados o asesinados en la zona republicana durante el transcurso de la guerra^[11]). El hecho de que la República retuviera en su poder dos tercios de la minúscula fuerza aérea y algo más de la anticuada flota de guerra (después de que la marinería hubiera depuesto y eliminado a los oficiales proinsurgentes e indecisos), no mermaba esa desventaja crucial y decisiva en el ámbito terrestre en los primeros momentos.

La compleja tarea de reconstruir un aparato militar regular, jerarquizado y disciplinado, sometido al control y dirección de un embrión de Estado Mayor profesional, resultó sumamente dificultada por las tradiciones antiestatistas y antimilitaristas imperantes en la anarquista Confederación Nacional del Trabajo y en la radicalizada Unión General de Trabajadores dirigida por Largo Caballero.

Los militantes armados de ambas organizaciones sindicales (aunque mucho más los ácratas que los caballeristas) se vanagloriaban en los primeros meses de ser «milicianos del pueblo» y se negaban a convertirse en «soldados

encuartelados y con uniforme»^[12]. Por eso mismo, en frentes tranquilos como el de Aragón, dominado por las milicias confederales reclutadas en Cataluña, se dieron espectáculos insólitos: «Los hombres regresaban a Barcelona los fines de semana»; «discutían las órdenes»; «se negaban a entregar material a Milicias de diferentes opiniones políticas o a fortificar las posiciones»^[13]. Como amargamente recordaría ya en 1939 el presidente Azaña:

Reducir aquellas masas a la disciplina, hacerlas entrar en una organización militar del Estado, con mandos dependientes del gobierno, para sostener la guerra conforme a los planes de un Estado Mayor, ha constituido el problema capital de la República^[14].

Sólo a partir de septiembre de 1936 comenzó el penoso proceso de constitución del Ejército Popular de la República, una vez comprobada la amarga realidad del imparable avance de las tropas franquistas sobre Madrid (tras sus victorias sobre las milicias en Andalucía y Extremadura) y después de constituido el nuevo gobierno de coalición presidido por Largo Caballero e integrado por todas las fuerzas políticas (incluyendo a la CNT y al Partido Comunista).

De hecho, como ha escrito Julián Casanova, después de dos meses de verdadera guerra en los frentes, las milicias, «aquella fuerza superior llamada “pueblo en armas”, resultaban inútiles para una guerra de largo alcance»: no habían detenido la progresión del Ejército de África por los campos andaluces y extremeños y tampoco habían logrado el sueño de reconquistar la ansiada «capital confederal» (Zaragoza^[15]).

La amarga aceptación anarquista y caballerista de la militarización como «una necesidad impuesta por la guerra» no acabó con todos los obstáculos, ni mucho menos. Al margen de la persistencia de focos de resistencia ácrata a esa medida, el Ejército Popular de la República siempre adolecería de graves problemas estructurales, sobre todo por las dificultades para cubrir las necesidades humanas de oficiales y suboficiales experimentados y para abastecer las demandas materiales de suministros y repuestos bélicos. Sin mencionar el posible efecto disolvente que hubieran podido tener las rivalidades políticas en el nombramiento y destitución de los altos mandos y en la composición del nuevo cuerpo de comisarios militares (sobre todo por la pretensión hegemónica mostrada por los comunistas y la resistencia de los otros grupos a transigir al respecto).

El efecto de todas esas carencias y limitaciones se plasmó en la adopción de una estrategia bélica defensiva cuya vertebración operativa corrió a cargo del general Vicente Rojo, nombrado por el doctor Negrín jefe del Estado Mayor Central en mayo de 1937. Asumiendo la superioridad material y

profesional del enemigo y las dificultades propias de abastecimiento, dicha estrategia trataba de conjurar la lenta derrota final mediante una serie de inesperadas ofensivas de distracción en frentes secundarios encaminadas a aliviar la continua presión del avance franquista en el frente principal de sus ataques.

En consecuencia, tras el éxito defensivo en Madrid, la triunfal ofensiva enemiga en el norte trató de ser debilitada por los ataques sorpresivos en torno a Madrid (Brunete, julio de 1937) y Aragón (Belchite, agosto-septiembre de 1937). De igual modo, la prevista reanudación de la ofensiva de Franco sobre Madrid tras la ocupación de Asturias en el mes de octubre de 1937 fue atajada por el inesperado y victorioso ataque republicano en Teruel (diciembre de 1937-enero de 1938). Y, finalmente, la arrolladora campaña franquista sobre Levante (iniciada en marzo de 1938), que cortó en dos mitades el territorio en manos de la República, fue frenada durante meses por el ataque del Ejército Popular en la desembocadura del río Ebro (julio-noviembre de 1938), la mayor y más cruenta de las batallas registradas durante toda la guerra y una de las más modernas en términos de material y equipamiento. Como ha escrito Gabriel Cardona al respecto de esas operaciones de distracción:

Entre el verano de 1937 y el siguiente invierno del mismo año, el Ejército Popular de la República desencadenó las ofensivas de Brunete, Belchite y Teruel, siempre con el mismo desarrollo. En los tres casos, el primer ataque republicano, encomendado a tropas escogidas, logró un gran éxito. Sin embargo, al cabo de dos o tres días de combates, el escalón de ataque estaba desgastado, sin que existieran reservas capaces de tomar el relevo y de continuar la ofensiva. Mientras tanto, el general Franco transportaba al lugar de la batalla tropas frescas en ferrocarril en tanto que su aviación dominaba el cielo. A los pocos días del primer ataque, la ofensiva republicana se convertía en derrota^[16].

Al término de la guerra civil, la entidad numérica de ambos ejércitos enfrentados era básicamente equiparable, aunque su capacidad de actuación y sus recursos y fuentes de suministro fueran muy distintos. El servicio secreto militar británico realizó en el verano de 1939 una comparación entre ambas fuerzas armadas muy fidedigna y básicamente corroborada por la historiografía posterior. Merece la pena reproducir su evaluación:

- a) Las fuerzas republicanas crecieron desde un total de 100 000 o 150 000 en agosto de 1936 hasta cerca de 600 000 o 700 000 en diciembre de 1938.
- b) Las fuerzas nacionalistas, incluyendo los contingentes italianos y alemanes, se elevaron desde cerca de 50 000 o 60 000 en agosto de 1936 hasta cerca de 600 000 o 700 000 en diciembre de 1938.

*Aviación en España (incluyendo la de potencias extranjeras.
Todos los tipos)*

Republicanos Nacionistas

Agosto de 1936	160	120
Septiembre de 1937	215	455
Noviembre de 1938	250	662

La fuerza aérea nacionalista consistía en: a) fuerza aérea española, utilizando personal español y material italiano y germano; b) la «Aviazione Legionaria» italiana; y c) la «Legión Cóndor» alemana. Las dos últimas son realmente contingentes «regulares».

La aviación republicana en sus etapas iniciales consistía en: a) la fuerza aérea republicana española, compuesta por personal español y extranjero y material ruso y francés; y b) los escuadrones rusos. En 1938 el material nuevo era principalmente ruso, pero el personal ruso había sido en gran medida reemplazado por españoles^[17].

No cabe duda alguna de la crucial importancia del apoyo exterior para el sostenimiento de ambos ejércitos y para el despliegue de sus estrategias bélicas contrapuestas. Sin la vital ayuda italiana y alemana a finales de julio de 1936 y durante el mes de agosto, las tropas insurgentes no habrían podido superar el empate de fuerzas iniciales y tampoco Franco hubiera podido transportar por vía aérea a la Península al experimentado Ejército de África y así iniciar la triunfal y meteórica marcha sobre Madrid. Del mismo modo, si en octubre de 1936 la Unión Soviética no hubiera decidido prestar ayuda militar directa a la República, hubiera sido impensable el éxito de la resistencia gubernamental en Madrid.

Desde la primavera de 1937 el equilibrio inestable alcanzado en el frente madrileño fue desmoronándose poco a poco pero sin remisión en favor del general Franco, como consecuencia de la reactivación de los envíos italo-germanos en una medida y proporción que no pudo ser compensada por las remesas soviéticas y que posibilitó la adopción franquista de la estrategia de guerra de desgaste y agotamiento. El resultado sería patente durante la ofensiva final sobre Cataluña desatada por Franco el 23 de diciembre de 1938. Un mes más tarde, el representante diplomático británico ante la República comunicaría confidencialmente a su gobierno las razones del colapso de la resistencia republicana, que preludiaba su derrota final y definitiva:

La situación militar era muy grave. La escasez de material bélico era enorme. La artillería estaba reducida a menos de doce cañones por división y éstos estaban desgastados por el uso constante. En aviación, la inferioridad del gobierno era aproximadamente de un avión por cada seis enemigos. No tenían siquiera suficientes ametralladoras^[18].

No parece que quepa duda razonable alguna al respecto: desde los primeros meses del año 1937 y durante el resto de la contienda hasta su terminación, el

bando franquista contó con más y mejores pertrechos bélicos que sus enemigos. Como ha escrito recientemente Gerald Howson en su revelador estudio sobre las fuentes de suministro bélico republicano, ésta era una realidad bien conocida y apreciada por el propio bando vencedor y no sólo por sus adversarios y las cancillerías extranjeras:

En 1940, el coronel Alfonso Barra, del Servicio de Recuperación Nacional, que había examinado y clasificado las armas apresadas a los republicanos, afirmó que, a consecuencia de haber tenido que comprar de fuentes tan dispares, el ejército republicano había tenido cuarenta y nueve tipos distintos de fusiles de repetición, cuarenta y un tipos distintos de armas automáticas y no menos de sesenta tipos distintos de piezas de artillería. Normalmente, un ejército tiene un solo tipo de fusil (y tal vez también de carabina), tres o cuatro tipos de ametralladoras (pesada y ligera, o de metralleta) y probablemente diez tipos distintos de piezas de artillería, desde cañones ligeros hasta de costa y sitio^[19].

LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y ECONÓMICA

El mayor éxito franquista sobre sus enemigos en el plano militar se vio reduplicado igualmente en las tareas de conformar un Estado y una economía eficientes y al servicio exclusivo del esfuerzo bélico. Por supuesto, de nuevo el carácter militar del movimiento proporcionó una ventaja notoria al bando insurgente. No en vano, la militarización impuesta por el estado de guerra significó la asunción por el Ejército de toda la autoridad y poder estatal efectivo, con la consiguiente anulación de las actividades de los partidos hostiles y, lo que es más significativo, de los afines.

El propio Franco, antes de su elección como Generalísimo, había anticipado a los dirigentes derechistas la necesidad de imponer una unidad extrema en la retaguardia bajo tutela militar: «Todo el mundo tendrá que sacrificar cosas en beneficio de una disciplina rígida que no se preste al craquelado ni al fraccionamiento»^[1]. Y las disposiciones dictadas para regular la vida institucional y económica en los territorios conquistados al enemigo establecían esa subordinación de toda autoridad civil a la militar correspondiente. Así se prescribía literalmente por decreto-ley:

Artículo primero. Los jefes superiores de las columnas y fuerzas que operan en las zonas en contacto con el enemigo podrán nombrar, con carácter interino, las Autoridades civiles de las ciudades, pueblos y provincias que ocupen, para que, a las órdenes directas de la Autoridad militar de ocupación, atiendan los problemas de orden civil que se planteen y cooperen con aquélla en cuanto les ordenase a la resolución de los problemas de alojamiento y avituallamiento de las fuerzas.

Artículo segundo. Al quedar asegurada la ocupación de la provincia o plaza y haber dejado de constituir su territorio o zona parte de la de vanguardia del Ejército, se observarán las siguientes reglas:

a) La Autoridad militar será la Autoridad superior, pasando a la competencia directa de las Autoridades civiles y administrativas, todas las cuestiones que le son peculiares, con exclusión de las referentes al orden público. Sin perjuicio de ello, la Autoridad civil podrá desempeñar aquellos cometidos que la Autoridad militar de quien dependa le delegue de modo expreso.

(*Boletín Oficial del Estado*, 19 de febrero de 1937)

El exclusivo dominio militar pudo contar en seguida con una asistencia crucial y decisiva por sus implicaciones internas e internacionales: la de la jerarquía episcopal española y las masas de fieles católicos, en consonancia con su previa hostilidad hacia la República laica y aterrados por la furia anticlerical desatada en la retaguardia enemiga. De este modo, la Iglesia pasó a convertirse en la fuerza social e institucional de mayor influencia, tras el Ejército, en la conformación de las estructuras políticas que germinaban en la España insurgente. Las subsecuentes medidas de restauración de los privilegios económicos, institucionales y culturales eclesiásticos formaron parte del sentido autoritario, reaccionario y contrarreformista del movimiento de fuerza en curso, además de constituir una faceta crucial del intenso proceso de involución social auspiciado por la sublevación también en las relaciones laborales y la actividad productiva.

En ese plano crucial tuvo lugar una verdadera militarización *de facto* de la vida económica con el objetivo declarado de aumentar los rendimientos productivos mediante la implantación de más horas de trabajo, la aprobación de considerables rebajas salariales, la anulación de todo tipo de conflictos huelguísticos y la completa subordinación obrera a las órdenes patronales y a las directrices estatales. A título ilustrativo, la jornada laboral en el interior de las minas, fijada desde 1919 en siete horas diarias, fue aumentada a ocho horas el 20 de diciembre de 1936^[2].

Esa política de férreo intervencionismo estatal en la economía pretendía y consiguió crear «productores disciplinados» que (en palabras del *Fuero del Trabajo* de marzo de 1938) asumieran su deber de «fidelidad y subordinación» al «jefe de empresa», comprendieran que «la producción nacional constituye una unidad económica al servicio de la Patria» y renegaran «de actos individuales o colectivos que de algún modo turben la normalidad de la producción o atenten contra ella», puesto que los mismos serían «considerados como delitos de lesa patria» y «objetos de sanción adecuada»^[3].

Como resultado de esas medidas de vigilancia de la fuerza laboral y del paralelo control militar de la actividad económica, la producción agrícola e industrial en la zona franquista no experimentó graves caídas ni desplomes irreversibles durante el conflicto. A pesar de la reducción de la superficie agraria sembrada y cultivada, todos los datos estadísticos indican que las cosechas de trigo o aceite mantuvieron niveles aceptables, en tanto que la producción carbonífera o metalúrgica (una vez ocupadas las zonas fabriles norteañas) experimentó una «rápida normalización e incluso la obtención en

1938 de volúmenes de producción superiores a 1935»^[4]. En esta recuperación económica tuvieron su incidencia las medidas ordenancistas y reguladoras destinadas a estimular la producción con vistas a sostener el esfuerzo bélico: la creación del Servicio Nacional del Trigo en agosto de 1937 o la constitución de Comisiones Reguladoras de la Producción en julio de 1938, a título de ejemplo.

Un indicador del relativo éxito de la política económica de guerra franquista lo constituye la estabilidad de los precios al por mayor durante el trienio bélico: aumentaron un 7 % hasta finales de 1936, un 12,7 % en 1937 y un 14 % en el año 1938. En total, un incremento de un 37,5 % en todo el período^[5]. Sin olvidar el inexcusable aval financiero que supuso la corriente de préstamos y créditos otorgados por Italia (entre 413 y 456 millones de dólares) y Alemania (entre 225 y 245 millones de dólares), que sostuvieron el coste financiero total de la guerra (entre 697 y 716 millones de dólares^[6]).

Sin duda, la faceta más atroz de la dimensión reaccionaria y restauracionista de la insurrección fue la represión violenta y sistemática contra el enemigo interno, fehaciente o potencial. Se trataba de un fenómeno brutal que obedecía a razones previstas con anterioridad al inicio de la guerra por el general Mola en una de las «instrucciones reservadas» remitidas a los militares conjurados el 25 de mayo de 1936: «la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado». El sentido y finalidad de lo que pronto devino en una «política de exterminio» del enemigo fue definida en plena guerra con perspicacia amarga por el presidente Azaña: «se propone acabar con el adversario, para suprimir quebraderos de cabeza a los que pretenden gobernar»^[7]. El propio Franco reconocería con posterioridad a su primo y ayudante militar ese propósito punitivo y profiláctico con insólita distanciamiento personal: «las autoridades tenían que prever cualquier reacción en contra del Movimiento por elementos izquierdistas. Por esto fusilaron a los más caracterizados»^[8]. Como parte de esa política, el general Gonzalo Queipo de Llano, a los pocos días de su victoria en Sevilla, anunció públicamente por la radio: «A propósito de huelgas y coacciones, ordeno y mando que todos los que caigan en poder de fuerzas realizando coacciones sean inmediatamente pasados por las armas». Y añadía como aclaración: «Si alguno tratara de coaccionaros, os autorizo para que lo matéis como a un perro y quedaréis exentos de responsabilidad»^[9].

Las implacables medidas represivas iniciales (bajo la forma de «paseos» o ejecuciones irregulares, como la que costó la vida en Granada al poeta

Federico García Lorca) pronto se transformaron en una persistente política de depuración y «limpieza» de retaguardia con finalidad social «redentora» (en manos de tribunales militares sumarísimos). Su fruto final habría de ser una cifra, durante el conjunto de la guerra, probablemente cercana a las 90 000 víctimas (en su mayoría dirigentes y afiliados sindicales, líderes de partidos obreros y republicanos, y figuras intelectuales de significación democrática: por ejemplo, Leopoldo Alas, rector de la Universidad de Oviedo e hijo de «Clarín»). A estas víctimas se sumarían en torno a otras 40 000 en la inmediata posguerra y como resultado de la victoria y ocupación de toda España^[10]. El joven Dionisio Ridruejo, jefe de la Falange en Segovia, reconocería posteriormente el protagonismo de su partido en esas labores iniciales de limpieza profiláctica:

Se formó una brigada especial, bajo el mando de un falangista muy religioso y siniestro que era de Valladolid. En lugar de la borla, en la boina llevaba crucifijo. Oficialmente, la misión de la brigada consistía en arrestar a la gente y conducirla a prisión, pero pocos detenidos llegaron a su destino. Los dejaban muertos en las carreteras. Yo y otros atacamos al jefe de la brigada diciéndole que no podía hacer de juez y de verdugo a un tiempo. «No, me cuido bien de esta gente», respondió con una seguridad total. «Todos tienen oportunidad de confesarse antes de morir y, por tanto, pueden ir al cielo...»^[11].

La impresionante hemorragia represiva desatada en la retaguardia insurgente llegó a tal extremo que incluso provocó el 15 de noviembre de 1936 la repulsa de un miembro de la jerarquía episcopal, el obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea: «¡No más sangre, no más sangre! No más sangre que la que quiere el Señor que se vierta, intercesora, en los campos de batalla, para salvar a nuestra Patria»^[12].

Sin embargo, la crucial carta pastoral colectiva de los obispos españoles sobre la guerra civil, publicada en julio de 1937, amortiguó esas aisladas reservas sobre ocasionales «excesos» no autorizados en función de la extrema violencia enemiga:

Tiene toda guerra sus excesos; los habrá tenido, sin duda, el movimiento nacional; nadie se defiende con total serenidad de las locas arremetidas de un enemigo sin entrañas. Reprobando en nombre de la justicia y de la caridad cristiana todo exceso que se hubiese cometido, por error o por gente subalterna, y que metódicamente ha abultado la información extranjera, decimos que el juicio que rectificamos no responde a la verdad, y afirmamos que va una distancia enorme, infranqueable, entre los principios de justicia de su administración y de la forma de aplicarla entre una y otra parte^[13].

Convertido ya en el Caudillo indiscutido de la España insurgente y contando con el apoyo de la Iglesia como *homo missus a Deo*, Franco pudo hacer frente a su primer y único fracaso militar en toda la guerra: el asedio y asalto sobre Madrid (la capital estatal cuya posesión aseguraría el reconocimiento

internacional). La consecuente metamorfosis de la guerra supuestamente breve en un conflicto de larga duración le impulsaría a dar un paso crucial para la institucionalización de su régimen de autoridad personal, superando la condición de mero dictador comisarial elegido por sus iguales y buscando fuentes de legitimación al margen del Ejército y la Iglesia.

Para acometer esa empresa política, Franco tuvo la fortuna de contar con la ayuda política y jurídica de Ramón Serrano Suñer, su cuñado, abogado del Estado y exdiputado de la CEDA convertido al falangismo. Con su asesoramiento, el 19 de abril de 1937 el Caudillo decretó la unificación forzosa de todos los partidos derechistas, «bajo Mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional»: la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas). Según el propio decreto fundacional, el nuevo organismo, abjurando de cualquier similitud con los partidos políticos, era una «organización intermedia entre la Sociedad y el Estado» y tenía como misión principal «comunicar al Estado el aliento del pueblo» y «llevar a éste el pensamiento de aquél a través de las virtudes político-morales de servicio, jerarquía y hermandad». Amén de constituir «un movimiento más que un programa» con un claro enemigo enfrente: «Contra la democracia y el comunismo»^[14].

De este modo, el nuevo partido unificado, férreamente controlado por el Generalísimo, se convertiría en el tercer pilar institucional (con el Ejército y la Iglesia) de un régimen de autoridad personal ilimitada que estaba experimentando un rápido proceso de fascistización. No en vano, en virtud de su admiración por Mussolini y el régimen fascista, FET de las JONS tuvo desde el principio mucho más de la antigua Falange que del viejo carlismo, la CEDA o el monarquismo. Las subsecuentes medidas políticas tomadas (elección de símbolos, cargos y programas) revalidaron el nuevo maridaje entre Franco y el fascismo español^[15]. El Caudillo se apoyaba en el partido para reforzar con una tercera fuente de legitimidad la base de su poder omnímodo y carismático como dictador bonapartista, para disponer de un modelo político integrador y controlador de la sociedad civil, y para canalizar y encuadrar la movilización de masas exigida por la guerra y por los nuevos tiempos. El falangismo de camisa vieja (anterior a la unificación) asumía el liderazgo de un general victorioso a cambio de grandes parcelas de poder en el régimen y la expectativa de ampliarlas aún más en el futuro^[16].

A partir de ese momento, seguro de sus apoyos internacionales y de sus suministros bélicos, Franco fue capaz de culminar en condiciones ventajosas la empresa de consolidar un Estado central militarizado y en claro proceso de

fascistización a la par que aprovechaba al máximo los crecientes recursos económicos que sus victorias iban reportando (la siderurgia vasca y la minería asturiana desde junio y octubre de 1937, por ejemplo^[17]). Y todo ello sin que los ocasionales reveses militares ni el espectro del hambre, la miseria y las privaciones materiales socavaran la eficacia de su esfuerzo bélico o la unidad política e ideológica y la moral de combate de su retaguardia interior. Entre otras cosas, porque una gran parte de la financiación de los gastos de guerra pudo dilatarse en el tiempo gracias al crédito italiano y alemán y sobre la base de la reorientación del comercio exterior español hacia esos países acreedores. En octubre de 1937 el embajador alemán en Burgos informaba a Berlín sobre el estado de la economía en la zona franquista con innegable satisfacción:

La vida económica en la España nacionalista es casi normal; la moneda es estable y no está en peligro; los precios de alimentos sencillos, que están disponibles en abundancia, han subido muy poco para las masas. Las reservas incluso serán suficientes para abastecer las áreas que todavía controlan los rojos en la actualidad. Casi todas las materias de necesidad cotidiana, especialmente de carbón o de carburante, están disponibles en cantidad suficiente. La distribución de alimentos no está encontrando dificultades. El transporte es adecuado^[18].

A finales de agosto de 1938, el representante oficial británico en la zona nacionalista remitió a Londres un informe reservado que reiteraba esa óptima situación interior dadas las circunstancias:

El orden público continúa siendo bueno. En general, la gente está bien alimentada, decentemente vestida y contenta. Los precios han subido pero poco y, claro está, los bienes importados han desaparecido del mercado.

Pero, realmente, no hay signos externos de depresión. (...) De hecho, en todas partes reina una apariencia externa de contento y normalidad. Por supuesto, la misma es en parte equívoca. En todos los lugares hay en marcha rigurosas medidas de represión. (...) Es cierto que la desafección y la hostilidad latente hacia el régimen prevalecen en muchos distritos, especialmente en aquellos donde hay población obrera (hubiera sido inconcebible su conversión en tan pocos años a las nuevas doctrinas). Pero hay que reconocer al gobierno del general Franco su capacidad para restablecer la tranquilidad superficial y la buena administración^[19].

En claro contraste con sus enemigos, la República afrontó dificultades gravísimas para restablecer la autoridad estatal centralizada y aprovechar al máximo los recursos económicos disponibles en beneficio del esfuerzo bélico. No en vano, la defección de una gran parte de sus fuerzas coactivas (armadas y de seguridad), unida a la intensa movilización popular que hizo frente a la insurrección, asestó un duro golpe a la estructura del Estado, debilitó a las fuerzas burguesas soportes del programa reformista y desencadenó un proceso revolucionario en retaguardia de amplitud e intensidad variables^[20]. Una de las manifestaciones de dicho proceso fue la ya señalada aparición de las milicias obreras como únicas fuerzas de combate reales y autónomas. Pero no

menos significativas fueron otras tres consecuencias igualmente dañinas para la autoridad estatal y la productividad económica.

En primer lugar, el surgimiento de comités, consejos y juntas autónomas, formados por sindicatos y partidos de izquierda, que asumieron las funciones de dirección política y administrativa en su respectivo ámbito territorial, a veces con escasa, dudosa o nula relación con el gobierno o sus representantes territoriales: Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña (hegemonizado por la CNT), Consejo de Aragón (dominado por las milicias confederales), Comité de Salud Pública de Málaga, Consejo de Asturias y León, Comité Ejecutivo Popular de Levante (en Valencia), etc. Fue una atomización del poder público estatal tan intensa y generalizada que el atribulado presidente Azaña no dudaría en calificar como un «desastre» la situación generada: «en unas partes, revolución; en otras, nacionalismo; disputas menos que provinciales, de cabeza de partido. Viento en las cabezas, inexperiencia»^[21].

En segundo orden, una oleada general de expropiaciones, incautaciones y colectivizaciones en la economía que tuvo su mayor desarrollo en zonas de predominio anarquista (Cataluña) y fue más reducido en el País Vasco (donde el Partido Nacionalista Vasco, demócratacristiano, se alineó con la República por su promesa de concesión de la autonomía, cumplida en octubre de 1936). Las medidas económicas más revolucionarias tomaron la forma de colectivizaciones agrarias impuestas por las milicias sindicales (confederales en Aragón y Cataluña, socialistas caballeristas en Castilla, La Mancha o Murcia) que fueron legalizadas a la fuerza por las autoridades: hasta agosto de 1938 se había expropiado 5,45 millones de hectáreas (casi el 40 % de la superficie útil) y el 54 % de esa tierra expropiada había sido colectivizada. Pero no menos transcendencia tendrían las colectivizaciones urbanas (en Barcelona, desde los tranvías hasta los cines y hoteles) y la generalizada imposición del «control obrero» (en realidad, tutela sindical cenetista o ugetista) en las operaciones de las industrias y servicios de casi toda la retaguardia republicana^[22].

Finalmente, para completar el cuadro de signos que delataba la quiebra básica de las funciones del Estado, surgió otro fenómeno inequívocamente revolucionario: la represión incontrolada del enemigo de clase (militares, sacerdotes, civiles burgueses, intelectuales derechistas: el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, asesinado en Paracuellos del Jarama, y el ensayista Ramiro de Maeztu, asesinado en Madrid), auténtico parámetro de la incapacidad gubernativa para imponerse a los acontecimientos durante los primeros

meses. El saldo final de esta represión primero espontánea (mediante «paseos» a cargo de patrullas milicianas) y luego encauzada (a través de Tribunales Populares y ejecución de sentencias firmes) llegaría a totalizar cerca de 60 000 víctimas (de ellas, 6832 religiosos y cerca de 2670 militares). El hijo de un panadero de la localidad cordobesa de Baena ha dejado un retrato dantesco del *modus operandi* de las milicias durante los primeros días de la guerra, antes de que el pueblo fuera ocupado por fuerzas militares:

A empujones unos hombres conducían a un cura calle abajo. El cura llevaba un ronzal al cuello y los hombres le insultaban mientras le obligaban a caminar. Al cabo de unos minutos, oyó un disparo. Uno de los hombres había disparado su escopeta de caza en la cara del sacerdote, dejándolo ciego. Se lo llevaron a San Francisco (un convento), donde volvieron a pegarle un tiro y luego lo quemaron. (...) En los primeros dos días de lucha los jornaleros mataron sólo a una docena de los ricos de la ciudad^[23].

Desde luego que no fue mera «práctica de justicia expeditiva» y popular (en palabras del cenetista Juan García Oliver), sino obra apadrinada por organizaciones sindicales y políticas revolucionarias^[24]. Haciéndose eco de lo que era una vesania criminal más extendida, *Solidaridad Obrera* pedía en primera plana el 15 de agosto de 1936: «Los obispos y cardenales han de ser fusilados». Pocos días después, en carta privada a su mujer, el periodista Luis Araquistain, «cerebro gris» de Largo Caballero, vaticinaba: «Todavía pasará algún tiempo en barrer de todo el país a los sediciosos. La limpia va a ser tremenda. Lo está siendo ya. No va a quedar un fascista ni para un remedio»^[25].

Contra esa voluntad de quienes tenían las armas y carecían de escrúpulos políticos o morales, de muy poco sirvieron en los primeros meses los reiterados llamamientos oficiales o personales a la contención y al respeto a civiles inocentes: los procedentes del propio Azaña, del anarcosindicalista Joan Peiró, del nacionalista vasco Manuel de Irujo, etc. Quizá uno de los más tempranos y emotivos de esos llamamientos fuera hecho por Indalecio Prieto desde las páginas de *El Socialista* ya en agosto de 1936: «No imitéis esa conducta, os lo ruego, os lo suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad vuestra; (...) ante los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa»^[26].

Francisco Partaloa, fiscal del Tribunal Supremo de Madrid, tuvo ocasión personal de apreciar la represión en las dos zonas y de comprobar la actitud de las autoridades respectivas ante el fenómeno. Se vio obligado a abandonar la capital por su enfrentamiento con milicianos comunistas que dirigían una checka partidista y se exilió en París con la aprobación del ministro de Justicia. De allí se pasó a la zona franquista y fue encarcelado en Sevilla durante algún tiempo hasta ser liberado por intercesión del general Queipo de Llano, su

amigo de tiempo atrás. Afincado en Córdoba, observó la justicia nacionalista en acción y la «máscara de legalidad» de los consejos de guerra militares:

Que quede bien claro: tuve la oportunidad de ser testigo de la represión en ambas zonas. En la nacionalista, era planificada, metódica, fría. Como no se fiaban de la gente, las autoridades imponían su voluntad por medio del terror. Para ello, cometieron atrocidades. En la zona del Frente Popular también se cometieron atrocidades. En eso ambas zonas se parecían, pero la diferencia reside en que en la zona republicana los crímenes los perpetró una gente apasionada, no las autoridades. Éstas siempre trataron de impedirlos. La ayuda que me prestaron para que escapara no es más que un caso entre muchos. No fue así en la zona nacionalista^[27].

La dinámica política en la República estuvo determinada por la respuesta de cada partido y sindicato ante ese multiforme proceso revolucionario, cuya existencia fue la raíz de la falta de unidad de acción que lastró su defensa y su fortaleza^[28]. El anarcosindicalismo y el ugetismo caballerista defendían los cambios como garantía del apoyo obrero y se negaban a disolver las milicias en un nuevo Ejército regular y a otras medidas de recomposición del Estado: la disolución de juntas y comités en favor de organismos gubernamentales delegados, la restitución de competencias de orden público a las fuerzas de seguridad, la centralización de funciones directivas económicas, la imposición de una disciplina productiva y prohibición de huelgas en las fábricas de interés militar, etc.

Sin embargo, la debilidad de esa revolución estribaba en dos obstáculos igualmente insalvables: el contexto internacional hostil de un proceso que no sólo era una fiesta popular antimilitarista sino que afrontaba una guerra total contra un enemigo bien armado y poderoso; y el hecho de que su continuidad destruía la expectativa de una alianza eficaz entre las clases obreras y la fracción reformista de las pequeñas burguesías enfrentadas a la reacción militar en curso. Por eso fue fraguándose un pacto entre el republicanismo burgués, el socialismo prietista y el comunismo ortodoxo para reconstruir el poder estatal, centralizar la dirección de la actividad económica y deshacer la revolución.

El muy adverso curso militar de la contienda en el verano y otoño de 1936 propiciaría un cambio de actitud de las fuerzas sindicales y su disposición a hacer los «sacrificios» exigidos por la guerra. Por ejemplo: aumentar las horas de trabajo, reducir los salarios, proscribir las huelgas y acortar los días de descanso en interés de la continuidad de la producción bélica. Esta forzada conversión del sindicalismo revolucionario en gestor de una política económica de guerra se apreció, con todas sus contradicciones, hasta en los nuevos lemas de intensificación del esfuerzo laboral: «El hecho de no trabajar o gandulear en la etapa del capitalismo estaba justificado, pero ahora que la

empresa es nuestra, tenemos que poner el cuello: el que no trabaja es un fascista». No en vano, la «fiesta popular revolucionaria» de las primeras semanas pronto se topó con una verdadera guerra y ésta «impuso una lógica militar y frente a ella el sindicalismo de protesta quedó inservible»^[29]. Así lo creía el funcionario catalán filoanarquista Albert Pérez Baró, que en febrero de 1937 juzgaba con amargura el resultado de un semestre de revolución y colectivización económica en Cataluña:

La inmensa mayoría de los trabajadores ha pecado con exceso: se ha apoderado de ellos la indisciplina; en el trabajo, la producción ha bajado de manera alarmante y ha llegado en muchos casos a la caída vertical; el alejamiento del campo de batalla ha hecho que para ellos la guerra no haya sido vivida con la intensidad necesaria, rota la disciplina anterior, nacida de la coacción patronal, y sin una conciencia de clase que les autoimpusiese otra disciplina en bien de la colectividad, han caído en el infantilismo de creer que todo está ganado ya... cuando en realidad la verdadera revolución social empieza precisamente en el período de construcción de la economía^[30].

Efectivamente, como resultado de la revolución y la guerra, la producción industrial en territorio republicano casi se redujo a la mitad: de octubre de 1936 a marzo de 1938 osciló entre el 55 % y el 60 % del índice obtenido en enero de 1936. Paralelamente, la producción agraria en la misma zona se contrajo en niveles similares y muy cercanos a la mitad de la de tiempos prebélicos. Mientras tanto, los precios se disparaban en una inflación galopante: aumentaron un 49,8 % en el segundo semestre de 1936 y un 57 % en los cuatro primeros meses de 1937. Y el resultado era un creciente aumento del coste de la vida (en Barcelona pasó de un índice 100 en junio de 1936 a 372 en febrero de 1938) y las consecuentes dificultades para asegurar el abastecimiento de productos alimenticios y sostener el funcionamiento de servicios urbanos e industriales^[31].

Así pues, todos los datos indican que la evolución económica en zona republicana tuvo unas características casi catastróficas en comparación con el devenir económico en el territorio franquista. José Ángel Sánchez Asiaín ha estimado comparativamente la evolución global de la producción industrial (minera, siderúrgica y derivados de minería) entre ambas zonas (en pesetas constantes) tomando como base las cifras de las 23 provincias que estuvieron bajo control insurgente desde el principio de la guerra y las 15 provincias que se mantuvieron en el lado republicano hasta finales de 1938. Sus resultados no ofrecen dudas en su alcance general, aun cuando pudieran ser revisadas en sus detalles particulares: en las provincias republicanas, en 1936 la producción bajó al 37,6 del nivel de preguerra, al 29,2 en 1937 y al 28,1 en 1938; en las provincias insurgentes el valor de la producción descendió en

1936 hasta el 70,4 y luego se recuperó hasta el 84,7 en 1937 y al 95,7 en 1938^[32].

A principios de septiembre la izquierda socialista asumió la gravedad de la situación (con su correlativa expectativa de derrota fulminante e inminente) y Largo Caballero formó un gobierno de coalición que muy poco después incorporaba a todas las fuerzas republicanas (incluyendo dos ministros comunistas, cuatro anarquistas, un nacionalista catalán y otro vasco, aparte de los socialistas y republicanos de izquierda). A pesar de sus tensiones internas, y con el inexcusable auxilio militar soviético, la coalición presidida por Largo Caballero fue capaz de resistir el asalto franquista sobre Madrid y puso en marcha penosamente la reconstrucción de la autoridad estatal en la retaguardia.

Como parte de esa política de resistencia antifascista, el gobierno republicano también optó por movilizar resueltamente las reservas de oro del Banco de España para convertirlas en divisas con las que sufragar las compras de material bélico y los suministros alimenticios y petrolíferos demandados por la guerra y la actividad económica. Con ese fin, en octubre de 1936, tres cuartas partes de las reservas de oro (510 toneladas) fueron remitidas a la Unión Soviética y con cargo a su venta se pagaron al contado y sin rebaja alguna los suministros procedentes de ese país y del resto del mundo a través de la discreta red bancaria soviética: «El tesoro español entregado a la URSS fue efectivamente gastado en su totalidad por el Gobierno de la República durante la guerra» (Juan Sardá). Para entonces, otra cuarta parte del oro (174 toneladas) había sido ya vendida al Banco de Francia con idéntico propósito y mayores dificultades políticas y diplomáticas^[33]. Resultado de esa movilización de las reservas de oro y de otros expedientes financieros internos (comercio exterior, ventas de plata, etc.), las autoridades republicanas fueron capaces de generar un volumen de 744 millones de dólares. Esa cifra total habría de ser el coste financiero de la guerra civil en el bando republicano (muy cercana al gasto del bando enemigo con el mismo fin).

El punto de ruptura en el delicado equilibrio político imperante en el bando gubernamental se produjo con la crisis barcelonesa de mayo de 1937, motivada por una insurrección anarquista y pumista para salvar los restos del poder revolucionario en «una ciudad alejada del frente, símbolo de la revolución anarcosindicalista, que muchos creían proletaria» (Julián Casanova). Aplastada por las fuerzas de seguridad al precio de decenas de muertos, la crisis de mayo se saldó con la derrota de los partidarios de la Revolución Social en favor de quienes defendían una República democrática

e interclasista: «Se ha constituido un gobierno contrarrevolucionario», declaraba *Solidaridad Obrera* en su editorial del 18 de mayo^[34].

Efectivamente, el nuevo gobierno constituido entonces estaría presidido por un socialista moderado, el doctor Juan Negrín, carecería de representantes sindicales (tanto cenetistas como ugetistas) y se vería progresivamente hegemonizado por el Partido Comunista (muy fortalecido por su disciplina, su política de oposición a «experimentos revolucionarios» y su asociación a la única potencia que prestaba ayuda militar efectiva). Esa pretensión hegemonista del PCE habría de convertirse en la principal semilla de la discordia en el seno de la nueva coalición gubernativa presidida por Negrín. No en vano, los restantes grupos políticos mostrarían una decidida reserva y oposición a la voluntad comunista de lograr cada vez mayor influencia en sectores cruciales del aparato militar y policial (especialmente, el comisariado del Ejército y el Servicio de Inteligencia Militar: SIM). Por su parte, la dirección comunista adoptó de inmediato un agresivo proselitismo entre las bases militantes de las otras fuerzas obreras (del PSOE-UGT y de la CNT) y una violenta actitud hacia sus enemigos políticos (sobre todo el POUM, cuyo líder, Andrés Nin, sería secuestrado y asesinado por la policía secreta soviética como parte de la campaña antitrotskista impulsada por Stalin desde Moscú). Esa conducta conseguiría acrecentar intensamente las reservas de todos los partidos y sindicatos hacia el PCE, sembrando dudas muy firmes sobre la sinceridad de las proclamas comunistas de fidelidad democrática y respeto a la legalidad republicana^[35].

Constreñido por esas tensiones intragubernativas, la finalidad casi exclusiva de Negrín consistiría en configurar una sólida alternativa política reformista y de tintes socialdemócratas, capaz de concitar la adhesión moral unánime de la población de retaguardia, de atraer el vital apoyo de las potencias democráticas occidentales y de centralizar el aprovechamiento de los resortes productivos en favor del esfuerzo bélico. Sobre este último aspecto crucial, el nuevo jefe del gobierno no dejó de anunciar a la Diputación Permanente de las Cortes las graves dificultades afrontadas y las urgentes medidas requeridas por la magnitud del problema:

La zona del país que nosotros ocupamos no produce lo suficiente para su propio abastecimiento, y tenemos, por lo tanto, que importar una cantidad considerable de alimentos. No sólo trigo, sino también carne, huevos, leguminosas y un sinnúmero de productos más nos son absolutamente indispensables. No podemos contar con el dinero sin tasa ni medida; no podemos contar con él sin tasa ni medida, porque, si siempre hemos tenido un déficit en nuestra balanza comercial, y en los últimos años una gran escasez de divisas, cuyos efectos podían subsanarse, en parte, por créditos que obteníamos en el extranjero, actualmente con esos créditos no se puede contar en absoluto; tenemos que pagarlo todo al contado. Tenemos, además, que adquirir abundantes materias primas,

indispensables para la industria de guerra. Y tenemos que adquirir material de guerra, aunque desgraciadamente no en la proporción que quisiéramos. Por lo tanto, hay que proceder con un espíritu de gran economía y dentro del mayor rigor administrativo^[36].

La estrategia de Negrín de resistencia a ultranza (de ahí su lema: «Resistir es vencer») se basaba en dos expectativas de horizonte alternativas. En el mejor de los casos, había que resistir el avance enemigo hasta que estallase en Europa el conflicto (juzgado inevitable) entre las potencias del Eje ítalo-germano y la entente franco-británica, obligando entonces a ésta a asumir como propia la causa republicana y prestarle su apoyo vital hasta entonces negado. En el peor, si tal conflicto no estallaba a tiempo, había que resistir para conservar una posición de fuerza disuasoria que pudiera arrancar al enemigo las mejores condiciones posibles en la negociación de la capitulación y rendición (básicamente, garantías contra represalias masivas indiscriminadas).

En ambos casos, la estrategia negrinista implicaba dos exigencias correlativas: preservar el único y vital apoyo disponible en el exterior (el de la Unión Soviética); y mantener la colaboración interna del Partido Comunista por su fuerza y disciplina (que contrastaba con la persistente división socialista, el desconcierto anarquista y el letargo de los partidos republicanos). Y como parte de esa política en pro del esfuerzo bélico se fijaban unas metas económicas y administrativas demandadas por el Estado Mayor Central y que iban a levantar amplias resistencias y nunca serían totalmente cubiertas: militarización de la industria bélica; imposición de la jornada intensiva de trabajo en dichas industrias; reducción de salarios y acortamiento de descansos y vacaciones, etc.

Es significativo que fuera el gobierno de Negrín el primero en tratar de aplicar una política global para la organización de la industria vinculada a la guerra. A pesar de medidas particulares tomadas con anterioridad por el gabinete de Largo Caballero o por la Generalitat, no fue hasta el 28 de junio de 1937 cuando se crearon tres delegaciones de la Subsecretaría de Armamento del Ministerio de Defensa: Centro, Norte y Cataluña. Tres meses después, en atención a las protestas catalanistas (las vascas ya no tenían sentido una vez perdida Vizcaya), la delegación de Cataluña fue sustituida por una Comisión de Industrias de Guerra con participación de cinco representantes gubernamentales y tres de la Generalitat. Disuelta en enero de 1938, el gobierno no procedió a tomar el control directo y central de toda la industria bélica en Cataluña hasta agosto del mismo año, en medio de una crisis profunda en sus relaciones con la Generalitat^[37]. Habían pasado ya más

de dos años desde el principio del conflicto y sólo por entonces se había adoptado una medida que resultaba inexcusable en tiempos de Guerra Total.

No obstante los éxitos logrados por Negrín (sobre todo en marzo de 1938, cuando fue capaz de restablecer la situación militar y política tras la debacle de la división en dos del territorio republicano), el persistente aislamiento internacional, la sucesión de derrotas militares, la larvada oposición entre el PCE y los restantes grupos, junto con el agotamiento popular por las privaciones materiales y la imparable cuota de sangre derramada, socavarían esa estrategia de resistencia y causarían el desplome interno del bando republicano en marzo de 1939. El informe ya citado del embajador alemán ante Franco para sus superiores, de octubre de 1937, no dejaba de contrastar la sólida situación económica nacionalista con las noticias procedentes de la zona enemiga:

En la España roja, por el contrario, hay severas restricciones de alimentos, escasez de carbón, etc., como resultado de la confusión interna, la pobre organización y la falta de divisas extranjeras^[38].

Podría ser un juicio algo exagerado en las causas, pero no era totalmente erróneo en el diagnóstico. En noviembre de 1938, un certero informe confidencial del representante diplomático británico en zona republicana subrayaba ese rápido proceso de deterioro interno inducido por las derrotas militares y los estrangulamientos de suministros (bélicos y alimenticios) y alertaba de sus potenciales efectos:

El gobierno español siempre ha estado escaso de material (bélico) pero no así de efectivos humanos. (...) La falta de municiones es grave pero todavía no letal. Siempre es peligroso profetizar y aún más en este país y en tiempo de guerra. Pero creo que el Ejército republicano será capaz de resistir casi indefinidamente siempre que la escasez de alimentos no provoque una quiebra de su moral. Y ésta es la duda básica. La situación alimenticia es realmente mala y parece muy probable que se agrave mucho más. (...) La verdad es que la amplia mayoría de la población en la España republicana está sufriendo una severa subalimentación incluso en los distritos rurales. El racionamiento de los obreros de industrias esenciales y de las tropas de retaguardia ya ha sido recientemente intensificado drásticamente. Las tropas del frente todavía están razonablemente bien alimentadas pero con crecientes dificultades que preocupan mucho al gobierno^[39].

El acto final de la prolongada crisis interna republicana tuvo lugar el 5 de marzo de 1939, consumada la pérdida de Cataluña y confirmado el reconocimiento jurídico de Franco por parte de Gran Bretaña y de Francia. Aquel día, el coronel Segismundo Casado, jefe militar de Madrid, con el apoyo de representantes políticos e institucionales anticomunistas (Julián Besteiro por el PSOE, Cipriano Mera por la CNT, el general Miaja por la oficialidad), formó un Consejo Nacional de Defensa que abjuraba del gobierno de Negrín y anunciaba su voluntad de negociar inmediatamente

«una paz sin crímenes». Durante los tres días siguientes, la zona republicana vivió una pequeña guerra civil en la que los partidarios de Casado se impusieron finalmente sobre los seguidores de Negrín^[40].

Con la victoria casadista quedaba anulada la política de resistencia en favor de un intento ilusorio de negociar con el enemigo una paz sin represalias. La negativa de Franco a aceptar otra cosa que la capitulación sin condiciones significó el fracaso político de Casado y conllevó el colapso virtual de las instituciones civiles y militares republicanas. La ofensiva general franquista iniciada el 26 de marzo de 1939 no encontró oposición real. Madrid fue ocupada pacíficamente dos días más tarde y el 1 de abril dictaba Franco en Burgos su último parte de guerra victorioso.

EL ÁMBITO DE LA MORAL DE COMBATE EN RETAGUARDIA

La articulación de unos «Fines de Guerra» comunes y compartidos por todas las fuerzas políticas y sociales y por la generalidad de la población de retaguardia fue igualmente una tarea muy distintamente resuelta en el bando franquista y en el bando republicano.

Nuevamente el carácter militar de la sublevación y la inmediata operatividad del estado de guerra implantado en su zona supusieron ventajas de partida incontestables. De hecho, como la sublevación tenía un carácter reaccionario y reactivo frente al reformismo republicano y al espectro de revolución social, su perfil político era extremadamente difuso por acuerdo explícito de los generales conjurados (ni monárquico, ni fascista, ni tradicionalista, ni republicano). Sin embargo, su universo ideológico inicial se circunscribía a dos ideas sumarias y comunes a todas las fuerzas de derechas sin excepción: el nacionalismo español historicista y unitarista, ferozmente opuesto a la descentralización autonomista o secesionista; y un anticomunismo genérico que repudiaba tanto el comunismo *stricto sensu* como el socialismo, el anarquismo y el liberalismo democrático (por su condición de «cómplices y secuaces»).

Con su habitual simplicidad, el general Mola había sintetizado ese credo con una declaración lacónica: «Somos nacionalistas; nacionalista es lo contrario de marxista»^[1]. Pocos días después, en alocución radiada en Sevilla, el poeta José María Pemán reiteraría esa misma combinación aderezándola con una impronta católica integrista de creciente influencia entre los sublevados:

Luchamos íntegramente por España y por la civilización. No luchamos solos; veinte siglos de civilización occidental y cristiana están movilizados detrás de nosotros. Peleamos por Dios, por nuestra tierra y por nuestros muertos. (...) Porque ésta es una guerra santa y cruzada de civilización^[2].

La vocación antirrevolucionaria genuina se fusionó así con una voluntad autoritaria de ruptura con el liberalismo democrático y todo quedó supeditado a una omnipresente concepción nacional-militarista de la vida política y el orden público que hacía del Ejército el verdadero «guardián de la Patria» como «espina dorsal de España» y «columna vertebral de la nación». Las proclamas iniciales de los sublevados revelaron ese sencillo substrato ideológico de modo palpable y recurrente. Así, por ejemplo, cabe apreciar su presencia en el preámbulo del bando de declaración del estado de guerra emitido por el teniente coronel Juan Yagüe tras la cruenta ocupación de la ciudad de Badajoz:

ESPAÑOLES:

Las circunstancias extraordinarias y críticas por que atraviesa España entera; la anarquía que se ha apoderado de las ciudades y los campos, con riesgos evidentes de la patria, amenazada por el enemigo exterior, hacen imprescindible el que no se pierda un solo momento y que el Ejército, si ha de ser salvaguardia de la nación, tome a su cargo la dirección del país para entregarlo más tarde, cuando la tranquilidad y el orden estén restablecidos, a los elementos civiles preparados para ello (*Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz*, 15 de agosto de 1936).

Y de un modo aún más explícito se halla en el decreto del 25 de septiembre de la Junta de Defensa Nacional, que prohibía «todas las actuaciones políticas y las sindicales obreras y patronales de carácter político» por imperiosas necesidades bélicas y supremo interés nacional. Una transcendental medida que nunca sería revocada durante los casi cuarenta años de duración del régimen de Franco y que se justificaba por el «carácter netamente nacional del movimiento salvador iniciado por el Ejército y secundado entusiastamente por el pueblo» (*Boletín Oficial del Estado* del 28 de septiembre).

Con el paso del tiempo, y por necesidades de movilización popular, esos «Fines de Guerra» de veta exclusivamente nacional-militarista serían completados por el influyente discurso religioso del nacional-catolicismo perfilado por la Iglesia (la guerra como «Cruzada por Dios y por España») y por la retórica social del nacional-populismo aportada por la Falange («aspiramos a la Revolución Nacional Sindicalista»). Sobre esta tríada se construiría el discurso ideológico de combate franquista para consumo interno y también para difusión internacional^[3].

Quizá la más acabada expresión y síntesis oficial de la ideología que inspiraba al nuevo régimen se encuentre en el preámbulo del *Fuero del Trabajo*, la primera de las llamadas «Leyes Fundamentales» del régimen franquista, firmada por el Caudillo el 9 de marzo de 1938, dos meses después de la formación de su primer gobierno regular:

Renovando la Tradición Católica, de justicia social y alto sentido humano que informó nuestra legislación del Imperio, el Estado, Nacional en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria, y Sindicalista en cuanto representa una reacción contra el capitalismo liberal y el materialismo marxista, emprende la tarea de canalizar —con aire militar, constructivo y gravemente religioso— la Revolución que España tiene pendiente y que ha de devolver a los españoles, de una vez para siempre, la Patria, el Pan y la Justicia (*Boletín Oficial del Estado*, 10 de marzo de 1938).

En todo caso, el componente militar en la síntesis ideológica final característica del franquismo siempre tuvo precedencia y prioridad. Aunque sólo fuera porque se estaba librando una verdadera guerra y el Ejército era no sólo el instrumento de combate sino también el modelo de reorganización de la vida social y política de su retaguardia («La vida es milicia y ha de vivirse con espíritu acendrado de servicio y de sacrificio», rezaba el 26.º punto programático de la Falange, virtualmente análogo a una máxima famosa de san Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús). En 1938, un joven médico militar, que habría de tener una gran influencia posterior en la psiquiatría española, defendía el «militarismo social» como receta para subsanar «los males de la Patria» y derrotar a sus enemigos «liberales y demócratas y marxistas»: «Militarismo quiere decir orden, disciplina, sacrificio personal, puntualidad en el servicio. Encierra la redoma militar esencias puras de virtudes sociales, además de fortaleza corporal y espiritual». Por eso mismo se proponía «la militarización social» de «la escuela, de la universidad, de la oficina, del taller, del teatro, del salón, del café, de todos los ámbitos sociales», a fin de que todos los españoles de cualquier oficio y condición fueran «soldados perpetuos del Imperio»^[4].

La precedencia y prioridad del militarismo en el universo mental y moral del bando insurgente meramente reduplicaba la suprema importancia del Ejército en el seno del «Nuevo Estado» acaudillado por Franco. A este respecto, el presidente Azaña no había dejado de anotar en su diario en octubre de 1937 las escasas veleidades modernizantes que, a su juicio, podían abrigar las derechas españolas en sus ensayos de movilización política:

Hay o puede haber en España todos los fascistas que se quiera. Pero un régimen fascista no lo habrá. Si triunfara un movimiento de fuerza contra la República, recaeríamos en una dictadura militar y eclesiástica de tipo tradicional. Por muchas consignas que se traduzcan y muchos motes que se pongan. Sables, casullas, desfiles militares y homenajes a la Virgen del Pilar. Por ese lado, el país no da otra cosa. Ya lo están viendo^[5].

No deja de ser sorprendente (y quizá pruebe su acierto) que, apenas un mes después de iniciada la propia guerra civil, ese juicio procedente del bando enemigo fuera igualmente compartido, desde su cárcel alicantina, por José Antonio Primo de Rivera. El fundador y máximo líder del hasta entonces

minúsculo partido fascista español se preguntaba: «¿Qué va a ocurrir si ganan los sublevados?». Y respondía con pesar: «Un grupo de generales de honrada intención; pero de desoladora mediocridad política. Puros tópicos elementales (orden, pacificación de los espíritus...)»^[6]. Tampoco es baladí que, con posterioridad, destacados dirigentes franquistas abrigaran esa misma opinión u otra muy similar. Por ejemplo, el general Francisco Franco Salgado-Araujo, primo y secretario militar de Franco, anotaría en su revelador diario el 28 de octubre de 1955 cuál era, a su juicio, la esencia del modelo político y doctrinal del franquismo: «Se habla demasiado del Movimiento, de sindicatos, etc., pero la realidad es que todo el tinglado que está armado sólo se sostiene por Franco y el Ejército»^[7].

Si el bando franquista pudo impulsar su esfuerzo bélico entre sus masas civiles bajo ese triple aliento militarista, religioso y populista, la República no tuvo el mismo éxito a la hora de configurar unos Fines de Guerra tan nítidos y susceptibles de suscitar el entusiasmo moral unánime de su población civil de retaguardia. Las profundas discrepancias en este aspecto crucial quedan bien reflejadas por una amarga queja anotada por Azaña en su diario todavía en agosto de 1937:

De nada sirve que el presidente de la República hable de democracia y liberalismo, si al propio tiempo las películas que nuestra propaganda hace exhibir en los cines, acaban siempre con los retratos de Lenin y de Stalin^[8].

En efecto, como mínimo, el bando republicano fue escenario de dos discursos genéricos distintos sobre Fines de Guerra que no podían ser fácilmente armonizados. Y eso descontando las visiones de la guerra ofrecidas respectivamente por el catalanismo y por el nacionalismo vasco, más tendentes a ver «una invasión española» en las ofensivas franquistas. A este respecto, y por lo que hace al Partido Nacionalista Vasco, el presidente Azaña no abrigaba dudas en vísperas de la caída de Bilbao en manos franquistas (19 de junio de 1937): «Los nacionalistas no se baten por la causa de la República ni por la causa de España, a la que aborrecen, sino por su autonomía y semiindependencia»^[9].

Los pesimistas augurios presidenciales sobre la supuesta «guerra diferente» de los nacionalistas se hicieron parcialmente realidad a finales de agosto de 1937, cuando llegaron las noticias del «Pacto de Santoña» concluido entre dirigentes del PNV y jefes militares italianos para proceder a la rendición unilateral de las fuerzas nacionalistas vascas que se habían concentrado en la villa santanderina una vez ocupada toda Vizcaya. A pesar de que el pacto acabó en fiasco y fue considerado como una «traición», su

conclusión era coherente con la visión de la guerra abrigada por muchos líderes peneuvistas (aunque no por el *lehendakari*, José Antonio Aguirre): no tenía sentido luchar fuera de su nación porque «no se batían por la República sino por la libertad de Euskadi»^[10]. Años más tarde, Concha Arrazola, hija de un dirigente peneuvista y líder de la organización de mujeres del partido, seguía identificando así al «enemigo» contra el que habían luchado en la guerra:

Los españoles, desde luego. «Rojos» o «blancos», ellos eran hermanos. Nosotros éramos «primos» y al decir «primos» nos referimos a la persona que paga las consecuencias. Pero era tanta la confianza que nos inspiraban nuestros líderes, éstos tan caballeros, que nuestra aprensión al encontrarnos aliados con estos españoles de izquierda no duró mucho tiempo^[11].

El primero de los discursos genéricos sobre la guerra presentes en la retaguardia gubernamental respondía a la tradición política reformista de las pequeñas y medias burguesías y subrayaba la continuidad institucional y jurídica del régimen republicano y la vigencia del marco sociopolítico establecido por la Constitución de 1931. En esencia, constituía un llamamiento a la fibra moral de la población para luchar por la República democrática y parlamentaria, socialmente reformista y siempre comprometida con el respeto a la propiedad privada y a los principios de la economía capitalista. Además de contar con el apoyo de los grupos republicanos, ésta sería la propuesta defendida por el socialismo moderado (liderado primero por Prieto y luego por Negrín) y, por razones de política internacional y obediencia soviética, por el Partido Comunista de España.

Una declaración remitida al gobierno británico el 23 de noviembre de 1936 por Largo Caballero en su calidad de jefe del gobierno español, resulta bien explícita de esta línea discursiva liberal-democrática:

Contrariamente a ciertas alegaciones del exterior, el Gobierno republicano español no aspira al establecimiento de un régimen soviético. Su fin esencial es el mantenimiento del régimen de la República parlamentaria democrática tal como ha sido creada por la Constitución que el pueblo español se ha dado libremente a sí mismo. Los rebeldes, por el contrario, son los portavoces del fascismo y del antiparlamentarismo y habiendo desencadenado la guerra civil bajo la bandera fascista han cometido atrocidades contra intelectuales, contra ciudadanos muy moderados, contra todos los que han permanecido fieles al Gobierno republicano, sin hablar ya de los millares de obreros y campesinos a quienes han asesinado. El programa del Gobierno es el programa de la unificación de todas las fuerzas democráticas dispuestas a defender las libertades parlamentarias contra la dictadura fascista^[12].

En abril de 1938, después de que la ofensiva franquista en Levante hubiera conseguido la partición en dos del territorio republicano, el «Gobierno de Unión Nacional» presidido por el doctor Negrín juzgó conveniente la formulación y publicación de «sus Fines de Guerra» para conocimiento de

todo el mundo y de la sociedad española. Concebidos como una declaración programática que pudiera servir en su caso como base para una posible mediación internacional, los «Trece Puntos» del doctor Negrín hacían hincapié en la plena integridad y soberanía de España («Liberación de nuestro territorio de las fuerzas militares extranjeras») y en una serie de características sociopolíticas inexcusables (respeto a las libertades regionales y a la propiedad privada, reconocimiento de derechos ciudadanos, amplia amnistía política, reforma agraria, plebiscito sobre la forma final de Estado...). La orientación genérica liberal-democrática quedaba refrendada por el punto 3.º, que prescribía el establecimiento de un «Estado vigoroso» asentado sobre «principios de pura democracia» y «el voto ciudadano emitido por sufragio universal»^[13].

La segunda de las motivaciones ideológicas para el combate presentes en la República se fundamentaba en las corrientes revolucionarias de preguerra que habían conseguido imponerse durante los primeros meses del conflicto y que persistirían en mayor o menor grado hasta su terminación. El punto común dominante era la voluntad de luchar por una drástica Revolución Social «superadora» de la «República democrática-burguesa» y cuyos perfiles exactos variaban según la lealtad política o doctrinal de los militantes y postulantes (anarquistas de la CNT, socialistas radicales de Largo Caballero, comunistas filotrotskyistas del Partido Obrero de Unificación Marxista).

El órgano de expresión escrita de la CNT, *Solidaridad Obrera*, saludaba las primeras noticias sobre la insurrección militar en Marruecos el día 17 de julio con los siguientes titulares: «Sólo haciendo la revolución social se aplasta al fascismo». A finales de agosto de 1936, el mismo órgano se hacía sintomático eco de la honda inquietud de «la pequeña burguesía» por los cambios revolucionarios en curso y sólo acertaba a ofrecerles la esperanza de un futuro mejor sin la «preocupación» y «pesadilla» de atender a sus propiedades privadas:

Ha llegado a nuestros oídos que los sectores de la economía minifundista están profundamente alarmados. Sospechábamos que la zozobra de los primeros días se había esfumado por completo. Pero se mantiene la desazón del tendero, del comerciante, del pequeño industrial, del artesano y del pequeño campesino. No sienten confianza en las directrices del proletariado. (...)

No se preocupe la pequeña burguesía. Acérquese al proletariado. Pueden estar convencidos y percatados que cuando se llegue a abolir la propiedad privada y la facultad de comerciar, se implantarán nuevas normas que de ninguna manera serán lesivas para los ciudadanos que se sientan afectados por las medidas sociales^[14].

Con mucha menor delicadeza hacia esos «residuos pequeño-burgueses» del viejo orden de clases que el mostrado por *Solidaridad Obrera*, una de las más

expresivas articulaciones de esta línea argumental en favor de la revolución proletaria se encuentra en las declaraciones del POUM (cuya implantación fundamental se centraba en la Cataluña urbana). El 6 de diciembre de 1936, en un discurso pronunciado en Barcelona, su líder, Andrés Nin, no dudaba en subrayar sus diferencias con la posición oficial del gobierno largo-caballerista y denunciaba acremente la tentativa de restaurar «la República de Azaña»:

La lucha continúa porque la lucha no está entablada entre la democracia burguesa y el fascismo, sino entre el fascismo y el socialismo, entre la clase obrera y la burguesía. (...) Contra el fascismo sólo hay un medio eficaz de lucha: la revolución proletaria. Si dejándonos deslumbrar por las bellas frases demagógicas de los señores republicanos de izquierda creyésemos que corresponde hoy a nuestros intereses defender la República democrática, con esto no haríamos otra cosa que preparar la victoria del fascismo para un porvenir más o menos lejano^[15].

La pugna oficial entre ambas concepciones del esfuerzo bélico republicano se mantuvo abierta hasta la crisis barcelonesa de mayo de 1937 (de resultas de la cual se produjo la caída de Largo Caballero y el ascenso de Negrín, al tiempo que los servicios secretos militares soviéticos secuestraban y asesinaban a Nin por su propia cuenta y riesgo). Y todavía con posterioridad no quedaría completamente resuelta en términos de militancia sindical y eco popular. Baste recordar que *Solidaridad Obrera* saludó la formación del primer gobierno del doctor Negrín tachándolo de «gobierno de la contrarrevolución».

De hecho, oficialmente, Negrín no consiguió vencer sobre sus oponentes también en este campo hasta el mes de abril de 1938, cuando se formó su segundo gabinete, llamado «Gobierno de Unión Nacional», con participación de ministros de todos los partidos y de ambos sindicatos (Segundo Blanco por la CNT y Ramón González Peña por la UGT). Ése sería el gobierno que formuló y suscribió los «Trece Puntos» como únicos y oficiales Fines de Guerra de la República.

Para entonces, sin embargo, otros problemas materiales más acuciantes estaban socavando real e irremisiblemente el nervio moral de las masas populares republicanas y de no pocos dirigentes políticos y militares: la interminable sucesión de derrotas en el frente, la persistente inhibición de las potencias democráticas y las míseras condiciones de vida impuestas por una guerra a la defensiva y sin esperanza de apoyos exteriores próximos y suficientes. Así lo apuntó en sus estudios pioneros el general Salas Larrazábal con precisión:

Lo que realmente dañaba la moral y quebrantaba el espíritu del Ejército (de la República) era la derrota, eterna creadora de discordias; la inflación, motivo del hambre y permanente origen de rebeldía, y la pésima administración con su inevitable secuela de escasez y descontento. Todo ello unido producía una fuerte depresión de ánimo en los frentepopulistas y una correlativa exaltación de sus enemigos, cada vez más numerosos^[16].

Y no había sido el primero ni el único. El comunista italiano Palmiro Togliatti ya lo había recogido en su informe confidencial para la Comintern y Stalin tras la conclusión del conflicto. A su juicio, esa combinación de problemas insolubles habría sido la clave en el derrumbamiento del «frente interior» de la República y de su moral de resistencia:

En las masas el cansancio de la guerra y el malestar por sus sufrimientos tomaban la forma concreta de una aspiración profunda y general a la paz. En todo el país se esperaba un hecho nuevo que pusiera fin a la guerra. Y no se pensaba ya en la victoria de la República. Se preveía y se hablaba abiertamente de la victoria de Franco^[17].

EL ESPEJO EXTERIOR Y SUS REFLEJOS

En septiembre de 1936, al cabo de varias semanas de lucha en España, un artículo editorial en *The Times*, influyente diario conservador británico, afirmaba sobre la guerra civil: «puede considerarse como un espejo deformante en el que Europa contempla una imagen exagerada de sus propias divisiones»^[1]. Sin duda era una bella forma metafórica de aludir a las ya por entonces innegables dimensiones internacionales presentes en la contienda española.

Y no porque la guerra hubiera sido el resultado de la hipotética participación de potencias o instituciones extranjeras en el desencadenamiento de la contienda (ya fuera el espionaje germano-italiano, como afirmaría la propaganda republicana; o los agentes soviéticos enviados por Moscú, como señalaría la propaganda franquista^[2]). Si no por otras dos razones fundamentales y correlativas: la presencia de una analogía esencial y de una sincronía temporal entre la crisis bélica española y la crisis europea de la segunda mitad de los años treinta. Ambas constituyeron las razones fundamentales que confirieron a la guerra española su importancia internacional. Ambas fueron la causa del apasionado debate que convulsionó a la opinión pública contemporánea y del rápido proceso de internacionalización del conflicto (derivado de la intervención de varias potencias en apoyo a uno u otro de los bandos españoles contendientes).

No en vano, los respectivos frentes y retaguardias creados en España se convertirían en el «espejo deformante» que concitaba el apoyo o la hostilidad de los diversos grupos sociales, ideologías políticas y potencias estatales que fracturaban el continente europeo. Tanto para quienes percibían el conflicto español como un combate frontal entre el comunismo y la civilización occidental, como para quienes lo interpretaban como una batalla decisiva entre la democracia y el fascismo.

El contexto europeo de los años treinta estaba marcado por el impacto devastador de la Gran Depresión económica iniciada en 1929 y por el desmoronamiento del sistema de relaciones internacionales articulado por la Sociedad de Naciones, un organismo internacional con sede en Ginebra constituido en 1919 para velar por la paz y la seguridad colectiva a través de consultas gubernamentales periódicas, el arbitraje y el recurso potencial a las sanciones económicas o militares contra Estados agresores que perturbaran la estabilidad mundial^[3].

Uno de los principales efectos de la crisis internacional había sido el reforzamiento de la influencia europea de la Italia fascista de Benito Mussolini y la creación de las condiciones para la consolidación en Alemania del régimen nazi de Adolf Hitler. Como corolario a su política común de férrea disciplina social, autarquía económica y cruda exaltación nacionalista, tanto el fascismo como el nazismo postulaban una política exterior beligerante y revisionista del *statu quo* territorial consagrado al final de la Gran Guerra.

En el caso italiano, el pragmatismo coyuntural desplegado por el Duce se combinaba con un coherente objetivo programático: convertir a Italia en la potencia hegemónica en el Mediterráneo, reactualizando el Mare Nostrum de la Roma imperial en detrimento de la preeminencia anglo-francesa en el área^[4].

En el caso del Tercer Reich, el oportunismo táctico del Führer también se combinaba con un programa de expansión imperialista en fases graduales (paralelo a una depuración biológica que implicaba el exterminio o esclavización de razas consideradas inferiores): recuperar la capacidad militar y los territorios perdidos por el tratado de paz de Versalles de 1919; convertirse en la potencia hegemónica en Europa central, anexionando o neutralizando a rivales como Austria, Checoslovaquia, Polonia y Francia; y conquistar la Rusia europea para llegar a ser una potencia continental inexpugnable y una gran potencia mundial^[5].

Las pretensiones revisionistas ítalo-germanas estaban en franca oposición a los intereses de las dos principales potencias beneficiarias del *statu quo* europeo: las democracias de Francia y Gran Bretaña, vencedoras en 1918 con ayuda de Estados Unidos (y en menor medida de la desaparecida Rusia zarista). Pero la respuesta de la entente franco-británica al nuevo desafío intentaría conciliar en lo posible el mantenimiento básico de la situación en Europa con la aceptación parcial del empuje revisionista nazi-fascista. Conscientes de sus debilidades económicas (que reducían las posibilidades de

gasto en armamento), de su vulnerabilidad militar (en función de la extensión de sus imperios mal defendidos y ya amenazados por el revisionismo del Japón imperial) y del hondo pacifismo de sus opiniones públicas (todavía traumatizadas por el coste de sangre de la Gran Guerra), ambas potencias democráticas habían puesto en marcha una «política de apaciguamiento» de Alemania e Italia que pretendía sobre todo evitar la pesadilla de una nueva y agotadora guerra en el continente europeo como la iniciada en 1914.

El rechazo anglo-francés a contemplar sin horror un nuevo enfrentamiento armado continental estaba determinado, además, por el vivo temor a que pudiera desencadenar un proceso de conmociones revolucionarias como el que había dado origen a la Unión Soviética en 1917. En consecuencia, los gobernantes británicos y franceses estaban dispuestos a intentar un reacomodo de las demandas revisionistas germanas e italianas mediante la negociación explícita (o aceptación implícita) de cambios razonables en la situación que no afectaran a sus intereses políticos y estratégicos vitales^[6].

Por su parte, la Unión Soviética, bajo la orientación dictatorial de Stalin, había dado un giro casi espectacular en su política exterior en 1933. Previamente, los dirigentes soviéticos habían alentado el proyecto de una revolución mundial que sacara de su aislamiento al régimen soviético y facilitara el difícil proceso de industrialización y colectivización agraria en curso. Destruída esa esperanza, la aguda conciencia de vulnerabilidad y falta de preparación militar habían sido agravadas por el surgimiento casi simultáneo del peligro expansionista japonés en Asia oriental y del alemán en Europa central. El temor a una agresión combinada por ambos flancos distantes y expuestos, con la posible connivencia del resto de las potencias capitalistas, había forzado a Stalin a retirar su apoyo a la revolución mundial y a buscar un entendimiento diplomático y militar con la entente franco-británica para evitar la pesadilla de una coalición de Estados capitalistas contra la URSS. Ésa era la razón de su nueva «política de seguridad colectiva» y preservación del *statu quo* (cuyo complemento en la política interior de las democracias sería la estrategia comunista del Frente Popular interclasista y antifascista^[7]).

Dentro de ese inestable contexto diplomático, el primer aldabonazo serio al precario sistema internacional lo había dado Japón en 1931, al invadir China y ocupar la provincia de Manchuria para incorporarla a su incipiente imperio asiático, pese a las protestas de la Sociedad de Naciones. Dos años después, Hitler secundó ese desafío retirando a Alemania del humillado organismo ginebrino y poniendo en marcha un programa de rearme intenso

que violaba las cláusulas del tratado de paz de Versalles. En 1935 fue Mussolini quien socavó la política de seguridad colectiva al iniciar la conquista militar de Abisinia y resistir las sanciones económicas decretadas contra Italia por la Sociedad de Naciones. Por último, en marzo de 1936, Hitler aprovechó la división creada entre Italia y las potencias democráticas a propósito de Abisinia y ordenó la remilitarización de Renania, crucial provincia fronteriza con Francia que había sido desmilitarizada al final de la Gran Guerra.

Ninguno de esos actos revisionistas, realizados siempre *manu militari*, fueron contenidos de manera efectiva por Francia y Gran Bretaña, que confiaban en la posibilidad de evitar un enfrentamiento armado y de lograr un reacomodo de las pretensiones italianas y alemanas en el concierto europeo e internacional. De hecho, los dirigentes británicos, secundados con mayor o menor entusiasmo por las autoridades francesas, habían puesto en marcha desde el primer momento la llamada «política de apaciguamiento» de ambas dictaduras. Esta política era esencialmente una estrategia diplomática de emergencia destinada a evitar una nueva guerra mediante la negociación explícita (o aceptación implícita) de cambios razonables en el *statu quo* territorial que satisficieran sustancialmente las demandas revisionistas sin poner en peligro los intereses vitales franco-británicos.

En la base de dicha política estaba la convicción de que ambas democracias no tenían fuerza ni recursos suficientes para librar un posible conflicto con las tres potencias revisionistas simultáneamente. Y ello por varios motivos. Primeramente, por la debilidad económica de ambos países como resultado de la grave crisis económica (una debilidad que afectó mucho más a Francia que a Gran Bretaña y que otorgó a este país la posición dominante en la alianza bilateral franco-británica). En segundo lugar, por la vulnerabilidad militar francesa y británica en caso de conflicto simultáneo con Japón en el Lejano Oriente, Alemania en Europa e Italia en el Mediterráneo (de hecho, ya la Gran Guerra había demostrado la extrema dificultad de contener sin aliados el empuje bélico alemán en un solo frente). En tercer orden, por la desventajosa situación diplomática de los años treinta (a diferencia de 1914-1918, Gran Bretaña y Francia no podían contar con la ayuda vital de Estados Unidos, replegado a una posición de aislacionismo absoluto, ni tampoco con la de Rusia, convertida en un país peligroso por sus doctrinas sociales, sospechoso por sus intenciones políticas e incierto por su valor militar). Y en cuarto lugar, por la fragilidad política de ambos Estados a la hora de afrontar una política beligerante (la expectativa de un

enfrentamiento bélico provocaba gran rechazo en la opinión pública francesa y británica, cuyos sentimientos pacifistas pretendían evitar a toda costa, si era posible, una nueva sangría humana como la de la última contienda europea). Estas sólidas razones apuntalaban la conveniencia de transitar la vía del apaciguamiento como estrategia más adecuada para evitar un nuevo conflicto bélico continental y para ensayar la posibilidad de un reacomodo de las demandas de Italia y Alemania sin llegar a un enfrentamiento total.

En definitiva, en vísperas del estallido de la guerra civil española, los síntomas de desintegración del sistema de relaciones intraeuropeo eran manifiestos. Y la respuesta del triángulo formado por los bloques de potencias europeas ante el estallido de la crisis bélica en España estuvo condicionado, desde el principio y hasta el final, por el perfil de su previa política exterior. Una triple respuesta que daría origen a un proceso de internacionalización del conflicto fratricida español que habría de afectar crucialmente a su curso y desenlace. Pero no fue ninguna de esas potencias la que dio el primer paso en ese proceso: éste fue inaugurado por la rápida petición de ayuda extranjera realizada simultáneamente por ambos bandos españoles.

La razón principal de esa común apelación al exterior derivaba del hecho de que en España no existían medios ni equipo militar suficientes para sostener el esfuerzo bélico exigido por una guerra. En consecuencia, el mismo día 19 de julio, mientras el gobierno republicano de Giral en Madrid se dirigía a su homólogo frentepopulista en París solicitando aviones y municiones para sofocar la rebelión, el general Franco, al mando de la sublevación en Marruecos, enviaba sus emisarios personales a Roma y Berlín pidiendo aviones para transportar sus experimentadas tropas a la Península y romper el empate imperante.

Las peticiones recibidas en Alemania e Italia fueron respondidas de modo afirmativo por Hitler y Mussolini el 25 y 28 de julio de 1936, respectivamente. En virtud de ello, Franco recibió los aviones y el equipo bélico necesarios para trasladar sus tropas a Andalucía y comenzar una meteórica marcha sobre Madrid. La decisión de ambos dictadores de intervenir en apoyo de los militares sublevados (tomada sin consulta mutua pero muy pronto coordinada) se debió en su origen a consideraciones político-estratégicas: la victoria insurgente con ayuda italiana y alemana ofrecía la posibilidad de modificar el equilibrio de fuerzas en el Mediterráneo occidental, debilitando la posición franco-británica con unos riesgos y costes aceptables y facilitando así los proyectos revisionistas de ambos regímenes. Además, existía un factor de oportunidad política inestimable: podría

tranquilizarse al gobierno conservador británico y a las influyentes derechas francesas con el pretexto de que esa intervención era desinteresada y sólo pretendía ayudar a una contrarrevolución anticomunista. No en vano, el amago de revolución en la retaguardia republicana daba cierta credibilidad a ese pretexto y provocaría la simpatía de los círculos conservadores europeos por Franco y su aversión apenas encubierta hacia la causa de la República^[8].

Esa combinación de motivos estratégicos y políticos sería bien reflejada en las directrices dadas por el propio Hitler a su primer representante diplomático ante Franco pocos meses después de estallar la guerra:

Su misión consiste única y exclusivamente en evitar que, una vez concluida la guerra (con la victoria de Franco), la política exterior española resulte influida por París, Londres o Moscú, de modo que, en el enfrentamiento definitivo para una nueva estructuración de Europa —que ha de llegar, no cabe duda—, España no se encuentre del lado de los enemigos de Alemania, sino, a ser posible, de sus aliados^[9].

El mismo razonamiento político-estratégico se advierte fielmente en un informe del embajador alemán en Roma de diciembre de 1936. En el mismo, se daba cuenta también de la acordada precedencia otorgada a Italia sobre Alemania en la política de asistencia militar a los insurgentes españoles:

Los intereses de Alemania e Italia en el problema español coinciden en la medida de que ambos países pretenden evitar una victoria del bolchevismo en España o Cataluña. Sin embargo, mientras que Alemania no persigue ningún objetivo diplomático inmediato en España al margen de éste, los esfuerzos de Roma se dirigen sin ninguna duda a lograr que España se acomode a su política mediterránea o, al menos, a evitar la cooperación política entre España y el bloque de Francia e Inglaterra. (...) Nosotros debemos considerar como deseable la creación en el sur de Francia de un factor que, libre del bolchevismo y de la hegemonía de las potencias occidentales y por el contrario en alianza con Italia, sirva para hacer reflexionar a los franceses y a los británicos. Un factor que se oponga al tránsito de tropas francesas desde África y que tome en plena consideración nuestras necesidades en el ámbito económico^[10].

En un principio, la reacción oficial francesa a la petición de Madrid también fue favorable por motivos políticos y estratégicos: la República española era un régimen amigo y su benevolencia era vital para la seguridad de la frontera pirenaica y de las comunicaciones entre Francia y sus colonias de África del Norte. Sin embargo, la decisión suscitó el firme rechazo de las derechas y de la opinión pública católica, que percibían en el bando republicano los síntomas de una revolución social y temían la conversión de la guerra española en un conflicto continental generalizado: «La intervención francesa en la guerra civil española sería el comienzo de la conflagración europea deseada por Moscú» (advertía un semanario derechista francés a finales de julio de 1936^[11]). También los influyentes círculos militares apreciaban la situación como «una crisis peligrosa» y contagiosa: «Había miedo a un tercer

frente. (...) Había miedo a la revolución y a que los graves sucesos de España se propagaran en Francia» (según testimonio posterior de un oficial del servicio de inteligencia del Estado Mayor francés^[12]).

Para infortunio de las autoridades frentepopulistas francesas, esas mismas preocupaciones eran compartidas y avaladas por el gobierno del Reino Unido, el vital e inexcusable aliado de Francia, que había adoptado desde el primer momento una actitud de estricta neutralidad en la contienda. En palabras del primer ministro británico a su secretario del Foreign Office: «De ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país [léase Italia y Alemania], debe meternos en la lucha al lado de los rusos». El carácter diferencial y sólo veladamente antirrepublicano de esa neutralidad refleja y tácita no era un secreto para nadie en los círculos oficiales. Como afirmaría el ministro de la Marina británico en una nota interna para sus subordinados:

Por el momento parece claro que debemos mantener nuestra política de neutralidad. (...) Cuando hablo de «neutralidad» quiero decir estricta neutralidad: una situación en la que los rusos ni oficial ni extraoficialmente den ayuda a los comunistas. En ningún caso debemos hacer nada que estimule el comunismo en España, especialmente si tenemos en cuenta que el comunismo en Portugal, adonde probablemente se extendería y sobre todo a Lisboa, sería un grave peligro para el Imperio británico^[13].

La fuerza de la doble oposición interna y exterior inclinó finalmente al gobierno de Léon Blum a denegar la solicitud de ayuda republicana. El 25 de julio hizo pública su decisión y el primero de agosto de 1936 invitó a Gran Bretaña e Italia, y posteriormente a todos los gobiernos europeos, a suscribir un Acuerdo de No Intervención en España. Con el apoyo entusiasta británico, los 27 Estados europeos (incluyendo a Italia, Alemania, Portugal y la Unión Soviética y excluyendo a Suiza, neutral por imperativo constitucional) convinieron a finales de agosto de 1936 en la prohibición de la venta, envío o tránsito de armas y municiones con destino a ambos bandos contendientes españoles.

La política de No Intervención colectiva patrocinada por la entente franco-británica pretendía, sobre todo, confinar la guerra civil dentro de las fronteras españolas y evitar así su conversión en una guerra general a través de la participación de potencias extranjeras. Los gobernantes franceses consideraban que esa política sería un mal menor para la República española porque supondría el cese de los suministros exteriores de los insurgentes, obligaría a detener la guerra por mera falta de medios para combatir y abriría la posibilidad de una mediación internacional que garantizara la supervivencia de la democracia republicana.

También los gobernantes británicos confiaban en poder localizar el conflicto en España y evitar la participación extranjera en el mismo. Pero, sobre todo, pretendían proseguir sin obstáculo su política de apaciguamiento de Roma y Berlín, y para ello era imprescindible salvaguardar tres objetivos básicos en el «avispero español»: refrenar la intervención del aliado francés en apoyo a la República, evitar el alineamiento con la Unión Soviética en el conflicto, y eludir el enfrentamiento con Italia y Alemania por su hipotética o real asistencia a los insurgentes.

En cualquier caso, contrariando las expectativas francesas y británicas, el objetivo de dicha política de No Intervención fue sabotado desde el primer momento por la intervención italiana y alemana, que no se interrumpió a pesar de la adhesión oficial de ambos gobiernos al Acuerdo de No Intervención (como hizo igualmente la dictadura portuguesa de Salazar, que prestó su apoyo logístico y diplomático a los insurrectos desde el primer momento^[14]).

La retracción de las democracias occidentales ante la acometida del Eje ítalo-germano se percibió con suma claridad en las labores del Comité de No Intervención, instituido en Londres a principios de septiembre de 1936 para supervisar la aplicación del acuerdo correspondiente. Su patente incapacidad para detener eficazmente la ayuda prestada a Franco por las potencias del Eje dio origen a una estructura asimétrica de apoyos e inhibiciones que fue muy favorable para los insurgentes y muy perjudicial para la República.

Sólo México (bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas) acudió abiertamente en auxilio del gobierno republicano, pero en una medida incapaz de contrarrestar los efectos de la intervención italiana, alemana y portuguesa (la primera en el orden temporal), y la inhibición de las democracias europeas^[15]. Como dicha actitud inhibitoria había sido secundada formalmente por el presidente Roosevelt en Estados Unidos de América (en virtud de su tradicional cooperación con la entente franco-británica, la fuerza del sentimiento aislacionista y el temor demócrata a la pérdida del voto católico), la República tuvo que recurrir al dudoso y costoso mundo de los traficantes de armas internacionales^[16].

El consecuente aislamiento internacional fue reforzado por la actitud veladamente contraria y distante manifestada desde septiembre de 1936 por el Papa Pío XI desde el Vaticano, aterrado por la furia anticlerical desatada en la retaguardia republicana y a tono con la beligerancia de la jerarquía episcopal española y del movimiento católico mundial. De hecho, el único contingente de voluntarios extranjeros enrolados en las filas franquistas serían los

católicos irlandeses dirigidos por el general Eoin O'Duffy^[17]. Descontando, por supuesto, a otro contingente difícilmente reconciliable con la idea de Cruzada católica o cristiana: las tropas de regulares indígenas reclutadas en el Protectorado de Marruecos (un total cercano a los 70 000 efectivos^[18]).

Desde el inicio de la guerra civil, Stalin había mantenido una actitud de prudente reserva con objeto de no dificultar su aproximación a Francia y Gran Bretaña. Además, como le confesó Maxim Litvinov (comisario de Asuntos Exteriores) al que sería primer embajador soviético ante la República, razones logísticas tanto como políticas aconsejaban no involucrarse directamente y favorecer un confinamiento de la crisis:

Hemos discutido en reiteradas ocasiones el problema de la ayuda al gobierno español después de su partida (el embajador arribó a Madrid a finales de agosto de 1936), pero hemos llegado a la conclusión de que no era posible enviar nada desde aquí (...). Nuestro apoyo proporcionaría a Alemania e Italia el pretexto para organizar una invasión abierta y un abastecimiento de tal volumen que nos sería imposible igualarlo (...). No obstante, si se probara que pese a la declaración de No Intervención se sigue prestando apoyo a los sublevados, entonces podríamos cambiar nuestra decisión^[19].

Por eso mismo, Stalin había accedido a suscribir el Acuerdo de No Intervención y a participar en el Comité de Londres. Sin embargo, la evidencia del fracaso de dicha política colectiva para cortar los suministros a Franco determinó un giro crucial de su posición. La URSS decidió auxiliar a la República para poner a prueba en España la viabilidad de su proyecto de alianza con las democracias frente al expansionismo nazi y fascista. Un documento interno del servicio secreto militar soviético en febrero de 1937 reflejaría ese cálculo que había determinado tal decisión retardada y arriesgada:

La victoria del Frente Popular en España mejorará indudablemente la situación de todos los países democráticos de Europa, dará fuerzas al movimiento antifascista y afianzará la voluntad de las más amplias masas obreras y de toda la «humanidad avanzada y progresista» para luchar contra la guerra de los fascistas (Stalin). Por el contrario, una victoria de los fascistas en España puede crear las condiciones para reforzar la agresividad de todos los Estados fascistas; en primer lugar y ante todo, de la Alemania hitleriana, profundizando extraordinariamente el peligro de guerra en Europa, en especial de un ataque de Alemania contra Checoslovaquia y otros países democráticos y de una guerra contrarrevolucionaria contra la URSS^[20].

A partir de septiembre de 1936, Stalin apoyó la formación de las Brigadas Internacionales, un cuerpo de voluntarios reclutados en los medios antifascistas de todo el mundo a través de los partidos comunistas. Como resultado de la fuerte simpatía popular por la causa republicana, en torno a 35 000 voluntarios sirvieron como brigadistas internacionales a lo largo de toda la guerra, procediendo de más de 50 países de todos los continentes:

31 369 según el servicio secreto militar soviético y 34 111 según el registro de la Comintern^[21].

Aunque su valor militar ha sido exagerado por la literatura, supusieron un refuerzo moral considerable y constituyeron un modelo de disciplina para la formación del Ejército Popular de la República. Después de participar en todas las grandes batallas, el gobierno del doctor Negrín decidió su retirada unilateral en septiembre de 1938, con la esperanza frustrada de forzar al enemigo a imitar esa medida.

Por otra parte, desde octubre de 1936, la República también comenzó a recibir suministros de material bélico enviados directamente por la Unión Soviética, que continuaron a un ritmo intermitente hasta el final de la guerra. Con ellos llegaron también los asesores y especialistas militares soviéticos (incluyendo los agentes del servicio secreto), que alcanzaron la cifra global de un mínimo de 2000 hombres (2082, según fuentes militares soviéticas consultadas por Daniel Kowalsky) hasta su retirada en el verano de 1938^[22].

La vinculación bilateral se estrechó aún más con la decisión del gobierno republicano de enviar a Moscú gran parte de sus reservas de oro para pagar con su venta los suministros militares, alimenticios y sanitarios enviados desde la URSS y otros países europeos. En conjunto, del mismo modo que el apoyo germano-italiano había permitido a Franco superar una grave situación a finales de julio de 1936 (como lo volvería a hacer posteriormente), los envíos soviéticos contribuyeron crucialmente a la resistencia de Madrid en noviembre del mismo año y sostuvieron el esfuerzo defensivo de la República durante toda la guerra.

La respuesta de Alemania e Italia al compromiso soviético con la España republicana y a su éxito durante la batalla de Madrid consistió en el reforzamiento de su intervención en favor del general Franco y en su reconocimiento formal como gobierno legítimo de España (18 de noviembre de 1936). Ese proceso consumó la internacionalización de la guerra civil, arrumbó por completo la eficacia real del Comité de No Intervención de Londres (convertido desde entonces en una mera farsa diplomática) y condenó al fracaso todos sus ilusorios proyectos de control de las fronteras y costas españolas (siempre basados en una inexistente *bona fides* por parte de las potencias del Eje firmantes del pacto de embargo).

Durante el mes de noviembre de 1936 Hitler envió a Franco la Legión Cóndor, una unidad militar aérea exclusivamente alemana que contaba con un centenar de aviones, un batallón de medio centenar de tanques y artillería antiaérea y unos 5000 hombres que rotaban periódicamente. En conjunto,

unos 19 000 soldados alemanes combatieron en España con el Ejército franquista, participando en casi todas las operaciones desarrolladas hasta el final de la guerra^[23].

Por su parte, Mussolini reforzó su presencia militar enviando entre diciembre de 1936 y febrero de 1937 el Corpo di Truppe Volontarie (CTV), que agrupaba a 40 000 soldados italianos de modo permanente, ascendiendo el número total de sus efectivos a lo largo de toda la guerra hasta superar los 70 000 (casi 79 000 si se incluye el contingente de fuerzas aéreas italianas: la llamada «Aviazione Legionaria»^[24]).

Aparte del volumen masivo de esa ayuda militar en hombres y material, los suministros ítalo-germanos fueron concedidos a crédito y continuaron afluyendo con regularidad hasta principios de 1939. La propia prolongación de la guerra y el incremento cuantitativo de la presencia fascista y nazi originaron nuevos motivos para mantener esa intervención. Al respecto, cabe mencionar las tentativas alemanas de asegurarse la exportación de mineral de hierro y piritas españolas para abastecer su programa de rearme acelerado. Igualmente, debe citarse la voluntad de experimentación de nuevas técnicas y equipos militares en la arena española por parte del CTV y la Legión Cóndor: la *guerra celere* italiana en Málaga (con éxito, en febrero de 1937) y en Guadalajara (con bastante peor fortuna, en marzo del mismo año) y el bombardeo masivo alemán sobre la villa de Guernica (el 26 de abril de 1937) son buena prueba de todo ello.

En definitiva, entre octubre de 1936 y febrero de 1937 se había producido un cambio fundamental en el escenario internacional de la guerra española. No en vano, el compromiso soviético a favor de la República y la, intensificación del apoyo de las potencias del Eje al general Franco marcaron la culminación del dilatado proceso de internacionalización de la contienda. A partir de esta última fecha, el cuadro de apoyos e inhibiciones recabado por cada bando quedó configurado definitivamente y se mantuvo inalterado hasta el final del conflicto.

Por un lado, el bando franquista siguió contando con el vital apoyo militar, financiero y diplomático de la Italia fascista, de la Alemania nazi y, en menor medida, del Portugal de Oliveira Salazar (que permitió el alistamiento de aproximadamente 10 000 portugueses en el Ejército insurgente), aparte del estímulo moral de la Santa Sede y del catolicismo mundial. Por su parte, la República se basaba esencialmente en el apoyo militar y diplomático de la Unión Soviética y, al margen del aliento moral mexicano, recibía de Francia una pequeña ayuda encubierta, vacilante e

intermitente (lo que Blum calificaría de «no-intervención relajada»: la tolerancia ocasional hacia el contrabando de armas por la frontera pirenaica con la Cataluña republicana). Mientras tanto, el resto de los países europeos, encabezados por Gran Bretaña (y secundados por la gran mayoría de los Estados mundiales), seguían firmemente adheridos al Acuerdo de No Intervención y respetaban sustancialmente el embargo de armas y municiones imperante.

A partir de la primavera de 1937, el precario equilibrio de fuerzas militares logrado por el arribo de la ayuda soviética fue desmoronándose poco a poco y sin remisión en favor del general Franco. Debido a una serie de obstáculos irresolubles (la enorme distancia geográfica entre la URSS y España; la limitada capacidad de la industria militar soviética; el férreo bloqueo naval franquista e italiano en el Mediterráneo; y el estado imprevisible de la frontera francesa, sólo ocasionalmente abierta al tránsito de armas), los intermitentes suministros militares procedentes de la Unión Soviética fueron incapaces de contrarrestar en cantidad o calidad a las remesas de material bélico enviadas regularmente por las potencias del Eje a Franco según las demandas y previsiones de su Cuartel General. Así fueron sucediéndose las victorias militares franquistas y las derrotas republicanas desde abril de 1937 y a lo largo de todo el fatídico año de 1938.

No en vano, Stalin se había embarcado con prudencia en su campaña de ayuda bélica a la República a sabiendas de que estaba fuera de su alcance asegurar una resistencia militar indefinida y sobre la base de que dicha ayuda tendría carácter interino y supletorio: hasta que las potencias democráticas asumieran como propia la causa republicana y actuaran en consecuencia. Buena prueba de la pragmática reticencia de los estrategas soviéticos a desprenderse de su escaso material bélico por lejanos intereses españoles se aprecia en la carta remitida a Stalin por el mariscal Voroshilov, comisario soviético de Defensa, el 2 de noviembre de 1937: «Le envío una lista de artículos (militares) que podemos vender a los españoles, aunque ello nos causa daño. Lo más doloroso de todo es el material aeronáutico que enviamos». Significativamente, la carta finalizaba con una advertencia condicional muy reveladora: «Si Francia no actúa vergonzosamente, seremos capaces de hacer llegar todo el material bélico a su destino en el tiempo mínimo posible»^[25].

En realidad, desde el comienzo de la campaña nacionalista contra el núcleo norteño republicano y hasta el inicio de la triunfal ofensiva sobre Cataluña, la República fue siendo derrotada por las fuerzas superiores de

Franco de un modo lento pero gradual y constante. Los ocasionales momentos de esperanza política y militar suscitados por incidentes internacionales en abril de 1937 (revulsión de la opinión pública democrática por el bombardeo de Guernica), septiembre de 1937 (reacción franco-británica ante la indiscriminada campaña naval italiana) o marzo de 1938 (réplica francesa ante la anexión nazi de Austria) sólo fueron respiros temporales que no invirtieron la tendencia bélica general adversa.

Y en ese proceso tuvo especial importancia la subordinación francesa ante la decisión británica de supeditar su política en «el estorbo español» a los objetivos prioritarios de la política de apaciguamiento y preservación de la paz. Un resignado ministro francés de Asuntos Exteriores confesaría al embajador norteamericano en París esa realidad sin reserva alguna a finales de julio de 1937:

Por lo que respecta al futuro, la posición que tomará Francia dependerá por completo de la posición de Inglaterra. Francia no emprenderá la guerra con Alemania e Italia. La posición de Francia será la misma que su posición en el asunto español. Si Inglaterra decide estar firme al lado de Francia frente a Alemania e Italia, Francia actuará. Si Inglaterra continúa mostrándose distante, Francia no podrá actuar. En ningún caso se encontrará en la posición de tener a la Unión Soviética como su único aliado^[26].

Casi al mismo tiempo, el embajador norteamericano en la España republicana sintetizaba el resultado de esa política de la entente franco-británica con precisión: «Me da la impresión de que hace meses que se tomó la decisión de sacrificar la democracia en España en beneficio de la paz en Europa»^[27].

En efecto, la persistente negativa de las democracias a acudir en auxilio de la República pesó como una losa en la política militar y en la vida política interna republicana, sin que las enérgicas gestiones emprendidas por el doctor Negrín consiguieran modificar esa circunstancia letal. No en vano, las graves dificultades experimentadas en los suministros bélicos y alimenticios cobraron un alto precio moral y material tanto en el frente de combate como en la retaguardia civil. Una confesión realizada por Negrín a un dirigente socialista e íntimo colaborador permite clarificar las bases de resignación y esperanza implícitas en su política de resistencia a ultranza:

Aunque me ve aparentando optimismo, no creo que saquemos nada práctico de la reunión de la Sociedad de Naciones. Alemania, Italia y Portugal seguirán ayudando descaradamente a Franco y la República durará lo que quieran los rusos que duremos, ya que del armamento que ellos nos mandan depende nuestra defensa. Únicamente si el encuentro inevitable de Alemania con Rusia y las potencias occidentales se produjese ahora, tendríamos posibilidades de vencer. Si esto no ocurre, sólo nos queda el luchar hasta poder conseguir una paz honrosa^[28].



EUROPA EN 1936

El momento culminante de ese lento desahucio internacional de la República quedó sellado en septiembre de 1938, durante la grave crisis germano-checa que puso a Europa al borde de una nueva guerra general. A la

postre, la firma del Acuerdo de Múnich para desmembrar Checoslovaquia por parte de Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania demostró claramente que no se iba a producir una guerra por la supervivencia checa y, aún menos, por causa de España. Entre otras cosas, porque Franco, con la comprensión de sus valedores ítalo-germanos y consciente de su desventajosa situación en caso de guerra europea, se había decidido a informar a Londres y París de su determinación de permanecer neutral en esa contingencia. No en vano, la administración franquista ya había previsto los graves riesgos de un alineamiento con el Eje en oposición al «grupo anglo-francés»:

Basta abrir un atlas para convencerse de ello. En una guerra contra el grupo franco-inglés puede decirse, sin exageración alguna, que estaríamos totalmente cercados de enemigos. Desde el primer momento los encontraríamos en todo el perímetro de nuestro territorio, en todas las costas y en todas las fronteras. Podríamos contenerlos en la de los Pirineos; pero me parece poco menos que imposible evitar a la vez la invasión por la frontera portuguesa. (...) Alemania e Italia sólo podrían prestarnos auxilios insuficientes para la defensa de una España débil, y nada de lo que nos ofrecieran podría compensar el riesgo de luchar a su lado. (...) Habría que hacerles ver que su ayuda no podría librarnos de las acometidas de Inglaterra y Francia en una guerra en la que nuestro territorio comenzaría por ser el principal teatro, para terminar, muy probablemente, en base de ataque a nuestros aliados^[29].

Después de Múnich, la irreversible desintegración política interna de la República fue paralela al avance de las tropas franquistas y culminó con el colapso total de la resistencia republicana en marzo de 1939 (con el golpe militar dirigido por el coronel Casado que derribó al gobierno de Negrín y se rindió sin condiciones ante Franco). Sólo cinco meses más tarde estallaría la guerra europea que tan laboriosamente había evitado (¿o más bien aplazado?) la política de No Intervención colectiva.

Apenas un año antes de la victoria total de Franco, un profético artículo editorial del diario británico *The Manchester Guardian* había apuntado el papel crucial de aquella política en el resultado último del drama español: «Sea cual sea el bien que haya podido hacer a Europa, la No Intervención ha clavado una lanza extranjera en el costado de la España leal [republicana]»^[30]. Y el propio Serrano Suñer, varias décadas después, aceptaría en gran medida ese mismo juicio y balance: «¿Fue la “no-intervención” obra maestra de la política del Eje?, ¿nos favoreció? Hoy pienso que fue útil»^[31].

EL ROSTRO HUMANO DE UN VENCIDO

El profundo drama que supone toda guerra, y particularmente una guerra civil, no siempre queda bien reflejado en una perspectiva histórica generalista que sólo atienda a fenómenos globales y colectivos. Para apreciar en toda su intensidad el coste de lo que fue una carnicería resulta más conveniente descender hasta el sujeto humano de carne y hueso que vivió y sufrió sus avatares, sus amarguras y sus infortunios (o bien que disfrutó sus vivencias, sus alegrías y sus fortunas).

Tratar de identificar a una persona singular que pudiera ser el rostro y cara del bando derrotado en la guerra civil española es una tarea delicada y muy compleja. Sin duda, para muchos, esa figura simbólica y emblemática debería ser el presidente de la República, Manuel Azaña. Otros, bastante menos, quizá se inclinarían por Lluís Companys o por José Antonio Aguirre en su condición de titulares de análogo cargo en sus respectivos ámbitos autónomos. Y aún habrá quienes preferirían señalar nombres afines a sus propias simpatías políticas e ideológicas, hubieran tenido cargo oficial o no durante el conflicto: Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero, Dolores Ibárruri, Buenaventura Durruti, etc. Incluso algunos otros señalarían la necesidad de ofrecer ese título a algún combatiente anónimo o a alguna víctima inocente de la tragedia.

Siguiendo esta última y loable inclinación podría evocarse el nombre, por ejemplo, de Daniel G. Linacero, maestro madrileño, autor de varios libros de historia para niños, militante de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT y director de la Escuela Normal de Magisterio de Palencia en 1936. Su principal mérito para este honor consistiría en haber sido detenido al iniciarse la sublevación militar y, a partir del 8 de agosto de 1936, ser titular de una partida de defunción señalando lacónicamente que falleció «a consecuencia del Movimiento Nacional». Tenía entonces treinta y tres años y dejaba tras de sí una viuda y tres hijas de corta edad^[1].

Sin dejar de reconocer la legitimidad de todas y cada una de esas opciones, entendemos sin embargo que la figura histórica que encarna mejor y más plenamente al bando vencido en la guerra civil es el último jefe del gobierno: el médico socialista Juan Negrín López (Las Palmas, 1892-París, 1956). Aunque sólo sea por una razón aducida poco antes de morir fusilado por uno de sus correligionarios y colaboradores, Julián Zugazagoitia, exdirector del diario *El Socialista* y ministro de Gobernación en 1937-1938. En el libro de memorias y recuerdos terminado en París en 1940 con anterioridad a su captura y entrega por la Gestapo a España para su juicio y ejecución, Zugazagoitia advertía contra la «injusticia histórica» de personificar «culpas colectivas» en líderes individuales. Y añadía: «Esa misma injusticia histórica vendrá a encarnizarse, cuando la guerra se haya perdido, con Negrín». Recordaba así unas palabras de Negrín en plena contienda:

Si me toca perder la guerra, se podrá decir de mí todo, menos que soy yo quien tiene responsabilidades en su desencadenamiento. Esto es de la cuenta de otras personas. ¡Allá los que no supieron ver lo que estaba a la vista^[2]!

Efectivamente, como advertía Zugazagoitia y sospechaba el interesado, ya durante la guerra y con más motivo en la posguerra, el doctor Negrín tuvo la desgracia y el infortunio de concitar casi tanto odio, animadversión y hostilidad en el bando enemigo franquista como en su propio bando republicano. Para aquél, siempre sería un execrable líder comunista, el hombre de Moscú, sometido al dictado de Stalin y responsable de una política de resistencia que había alargado inútilmente la lucha y había impedido el rápido triunfo de las fuerzas nacionalistas: «el servil discípulo de los soviets, de sus agentes y comisarios», dijo Franco en su discurso conmemorativo del 18 de julio de 1938^[3]. Curiosamente, también en las filas republicanas existían líderes y fuerzas políticas que asumían ese juicio de Negrín como líder comunista, «hombre de paja de Moscú» y responsable de múltiples errores políticos y militares: «el hombre más funesto e irresponsable que ha tenido España desde hace muchos siglos», sentenció su anterior amigo y correligionario Luis Araquistain en abril de 1939^[4].

A pesar de todo ese odio compartido, durante el conflicto fratricida Negrín llegó a personificar el espíritu de resistencia del bando republicano con tanto fervor e intensidad como el general Franco llegó a representar al bando nacionalista vencedor. Porque no fueron otras figuras más conocidas y homenajeadas en la actualidad quienes encarnaron la representación interna e internacional del esfuerzo bélico de la República durante la mayor parte de la

guerra. Fue, aunque pueda parecer sorprendente, el doctor Negrín, jefe del gobierno republicano entre mayo de 1937 y marzo de 1939. A él se debió la acuñación de la consigna emblemática «Resistir es vencer», asociada para siempre desde entonces a la estrategia política y militar desplegada por la República en la contienda. También fue él, por voluntad popular anónima, quien bautizó incluso a las lentejas, pieza esencial de la magra dieta alimenticia imperante en la zona republicana, como «las píldoras del doctor Negrín».

Juan Negrín López había nacido el 13 de febrero de 1892 en Las Palmas de Gran Canaria, en el seno de una familia muy acomodada y hondamente católica. Su padre, Juan Negrín Cabrera, era un próspero y reputado comerciante y hombre de negocios de las islas. El catolicismo familiar no era simple formalidad al uso tradicional sino una auténtica vocación real, como demuestran dos hechos singulares: el único hermano varón de Negrín, Heriberto, profesó como religioso toda su vida en la orden claretiana, en tanto que su madre (María Dolores López Marrero) y su única hermana (Dolores), cuando tuvieron que salir de Canarias al exilio por su parentesco con el dirigente republicano, optaron por instalarse en Lourdes llevadas por su devoción mariana. Al respecto, cabe subrayar que la posterior diferencia de actitudes ante la religión entre Negrín y sus progenitores y hermanos nunca debilitó los fuertes vínculos afectivos existentes dentro de la familia^[5]. En todo caso, ese exilio familiar no fue el más cruel de los precios personales pagados por Negrín durante la contienda: su padre fue detenido y encarcelado en Las Palmas y moriría en 1941 en la pobreza después de haber sido expropiados todos sus bienes y pertenencias.

Gracias a la sólida posición económica familiar y al cosmopolitismo imperante en una ciudad portuaria como era Las Palmas, el joven Negrín tuvo desde el principio una educación muy esmerada, que incluyó el estudio en profundidad de idiomas extranjeros. Cuando terminó precozmente el bachillerato con notas brillantes a los catorce años, su padre decidió seguir una tradición común entre las familias pudientes canarias: enviar a su hijo a realizar estudios universitarios fuera de las islas y de la propia Península, a universidades extranjeras. Puesto que el muchacho había destacado en las asignaturas de ciencias y había manifestado interés por la medicina, su padre optó por enviarle a estudiar esa carrera a Alemania en 1906, seducido por el enorme prestigio de la ciencia y la universidad germanas de la época. En consecuencia, Negrín estudió dos años en la Facultad de Medicina de Kiel, trasladándose en el curso 1908-1909 a la de Leipzig, puesto que había

decidido especializarse en fisiología médica y era allí donde se hallaba el mejor instituto de fisiología de toda Alemania y aun de Europa^[6].

Negrín permaneció en Alemania durante casi un decenio, estudiando primero medicina, luego química y parcialmente ciencias económicas. En todos sus estudios se reveló como un estudiante muy brillante y dotado de extraordinaria capacidad para la investigación científica y fisiológica. Prueba evidente es que logró obtener el doctorado en medicina en 1912 (cuando contaba sólo con veinte años) y que inmediatamente fue incorporado al Instituto de Fisiología de Leipzig como investigador asistente y luego como profesor ayudante.

Durante su estancia en Leipzig, Negrín se casó con una joven rusa estudiante de música, María Mijailov, cuya familia pertenecía a la burguesía rusa de origen judío que había tenido que exiliarse por causa de la revolución bolchevique. Ese matrimonio (del que nacerían tres hijos varones: Juan, Rómulo y Miguel), junto con su carrera y trayectoria profesional, favorecieron la conversión de Negrín en un políglota asombroso, capaz de hablar alemán, inglés y francés con rara perfección, y de manejar el ruso y el italiano con gran soltura.

A finales del año 1915, en plena Primera Guerra Mundial, las crecientes dificultades que encontraba en Alemania para seguir trabajando impulsaron a Negrín a regresar a España. Contaba ya con un sólido prestigio profesional avalado por sus investigaciones sobre las glándulas suprarrenales y el sistema nervioso central y por una serie notable de artículos publicados en las mejores revistas científicas de Europa. Con el apoyo entusiasta de Santiago Ramón y Cajal, Negrín se estableció en Madrid al frente de un Laboratorio de Fisiología General creado expresamente para él en la Residencia de Estudiantes por la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Tras convalidar sus títulos de licenciado y doctor en medicina, pertrechado de un sólido prestigio académico, en marzo de 1922 Negrín obtuvo mediante reñida oposición, por unanimidad, la cátedra de fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid, con tan sólo treinta años de edad^[7].

Su laboratorio de fisiología madrileño, primero en la Residencia de Estudiantes y luego en la Facultad de Medicina, se convirtió en un centro de investigaciones de resonancia internacional y en una escuela de formación científica realmente excepcional. Para demostrarlo baste recordar que figuras como Severo Ochoa, Francisco Grande Covián, Rafael Méndez Martínez, José Puche Álvarez y Blas Cabrera Sánchez se contaron entre sus discípulos y

colaboradores. Todos ellos guardarían siempre un afecto muy especial por quien consideraban su maestro, con independencia de sus respectivas orientaciones políticas, y sus testimonios acreditan tanto la talla intelectual como la gran humanidad y generosidad de Negrín^[8].

Durante su estancia en Alemania, Negrín también había madurado inquietudes políticas muy alejadas de su tradición familiar conservadora y muy próximas a la socialdemocracia germana, entonces en uno de los momentos de su máximo apogeo e influencia sociopolítica y cultural. Esas inquietudes políticas de claro matiz progresista llevaron a Negrín a ingresar en el PSOE en la primavera del año 1929, en plena crisis de la dictadura de Primo de Rivera y de la propia monarquía. Como tantos otros intelectuales de la época y de su generación, como el doctor Gregorio Marañón o el filósofo José Ortega y Gasset, Negrín consideraba que el régimen republicano era el más idóneo para acometer la necesaria modernización política y social del país. Además, estimaba que el partido socialista era «el único partido realmente republicano que existe en España»^[9].

Por eso mismo, dentro del movimiento socialista, se alineó desde el primer momento y firmemente con la facción moderada y reformista encabezada por Indalecio Prieto, con quien fraguó una amistad estrecha y sólo rota posteriormente por la guerra civil. A partir de su ingreso en el PSOE, Negrín fue abandonando la investigación científica básica en favor de la actividad política, pero sin integrarse en los órganos de dirección del partido, siempre de la mano de Prieto y con el horizonte puesto en un programa de europeización de España según el modelo ofrecido por la poderosa e influyente socialdemocracia germana, entonces al frente de los destinos de la República de Weimar. No en vano, solía afirmar en público con orgullo que era «el único socialista no-marxista» del PSOE, para incomodidad de muchos de sus correligionarios, afectos a una ortodoxia marxiana rigurosamente custodiada por Julián Besteiro, también catedrático (de lógica) en la Universidad de Madrid y presidente tanto del partido como de la UGT^[10].

El abandono de la investigación científica fue definitivo a partir de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, cuyo resultado fue la inesperada caída de la monarquía y la pacífica proclamación de la Segunda República. En las elecciones generales de junio del mismo año, Negrín fue elegido diputado socialista por su ciudad natal, Las Palmas de Gran Canaria. Y seguiría en primera línea de la actividad política durante todo el quinquenio republicano porque logró revalidar su escaño en las elecciones generales de noviembre de 1933 y de febrero de 1936.

Carente de grandes dotes oratorias (al modo de un Azaña o Prieto), la actividad parlamentaria de Negrín durante esos cinco años no tuvo resonancia pública especial y se centró en una eficaz labor como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, gracias a sus incompletos pero fructíferos estudios de economía en Alemania. De igual modo, gracias a su sorprendente dominio de idiomas, fue elegido por las Cortes representante de España en la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), con sede en Ginebra, y en la Unión Interparlamentaria Europea, con sede itinerante por varias capitales continentales^[11]. Todas estas actividades internacionales le hicieron viajar muy a menudo y trabar contacto, y en ocasiones amistad, con gran número de dirigentes políticos europeos y mundiales. El resultado (que habría de ser relevante posteriormente, en la guerra civil) fue que Negrín, durante los años de la República, era mucho más conocido como brillante político socialista fuera de España que en su propio país.

Cuando el 17 de julio de 1936 la temida insurrección militar contra el gobierno se produjo finalmente, el doctor Negrín se vio catapultado al primer plano de la escena política contra su probada voluntad de anonimato y en un contexto realmente crítico y desfavorable para la República.

En el contexto inicial de emergencia bélica y caos institucional, Negrín se dedicó durante las primeras semanas de la guerra a ayudar, como oficial de enlace, a las milicias republicanas que defendían Madrid del avance nacionalista en los altos de Guadarrama (en las cuales se había alistado su hijo mayor). Mariano Ansó, diputado republicano y amigo personal, recordaba que «iba y venía de su laboratorio a los frentes de la sierra, las más de las veces en el primer camión de milicianos que encontraba»^[12]. Sin embargo, muy pronto fue llamado por la dirección del partido socialista para tareas más relevantes.

A principios de septiembre de 1936, Negrín se convirtió en ministro de Hacienda de un nuevo gobierno de coalición frentepopulista presidido por Largo Caballero, gracias a su probada competencia técnica, habilidad administrativa y al apoyo político de Prieto. Sólo aceptó el cargo por disciplina partidaria, dado que consideraba que la presidencia de Largo Caballero daba una imagen de la República en exceso radical de cara al exterior y era una grave equivocación política y diplomática que impediría obtener la vital ayuda de Francia y Gran Bretaña^[13].

En su calidad de titular de esa cartera ministerial clave, Negrín tuvo la especial responsabilidad de movilizar todos los recursos económicos y financieros disponibles en la retaguardia en favor de la prosecución del

esfuerzo de guerra republicano contra un experimentado Ejército insurgente que contaba con el vital apoyo material de la Italia fascista y la Alemania nazi. Como parte de su programa de recuperación de atribuciones estatales y preparación de una economía de guerra, dispuso la inmediata reconstrucción del cuerpo militar de Carabineros, una policía de control de aduanas sumamente eficaz que pasó a ser conocida como los «Cien Mil Hijos de Negrín» (aunque nunca llegaron a totalizar ese número).

Sin embargo, su decisión más importante (y polémica) como ministro de Hacienda fue la de utilizar a fondo las reservas de oro del Banco de España para sufragar con su venta y conversión en divisas el pago de las armas, los servicios y los suministros requeridos por una República aislada diplomáticamente y carente de recursos propios para abastecer sus crecientes necesidades de equipo militar, materias primas y alimentos. En octubre de 1936, cuando el avance de las tropas franquistas sobre Madrid parecía incontenible y cuando comenzaba a llegar la primera ayuda militar soviética, Negrín, con el visto bueno de Azaña, de Largo Caballero y de otros ministros influyentes (entre ellos, Prieto), dispuso el envío de una parte de esas reservas de oro a Moscú para garantizar su uso seguro y confidencial en la adquisición de armas y pagos de suministros varios^[14].

En cualquier caso, al margen de la maraña de críticas y deformaciones interesadas provocadas por la decisión de movilizar el oro, resulta evidente que esas medidas dictadas por Negrín fueron decisivas y posibilitaron la supervivencia económica y financiera de la República en un contexto internacional claramente adverso si no hostil. Sin el recurso a la venta de las reservas y su conversión en divisas e instrumentos de pago exteriores, no habría habido posibilidad alguna de resistencia militar y financiera. Exactamente lo mismo habían hecho las autoridades de Francia y Gran Bretaña durante la Gran Guerra de 1914-1918 y así volvería a repetirlo el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

El momento culminante de la carrera política de Negrín llegó en mayo de 1937, después de que las fuerzas de seguridad republicanas hubieran aplastado la rebelión anarquista en Barcelona. Como resultado de la crisis, Largo Caballero perdió la presidencia del gobierno y fue reemplazado, para sorpresa de todos, por el doctor Negrín, cuando casi todo el mundo esperaba que fuera Prieto el que se hiciera cargo de la tarea. Es evidente que Negrín tuvo a favor de su elección el gran cometido desempeñado en la cartera de Hacienda y su creciente prestigio público e internacional. También es evidente que Prieto decidió renunciar a presidir el gabinete para no exacerbar

la oposición caballerista y dejar abierta la vía a su reincorporación al ejecutivo. Ahora bien, no cabe obliterar otra razón plausible apuntada por otras fuentes: Negrín era el candidato deseado por el PCE y la Unión Soviética con preferencia a Prieto, y esa opinión pesaba cada vez más en la vida política republicana porque la defensa dependía totalmente de los suministros bélicos soviéticos y porque la fuerza del PCE había crecido mucho como resultado de ese apoyo y de su demostrada eficacia organizativa y disciplina paramilitar^[15].

Sin embargo, la decisión última de entregar a Negrín el encargo de formar gobierno fue enteramente del presidente Azaña, que dejó anotadas en su diario las firmes razones y motivos del nombramiento:

Me decidí a encargar del Gobierno a Negrín. El público esperaba que fuese Prieto. Pero estaba mejor Prieto al frente de los ministerios militares reunidos, para los que, fuera de él, no había candidato posible. Y en la presidencia, los altibajos del humor de Prieto, sus «repentes», podían ser un inconveniente. Me parecía más útil, teniendo Prieto una función que llenar, importantísima, adecuada a su talento y a su personalidad política, aprovechar en la presidencia la tranquila energía de Negrín (...). El nuevo presidente tiene gran confianza en sus designios, en su autoridad, afirma que la guerra durará mucho todavía (¡otro año!), y que se prepara para ello. Negrín, poco conocido, joven aún, es inteligente, cultivado, conoce y comprende los problemas, sabe ordenar y relacionar las cuestiones. Podrá estarse conforme o no con sus puntos de vista personales, pero ahora, cuando hablo con el jefe del Gobierno, ya no tengo la impresión de que estoy hablando a un muerto. Esto, al cabo de los meses, es para mí una novedad venturosa. Parece hombre enérgico, resuelto, y en ciertos respectos, audaz. Algunos creerán que el verdadero jefe del Gobierno será Prieto. Se engañan. No solamente porque Prieto es sobrado inteligente para salirse de su papel, sino porque el carácter de Negrín no sirve para eso^[16].

Una vez elevado a la jefatura del gobierno, la gestión enérgica y voluntariosa de Negrín, ejemplificada en su lema de campaña («Resistir es vencer»), capturó por algún tiempo los anhelos y esperanzas de la abatida y semidesahuciada retaguardia y reactivó las exiguas fuerzas del Ejército Popular de la República.

Como indicaba su propio lema, la resistencia a ultranza propugnada desde el primer momento por Negrín era una estrategia política y militar defensiva y vertebrada sobre dos expectativas de horizonte alternativas ya comentadas en otro apartado de esta obra. En el mejor de los casos, había que resistir al enemigo hasta que estallase en Europa el conflicto entre las democracias occidentales y el Eje ítalo-germano, obligando a aquéllas a asumir como propia la causa republicana y acudir en su ayuda. En el peor de los casos, si ese conflicto europeo no llegaba a estallar, había que resistir para conservar una posición de fuerza disuasoria que pudiera obtener del enemigo las mejores condiciones posibles en la negociación de la paz o de la capitulación. En ambas contingencias, dicha estrategia implicaba dos exigencias: en el

plano exterior, exigía conservar intacto el único y vital apoyo militar y diplomático disponible para la República (el que prestaba la Unión Soviética); en el plano interno, imponía la colaboración inexcusable con el reforzado PCE y su integración como uno de los pilares de la resistencia republicana.

Fue básicamente en este ámbito interno donde la estrategia política formulada por Negrín acabó naufragando irremisiblemente, incapaz de frenar el sistemático deterioro de las posiciones militares y de la moral política del bando republicano. De hecho, a lo largo del fatídico año de 1938, la sucesión continua de graves derrotas militares y el fracaso de todas las previsiones de ayuda franco-británica tuvieron su reflejo inmediato en un deterioro de las condiciones de vida material en la retaguardia (sobre todo en el plano alimentario) que afectó hondamente a la moral de la resistencia popular y militar.

En esa coyuntura progresivamente deteriorada, la tensión latente entre los partidarios de la resistencia a ultranza y los partidarios de ensayar la mediación internacional para capitular con condiciones alcanzó puntos de ruptura crítica. Dicha tensión no sólo enfrentaba a los comunistas con las restantes fuerzas políticas republicanas, aunque todas ellas compartieran un mayor o menor recelo frente a sus expeditivos métodos, su sectarismo y sus fines políticos últimos (puestos de manifiesto en mayo de 1937 con el secuestro y asesinato por agentes soviéticos de Andreu Nin, líder del POUM). Era una tensión que también fracturaba internamente a todas las fuerzas políticas en sectores negrinistas y antinegrinistas, en particular al ya muy debilitado movimiento socialista^[17].

Fue precisamente durante ese año crítico de 1938 cuando tuvo lugar en el PSOE la transcendental quiebra de la amistad política y personal entre Negrín y Prieto. Éste, cesado por su derrotismo de la cartera de Defensa en el reajuste ministerial de abril, pasó a sumarse a Largo Caballero y Besteiro en su denuncia de la política gubernamental por considerarla favorable a los comunistas y opuesta a la idea de mediación internacional. En ese contexto de fractura interna del movimiento socialista, Negrín ofreció ante la Comisión Ejecutiva del PSOE en marzo de 1938 las razones que alentaban su línea política si se descartaba la alternativa de una rendición incondicional ante Franco:

Bueno, voy a decir ante ustedes, oficialmente, lo que en el orden particular e íntimo he manifestado a alguien: No puedo prescindir de los comunistas, porque representan un factor muy considerable dentro de la política internacional y porque tenerlos alejados del Poder sería, en el orden interior, un grave inconveniente; no puedo prescindir de ellos, porque sus correligionarios

son en el extranjero los únicos que eficazmente nos ayudan, y porque podríamos poner en peligro el auxilio de la URSS, único apoyo efectivo que tenemos en cuanto a material de guerra^[18].

Efectivamente, ésas eran las razones de la política de resistencia a ultranza formulada por Negrín. Y nadie, ni siquiera Prieto o Azaña, menos aún Largo Caballero o la CNT, pudo ofrecer una alternativa política viable a la misma si no era la rendición incondicional ante Franco, totalmente descartada por el temor a las represalias anunciadas para los vencidos y por el vivo conocimiento de la dura represión ejercida contra los desafectos en la retaguardia enemiga. Así lo reconoció amargamente Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes y partidario de la mediación inmediata, al propio Azaña en septiembre de 1938: «Negrín es insustituible ahora». Así lo confesó Negrín a su correligionario y amigo Juan Simeón Vidarte, con palabras bien reveladoras de su plena conciencia de los problemas planteados por la división interna republicana y el crecimiento de la influencia comunista:

¿Es que usted cree que a mí no me pesa, como al que más, esta odiosa servidumbre? Pero no hay otro camino. Cuando hablo con nuestros amigos de Francia, todo son promesas y buenas palabras. Después empiezan a surgir los inconvenientes y de lo prometido no queda nada. La única realidad, por mucho que nos duela, es aceptar la ayuda de la URSS, o rendirse sin condiciones. (...) ¡Qué más puedo hacer! La paz negociada siempre; la rendición sin condiciones para que fusilen a medio millón de españoles, eso nunca^[19].

A la postre, el acierto general de esa evaluación política se estrelló contra el hecho evidente del cansancio popular por las privaciones ocasionadas por la guerra, del desánimo por la falta de ayuda de las democracias occidentales y de la consiguiente descomposición de la moral política de resistencia en amplios sectores republicanos. Pese a esos fracasos (o quizá debido a su indomable voluntad de rectificarlos), la consideración política y personal de Negrín entre las cancillerías democráticas siguió siendo muy alta, como demuestran los informes confidenciales de agentes diplomáticos y militares británicos en la zona republicana. Por ejemplo, en el fatídico mes de septiembre de 1938, poco antes de la firma del Pacto de Múnich, un representante británico remitía a Londres un retrato bastante favorable de Negrín en el que se le atribuía la capacidad de resistencia demostrada por la República ante los últimos reveses militares:

Llegados a este punto, es necesario mencionar otro factor en la situación política: la personalidad del presidente del consejo de ministros, señor Negrín. La rápida recomposición del gobierno que ha tenido lugar en los últimos meses se debe en gran medida a él. Es un hombre viril y extremadamente capaz de unos 45 años, que parece tener un ascendiente completo sobre el consejo de ministros. Su carácter es excepcional y posiblemente sea el «hombre del destino» de España. Su «casa espiritual» es Alemania y sus dioses son Mussolini y Lenin. Además de ser jefe del gobierno también es ministro de Defensa, con todas las fuerzas del Estado bajo su control. En

este ámbito, está convirtiendo rápidamente al Ejército y a las fuerzas aéreas en cuerpos altamente organizados. Es bastante implacable. El único factor de debilidad en la situación radica en la falta de suministros alimenticios, especialmente en Madrid. (...) Se supone que sus inclinaciones son hacia la extrema izquierda, pero las etiquetas dicen poco en este país. Por las razones que ya he mencionado, resulta conveniente para mucha gente en la actualidad declararse comunista, sean las que sean sus verdaderas convicciones. Es difícil saber cuál sería la reacción de Negrín ante un golpe de Estado hacia la derecha del presidente de la República. Si tuviera alguna perspectiva de apoyo internacional de las democracias, supongo que lo aceptaría. Si no, pudiera ser que se viera forzado, incluso contra su voluntad, a establecer algún tipo de dictadura de izquierdas bajo su dirección personal^[20].

El prestigio y consideración personal de Negrín quedan igualmente reflejados en otro informe diplomático de finales de 1938. El 30 de octubre, el jefe del gobierno se entrevistó con el encargado de negocios británico ante la República y le expuso con toda sinceridad su actitud hacia el comunismo en un intento desesperado por lograr la ayuda militar franco-británica para evitar la inminente ofensiva franquista sobre Cataluña. Según la crónica reservada remitida por su interlocutor a las autoridades de Londres:

El señor Negrín estuvo muy cordial y extremadamente franco. Quizá el aspecto más interesante de la conversación fue la sincera exposición de su actitud respecto al comunismo. Su afiliación política siempre ha sido algo sospechosa y algunos de sus propios ministros no están seguros de cuáles son sus verdaderas simpatías. En esta oportunidad, no hubo dudas en la declaración. Dijo que el comunismo no era una ideología que se adaptase bien al pueblo español. Los objetivos y la política del gobierno español mostraban cuán lejos estaban sus simpatías del comunismo. Mencionó que el Partido Comunista había sugerido afiliarse a su propia rama del Partido Socialista y que ésta lo había rechazado. Sin embargo, el gobierno tenía que apoyarse en gran medida en el Partido Comunista no sólo porque era la fuerza mejor organizada en la etapa inicial de la guerra civil, sino también porque Rusia había sido el único país que había dado al gobierno español una ayuda realmente efectiva. El Partido Comunista era todavía el más entusiasta y enérgico de los apoyos del gobierno. En estas circunstancias, la eliminación de la influencia comunista no reportaba ninguna ventaja para el gobierno. Pero el señor Negrín afirmó que él podría suprimir, y lo haría, al Partido Comunista en una semana si pudiera obtener los suministros requeridos de Francia e Inglaterra. Bromeando seriamente, detalló los suministros que necesitaba. Aparentemente, el precio de la democracia es el siguiente: 500 000 rifles, 12 000 ametralladoras, 1600 cañones, 200 tanques medios y ligeros, 300 bombarderos y 300 cazas. Con estos suministros y la munición necesaria, podría terminar la guerra en abril^[21].

Sin embargo, ni esas gestiones ni otras similares emprendidas por Negrín ante el gobierno francés lograron un cambio fehaciente en la política de No Intervención de las democracias occidentales. Para entonces, también había fracasado otra iniciativa secreta llevada a cabo por Negrín directamente ante representantes del gobierno alemán para lograr su apoyo a una hipotética mediación.

A mediados de agosto de 1938, cuando la ofensiva republicana en el Ebro había demostrado una capacidad de resistencia militar sorprendente, Negrín viajó a Zúrich, nominalmente para participar en un congreso internacional de

fisiología. La presencia coetánea en Ginebra del duque de Alba, agente diplomático de Franco en Gran Bretaña, alentó los rumores sobre el propósito de Negrín de aprovechar la situación militar para negociar la paz con el mismo. En realidad, consciente de la negativa franquista a cualquier compromiso, el viaje del jefe del gobierno pretendía sondear ante un emisario alemán, el conde de Welczeck, embajador en París, la disposición del Tercer Reich a favorecer negociaciones de paz y mediación. El resultado de la entrevista fue negativo y convenció a Negrín de que la única alternativa para la República era resistir todo lo posible y no dar señales de debilidad mediante nuevos sondeos análogos^[22].

La reiterada inhibición franco-británica ante la suerte de la República, junto con el comienzo de la triunfal ofensiva franquista sobre Cataluña a finales de diciembre de 1938, obligaron a Negrín a considerar en adelante la política de resistencia como una mera estrategia disuasoria para conseguir una capitulación con mínimas condiciones y garantías. Ya a raíz de la firma del Pacto de Múnich había confesado con resignación a sus íntimos: «¡Garantías para una paz honrosa es lo único que estoy buscando!»^[23].

En realidad, desde hacía tiempo, en estricto secreto para no desmoralizar a la opinión pública y a los combatientes, había previsto la necesidad de organizar una emigración masiva de republicanos significados que pudieran así librarse de la persecución y posiblemente de la muerte a manos de las autoridades franquistas. En septiembre de 1937 incluso había encomendado a Vidarte una misión muy confidencial, «tan delicada que la ignora hasta Azaña». Se trataba de ir a México, único país abiertamente favorable a la causa republicana, para solicitar del presidente Lázaro Cárdenas su permiso para acoger a un nutrido número de exiliados republicanos en caso de necesidad. La confidencialidad de la gestión, según Negrín, era de la máxima importancia porque de ella dependía su misma viabilidad, ya que si se hiciera pública su existencia «los que están batiéndose en el frente (...) o tirarían las armas o arrastrarían por las calles al gobierno». Vidarte recordaría en sus memorias su entrevista con Cárdenas, que habría de resultar tan fructífera llegado el trágico momento y ocasión:

Pasamos después al verdadero objeto de mi viaje: la ayuda que en caso de perder la guerra podríamos esperar de México. Procuré recordar las mismas palabras que el doctor Negrín había empleado conmigo en Ginebra al encomendarme esta misión: Nuestro Ejército, curtido tras un año de lucha en el dolor y el sacrificio, estaba dispuesto a continuarla hasta conseguir la victoria, pero nosotros no luchábamos solamente contra el ejército sublevado, sino con Alemania, Italia y Portugal y más aún contra la indiferencia y la perfidia de los países democráticos. Un hombre de Estado, y el presidente Negrín lo era, no podía encerrarse en una sola política y no se podía descartar la posibilidad de una derrota. En ese caso iba a ser imposible para muchos millares de

republicanos poder vivir en España. En el caso de un destino adverso, el presidente Negrín quería saber hasta qué punto podría contarse con el señor presidente de México, para una emigración masiva^[24].

A la vista del imparable avance de la ofensiva franquista en Cataluña durante el mes de enero de 1939, Negrín dispuso que las magras fuerzas militares republicanas disponibles sirvieran como escudo protector de una retirada masiva relativamente ordenada y gradual hacia la frontera francesa. Al mismo tiempo, reiteró ante los gobiernos de Francia y Gran Bretaña su disposición a seguir resistiendo hasta el final a menos que el enemigo aceptara conceder garantías contra represalias indiscriminadas y permiso para «la evacuación de individuos comprometidos de la zona sur»^[25].

Como resultado de la primera iniciativa, el 9 de febrero de 1939, poco antes de la llegada de las tropas nacionalistas, más de 400 000 republicanos españoles (civiles y militares) cruzaron la frontera y entraron en Francia como exiliados políticos. En medio de la amargura y tristeza de la retirada, Negrín, que había supervisado el paso de las últimas unidades del Ejército, hizo una confesión muy significativa a Zugazagoitia, entonces secretario general del Ministerio de Defensa (ocupado por Negrín desde abril de 1938): «Esperemos que la segunda parte podamos llevarla a buen término con el mismo éxito»^[26].

Sin embargo, la prevista segunda parte de la operación no tendría lugar. El repliegue masivo y ordenado en la zona centro hacia los puertos mediterráneos para embarcar camino del exilio se revelaría un sueño frustrado. La pérdida de Cataluña había activado el proceso de descomposición moral e institucional en lo que restaba de territorio leal a la República, alentando a las heterogéneas fuerzas partidarias de negociar la paz y eliminar la influencia comunista del ámbito militar y político (que incluían a republicanos, militares profesionales, anarcosindicalistas y socialistas caballeristas tanto como besteiristas). Su último episodio fue la sublevación contra el gobierno de Negrín del coronel Casado en Madrid a principios de marzo de 1939, que provocó una breve pero sangrienta guerra civil entre negrinistas y antinegrinistas.

Con el triunfo de las fuerzas de Casado y la proscripción del PCE quedó barrida la viabilidad de una estrategia política que ya no tenía apoyos internos suficientes ni aparentes horizontes de apoyos externos inmediatos. Con dicho triunfo también se reveló ilusoria la alternativa de negociar con Franco otra cosa que no fuera la mera y simple rendición incondicional y sin garantías. Negrín lo había advertido a sus mandos militares, incluido Casado, en una

tensa reunión celebrada el 16 de febrero de 1939: «Como el enemigo no quiere pactar, la única solución es resistir»^[27].

El 31 de marzo de 1939, mientras Franco se disponía a emitir el parte anunciando su victoria total en la guerra civil, Negrín comparecía como legítimo jefe de gobierno ante la Diputación Permanente de las Cortes reunida en París. Su declaración fue una rotunda condena de la sublevación de Casado y una explicación sincera de la razón básica de su política de resistencia:

No hay diplomacia posible sin el respaldo de una acción decidida a vender cara su derrota, y se engañan los que esperan ayudas gratuitas aunque se trate de las naciones más amigas y mejor intencionadas. (...) Porque lo que yo he querido siempre es conseguir la paz. Pero la paz no se logra diciendo: yo me entrego o entrego a los que luchan conmigo. (...) ¿Resistir para qué? ¿Para entrar triunfalmente en Burgos? Nunca hemos hablado ni pensado en ello, señores, proclamar una política de resistencia implica confesar que no se cuenta con medios para aplastar al enemigo, pero que causas superiores obligan a luchar hasta lo último, y para ello es necesario estimular y alentar el ánimo bélico de los combatientes^[28].

La amarga tragedia de la derrota y el exilio no aminoró en absoluto la intensidad de las divisiones políticas entre los republicanos. Antes al contrario, la creciente soledad política del doctor Negrín empezó a revelarse en toda su amplitud, dada la negativa de la mayoría de las fuerzas políticas a reconocerle como jefe del gobierno en el exilio^[29].

El estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 aún complicó más la situación. Negrín decidió prestar su apoyo abiertamente al esfuerzo de guerra franco-británico contra Alemania y contra Italia, permaneciendo en París hasta la caída de Francia (junio de 1940) y pasando entonces a Londres como doble exiliado. Allí residió durante toda la contienda mundial, negándose a abandonar Europa y buscar refugio seguro en México, como hicieron una gran parte de los dirigentes republicanos. Esa decisión de apoyar a las democracias en el momento amargo de 1939 y 1940 provocó una situación bien reveladora de la falta de veracidad de la leyenda sobre el criptocomunismo de Negrín. Su actitud cosechó la hostilidad de los comunistas, quienes, tras la firma del pacto de no agresión germano-soviético de agosto de 1939, denunciaban el conflicto como una mera guerra interimperialista y se negaban a tomar parte en ella. Sólo después de la inesperada invasión nazi de la Unión Soviética en junio de 1941, los comunistas rectificaron su postura y revalidaron su antifascismo a la par que su simpatía por la figura del doctor Negrín^[30].

En agosto de 1945, al término de la guerra mundial con la derrota del Eje, Negrín intentó concitar el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas del exilio para ofrecer un frente unitario republicano que pudiera recabar el apoyo

de los gobiernos aliados contra la dictadura de Franco, aprovechando su desprestigio internacional y el fuerte rechazo que provocaba su reciente conducta de simpatía y apoyo al esfuerzo bélico ítalo-germano. En opinión de Negrín, sólo ese frente unido serviría como garantía ante Washington y Londres de la presencia de una alternativa de recambio al régimen franquista que no incurría en el riesgo de reanudar los horrores de la guerra civil.

Sin embargo, ante la imposibilidad de concitar el apoyo de todas las fuerzas políticas del exilio, Negrín dimitió de su cargo de jefe del gobierno de la República en el exilio ante la sesión plenaria de las Cortes reunidas en México el 17 de agosto de 1945. Para entonces, abrigaba la amarga sospecha de que los aliados occidentales victoriosos no iban a tratar de derribar al régimen del general Franco mediante sanciones militares, económicas o diplomáticas por temor a desatar una nueva guerra civil en España y a favorecer la expansión del comunismo en Europa occidental. En ese contexto de creciente frustración de las esperanzas republicanas, la escasa actividad política de Negrín acentuó aún más su carácter independiente y cosechó así mayores incomprensiones entre los círculos del exilio.

A principios del año 1948, ya en plena atmósfera de Guerra Fría y contra el parecer de los comunistas y todas las fuerzas republicanas, el doctor Negrín defendió públicamente (en carta al *New York Herald Tribune*) la inclusión de España en el Plan Marshall norteamericano para ayudar a la reconstrucción económica de Europa^[31]. Las razones de esa sorprendente decisión fueron explicadas por Negrín a un dirigente socialista afín a su línea política con las siguientes palabras: «Soñar con el restablecimiento de la República a través del hambre y del empobrecimiento de España es un error. (...) Ni con el Plan Marshall se le mantiene (a Franco en el poder), ni sin el plan se le echa»^[32].

Siguiendo esa misma orientación, Negrín dispuso que a su muerte (ocurrida el 12 de noviembre de 1956 por fallo cardíaco) su familia entregase a las autoridades españolas toda la documentación concerniente al envío de las reservas de oro a la Unión Soviética durante la guerra civil, con el fin de probar que había sido gastado íntegramente en aras del esfuerzo de guerra republicano. Se trataba de una última prueba de independencia que no fue bien recibida ni siquiera por los sectores del exilio más negrinistas. Los otros sectores se limitaron a declarar que era un acto de traición y reconocimiento del régimen de Franco. Por supuesto, las autoridades franquistas aceptaron de buen grado la documentación pero silenciaron que su contenido desmentía el socorrido mito propagandístico del oro español robado por los republicanos y despilfarrado en Moscú.

Así, de este modo tan progresivo, azaroso y complejo, se fue tejiendo la espesa malla de silencio, olvido e incomprensión que aún hoy sigue envolviendo en gran medida la figura política y humana de Juan Negrín, un científico devenido en político por la fuerza de la coyuntura histórica de su atribulado país.

EL ROSTRO HUMANO DE UN VENCEDOR

Si la elección de la figura humana que pudiera encarnar simbólicamente la España vencida ofrece algunas dudas y está abierta a varias posibilidades, no creemos que lo mismo pueda decirse en el caso del bando vencedor. Aquí, sin ninguna vacilación, la persona indicada como símbolo y emblema de la España victoriosa ha de ser Francisco Franco Bahamonde (Ferrol, 1893-Madrid, 1975), justamente intitulado como «Caudillo de la Victoria».

Las posibles alternativas a esa adscripción no son muchas ni de igual valor. No lo sería el arzobispo Isidro Gomá, cardenal primado que consagra el esfuerzo bélico insurgente como una «Cruzada» y que recibe de manos de Franco su «espada de la Victoria» en solemne *Te Deum* en agradecimiento a Dios por la Victoria en mayo de 1939 en Madrid^[1]. Tampoco lo sería ninguno de los líderes políticos de las fuerzas derechistas que apoyaron la sublevación y colaboraron en la construcción del nuevo régimen, aunque sólo fuera porque las primeras figuras murieron antes o durante la contienda o cayeron en el ostracismo y el retiro forzado: el monárquico José Calvo Sotelo, el falangista José Antonio Primo de Rivera, el cedista José María Gil-Robles, el carlista Manuel Fal Conde, etc.

Y resulta dudoso que pudiera considerarse emblema y símbolo de la victoria a alguno de los combatientes anónimos en filas franquistas que evitaron la muerte y preservaron la vida. Por ejemplo, no parece que pueda serlo el salmantino Julián Rubio López, un joven teniente coronel en la treintena que estaba al mando del aeródromo de León, secundó la sublevación en julio de 1936 y tuvo una larga y notoria carrera profesional hasta su jubilación en 1966 como jefe de la Defensa Aérea^[2]. Tampoco parece que pueda serlo Carlos Saussol Palomo, un joven abogado y terrateniente extremeño que, como hijo de «rico de pueblo», fue detenido por las milicias al inicio de la guerra, encarcelado en Mérida, liberado por las tropas insurgentes en su avance hacia Madrid y convertido en ferviente nacionalista

el resto de su vida «porque Franco nos devolvió el honor» (como le confesó a su sobrino y ahijado con posterioridad^[3]).

El futuro Caudillo de la Victoria había nacido en la localidad gallega de El Ferrol el 4 de diciembre de 1892, en el seno de una familia de clase media baja ligada desde antaño a la administración de la Armada. Fue bautizado con los nombres de Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde y era el segundo hijo varón del matrimonio formado por Nicolás Franco Salgado-Araujo y Pilar Bahamonde Pardo de Andrade, que tuvo otros tres hijos (el mayor, Nicolás, la tercera, Pilar, y el pequeño, Ramón). El solitario y tímido Francisco, llamado «cerillito» por sus compañeros de colegio debido a su delgadez, creció en esa pequeña ciudad provinciana (20 000 habitantes) bajo el influjo de su conservadora y piadosa madre y distanciado de un padre mujeriego y librepensador. Tras fracasar en su intento de convertirse en oficial de marina (debido a las restricciones de plazas derivadas de la pérdida de la flota en la guerra hispano-norteamericana de 1898), y después de que su padre abandonara definitivamente el hogar familiar, Franco consiguió entrar en la Academia de Infantería de Toledo en 1907, cuando contaba con catorce años de edad. En Toledo y entre militares se labró gran parte de su carácter y de sus ideas políticas básicas^[4].

El Ejército, con su rígida estructura jerárquica de mandos y la certidumbre de las órdenes, la obediencia y la disciplina, cubrió por completo sus necesidades afectivas y proporcionó al hasta entonces tímido muchacho una nueva y segura identidad personal y pública. En adelante no dudaría nunca sobre cuál era su profesión y vocación: «Soy militar»^[5]. Al mismo tiempo, bajo el trauma del Desastre colonial de 1898, en pleno ascenso de la conflictividad sociopolítica en el país y en el fragor de la nueva y cruenta guerra librada en el norte de Marruecos, Franco asumió durante sus años como cadete todo el bagaje político e ideológico de los militares de la Restauración. Ante todo, hizo suyo un exaltado nacionalismo español unitarista e historicista, nostálgico de las glorias imperiales pretéritas, receloso de un mundo exterior que había asistido impasible al desigual enfrentamiento con el coloso americano en el 98, y sumamente hostil a los incipientes movimientos regionalistas y nacionalistas periféricos que osaban poner en duda la unidad patria. El complemento a ese nacionalismo era una concepción militarista de la vida política y del orden público que hacía del Ejército una institución pretoriana virtualmente autónoma del poder civil y, en ocasiones de emergencia interna o exterior, superior al mismo por su

condición de «espina dorsal de España», «cimiento más seguro de la paz pública» y «base más sólida del bienestar y la felicidad de la patria».

Como directo resultado de esa teoría nacional-militarista y de las brutales experiencias bélicas personales en Marruecos, gran parte de los militares españoles (los llamados «africanistas» por haber prestado servicio en el Ejército de África) fueron desarrollando una decidida mentalidad autoritaria y antiliberal, culpando a esta ideología, al Parlamento y al sistema de partidos de la prolongada decadencia sufrida por España desde la Guerra de Independencia de 1808^[6].

Tras finalizar sus estudios en Toledo con un mediocre resultado (sólo logró el número 251 de una promoción de 312 cadetes) y después de un breve período de servicio en Ferrol, Franco solicitó y obtuvo en 1912 su traslado al Protectorado español en Marruecos. Las operaciones de conquista y ocupación de aquel territorio se dilatarían desde 1908 hasta 1926 y cobrarían la vida de más de 17 000 soldados, jefes y oficiales del Ejército español. Durante su etapa en Marruecos, donde permanecería más de diez años de su vida (sólo interrumpidos por un corto período de destino en Oviedo entre 1917 y 1920 y de nuevo en 1923), Franco se reveló como un oficial valiente y eficaz, obsesionado con la disciplina y el cumplimiento del deber: el arquetipo de oficial «africanista», tan distinto de la burocracia militar sedentaria que vegetaba en los tranquilos cuarteles peninsulares. Esas cualidades y el arrojo mostrado en el combate (sobrevivió a una herida grave en 1916) motivaron sus rápidos ascensos «por méritos de guerra» hasta convertirse en 1926 en el general más joven de Europa, a los treinta y tres años de edad. Para entonces, su nombre había adquirido cierta fama en la Península gracias a la publicación en 1922 de una pequeña obra en la que relataba sus experiencias bélicas como comandante de la recién creada Legión: *Marruecos. Diario de una bandera*^[7].

Su etapa africana, en el contexto de una despiadada guerra colonial y al mando de una fuerza de choque como era la Legión, reforzaron las sumarias convicciones políticas de Franco y contribuyeron en gran medida a deshumanizar su carácter. No en vano, combatiendo o negociando con los rebeldes jefes cabileños marroquíes, el joven oficial aprendió bien las tácticas políticas del «divide y vencerás» y la eficacia del terror (el que imponía la Legión) como arma militar ejemplarizante para lograr la parálisis y sumisión del enemigo. Además, su dilatada experiencia marroquí confirmó en la práctica el supuesto derecho del Ejército a ejercer el mando por encima de las lejanas y débiles autoridades civiles de la Península. De hecho, a partir de

entonces, Franco siempre entendería la autoridad política en términos de jerarquía militar, obediencia y disciplina, refiriéndose a ella como «el mando» y considerando poco menos que «sediciosos» a los discrepantes y adversarios. En 1939, ya victorioso en la guerra civil, recordaría la influencia de su época marroquí en su formación y la de todos los oficiales africanistas del Ejército español:

Mis años en África viven en mí con indecible fuerza. Allí nació la posibilidad de rescate de la España grande. Allí se formó el ideal que hoy nos redime. Sin África, yo apenas puedo explicarme a mí mismo, ni me explico cumplidamente a mis compañeros de armas^[8].

El ascenso a general y su posterior nombramiento (1927) como director de la nueva Academia General Militar de Zaragoza marcaron un cambio notable en la trayectoria vital de Franco. A partir de entonces, el arriesgado y valiente oficial de Marruecos se iría convirtiendo en un jefe militar cada vez más cauto, prudente y calculador, muy consciente de su propia proyección pública y muy celoso de sus intereses profesionales y del avance de su carrera. Sin duda alguna, su matrimonio en octubre de 1923 con Carmen Polo y Martínez Valdés (1902-1987), una piadosa y altiva joven de la oligarquía urbana ovetense, reforzó y acentuó esa conversión y sus previas inclinaciones conservadoras y religiosas. El mismo efecto parece haber tenido el nacimiento en septiembre de 1926 de su única y adorada hija Nenuca (Carmen Franco Polo).

En cualquier caso, en esta época de su vida, Franco permaneció al margen de la política activa y cotidiana desarrollada en el seno del sistema parlamentario liberal de la Restauración borbónica. Pero, al igual que casi todos los jefes y oficiales del Ejército, se mostró muy bien dispuesto hacia la dictadura militar implantada por Primo de Rivera en 1923 y fue gratificado por ella con el prestigioso cargo de director de la Academia de Zaragoza. Durante ese período siguió contando además con el favor público del rey Alfonso XIII, que le honró con su nombramiento como gentilhombre de cámara y actuó como padrino de su boda. Fue por aquellos años cuando comenzó a recibir y devorar la literatura anticomunista y autoritaria enviada por la *Entente Internationale contre la Troisième Internationale*, un organismo formado por antibolcheviques rusos y ultraderechistas suizos con sede en Ginebra y dedicado a alertar a personajes influyentes sobre el peligro de la conspiración roja universal. Esa literatura maniquea sería clave en la formación y evolución de las fantásticas y obsesivas ideas de Franco sobre el poder oculto y disgregador de la masonería y la existencia de una

conspiración universal masónico-bolchevique contra España y la fe católica^[9].

Dados esos antecedentes, Franco recibió con preocupación la caída de la monarquía y la instauración de la República. No en vano, ambos procesos iban a suponer un bache notable en la hasta entonces fulgurante carrera del general favorito de Alfonso XIII.

Durante el período de gobierno de Azaña, la cautela y *retranca* gallega del general Franco logró evitar todo conflicto abierto con las nuevas autoridades sin dejar de marcar sus distancias y alejamiento del régimen instaurado: «Yo jamás di un viva a la República», recordaría orgulloso en 1964^[10]. El cierre de la Academia de Zaragoza, la revisión de sus ascensos durante la dictadura, la campaña por las responsabilidades políticas en esa etapa, la reforma de la plantilla militar y la inclinación progresista y anti-clerical del gobierno azañista reforzaron necesariamente ese alejamiento de Franco. Sin embargo, no por ello se volcó a conspirar temerariamente contra el mismo, al modo como lo haría su superior, el general Sanjurjo, cabeza del frustrado golpe militar antirrepublicano del 10 de agosto de 1932. Esa prudencia y fría cautela que ya empezaba a ser proverbial (su propia hermana reconocería: «Astucia y cautela definen su carácter») motivó el cáustico comentario de Sanjurjo sobre su antiguo subordinado: «Franquito es un cuquito que va a lo suyito». Lo que no impedía que lo considerase el mejor jefe militar español del momento: «no es que sea Napoleón, pero dado lo que hay...». Quizá por, eso el propio Azaña estimase que «Franco es el más temible» de los potenciales golpistas militares^[11].

Franco había votado por la CEDA en las elecciones de 1933 al sentirse identificado con su ideario católico-conservador y con su pragmática estrategia política posibilista de reforma legal de la República para hacerla compatible con sus principios. Por eso mismo contempló con agrado y alivio el cambio político acaecido, que habría de modificar sus expectativas profesionales y reducir su repugnancia hacia el régimen republicano. De hecho, bajo los gobiernos radicales y radical-cedistas de 1934 y 1935, Franco se convirtió en el general preferido de las autoridades y en el oficial más distinguido del Ejército español.

Por esa razón, en octubre de 1934, el gobierno encomendó directamente a Franco la tarea de aplastar la revolución asturiana con todas las fuerzas militares a sus órdenes, incluyendo el traslado y despliegue de su amada Legión en las operaciones. Esa coyuntura crítica proporcionó a un Franco ya claramente ambicioso su primer y grato contacto con el poder estatal

cuasiomnímodo. No en vano, en virtud de la declaración de estado de guerra y de la delegación de funciones por parte del ministro, el general fue durante poco más de quince días un auténtico dictador temporal de emergencia, controlando todas las fuerzas militares y policiales en lo que percibía como una lucha contra la revolución planificada por Moscú y ejecutada por sus agentes infiltrados y españoles traidores. La aplastante victoria que logró en Asturias no sólo le convirtió en el héroe de la opinión pública conservadora sino que reforzó su liderazgo moral sobre el cuerpo de oficiales. Su nombramiento en mayo de 1935 por Gil-Robles como jefe del Estado Mayor Central cimentó ese liderazgo de un modo casi incontestable.

La apretada victoria del Frente Popular en febrero de 1936 motivó la primera tentación golpista seria por parte de Franco, que buscó la autorización del gobierno y del presidente de la República para declarar el estado de guerra. La tentativa se frustró por la resistencia de las autoridades, la falta de medios y la decisión del cauteloso jefe del Estado Mayor de no actuar hasta tener casi completa seguridad de éxito: «El Ejército no tiene aún la unidad moral necesaria para acometer esa empresa»^[12]. En consecuencia, Franco tuvo que resignarse a contemplar el retorno al poder del reformismo azañista, que como medida preventiva ordenó su traslado lejos de Madrid, a la importante pero distante comandancia militar de las islas Canarias.

En virtud de su jerarquía e influencia, Franco estuvo en contacto desde el primer momento y con su habitual prudencia con la amplia conjura que se estaba fraguando en el seno del Ejército bajo la dirección técnica del general Mola desde Pamplona, cuyo plan consistía en orquestar una sublevación simultánea de todas las guarniciones militares para tomar el poder en pocos días y previo aplastamiento enérgico de las posibles resistencias. Síntoma elocuente del prestigio asociado entonces al nombre de Franco y de los temores sobre su sincera lealtad republicana son las palabras que le dedicó Indalecio Prieto en un resonante y profético discurso en Cuenca el 1 de mayo de 1936:

No he de decir ni media palabra en menoscabo de la figura del ilustre militar. Le he conocido de cerca, cuando era comandante. Le he visto pelear en África; y para mí, el general Franco (...) llega a la fórmula suprema del valor, es hombre sereno en la lucha. Tengo que rendir este homenaje a la verdad. Ahora bien, no podemos negar (...) que entre los elementos militares, en proporción y vastedad considerables, existen fermentos de subversión, deseos de alzarse contra el régimen republicano, no tanto seguramente por lo que el Frente Popular supone en su presente realidad, sino por lo que, predominando en la política de la nación, representa como esperanza para un futuro próximo. El general Franco, por su juventud, por sus dotes, por la red de sus amistades en el ejército, es hombre que, en momento dado, puede acaudillar con el máximo de probabilidades —todas las que se derivan de su prestigio personal— un movimiento de este género^[13].

Las vacilaciones de Franco para comprometerse definitivamente en la conjura procedían tanto de su temor a las consecuencias de un fracaso («No contamos con todo el Ejército») como de su tenue esperanza de que el deterioro de la situación pudiera ser atajado legalmente y con menos riesgos y costes. En cualquier caso, logró de sus compañeros de armas que el hipotético levantamiento no tuviera perfil político definido (ni monárquico ni de otro tipo) y fuera «únicamente por Dios y por España»^[14].

Sin embargo, ya fuertemente impresionado por el movimiento huelguístico de mayo y junio de 1936, las dudas de Franco que tanto enervaban al resto de conspiradores fueron barridas tras el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio. Asumiendo que ese magnicidio demostraba que el gobierno republicano carecía de autoridad real y que el poder estatal estaba abandonado en la calle, Franco se preparó para cumplir su función dentro del plan golpista: dominar las islas Canarias y pasar después a Marruecos para ponerse al frente de las mejores y más aguerridas tropas del Ejército español.

Apenas iniciada la sublevación en Marruecos, el 18 de julio de 1936 Franco cumplió su cometido en los planes diseñados y, antes de trasladarse al Protectorado, impuso el estado de guerra en las islas Canarias y sofocó toda resistencia con mano férrea. A tono con la vieja tradición militarista y pretoriana, su bando declarativo de la ley marcial afirmaba que «la situación de España es cada día más crítica» porque «la anarquía reina en la mayoría de sus campos y ciudades» y proliferan «huelgas revolucionarias de todo orden que paralizan la vida de la Nación». En consecuencia, «El Ejército, la Marina y fuerza de orden público se lanzan a defender la Patria» y a restablecer la «paz, fraternidad y justicia en todas las regiones». La advertencia final no era gratuita: «La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de la resistencia que se ofrezca»^[15].

Con la misma mezcla de cautela y decisión que había demostrado durante sus años de oficial y general, por si las cosas iban mal había embarcado previamente a su mujer e hija con destino a Francia (de donde no regresarían hasta septiembre), se hizo con un pasaporte diplomático y rasuró su bigote para pasar inadvertido en el necesario viaje en el avión *De Havilland Dragon Rapide* desde Las Palmas hasta Tetuán^[16]. Una vez llegado a Marruecos (tras haber pernoctado de incógnito en zona francesa), se instaló en la Alta Comisaría y tomó a su cargo la dirección de la insurrección con viva y contagiosa energía, como demostró su arenga radiofónica del día 19 de julio a todos los militares sublevados: «Fe ciega, no dudar nunca, firme energía sin vacilaciones, porque la Patria lo exige. El Movimiento es arrollador y ya no

hay fuerza humana para contenerlo». Tuvo ocasión inmediata de demostrar su resolución en una materia personal difícil: informado de que su primo carnal y amigo de la infancia, el comandante de aviación Ricardo de la Puente Bahamonde, había sido condenado a muerte por tratar de resistir el golpe en el aeródromo de Tetuán, Franco no hizo nada para salvarlo^[17]. Iba a ser la primera cuota de sangre familiar exigida por la guerra y no sería la última.

El relativo equilibrio de fuerzas logrado en la Península y la simultánea desaparición de Sanjurjo sentaron las bases para el fulgurante ascenso de Franco hasta convertirse indiscutiblemente en la principal cabeza reconocida de la sublevación. En gran medida, él mismo se labró su reconocimiento al emprender con audacia amplias gestiones internacionales destinadas a obtener ayuda militar y financiera para trasladar sus tropas a Sevilla y proseguir las operaciones militares hasta la conquista de Madrid (cuya ocupación conllevaba el reconocimiento internacional por su condición de capital). No en vano, el 19 de julio Franco iniciaba sus reiteradas demandas de apoyo ante Italia y Alemania (por vía telegráfica y mediante el envío de emisarios personales y confidenciales). Como hemos visto, sus gestiones tuvieron un éxito crucial: Hitler y Mussolini respondieron afirmativamente a sus demandas el 25 y el 28 de julio de 1936, respectivamente, sumándose así al apoyo logístico que la dictadura portuguesa de Salazar había prestado desde el primer momento.

Con el apoyo firme ítalo-germano, desde principios de agosto de 1936 las tropas de Franco aerotransportadas desde Marruecos iniciaron una fulgurante marcha hacia Madrid por la ruta de la Plata y el valle del Tajo que contrastaba con el estancamiento de las fuerzas de Mola en la sierra madrileña de Guadarrama y la parálisis de los efectivos de Queipo de Llano en Andalucía: Badajoz fue ocupado el 14 de agosto; el sitiado Alcázar de Toledo defendido por el coronel Moscardó fue liberado el 28 de septiembre; y el 4 de noviembre las columnas alcanzaban las afueras de Madrid. Instalado primero en Sevilla (en el Palacio de la marquesa de Yanduri) y luego en Cáceres (Palacio de los Golfines de Arriba), Franco dirigió en persona todas las operaciones militares y decidió el arriesgado desvío de tropas hacia Toledo para conseguir la simbólica victoria de liberar el Alcázar, una medida que le iba a proporcionar réditos políticos y propagandísticos pero que retrasaría la llegada a Madrid casi un mes y proporcionaría un tiempo precioso a los republicanos para fortificar la ciudad e iniciar la militarización de sus milicias^[18].

La conducción de la guerra no le impidió atender los acuciantes problemas políticos y diplomáticos planteados por la situación bélica, para los que contaba con un pequeño equipo en el que destacaba como principal asesor su hermano mayor, Nicolás Franco, los generales Millán Astray y Kindelán, el periodista Luis Bolín y el diplomático José Antonio de Sangróniz (a los que se sumaría desde finales de septiembre el comandante Lorenzo Martínez Fuset, que había regresado de Francia en compañía de Carmen Polo y de su hija).

A finales de septiembre de 1936, los triunfos militares cosechados por Franco y la expectativa de un próximo asalto final sobre Madrid plantearon a los generales la necesidad de concentrar la dirección estratégica y política en un mando único para aumentar la eficacia del esfuerzo de guerra. Una mera situación de fuerza como la representada por la junta de generales constituida en Burgos al principio de la sublevación no podía prolongarse sin riesgos internos y diplomáticos. En dos reuniones sucesivas celebradas en un aeródromo próximo a Salamanca, el 21 y 28 de septiembre, los miembros de la Junta de Defensa Nacional decidieron elegir a Franco (con la única reserva del general Cabanellas) como «Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire» y «Jefe del Gobierno del Estado Español», confiriéndole expresamente «todos los poderes del Nuevo Estado» (según rezaba el decreto publicado en el *Boletín Oficial del Estado* del 30 de septiembre).

El 1 de octubre, tras haber recibido el traspaso de poderes de manos de la Junta en la Capitanía General de Burgos, en su primera decisión política firmada únicamente como «Jefe del Estado», Franco creaba una Junta Técnica del Estado encargada de asegurar las funciones administrativas hasta ver «dominado todo el territorio nacional», sometida en sus dictámenes «a la aprobación del Jefe del Estado». Poco después se ponía en marcha una campaña de propaganda con las primeras referencias públicas al Jefe del Estado como «Caudillo de España» y las consignas análogas de obligada inclusión en la prensa: «Una Patria, un Estado, un Caudillo»; «Los Césares eran generales victoriosos»^[19].

El encumbramiento político de Franco significaba la conversión de la junta militar colegiada en una dictadura militar de carácter personal, con un titular individual investido por sus compañeros de armas como representante absoluto del único poder imperante en la España insurgente. Significativamente, Franco exclamó tras su elección: «Éste es el momento más importante de mi vida»^[20]. Y en su primer discurso público de

aceptación del cargo en la Capitanía de Burgos ya anunció con rotundidad tanto su estilo como sus básicos propósitos políticos:

Ponéis en mis manos a España. Mi mano será firme, mi pulso no temblará y yo procuraré alzar a España al puesto que le corresponde conforme a su Historia y que ocupó en épocas pretéritas^[21].

No cabía duda de que sus títulos para el cargo eran superiores a los de sus potenciales rivales. Por esa asombrosa suerte que Franco tomaba como muestra de favor de la Divina Providencia, habían desaparecido los políticos (Calvo Sotelo y José Antonio) y generales (Sanjurjo y Goded) que hubieran podido disputarle la preeminencia pública. A los restantes los superaba por jerarquía (caso de Mola), por triunfos militares (caso de Queipo) y por conexiones políticas internacionales (no en vano, había conseguido la vital ayuda ítalo-alemana y el reconocimiento como jefe insurgente de Hitler y Mussolini). Además, en función de su reputado posibilismo y neutralidad política, gozaba del apoyo tácito y preferencial de todos los grupos derechistas, que confiaban en poder inclinar a su favor sus designios políticos futuros. Esta neutralidad posibilista habría de ser precisamente una cualidad personal idónea que sabría utilizar con suma habilidad y notorio cinismo hasta el final de sus días: «Yo estoy aquí porque no entiendo de política ni hago política. Ése es el secreto»^[22].

Por si todos los méritos políticos y militares descritos fueran pocos, habida cuenta de su condición de católico ferviente, Franco gozaba también de la simpatía de la jerarquía episcopal, que no tardó en bendecirlo como *homo missus a Deo* y encargado providencial del triunfo de la Cruzada: «Caudillo de España por la Gracia de Dios». Según informó el cardenal Gomá al Vaticano tras su primera entrevista con Franco en diciembre de 1936, «se trata de un excelente hombre de gobierno» y a él ya «no podía pedir más» porque había garantizado que «no sólo respetará esta libertad de la Iglesia en el ejercicio de sus funciones propias, sino que le prestará su leal concurso»^[23]. Y ello pese a las reservas del Vaticano para admitir el carácter sacro del esfuerzo bélico franquista, reconocerlo como único gobierno legal en España y romper relaciones formales con sus enemigos.

El primado estaba en lo cierto: Franco iba a convertir a la Iglesia en el segundo de los pilares básicos de su régimen de poder personal (tras el Ejército) y compartía con Gomá su versión del catolicismo militante e integrista. Y no se trataba de un mero ropaje para consumo público utilizado por Franco (a pesar de los beneficios que le reportó en el plano interno y diplomático), sino de una convicción arraigada que le llevó a considerarse un nuevo «martillo de herejes» al estilo de Felipe II (y quizá por eso quiso

posteriormente remedar El Escorial con su faraónico templo del Valle de los Caídos). Lo demostró nada más trasladar su Cuartel General del Generalísimo a la ciudad de Salamanca. Con el beneplácito del obispo Pla y Deniel, se instaló en el palacio episcopal (justo a la sombra de la catedral) y reclutó al secretario privado de monseñor, el padre José María Bulart, como su confesor y capellán particular (cargo que desempeñaría hasta 1975). También comenzó a escuchar misa todas las mañanas y a rezar el rosario a diario en compañía de su familia^[24]. No deja de ser revelador de esta devoción católica tridentina que Franco tuviera consigo desde febrero de 1937 y durante toda la guerra, en su dormitorio, la reliquia del brazo incorrupto de santa Teresa de Jesús (la «santa de la Raza») y que nunca en lo sucesivo se desprendiera de ella ni siquiera durante sus viajes por todo el país^[25].

La inesperada prolongación de la guerra que supuso el fracaso en el asalto a Madrid obligó a Franco a centrar su atención en los problemas planteados por la consolidación de su régimen de autoridad personal omnímota. Tuvo la fortuna de contar para esa empresa con la ayuda política y jurídica de Serrano Suñer, llegado con su familia a Salamanca en febrero de 1937 después de haberse evadido de Madrid (donde habían sido asesinados sus dos hermanos mayores). El que pronto pasaría a ser denominado «Cuñadísimo», que había evolucionado políticamente hasta convertirse en ferviente falangista, se instaló a vivir en el propio palacio episcopal salmantino y fue desplazando rápidamente a Nicolás Franco en el papel de consejero político principal (hasta que éste, un año más tarde, fue enviado a Lisboa como embajador ante Salazar).

Con Serrano como mentor, Franco procedió a dar un crucial paso en la institucionalización de su «Nuevo Estado»: el 19 de abril de 1937, sin previa consulta ni negociación con los interesados, el Caudillo decretaba la unificación forzosa de todos los partidos derechistas, «bajo Mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional, que de momento se denominará Falange Española Tradicionalista y de las JONS» (FET y de las JONS) (*BOE* del día 20). El propósito de este «Gran Partido del Estado» era, «como en otros países de régimen totalitario», el de servir de enlace «entre la Sociedad y el Estado» y de divulgar en aquélla «las virtudes político-morales de servicio, jerarquía y hermandad»^[26]. La medida fue aceptada disciplinadamente por monárquicos, católicos y carlistas y sólo fue objeto de reservas por un reducido sector falangista fulminantemente aplastado con la destitución y encarcelamiento de Manuel Hedilla, hasta ese momento discutido jefe provisional.

A partir de entonces, el nuevo partido unificado, férreamente controlado por el Cuartel General, se convertiría en el tercer pilar institucional (tras el Ejército y la Iglesia) de un régimen caudillista propiamente calificable ya como «franquista». Serrano Suñer fue el arquitecto de esa transformación de «un Estado todavía campamental» y militarizado en un «régimen de mando único y de partido único que asumía algunas de las características externas universales de otros regímenes modernos». Por su inspiración y como expresión de la fascistización política que emprendía su marcha en aquellas fechas, FET tuvo mucho más de la antigua Falange que del viejo carlismo, la CEDA o el monarquismo: «en la elección de símbolos, terminología y cuerpo de doctrina, se dio preferencia al sector falangista»^[27].

Por eso se hizo oficial el saludo romano con el brazo en alto, el emblema del «Yugo y las Flechas», el canto del *Cara al Sol*, el uniforme de camisa azul falangista (con boina roja carlista) y los «26 puntos programáticos de la Falange» (excluyendo el 27: «Nos afanaremos por triunfar en la lucha con sólo las fuerzas sujetas a nuestra disciplina. Pactaremos poco»). También en la elección de los nuevos dirigentes predominó esa orientación fascistizante: Franco nombró a 6 falangistas y 4 carlistas para la primera Junta Política de FET (cuyo secretario era Serrano) y «sólo en 9 provincias le correspondió la jefatura del partido a un antiguo carlista, frente a las 22 donde lo ocupó un falangista»^[28].

La conversión de la dictadura militar personalizada en un régimen caudillista en proceso de fascistización se produjo a la par que el curso de la guerra sufría un cambio notable en la primavera de 1937^[29]. Tras el fracaso del asalto frontal a Madrid y vista la inutilidad de las ofensivas alrededor de la capital, desde abril de 1937 Franco dio un giro crucial a su estrategia bélica: abandonó la idea de obtener la victoria rápida con la conquista de la capital y optó por librar una larga guerra de desgaste y agotamiento en otros frentes de combate, con el objetivo de derrotar gradualmente a un enemigo mal abastecido mediante el sistemático quebrantamiento de su capacidad de resistencia gracias a la neta superioridad material y ofensiva garantizada por los suministros ítalo-germanos. El inmediato efecto de dicho giro estratégico fue el inicio de la potente ofensiva contra la bolsa republicana nortea, que iría siendo conquistada entre junio (caída de Bilbao el día 19) y octubre de 1937 (ocupación de Gijón el 21).

Para atender mejor la dirección de las operaciones, Franco decidió trasladar la sede del Cuartel General (cuyo nombre en clave era *Términus*) de Salamanca a Burgos, donde se instaló en el Palacio de la Isla durante el resto

de la contienda. Entre otras cosas porque la muerte en accidente aéreo del general Mola (ocurrida el 3 de junio de 1937) impuso un cambio visible en sus desplazamientos: decidió suprimir desde entonces los viajes en avión y hacerlos sólo por carretera o vía férrea.

La labor de institucionalización política del régimen bajo el modelo fascista italiano prosiguió su curso a medida que las victorias militares se sucedían durante la segunda mitad de 1937. La progresiva asunción del ideario fascista se apreció pronto en las declaraciones del Caudillo. En julio de 1937 había reconocido a la United Press que España «seguirá la estructura de los regímenes totalitarios, como Italia y Alemania»^[30]. Un mes más tarde, los nuevos estatutos de Falange demostraban la creciente hegemonía fascista sobre otros integrantes de la coalición antirrepublicana y proclamaban la doctrina del Caudillaje: «el Jefe asume en su entera plenitud la más absoluta autoridad. El Jefe responde ante Dios y ante la Historia».

En octubre de 1937, la constitución del Consejo Nacional de Falange (remedo del Gran Consejo Fascista de Italia), cuyos cincuenta miembros fueron nombrados libremente por Franco, revalidó el maridaje entre el Caudillo y el fascismo español. El primero se apoyaba en el partido para reforzar con una tercera fuente de legitimidad autónoma la base de su poder omnímodo, para disponer de un modelo político controlador de la sociedad civil, y para encuadrar la movilización de masas exigida por la guerra y los nuevos tiempos. El falangismo de camisa vieja (anterior a la unificación), privado de líder carismático y fracturado por rivalidades cantonales, asumía el liderazgo de un general victorioso a cambio de grandes parcelas de poder en el régimen y la expectativa de ampliarlas aún más en el futuro. Sin embargo, el proceso de fascistización en marcha en ningún momento puso en duda que el Ejército «era la base del poder ya creado» ni que el «Movimiento Nacional» era una coalición derechista unida por el «dogma negativamente común» del repudio de la República^[31]. Entre otras cosas, porque la situación militar y diplomática a fines de 1937 vetaba cualquier fisura en esa coalición.

No en vano, tras el triunfo en el norte, la prevista ofensiva sobre Madrid hubo de aplazarse para contener desde diciembre el éxito del inesperado ataque republicano sobre Teruel, desplazando la guerra hacia el frente de Levante. Y este contratiempo hacía imprescindible no arriesgar la neutralidad benévola del gobierno británico (recién demostrada con el envío de un agente oficial a Burgos) con medidas políticas que subrayaran la íntima afinidad franquista con el Eje ítalo-germano. De hecho, el nuevo agente, *sir* Robert Hodgson, remitió a Londres en enero de 1938 un retrato muy favorable sobre

el Caudillo español que revalidaba en los círculos oficiales británicos su imagen de «general apacible», prudente y conservador:

Tiene una personalidad muy atractiva. Es pequeño de estatura, probablemente no más de cinco pies y seis pulgadas; de complexión fuerte; y, según me informan, tiene 46 años. Su pelo, que era negro, se está volviendo de un gris metálico y forma bucles sobre sus sienes. Tiene una voz suave y habla de un modo apacible y rápido. Su encanto radica en sus ojos, que son de un castaño amarillento, inteligentes, vivaces y tienen una marcada bondad expresiva. (...) El general me dijo que cuando empezó el «Movimiento», estaba estudiando inglés. Sus lecciones fueron bruscamente interrumpidas. Luego expresó sus sentimientos de amistad hacia Inglaterra, mencionando la buena relación que había unido a ambos países en el pasado y haciendo breve referencia a la historia y la campaña del duque de Wellington. También habló de los lazos culturales que unían a tantos españoles con Inglaterra y de la favorable disposición del pueblo español hacia las cosas inglesas. Ambos países tenían una tradición marinera y su posición en el mapa era un vínculo entre ellos. (...) También me habló de las relaciones anglo-españolas de un modo que justifica la creencia de que el tono cordial empleado en la conversación era un síntoma verdadero de sus propios sentimientos^[32].

A finales de enero de 1938, una vez recuperado Teruel y en vísperas de la gran ofensiva militar sobre Levante que habría de dividir en dos mitades al territorio republicano, Franco ratificó su condición de árbitro supremo e inapelable de la coalición antirrepublicana mediante la formación de su primer gobierno regular. Se trataba de un ejecutivo de once miembros de composición equilibrada y con representantes de todas las «familias» políticas anteriores a la unificación: cuatro ministros militares (en Defensa, Orden Público, Industria y Asuntos Exteriores), tres falangistas en carteras «sociales» (con Serrano Suñer en Interior), dos monárquicos, un carlista y un técnico derechista sin clara adscripción política^[33].

Paralelamente a la formación del gobierno, Franco aprobó la Ley de Administración Central del Estado, vinculando la presidencia del gobierno con la Jefatura del Estado y ratificando su condición de dictador con plenos poderes ejecutivos y legislativos. No en vano, según el artículo 17 de dicha ley, al Caudillo, que ya había asumido «todos los Poderes» derivados de la Junta de Burgos, también le correspondería en el futuro «la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general» (*BOE* de 31 de enero de 1938).

Para entonces, ya era evidente que el Caudillo no concebía su dictadura como interina sino como vitalicia y que no tenía intención de proceder de inmediato a la restauración monárquica en la persona de Alfonso XIII ni en la de su hijo y heredero, don Juan de Borbón. El 17 de julio de 1937 había dado la primera indicación pública en ese sentido en una entrevista publicada por el diario *ABC* de Sevilla: «Si el momento llegara de la Restauración, la nueva Monarquía tendría que ser, desde luego, muy distinta de la que cayó el 14 de abril de 1931»^[34]. Comenzaba así el largo trayecto hacia la «instauración» de

una monarquía franquista como alternativa a la mera «restauración» de la previa dinastía derribada y exiliada.

La orientación política fascistizante impresa por Franco no fue del agrado de todos los grupos integrantes de la coalición nacionalista por obvios motivos de rivalidad con la Falange (cuyo líder era ya Serrano Suñer en detrimento de «legitimistas» como Pilar y Miguel Primo de Rivera, hermanos del «Ausente», o Raimundo Fernández Cuesta, su albacea testamentario). Los jefes militares temían su decreciente influencia sobre el Caudillo y la voluntad falangista de apropiarse de competencias de Orden Público y Seguridad; los carlistas se resentían de su pérdida de poder relativo en el nuevo partido y de su reclusión en los feudos de Navarra y las provincias vascas; los monárquicos veían con prevención el declarado antimonarquismo falangista (escarmentados por la difícil convivencia entre Mussolini y el rey Víctor Manuel en Italia); y los católicos recelaban de lo que círculos vaticanos denominaban «el peligro del panestatismo» (la vocación totalitaria del fascismo y el nazismo que amenazaba la autonomía de la Iglesia).

Sin embargo, todos asumían la necesidad de mantener «prietas las filas» en el tramo final de su asalto militar contra una República aislada, debilitada y acosada. En consecuencia, no hubo oposición seria en el interior a la deriva política auspiciada por el binomio Franco-Serrano Suñer, ni siquiera durante el difícil mes de septiembre de 1938, cuando la tensión entre Alemania y las democracias por la integridad de Checoslovaquia estuvo a punto de provocar el estallido de la guerra mundial. La retracción anglo-francesa consagrada en el Pacto de Múnich del 29 de septiembre de 1938 evitó esa contingencia a cambio del reparto de Checoslovaquia y de la definitiva condena a muerte de la República española.

Pero antes de lograr su objetivo militar máspreciado, tuvo que pagar su segunda cuota de sangre familiar para la empresa bélica: el 28 de octubre de 1938 falleció en accidente aéreo sobre el Mediterráneo Ramón Franco, el hermano menor «descarriado» (republicano y anarquizante en los años veinte y principios de los treinta), que había enmendado sus faltas previas sumándose a la insurrección en las primeras semanas como piloto de combate.

En esas circunstancias, tras el desplome interno de la República, el 1 de abril de 1939 Franco consiguió poner punto final a la guerra civil con una victoria absoluta e incondicional. Lo hizo mediante un parte de guerra que redactó en la cama, aquejado de una fuerte gripe después de no haber perdido ni una sola jornada de trabajo durante toda la contienda:

En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.

El Generalísimo, Franco.

Desde entonces, la legitimidad de la victoria (el derecho de conquista apenas sublimado) se convertiría en la fuente última y suprema de su autoridad indiscutida y de su derecho a ejercer el poder de modo vitalicio (aunque durante la década de los años sesenta apelara también a una «legitimidad de ejercicio» derivada del desarrollo económico entonces en curso). La cruenta guerra civil concluida triunfalmente habría de ser así la columna vertebral sobre la que se erigió su larga y prolongada dictadura. Seguiría siendo oficialmente el Caudillo de la Victoria hasta el final de su vida, el 20 de noviembre de 1975, cuando contaba ochenta y tres años y estaba a punto de cumplir su cercano octogésimo cuarto cumpleaños.

UN EPÍLOGO ABIERTO

En resolución, y para terminar este ya dilatado recorrido ensayístico, desde una perspectiva historiográfica cabría afirmar sin temor a dudas razonables que la contienda fratricida española de 1936-1939 no fue simplemente una gesta heroica ni tampoco un caso de locura trágica colectiva.

La primera afirmación negacionista se justifica porque el conflicto nunca tomó el carácter de un enfrentamiento idealizado y maniqueo del Bien contra el Mal y pese a que registró muchos comportamientos heroicos y bastantes sucesos legítimamente épicos en su curso y desarrollo.

La segunda porque, parafraseando al príncipe danés de William Shakespeare, cabría subrayar que hubo mucha lógica y cálculo racional en esa supuesta locura en cuyo desencadenamiento unos tuvieron más responsabilidad que otros y donde las penas y amarguras nunca estuvieron equitativamente repartidas (sobre todo por lo que hace a la larga posguerra).

Fue algo mucho más complejo y, a la postre, más prosaico y reconocible: fue una guerra civil, un profundo cisma de extrema violencia en la convivencia de una sociedad atravesada por múltiples líneas de fractura interna, con todos sus componentes heteróclitos de heroísmos y cobardías, de tragedias y entusiasmos, de banalidades malignas y propósitos benévolos, de cálculos racionales e improvisaciones sentimentales, de enterezas morales y miserias mezquinas; y, sobre todo, de mucha, muchísima, sangre derramada. Como tal guerra civil y brutal de orígenes internos y causas endógenas, fue inmediatamente afectada por un rápido proceso de internacionalización que condicionaría crucialmente su curso de desarrollo y su desenlace final. Y todo ello con el triste corolario ya apuntado por el general Charles de Gaulle: «las guerras civiles, en las que en ambas trincheras hay hermanos, son imperdonables, porque la paz no nace cuando la guerra termina»^[1].

Efectivamente, no erraba el juicio el general De Gaulle: hubo hermanos en ambas trincheras de aquella cruenta guerra civil y a su término no llegó la Paz sino la Victoria. En consecuencia, los hermanos enfrentados siguieron estándolo por muchos años venideros.

Hay un caso paradigmático de la fractura fraterna ocasionada por la guerra y del conflicto de lealtades políticas y familiares por ella ocasionado: los hermanos Manuel y Antonio Machado. Ambos eran poetas y escritores, ambos eran sevillanos y funcionarios (uno bibliotecario, el otro catedrático de instituto), ambos se apreciaban profundamente y sólo se llevaban un año entre ellos: Manuel, el mayor, había nacido en 1874; Antonio, el menor, en 1875. El primero estaba en Burgos al estallar la guerra y moriría en Madrid en 1947. El segundo estaba en Madrid al comenzar la contienda y moriría, junto a su madre (con horas de diferencia), en el exilio en Collioure (Francia) en febrero de 1939. Manuel se alineó decididamente con el bando insurgente, colaboró con eficacia en labores de propaganda y compuso famosos sonetos en honor de Franco («De tu soberbia campaña, / Caudillo noble y valiente, / ha surgido nuevamente / una grande y libre España») y en alabanza del fundador de la Falange:

*José Antonio ¡Maestro! ¿En qué lucero,
en qué sol, en qué estrella peregrina
montas la guardia? Cuando a la divina
bóveda miro, tu respuesta espero.
Toda belleza fue tu vida clara.
Sublime entendimiento, ánimo fuerte,
y en pleno ardor triunfal temprana muerte
porque la juventud no te faltara.
Háblanos tú... De tu perfecta gloria
hoy nos enturbia la lección el llanto;
mas ya el sagrado nimbo te acompaña.
Y en la portada de su nueva historia
la Patria inscribe ya tu nombre santo...
¡José Antonio! ¡Presente! ¡Arriba España!^[2]*

Por el contrario, Antonio se pronunció a favor de la causa republicana, proclamó sus convicciones democráticas y socialistas e incluso compuso un afamado poema de homenaje al comunista Enrique Lister, jefe militar de los Ejércitos del Ebro:

*Tu carta —oh noble corazón en vela,
español indomable, puño fuerte—
tu carta, heroico Lister, me consuela
de esta, que pesa en mí, carne de muerte.
Fragores en tu carta me han llegado
de lucha santa sobre el campo íbero;
también mi corazón ha despertado
entre olores de pólvora y romero.
Donde anuncia marina caracola
que llega el Ebro, y en la peña fría
donde brota esta rúbrica española,
de monte a mar, esta palabra mía:*

«Si mi pluma valiera tu pistola
de capitán, contento moriría»^[3].

No fue un caso único y excepcional el de los hermanos Machado. Hubo hermanos vencedores y hermanos vencidos en muchas otras familias españolas de la época, famosas o anónimas. Sólo dos ejemplos de aquellas afamadas podrían corroborar la poca singularidad del caso de Manuel y Antonio Machado: los hermanos Augusto y Camilo Barcia Trelles y los hermanos Pedro y José Laín Entralgo.

Los hermanos Barcia Trelles, dos juristas asturianos de reconocido prestigio académico, habían publicado por separado o juntos varias obras sobre su especialidad de Derecho Internacional (conjuntamente, a título ilustrativo, «La codificación progresiva del Derecho Internacional», artículo de *Universidad. Revista de Cultura y Vida Universitaria* publicada en Zaragoza en 1925). Sin embargo, llegado el año 1936, cada uno estaría en un lado de la barricada y ya no volverían a coincidir en ninguna otra ocasión académica ni política.

Augusto era el ministro de Estado (hoy Asuntos Exteriores) del gobierno republicano en julio de 1936, permanecería en su puesto hasta su cese y continuaría apoyando la causa republicana durante la guerra hasta su partida al exilio americano, donde moriría (y donde publicaría su obra *La política de No Intervención*, Buenos Aires, Patronato Hispano-Argentino de Cultura, 1942).

Camilo se declaró a favor de la causa insurgente, asumió la doctrina oficial falangista, continuó con su carrera académica en España y se convirtió en uno de los más relevantes iusinternacionalistas y analistas de política exterior de la España franquista: en 1939 publicó en Barcelona, bajo el patronato de Ediciones FE, su obra *Puntos cardinales de la política internacional de España*.

Algo muy similar podría decirse de los hermanos Laín Entralgo, bastante más jóvenes que los cuatro anteriores. José Laín Entralgo había sido dirigente de las Juventudes Socialistas durante la República y participó en la fusión de las mismas con las juventudes comunistas que dieron origen a la Juventud Socialista Unificada en vísperas de la guerra civil. En el transcurso de ésta, se convirtió en militante comunista, llegó a ser director de la escuela de formación de comisarios políticos del Ejército Popular de la República y tuvo que partir al exilio con la derrota de 1939.

Por el contrario, su hermano Pedro, que estaba en Alemania completando su formación como médico, regresó a España al comenzar la guerra para

abrazar el ideario falangista, convertirse en prolífico articulista de prensa y alcanzar un gran protagonismo en la administración franquista: fue el jefe de la Sección de Ediciones del Servicio Nacional de Propaganda, dirigido por su amigo y mentor político, el escritor Dionisio Ridruejo. Su dilatada carrera política y académica posterior incluyó, a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, una progresiva ruptura con su pasado falangista para asumir convicciones liberal-democráticas (paralelas a las de Ridruejo^[4]).

En resolución: la contienda fratricida española de 1936-1939 fue una verdadera guerra civil en toda la extensión del concepto. Como recordaría con posterioridad y amargura un joven combatiente en ella: «El frente era una línea sinuosa que separaba al amigo del amigo, al hermano del hermano, que atravesaba más de una casa e incluso más de un dormitorio»^[5]. Son éstas unas palabras certeras y dolientes que parecerían estar inspiradas en la cruda presentación que el dramaturgo francés Henry de Montherlant había hecho de la figura antropomórfica de la guerra civil apenas un decenio antes:

Soy la guerra del foro salvaje, la guerra de las prisiones y de las calles, la del vecino contra el vecino, la del rival contra el rival, la del amigo contra el amigo. Soy la guerra civil, la buena guerra^[6]...

No fue nada más, ciertamente. Pero tampoco nada menos. Y aunque todo haya sucedido hace escasamente setenta años, parece que fue cosa de hace mucho más tiempo, incluso de otros siglos, de otras épocas y de otras gentes.

Afortunadamente para las jóvenes generaciones españolas actuales, aquel lejano, distante y brutal estruendo de la guerra civil de 1936 es definitivamente materia de la Historia (y legítima ocupación profesional casi exclusiva de los historiadores y analistas sociales).

Cabría decir para terminar, si acaso, y aunque no sea ésta una competencia de la disciplina de Clío y sus cultivadores, que la única enseñanza histórica y lección moral de aquella matanza fratricida podría enunciarse de modo simple y escueto. A saber: cualesquiera que sean los graves problemas y hondas tensiones imperantes en una sociedad determinada (como era la española de 1936), el recurso a la guerra civil es una mala «solución» política amén de una pésima opción humanitaria. Porque ocasiona sufrimientos inenarrables a la población afectada, provoca enormes devastaciones en todos los órdenes de la vida socioeconómica, destruye la fibra moral que sostiene unida a toda colectividad cívica y genera un legado de penurias y heridas, materiales tanto como espirituales, que tardan generaciones enteras en ser reparadas y cicatrizadas. Es ésta, por otra parte, una vieja enseñanza y lección que ya fue conocida y subrayada por Marco

Tulio Cicerón, que vivió y padeció en primera persona los conflictos civiles que acabaron con la República en Roma en el siglo I antes de Cristo: «Cualquier tipo de paz entre los ciudadanos me parecería preferible a una guerra civil»^[7]. Y esa misma enseñanza y lección clásica fue apuntada por el presidente Azaña en un inspirado discurso en el Ayuntamiento de Barcelona con ocasión del segundo aniversario del comienzo de la contienda (el 18 de julio de 1938). No cabe pensar en mejores y más sentidas palabras, por forma tanto como por fondo, para poner punto final a este ensayo histórico escrito como mandan los buenos cánones historiográficos, *bona fides*, *sine ira et studio* (con buena fe interpretativa, sin encono partidista y tras meditada reflexión):

Yo creo que si de esta acumulación de males ha de salir el mayor bien posible, será con este espíritu, y desventurado el que no lo entienda así. No tengo el optimismo de un Pangloss ni voy a aplicar a este drama español la simplísima doctrina del adagio de que «no hay mal que por bien no venga». No es verdad, no es verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe como nosotros queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible, y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres, que han caído embravecidos en la batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz, Piedad y Perdón^[8].

FUENTES INFORMATIVAS Y BIBLIOGRAFÍA

1. FUENTES DOCUMENTALES IMPRESAS

Anuario Estadístico de España. 1944-1945, Madrid, Presidencia del Gobierno, 1946.

Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, Burgos, 1936.

Boletín Oficial del Estado, Burgos, 1936-1939.

Carreras, Albert (coord.). *Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX*, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1989.

Díaz Plaja, Fernando. *La guerra de España en sus documentos. El siglo XX. La guerra (1936-1939)*, Madrid, Ediciones Faro, 1963.

Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936, Madrid, Ministerio de la Gobernación-Editora Nacional, 1939.

Documentos inéditos para la historia del Generalísimo Franco, Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1992-1994, 4 vols.

La dominación roja en España. Causa General. Avance de la información instruida por el Ministerio Público, Madrid, Ministerio de Justicia, 1940.

Estadísticas básicas de España, 1900-1970, Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorro, 1975.

El Frente Popular en España, Madrid, Oficina Informativa Española, 1948.

Gaceta de Madrid, Madrid, 1936; Valencia, 1937; Barcelona, 1938-1939.

García-Nieto, María Carmen y otros. *Bases documentales de la España contemporánea*, vol. 10, *La guerra de España, 1936-1939*, Madrid, Gaudiana, 1974.

Martínez Cuadrado, Miguel. *Elecciones y partidos políticos en España, 1868-1975*, Madrid, Taurus, 1977, 2 vols.

Montero, Julio (ed.). *Constituciones y códigos políticos españoles, 1808-1978*, Barcelona, Ariel, 1998.

Pequeño Anuario Estadístico de España, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1936.

En servicio de la República. La revolución de octubre en España, Madrid, Gobierno de la República, 1935.

2. MEMORIAS Y TESTIMONIOS DE PROTAGONISTAS

- Abad de Santillán, Diego. *Por qué perdimos la guerra. Una contribución a la historia de la tragedia española*, Buenos Aires, Imán, 1940.
- Ansó, Mariano. *Yo fui ministro de Negrín*, Barcelona, Planeta, 1976.
- Araquistáin, Luis. *Sobre la guerra civil y en la emigración*, Madrid, Espasa Calpe, 1983.
- Azaña Díaz, Manuel. *Causas de la guerra de España*, Barcelona, Crítica, 1986.
- *Memorias de guerra*, Barcelona, Grijalbo, 1996.
- *Los españoles en guerra*, Barcelona, Crítica, 1977.
- *Discursos políticos*, Barcelona, Crítica, 2004.
- Azcárate Flórez, Pablo de. *Mi embajada en Londres durante la guerra civil española*, Barcelona, Ariel, 1976.
- Barcia Trelles, Augusto. *La política de No Intervención*, Buenos Aires, Patronato Hispano-Argentino de Cultura, 1942.
- Bowers, Claude. *Misión en España*, México, Grijalbo, 1955.
- Bullitt, William C. *For the President. Personal and Secret. Correspondence Between Franklin D. Roosevelt and William C. Bullitt* Boston, Houghton Mifflin Co., 1972.
- Ciano's *Hidden Diary, 1937-1939*, Nueva York, Dutton, 1953.
- Chapaprieta, Joaquín. *La paz fue posible*, Barcelona, Ariel, 1972.
- Franco Bahamonde, Francisco. *Palabras del Caudillo, 19 abril 1937-31 diciembre 1938*, Barcelona, Ediciones FE, 1939.
- *Discursos y escritos del Caudillo*, Madrid, s. e., 1939.
- *Habla el Caudillo*, Barcelona, Editora Nacional, 1939.
- *Papeles de la guerra de Marruecos*, Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1986.
- *Franco ha dicho. Recopilación de las más importantes declaraciones del Caudillo desde la iniciación del Alzamiento Nacional hasta el 31 de diciembre de 1946*, Madrid, Publicaciones Españolas, 1947.
- *Pensamiento político de Franco. Antología. Selección y sistematización de textos por Agustín del Río Cisneros*, Madrid, Servicio Informativo Español, 1964.
- Franco Bahamonde, Pilar. *Nosotros, los Franco*, Barcelona, Planeta, 1976.
- Franco Salgado-Araujo, Francisco. *Mis conversaciones privadas con Franco*, Barcelona, Planeta, 1976.
- *Mi vida junto a Franco*, Barcelona, Planeta, 1977.

- Gil-Robles, José María. *No fue posible la paz*, Barcelona, Ariel, 1968.
- *Discursos parlamentarios*, Madrid, Taurus, 1971.
- Goded, Manuel. *Un «faccioso» cien por cien*, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1939.
- Ibárruri, Dolores (dir.). *Guerra y revolución en España*, Moscú, Progreso, 1966-1977, 4 vols.
- Kindelán Duany, Alfredo. *Mis cuadernos de guerra*, Madrid, Plus Ultra, s. a. (1945).
- *La verdad de mis relaciones con Franco*, Barcelona, Planeta, 1981.
- Laín Entralgo, Pedro. *Descargo de conciencia (1931-1960)*, Madrid, Alianza, 1989.
- Largo Caballero, Francisco. *Escritos sobre la República. Notas históricas sobre la guerra de España*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1985.
- *Discursos a los trabajadores*, Barcelona, Fontamara, 1979.
- López Rodó, Laureano. *La larga marcha hacia la monarquía*, Barcelona, Noguer, 1977.
- Martínez Saura, Santos. *Memorias del secretario de Azaña*, Barcelona, Planeta, 1999.
- Méndez, Rafael. *Caminos inversos. Vivencias de ciencia y guerra*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
- Nin, Andreu. *Los problemas de la revolución española*, Barcelona, Fontamara, 1978.
- Ochoa, Severo. *Escritos*, Oviedo, Caja de Ahorros de Asturias, 1989.
- Pozuelo, Vicente. *Los últimos 476 días de Franco*, Barcelona, Planeta, 1980.
- Prieto Tuero, Indalecio. *Discursos fundamentales*, Madrid, Turner, 1976.
- *Convulsiones de España*, México, Oasis, 1967, 3 vols.
- *Epistolario Prieto-Negrín. Puntos de vista sobre el desarrollo y consecuencias de la guerra civil española*, Barcelona, Planeta, 1990.
- *Cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional*, Barcelona, Planeta, 1992.
- Rojo Lluch, Vicente. *¡Alerta los pueblos! Estudio político-militar del período final de la guerra española*, Barcelona, Ariel, 1974.
- *España heroica*, Buenos Aires, Editorial Americana, 1942.
- Sainz Rodríguez, Pedro. *Testimonios y recuerdos*, Barcelona, Planeta, 1978.
- *Un reinado en la sombra*, Barcelona, Planeta, 1981.
- Serrano Suñer, Ramón. *Entre Hendaya y Gibraltar*, Barcelona, Nauta, 1973.
- *Entre el silencio y la propaganda. La Historia como fue. Memorias*, Barcelona, Planeta, 1977.

- Tierno Galván, Enrique. *Cabos sueltos*, Barcelona, Bruguera, 1981.
- Togliatti, Palmiro. *Escritos sobre la guerra de España*, Barcelona, Crítica, 1980.
- Unamuno, Miguel de. *Epistolario inédito. II (1915-1936)*, Madrid, Espasa Calpe, 1991.
- Vidarte, Juan Simeón. *Todos fuimos culpables*, México, Fondo de Cultura Económica, 1973.
- Zugazagoitia, Julián. *Guerra y vicisitudes de los españoles*, Barcelona, Tusquets, 2001.

3. LIBROS

- Abella Bermejo, Rafael. *La vida cotidiana durante la guerra civil. La España nacional*, Barcelona, Planeta, 1974.
- *La vida cotidiana durante la guerra civil. La España republicana*, Barcelona, Planeta, 1975.
- Academia de Ciencias de la URSS. *Solidaridad internacional con la República española*, Moscú, Progreso, 1974.
- Aguilar Fernández, Paloma. *Memoria y olvido de la guerra civil española*, Madrid, Alianza, 1996.
- Alonso Baquer, Miguel (dir.). *La guerra civil. Sesenta años después*, Madrid, Actas, 1999.
- Alpert, Michael. *El ejército republicano en la guerra civil*, Madrid, Siglo XXI, 1989.
- *La guerra civil española en el mar*, Madrid, Siglo XXI, 1987.
- *Aguas peligrosas. Nueva historia internacional de la guerra civil española*, Madrid, Akal, 1997.
- Álvarez, Santiago. *Negrín, personalidad histórica*, Madrid, Ediciones de la Torre, 1994, 2 vols.
- Álvarez Bolado, Alfonso. *Para ganar la guerra, para ganar la paz. La Iglesia y la guerra civil*, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1995.
- Armero, José Mario. *España fue noticia. Corresponsales extranjeros en la guerra civil española*, Madrid, Sedmay, 1976.
- Arrarás Iribarren, Joaquín. *Franco*, Valladolid, Santarén, 1939.
- *Historia de la Segunda República Española*, Madrid, Editora Nacional, 1963, 4 vols.
- Aróstegui Sánchez, Julio. *La guerra civil*, Madrid, Historia 16, 1996.

- (coord.). *Historia y memoria de la guerra civil*, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1988, 3 vols.
- y Martínez, Jesús. *La Junta de Defensa de Madrid*, Madrid, Comunidad de Madrid, 1984.
- Avilés Farré, Juan. *La izquierda burguesa en la Segunda República*, Madrid, Espasa Calpe, 1985.
- *Las grandes potencias ante la guerra de España*, Madrid, Arco Libro, 1998.
- *Pasión y farsa. Franceses y británicos ante la guerra civil española*, Madrid, Eudema, 1994.
- Bahamonde, Ángel y Cervera, Javier. *Así terminó la guerra civil*, Madrid, Marcial Pons, 1999.
- Ballbé, Manuel. *Orden público y militarismo en la España constitucional*, Madrid, Alianza, 1983.
- El Banco de España. Una historia económica*, Madrid, Banco de España, 1970.
- Baón, Rogelio. *La cara humana de un Caudillo. 400 anécdotas*, Madrid, San Martín, 1975.
- Berdah, Jean-François. *La democracia asesinada. La República española y las grandes potencias*, Barcelona, Crítica, 2002.
- Bernecker, Walther L. *Guerra en España*, Madrid, Síntesis, 1996.
- Biescas, José Antonio y Tuñón de Lara, Manuel. *España bajo la dictadura franquista*, Barcelona, Labor, 1982.
- Blanco Escolá, Carlos. *Franco y Rojo. Dos generales para dos Españas*, Barcelona, Labor, 1993.
- *La incompetencia militar de Franco*, Madrid, Alianza, 2000.
- Blinkhorn, Martin. *Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1939*, Barcelona, Crítica, 1979.
- Bolloten, Burnett. *La guerra civil española. Revolución y contrarrevolución*, Madrid, Alianza, 1989.
- Borrás, Rafael (dir.). *Crónica de la guerra civil española*, Barcelona, Plaza y Janés-Círculo de Lectores, 1996.
- Brenan, Gerald. *El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil*, Barcelona, Plaza y Janés, 1996.
- Bricall, Josep María. *Política económica de la Generalitat, 1936-1939*, Barcelona, Edicions 62, 1970-1979, 2 vols.
- Broué, Pierre y Témime, Émile. *La revolución y la guerra de España*, México, FCE, 1977.

- Cabanellas, Miguel. *La guerra de los mil días*, Barcelona, Grijalbo, 1973.
- *Cuatro generales. II. La lucha por el poder*, Barcelona, Planeta, 1977.
- Cardona, Gabriel. *El poder militar en España hasta la guerra civil*, Madrid, Siglo XXI, 1983.
- Carr, Edward H. *La Comintern y la guerra civil española*, Madrid, Alianza, 1986.
- Carr, Raymond. *España, 1808-1975*, Barcelona, Ariel, 1982.
- *La tragedia española. La guerra civil en perspectiva*, Madrid, Alianza, 1986.
- (ed.). *Estudios sobre la República y la guerra civil*, Barcelona, Ariel, 1973.
- y Fusi, Juan Pablo. *España, de la dictadura a la democracia*, Barcelona, Planeta, 1979.
- Casanova, Julián. *De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España*, Barcelona, Crítica, 1997.
- (coord.). *Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco*, Barcelona, Crítica, 2002.
- Casas de la Vega, Rafael. *Franco, militar*, Madrid, Fénix, 1995.
- Castells, Andreu. *Las Brigadas Internacionales de la guerra de España*, Barcelona, Ariel, 1974.
- Cierva, Ricardo de la. *Historia de la guerra civil. I. Perspectivas y antecedentes*, Madrid, San Martín, 1969.
- *Franco*, Barcelona, Planeta, 1986.
- Cortada, James E. (ed.). *Historical Dictionary of the Spanish Civil War*, Westport (Conn.), Greenwood Press, 1982.
- Cortés Salinas, Carmen. *La España de la guerra civil. Con itinerarios y selección de lecturas*, Madrid, Acento, 2002.
- Coverdale, John. *La intervención fascista en la guerra civil española*, Madrid, Alianza, 1979.
- Crusells, Magí. *La guerra civil española: cine y propaganda*, Barcelona, Ariel, 2000.
- Cruz, Rafael. *El Partido Comunista de España en la Segunda República*, Madrid, Alianza, 1987.
- Cuenca Toribio, José Manuel. *La guerra civil de 1936*, Madrid, Espasa Calpe, 1986.
- *La oratoria parlamentaria española. Una antología*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002.

- Cunningham, Valentine (ed.). *Spanish Front. Writers on the Spanish Civil War*, Oxford, Oxford University Press, 1986.
- Chueca, Ricardo. *El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET y de las JONS*, Madrid, CIS, 1983.
- Díaz Plaja, Fernando. *Si mi pluma valiera tu pistola. Los escritores españoles en la Guerra Civil*, Barcelona, Plaza y Janés, 1979.
- Elorza, Antonio y López Alonso, Carmen. *Arcaísmo y modernidad. Pensamiento político en España. Siglos XIX-XX*, Madrid, Historia 16, 1989.
- y Bizcarrondo, Marta. *Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España, 1919-1939*, Barcelona, Planeta, 1999.
- Ellwood, Sheelagh. *Prietas las filas. Historia de Falange Española*, Barcelona, Crítica, 1984.
- Falcoff, Mark y Pike, Frederick (dirs.). *The Spanish Civil War. American Hemispheric Perspectives*, Lincoln, University of Nebraska, 1982.
- Febo, Giuliana di. *La santa de la raza. Un culto barroco en la España de Franco*, Barcelona, Icaria, 1988.
- *Ritos de guerra y de victoria en la España franquista*, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2002.
- Felice, Renzo de. *Mussolini it Duce*, Turín, Einaudi, 1974 y 1981, 2 vols.
- Fusi Aizpurúa, Juan Pablo. *Franco. Autoritarismo y poder personal*, Madrid, El País, 1985.
- Fontana, Josep. *Enseñar historia con una guerra civil por medio*, Barcelona, Crítica, 1999.
- Fraser, Ronald. *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil*, Barcelona, Crítica, 1979, 2 vols.
- García Durán, Juan. *La guerra civil española: fuentes*, Barcelona, Crítica, 1985.
- Garitaonaindía, Carmelo y de la Granja, José Luis (eds.). *La guerra civil en el País Vasco. 50 años después*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1987.
- Gil Pecharromán, Julio. *La Segunda República*, Madrid, UNED, 1995.
- González-Betes, Antonio. *Franco y el «Dragon Rapide»*, Madrid, Rialp, 1987.
- Graham, Helen. *The Spanish Republic at War*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002.
- *Socialism and War. The Spanish Socialist Party in Power and Crisis, 1936-1939*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.

- Granja, José Luis de la. *República y guerra civil en Euskadi. Del Pacto de San Sebastián al Pacto de Santoña*, Oñati, Instituto Vasco de Administraciones Públicas, 1990.
- Gubern, Román. *1936-1939. La guerra de España en la pantalla*, Madrid, Filmoteca Nacional, 1986.
- Gutiérrez-Rayé, José y Álvarez Sierra, J. Dr. *Juan Negrín*, Madrid, Celebridades-Colección Popular de Biografías, 1966.
- Harenz, Marc (ed.). *Los escritores y la guerra de España*, Barcelona, Monte Ávila, 1977.
- Heiberg, Morten. *Emperadores del Mediterráneo. Franco, Mussolini y la guerra civil española*, Barcelona, Crítica, 2003.
- Howson, Gerald. *Armas para España. La historia no contada de la guerra civil*, Barcelona, Península, 2000.
- *Aircraft of the Spanish Civil War*, Londres, Putnam, 1990.
- Jackson, Gabriel. *La República española y la guerra civil*, Barcelona, Crítica, 1979.
- *Entre la Reforma y la Revolución. La República y la guerra civil*, Barcelona, Crítica, 1984.
- Jackson, Michael. *Fallen Sparrows. The International Brigades in the Spanish Civil War*, Filadelfia, American Philosophical Society, 1994.
- Jenkins, Roy. *Churchill*, Barcelona, Península, 2002.
- Juliá Díaz, Santos. *Un siglo de España. Política y sociedad*, Madrid, Marcial Pons, 1999.
- *La izquierda del PSOE (1934-1936)*, Madrid, Siglo XXI, 1977.
- *Los socialistas en la política española, 1879-1982*, Madrid, Taurus, 1997.
- y otros. *Víctimas de la guerra civil*, Madrid, Temas de Hoy, 1999.
- (ed.). *Violencia política en la España del siglo xx*, Madrid, Taurus, 2000.
- Keene, Judith. *Luchando con Franco. Voluntarios europeos al servicio de la España fascista*, Barcelona, Salvat, 2001.
- Kershaw, Ian. *Hitler*, Barcelona, Península, 2000, 2 vols.
- Kowalsky, Daniel. *La Unión Soviética y la guerra civil española. Una revisión crítica*, Barcelona, Crítica, 2003.
- López Pintor, Rafael. *La opinión pública española: del franquismo a la democracia*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982.
- Lorenzo, César M. *Los anarquistas españoles y el poder*, París, Ruedo Ibérico, 1972.
- Madariaga, María Rosa de. *Los moros que trajo Franco. La intervención de tropas coloniales en la guerra civil española*, Barcelona, Martínez Roca,

- 2002.
- Madariaga, Salvador de. *España. Ensayo de historia contemporánea*, Madrid, Espasa Calpe, 1989.
- Malefakis, Edward (dir.). *1936-1939. La Guerra de España*, Madrid, El País, 1986.
- Malerbe, Pierre C. *La oposición al franquismo*, Oviedo, Naranco, 1977.
- Martín Aceña, Pablo. *El oro de Moscú y el oro de Berlín*, Madrid, Taurus, 2001.
- Martín Nájera, Aurelio. *El grupo parlamentario socialista en la Segunda República. Estructura y funcionamiento*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2000, 2 vols.
- Martínez Bande, José Manuel. *Monografías de la Guerra de Liberación. Monografías de la Guerra de España*, Madrid, San Martín, 1968-1985, varios volúmenes.
- Martínez Parrilla, Jaime. *Las fuerzas armadas francesas ante la guerra civil española*, Madrid, Ejército, 1987.
- Martínez Reverte, Jorge. *La batalla del Ebro*, Barcelona, Crítica, 2003.
- Marwick, Arthur; Emsley, Clive y Simpson, Wendy (eds.). *Total War and Historical Change, 1914-1945*, Buckingham, Open University Press, 2001.
- Matesanz, José Antonio. *Las raíces del exilio. México ante la guerra civil española*, México, Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.
- Medina Jiménez, José. *La familia Negrín en Gran Canaria. La parcelación de Las Palmas de Gran Canaria (1845-1945)*, Las Palmas, edición del autor, 2003.
- Miguel, Jesús de y Sánchez, Antonio. *La guerra civil española día a día*, Madrid, Libsa, 2004.
- Miralles Palencia, Ricardo. *Juan Negrín. La República en guerra*, Madrid, Temas de Hoy, 2003.
- Moa Rodríguez, Pío. *El derrumbe de la Segunda República y la guerra civil*, Madrid, Encuentro, 2000.
- *Los mitos de la guerra civil*, Madrid, La Esfera de los Libros, 2003.
- Molinero, Carme e Ysàs, Pere. *Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista*, Madrid, Siglo XXI, 1998.
- Montero Barrado, Severiano. *Paisajes de la guerra. Nueve itinerarios por los frentes de Madrid*, Madrid, Comunidad de Madrid, 1987.

- Montero Gibert, José Ramón. *La CEDA. El catolicismo social y político en la Segunda República*, Madrid, Revista de Trabajo, 1977, 2 vols.
- Moradiellos García, Enrique. *La perfidia de Albión. El gobierno británico y la guerra civil española*, Madrid, Siglo XXI, 1996.
- *La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad*, Madrid, Síntesis, 2000.
- *El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española*, Barcelona, Península, 2001.
- *Francisco Franco. Crónica de un Caudillo casi olvidado*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002.
- (ed.). *La guerra civil*, monográfico de la revista *Ayer* (Madrid), n.º 50, 2003.
- *La persistencia del pasado. Escritos sobre la historia*, Cáceres, Universidad de Extremadura, 2004.
- Oliveira, César. *Salazar e a guerra civil de Espanha*, Lisboa, O Jornal, 1987.
- Orella, José Luis. *La formación del Estado Nacional durante la guerra civil española*, Madrid, Actas, 2001.
- Pagès, Pelai. *La guerra civil espanyola a Catalunya*, Sant Cugat del Vallès, Llibres de la Frontera, 1997.
- Palafox, Jordi. *Atraso económico y democracia. La Segunda República y la economía española, 1892-1936*, Barcelona, Crítica, 1991.
- Payne, Stanley G. *La primera democracia española. La Segunda República*, Barcelona, Paidós, 1995.
- *Los militares y la política en la España contemporánea*, París, Ruedo Ibérico, 1968.
- *Falange. Historia del fascismo español*, París, Ruedo Ibérico, 1965.
- *Unión Soviética, comunismo y revolución en España (1931-1939)*, Barcelona, Plaza y Janés, 2003.
- Preston, Paul. *La destrucción de la democracia en España. Reacción, reforma y revolución en la Segunda República*, Madrid, Turner, 1978.
- *Franco. Caudillo de España*, Barcelona, Grijalbo, 1994.
- *Las tres Españas del 36*, Barcelona, Plaza y Janés, 1998.
- *La guerra civil española*, Barcelona, Plaza y Janés, 2000.
- (ed.). *La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la guerra civil*, Barcelona, Península, 1999.
- y Balfour, Sebastian (eds.). *España y las grandes potencias en el siglo xx*, Barcelona, Crítica, 2002.

- Proctor, Raymond. *Hitler's Luftwaffe in the Spanish Civil War*, Westport, Greenwood Press, 1983.
- Radosh, Ronald; Habeck, Mary R. y Sevostianov, Grigory (eds.). *La España traicionada. Stalin y la guerra civil*, Barcelona, Planeta, 2001.
- Raguer, Hilari. *La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil española*, Barcelona, Península, 2001.
- *El general Batet. Franco contra Batet. Crónica de una venganza*, Barcelona, Península, 1996.
- Reig Tapia, Alberto. *Memoria de la guerra civil. Los mitos de la tribu*, Madrid, Alianza, 1999.
- *Ideología e historia. La represión franquista en la guerra civil*, Madrid, Akal, 1984.
- Rodríguez Aisa, María Luisa. *El cardenal Gomá y la guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado, 1936-1939*, Madrid, CSIC, 1981.
- Rodríguez Puértolas, Julio. *Literatura fascista española. Antología*, Madrid, Akal, 1987.
- Rojas, Carlos. *La guerra civil vista por los exiliados*, Barcelona, Planeta, 1975.
- Romero, Eladi. *Itinerarios de la guerra civil española*, Barcelona, Laertes, 2001.
- Romero, Luis. *Tres días de julio: 18, 19 y 20 de 1936*, Barcelona, Ariel, 1967.
- Romero Salvadó, Francisco J. *España, 1914-1918. Entre la guerra y la revolución*, Barcelona, Crítica, 2002.
- Rosas, Fernando (ed.). *Portugal e a guerra civil espanhola*, Lisboa, Colibrí, 1998.
- Rubio Cabeza, Manuel. *Diccionario de la guerra civil española*, Barcelona, Planeta, 1987, 2 vols.
- *Los intelectuales españoles y el 18 de julio*, Barcelona, Acervo, 1975.
- Ruiz González, David. *Insurrección defensiva y revolución obrera. El octubre español de 1934*, Barcelona, Labor, 1988.
- Ruiz Manjón-Cabeza, Octavio. *El Partido Republicano Radical, 1908-1936*, Madrid, Tebas, 1976.
- Salas Larrazábal, Ramón. *Historia del Ejército Popular de la República*, Madrid, Editora Nacional, 1973, 4 vols.
- *Los datos exactos de la guerra civil*, Madrid, Rioduero, 1980.
- y Salas Larrazábal, Jesús. *Historia general de la guerra civil*, Madrid, Rialp, 1986.

- Sánchez Asiaín, José Ángel. *Economía y finanzas en la guerra civil española*, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999.
- Saz Campos, Ismael. *Mussolini contra la Segunda República. Hostilidad, conspiraciones, intervención*, Valencia, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1986.
- y Tusell, Javier. *Fascistas en España. La intervención italiana a través de los telegramas de la «Missione Militare Italiana in Spagna»*, Madrid, CSIC, 1981.
- Seidman, Michael. *A ras de suelo. Historia social de la república durante la guerra civil*, Madrid, Alianza, 2003.
- Shubert, Adrian. *Hacia la revolución. Orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias*, Barcelona, Crítica, 1984.
- Skoutelsky, Rémi. *L'Espoir guidait leurs pas. Les volontaires français dans les Brigades Internationales*, París, Grasset, 1998.
- Southworth, Herbert R. *El mito de la Cruzada de Franco*, Barcelona, Plaza y Janés, 1986.
- *La destrucción de Guernica: periodismo, diplomacia, propaganda e historia*, París, Ruedo Ibérico, 1977.
- Suárez Fernández, Luis. *Francisco Franco y su tiempo*, Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1984, 8 vols.
- Tello, José Ángel. *Ideología y política. La Iglesia católica española, 1936-1959*, Zaragoza, Pórtico, 1984.
- Thomas, Hugh. *La guerra civil española*, Barcelona, Grijalbo, 1976, 2 vols.
- Thomàs, Joan Maria. *Lo que fue la Falange*, Barcelona, Plaza y Janés, 1999.
- *La Falange de Franco. El proyecto fascista del régimen*, Barcelona, Plaza y Janés, 2001.
- Tóodorov, Tzvetan. *Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo xx*, Barcelona, Península, 2002.
- Traina, Richard P. *American Diplomacy and the Spanish Civil War*, Bloomington, Indiana University Press, 1968.
- Trapiello, Andrés. *Las armas y las letras. Literatura y guerra civil*, Barcelona, Península, 2002.
- Tuñón de Lara, Manuel (dir.). *La crisis del Estado: dictadura, república, guerra (1923-1939)*, Barcelona, Labor, 1982.
- (dir.) *La guerra civil. 50 años después*, Barcelona, Labor, 1985.
- Miralles, Ricardo y Díaz Chico, Bonifacio N. *Juan Negrín López. El hombre necesario*, Las Palmas, Gobierno de Canarias, 1996.

- Tusell Gómez, Javier. *Franco en la guerra civil. Una biografía política*, Barcelona, Tusquets, 1992.
- Carrero. *La eminencia gris del régimen de Franco*, Madrid, Temas de Hoy, 1993.
- y García Queipo de Llano, Genoveva. *El catolicismo mundial y la guerra de España*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1993.
- y Stanley G. Payne (dirs.). *La guerra civil. Una nueva visión del conflicto que dividió España*, Madrid, Temas de Hoy, 1996.
- Ucelay-Da Cal, Enric. *La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l'etapa republicana, 1931-1939*, Barcelona, La Magrana, 1982.
- Vilar, Pierre. *La guerra civil española*, Barcelona, Crítica, 1986.
- Vinen, Richard. *Europa en fragmentos. Historia del viejo continente en el siglo xx*, Barcelona, Península, 2002.
- Viñas Martín, Ángel. *La Alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes de la intervención alemana en la guerra civil española*, Madrid, Alianza, 1977.
- *El oro de Moscú. Alfa y omega de un mito franquista*, Barcelona, Crítica, 1984.
- *Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil. Antecedentes y consecuencias*, Madrid, Alianza, 2001.
- Viñuela, Julio; Eguidazu, Fernando; Fernández, Carlos y Florensa, Senén. *Política comercial exterior de España (1931-1975)*, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1979, vol. 1.
- Weintraub, Stanley. *The Last Great Cause. The Intellectuals and the Spanish Civil War*, Nueva York, Weybright and Talley, 1968.
- Whealey, Robert. *Hitler and Spain. The Nazi Role in the Spanish Civil War*, Lexington, Kentucky University Press, 1989.

4. ARTÍCULOS

- Alpert, Michael. «Don Juan Negrín en Londres, 1940-1956», en Javier Tusell y otros, *La oposición al régimen de Franco*, Madrid, UNED, 1990, vol. 1, pp. 73-90.
- Avilés Farré, Juan. «Veinticinco años después: la memoria de la transición», *Historia del presente* (Madrid), n.º 1, 2002, pp. 88-97.
- Ben-Ami, Shlomo. «The Republican “take-over”: Prelude to inevitable catastrophe?», en P. Preston (ed.), *Revolution and War in Spain*, Londres, Methuen, 1984, pp. 14-34.

- Bernecker, Walther L. «La intervención alemana en la guerra civil española», *Espacio, tiempo, forma. Historia contemporánea* (Madrid), n.º 5, 1992, pp. 77-104.
- «El bombardeo de Guernica: la polémica historiográfica», en M. Engelbert y J. García de María (comps.), *La guerra civil española*, Fráncfort, Vervuert, 1990.
- Cacho Viu, Vicente. «La imagen de las dos Españas», *Revista de Occidente* (Madrid), n.º 60, 1986, pp. 49-77.
- Casanova, Julián. «Guerra civil, ¿lucha de clases?: el difícil ejercicio de reconstruir el pasado», *Historia social* (Valencia), n.º 20, 1994, pp. 135-150.
- Carr, Raymond. «Reflexiones sobre la Guerra Civil», *Revista de Libros* (Madrid), n.º 4, 1996, pp. 17-20.
- Ferrer Benimeli, José Antonio. «Franco y la masonería», en Josep Fontana (ed.), *España bajo el franquismo*, Barcelona, Crítica, 1986, pp. 246-268.
- Hughes, Matthew y Garrido, Enriqueta. «Planning and Command: the Spanish Republican Army and the Battle of the Ebro, 1938», *International Journal of Iberian Studies* (Londres), vol. 12, n.º 2, 1999, pp. 107-115.
- Jover Zamora, José María. «La percepción española de los conflictos europeos: notas históricas para su entendimiento», *Revista de Occidente* (Madrid), n.º 57, 1986, pp. 5-42.
- Juliá Díaz, Santos. «Discursos de la guerra civil española», en Manuel Requena (coord.), *La guerra civil española y las Brigadas Internacionales*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1998, pp. 29-46.
- «Orígenes sociales de la democracia en España», en Manuel Redero (ed.), *La transición a la democracia en España*, número monográfico de la revista *Ayer* (Madrid), n.º 15, 1994, pp. 165-188.
- Malefakis, Edward. «El concepto de las dos Españas y la guerra civil», *Aula de Cultura*, Bilbao, El Correo Español-El Pueblo Vasco, 1986, pp. 197-205.
- Marichal, Juan. «Ciencia y gobierno: la significación histórica de Juan Negrín», en Manuel Ramírez (ed.), *Estudios sobre la Segunda República*, Madrid, Tecnos, 1975, pp. 185-200.
- «Juan Negrín, el científico como gobernante», en *El intelectual y la política*, Madrid, Residencia de Estudiantes-CSIC, 1990, pp. 83-106.

- Marquina Barrio, Antonio. «El Vaticano y la guerra civil española», en AA. VV., *Italia y la guerra civil española*, Madrid, CSIC, 1986, pp. 83-102.
- «Planes internacionales de mediación en la guerra civil española», *Revista de Estudios Internacionales* (Madrid), n.º 5, 1984, pp. 569-591.
- Miralles Palencia, Ricardo. «La política exterior de la República española hacia Francia durante la guerra civil», *Historia contemporánea* (Bilbao), n.º 10, 1993, pp. 29-50.
- Miller, Arthur. «España, en los ojos de Inge Morath», *ABC*, 26 de octubre de 2002.
- Monjo, Anna y Vega, Carme. «La clase obrera durante la guerra civil española: una historia silenciada», *Historia y fuente oral* (Barcelona), n.º 3, 1990, pp. 67-91.
- Moradiellos García, Enrique. «Un incómodo espectro del pasado: Franco en la memoria de los españoles», *Pasajes de pensamiento contemporáneo* (Valencia), n.º 11, 2003, pp. 5-11.
- «El gobierno británico y Cataluña durante la República y la guerra civil», *El Basilisco* (Oviedo), n.º 27, 2000, pp. 21-36.
- «Una guerra civil de tinta: la propaganda republicana y nacionalista en Gran Bretaña durante la guerra civil», *Sistema* (Madrid), n.º 164, 2001, pp. 69-97.
- «El enigma del doctor Negrín: perfil político de un gobernante socialista», *Revista de Estudios Políticos* (Madrid), n.º 109, 2000, pp. 245-263.
- Pizarroso Quintero, Alejandro. «La propaganda, arma de guerra en España, 1936-1939», en AA. VV., *Propaganda en guerra*, Salamanca, Consorcio Salamanca 2002, 2002, pp. 11-30.
- Preston, Paul. «La historiografía de la Guerra Civil española: de Franco a la democracia», en José Luis de la Granja, Alberto Reig Tapia y Ricardo Miralles (eds.), *Tuñón de Lara y la historiografía española*, Madrid, Siglo XXI, 1999, pp. 161-174.
- «Venganza y reconciliación: la guerra civil española y la memoria histórica», en B. Cipliajauskaitė y Ch. Maurer (comps.), *La voluntad de humanismo. Homenaje a Juan Marichal*, Barcelona, Anthropos, 1990, pp. 71-87.
- Rodríguez Quiroga, Alfredo. «Juan Negrín, fisiólogo», *Arbor* (Madrid), n.º 608, 1996, pp. 73-95.
- «De la fisiología experimental al cultivo de la bioquímica moderna: la Escuela de Fisiología de Juan Negrín», *Arbor* (Madrid), n.º 634, 1998,

pp. 121-140.

Saz Campos, Ismael. «El fracaso del éxito: Italia en la guerra de España», *Espacio, tiempo, forma. Historia contemporánea* (Madrid), n.º 5, 1992, pp. 105-128.

Tuñón de Lara, Manuel. «Juan Negrín, hombre de Estado», *Perspectiva contemporánea* (Madrid), n.º 1, 1988, pp. 19-22.

Tusell Gómez, Javier. «La primera política exterior de Franco», *Espacio, tiempo y forma. Historia contemporánea* (Madrid), n.º 5, 1992, pp. 19-76.

Ucelay-Da Cal, Enric. «Ideas preconcebidas y estereotipos en la guerra civil española: el dorso de la solidaridad», *Historia social* (Valencia), n.º 6, 1990, pp. 23-43.

Varela Ortega, José. «Reacción y Revolución frente a Reforma», *Revista internacional de Sociología* (Barcelona), n.º 3-4, 1972, pp. 253-263.

Villarroya, Joan. «La vergüenza de la República», *La aventura de la Historia* (Madrid), n.º 3, 1999, pp. 26-33.

Notas

[1] Existen incluso útiles guías turísticas para visitar esos restos materiales: Carmen Cortés, *La España de la guerra civil. Con itinerarios y selección de lecturas*, Madrid, Acento, 2002; Eladi Romero, *Itinerarios de la guerra civil española*, Barcelona, Laertes, 2001; y Severiano Montero, *Paisajes de la guerra. Nueve itinerarios por los frentes de Madrid*, Madrid, Comunidad de Madrid, 1987. <<

[2] Marc Harenz (ed.), *Los escritores y la guerra de España*, Barcelona, Monte Ávila, 1977. Valentine Cunningham (ed.), *Spanish Front. Writers on the Spanish Civil War*, Oxford, Oxford University Press, 1986. Andrés Trapiello, *Las armas y las letras. Literatura y guerra civil*, Barcelona, Península, 2002. <<

[3] Juan Avilés, «Veinticinco años después: la memoria de la transición», *Historia del presente* (Madrid), n.º 1, 2002, pp. 88-89. Alberto Reig Tapia, *Memoria de la guerra civil. Los mitos de la tribu*, Madrid, Alianza, 1999, p. 349. <<

[4] Referencias de la declaración en *El País* (Madrid), *El Periódico de Catalunya* (Barcelona) y *La Nueva España* (Oviedo), 21 de noviembre de 2002. <<

[5] J. Aróstegui, *La guerra civil*, Madrid, Historia 16, 1996, p. 6. W. L. Bernecker, *Guerra en España*, Madrid, Síntesis, 1996, p. 159. S. Juliá, «Discursos de la guerra civil española», en M. Requena (coord.), *La guerra civil española y las Brigadas Internacionales*, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1998, p. 29. P. Preston, *La guerra civil española*, Barcelona, Plaza y Janés, 2000, p. 20. A. Reig Tapia, *Memoria de la guerra civil*, p. 361. C. Seco Serrano, «Prólogo» a J. M. Cuenca Toribio, *La guerra civil de 1936*, Madrid, Espasa Calpe, 1986, p. 14. M. Tuñón de Lara (dir.), *La guerra civil española. 50 años después*, Barcelona, Labor, 1985, p. 9. <<

[6] J. Tusell, *Los hijos de la sangre. La España de 1936 desde 1986*, Madrid, Espasa, 1986, p. 10. <<

[7] José Mario Armero, *España fue noticia. Corresponsales extranjeros en la guerra civil española*, Madrid, Sedmay, 1976. <<

[8] Despacho incluido en la colección de documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania capturados por los aliados en 1945 y publicados como *Documents on German Foreign Policy, 1918-1945*, Series D, vol. 3, *Germany and the Spanish Civil War*, Washington, Government Printing Office, 1950, documento n.º 25, p. 24. <<

[9] Citado en Enrique Moradiellos, *La perfidia de Albión. El gobierno británico y la guerra civil española*, Madrid, Siglo XXI, 1996, p. 71. <<

[10] A. Miller, «España, en los ojos de Inge Morath», *ABC*, 26 de octubre de 2002. Se trata de su discurso de aceptación del XXII Premio Príncipe de Asturias de las Letras. <<

[11] Citados ambos en Stanley Weintraub, *The Last Great Cause. The Intellectuals and the Spanish Civil War*, Nueva York, Weybright and Talley, 1968, pp. 1-3. <<

[1] *Mito y razón*, Barcelona, Paidós, 1999, pp. 14 y 27. En igual sentido básico se expresa Paul Ricoeur al atender a la relación entre relato mítico y relato histórico: «Myth and History», en Mircea Eliade (ed.), *Encyclopedia of Religion*, Nueva York, Macmillan, 1987, vol. 10, pp. 273-281. <<

[2] Sobre la génesis y formato de este esquema dicotómico véase Vicente Cacho Viu, «La imagen de las dos Españas», *Revista de Occidente* (Madrid), n.º 60, 1986, pp. 49-77. <<

[3] Citado en A. Reig Tapia, *Memoria de la guerra civil*, p. 255. La frase forma parte del libro *El hecho y la idea de la Unión Patriótica*, publicado en 1929. <<

[4] J. M. Pemán, *Poema de la Bestia y el Ángel*, Zaragoza, Jerarquía, 1938. Citado en A. Reig Tapia, *Memoria de la guerra civil*, pp. 210-211; y en Julio Rodríguez Puértolas, *Literatura fascista española. Antología*, Madrid, Akal, 1987, pp. 170-187. <<

[5] María Luisa Rodríguez Aisa, *El cardenal Gomá y la guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado, 1936-1939*, Madrid, CSIC, 1981, pp. 19 y 23. <<

[6] Citado en Hilari Ragner, *La pólvora y el incienso. La Iglesia y la Guerra Civil Española*, Barcelona, Península, 2001, pp. 105-106. <<

[7] Reproducido por M. Tuñón de Lara (dir.), *La guerra civil española*, pp. 303-304. <<

[8] Artículo publicado en *Nuestra bandera* en febrero de 1938. Reproducido en M. Tuñón de Lara, *op. cit.*, p. 302. <<

[9] León Trotsky, «The Tragedy of Spain», *Socialist Appeal*, 10 de febrero de 1939. Reproducido en V. Cunningham (ed.), *Spanish Front. Writers on the Civil War*, p. 367. Hay una edición española del texto en L. Trotsky, *La revolución española*, Buenos Aires, El Yunque, 1973, p. 178. <<

[10] M. Azaña, *Causas de la guerra de España*, Barcelona, Crítica, 1986.
D. Abad de Santillán, *Por qué perdimos la guerra*, Buenos Aires, Imán, 1940.
D. Ibárruri y otros, *Guerra y revolución en España*, Moscú, Progreso, 1966-1977, 4 vols. <<

[11] Véanse los testimonios de Fraga y La Cierva en Paloma Aguilar, *Memoria y olvido de la guerra civil*, Madrid, Alianza, 1996, pp. 184-185 y 196. Cfr. P. Preston, «La historiografía de la Guerra Civil española: de Franco a la democracia», en J. L. de la Granja y otros, *Tuñón de Lara y la historiografía española*, Madrid, Siglo XXI, 1999, pp. 161-174. <<

[12] Andrés Goy, *Religión y Patria. Estampas religioso-patrióticas*, Madrid, Editorial El Perpetuo Socorro, 1945. Reproducción facsimilar en Luis Otero, *Flechas y Pelayos*, Madrid, Edaf, 2000, p. 21. <<

[13] Miguel de Unamuno, *Epistolario inédito. II. 1915-1936*, Madrid, Espasa Calpe, 1991, carta n.º 479, p. 352, fechada en Salamanca el 1 de diciembre de 1936. <<

[14] Juicio expresado con motivo del fallecimiento del escritor el 3 de enero de 2003. *ABC* (Madrid) y *Hoy* (Cáceres), 4 de enero de 2003. *Los cipreses* fue publicada por primera vez en marzo de 1953 por la editorial barcelonesa Planeta, entonces una pequeña empresa familiar. Antes de terminar el año había cuarta edición. Traducida a siete idiomas extranjeros, lleva vendidos seis millones de ejemplares en España y Latinoamérica. Javier Casado, «Ciprés para Gironella y sus diez millones de libros», *La Nueva España* (Oviedo), 5 de enero de 2003. <<

[15] Las proclamas comunistas y socialistas en Pierre C. Malerbe, *La oposición al franquismo*, Oviedo, Naranco, 1977, p. 108; y S. Juliá, «Echar al olvido. Memoria y amnesia en la transición», *Claves de Razón Práctica*, n.º 129, 2003, pp. 14-24. Las cristianodemócratas, monárquicas y episcopales en J. Tusell y J. Calvo, *Giménez Fernández, precursor de la democracia*, Sevilla, Mondadori-Diputación Provincial de Sevilla, 1990, p. 268; y J. A. Biescas y M. Tuñón de Lara, *España bajo la dictadura franquista*, Barcelona, Labor, 1982, pp. 327 y 336. <<

[16] Román Gubern, *1936-1939. La guerra de España en la pantalla*, Madrid, Filmoteca Nacional, 1986, pp. 118-130. Cfr. Magí Crusells, *La guerra civil española: cine y propaganda*, Barcelona, Ariel, 2000, cap. 6. <<

[17] R. Gubern, *op. cit.*, p. 128. Subrayado original. <<

[18] P. Aguilar, *Memoria y olvido de la guerra civil*, pp. 147-148. De hecho, sólo a un 1,9 % le parecía verdaderamente «mal». <<

[19] A título ilustrativo, baste mencionar a Rafael López Pintor, *La opinión pública española: del franquismo a la democracia*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1982; y S. Juliá, «Orígenes sociales de la democracia en España», en M. Redero (ed.), *La transición a la democracia en España*, monográfico de la revista *Ayer* (Madrid), n.º 15, 1994, pp. 165-188.
<<

[20] J. Tusell, Carrero. *La eminencia gris del régimen de Franco*, Madrid, Temas de Hoy, 1993, p. 372. <<

[21] Citado en Charles T. Powell, «Crisis del franquismo, reformismo y transición a la democracia», en J. Tusell y otros, *Las derechas en la España contemporánea*, Madrid, UNED, 1997, p. 250. <<

[1] Tzvetan Tódorov, *Memoria del mal, tentación del bien. Indagación sobre el siglo xx*, Barcelona, Península, 2002, p. 240. Señala Tódorov que la diferencia entre la sacralidad cívica del mito y el carácter sacrílego de la historia queda reflejada en la reacción del general De Gaulle en 1969 ante los esfuerzos historiográficos para desvelar la realidad de la colaboración de la Francia de Vichy con la Alemania hitleriana: «Nuestro país no necesita verdad. Debemos darle la esperanza, la cohesión y un objetivo» (p. 241). <<

[2] Antonio Ubieto, Juan Regla y José María Jover, *Introducción a la historia de España*, Barcelona, Teide, 1963. <<

[3] Sobre la importancia de Brenan véase E. Moradiellos, «El espejo distante: España en el hispanismo británico contemporáneo», *Revista de Extremadura* (Cáceres), n.º 24, 1997, pp. 7-38. <<

[4] J. Casanova, «Guerra civil, ¿lucha de clases?: el difícil ejercicio de reconstruir el pasado», *Historia social* (Valencia), n.º 20, 1994, pp. 135-150 (cita en p. 137). <<

[5] P. Preston, *La guerra civil española*, 2.^a ed., Barcelona, Plaza y Janés, 2000, p. 11. <<

[6] *Bibliografías de Historia de España. La guerra civil, 1936-1939*, Madrid, CSIC-CINDOC, 1996, 2 vols. <<

[1] Testimonio recogido por Javier Valenzuela, «El despertar de la memoria», *El País*, 2 de noviembre de 2002. <<

[2] Declaración reproducida en *El País*, 21 de noviembre de 2002. El verso forma parte de los «Proverbios y cantares» (número LIII) incluidos en *Campos de Castilla* (primera edición, 1912). Antonio Machado, *Poesías completas*, Madrid, Espasa Calpe, 1988, p. 246. <<

[3] «Encuesta sobre la guerra civil. 50 años después», *Solidaridad obrera* (Madrid), número extraordinario de mayo de 1986, pp. 18-19. <<

[4] Juliá, *Un siglo de España. Política y sociedad*, Madrid, Marcial Pons, 1999, p. 118. El juicio de Casanova en «Guerra civil, ¿lucha de clases?», p. 143. <<

[5] Richard Vinen, *Europa en fragmentos. Historia del viejo continente en el siglo xx*, Barcelona, Península, 2002, p. 198. <<

[6] Donald C. Watt, «The Nature of the European Civil War, 1919-1939», capítulo primero de su obra *Too Serious a Business. European Armed Forces and the Approach to the Second World War*, Londres, Temple Smith, 1975. Señala Serge Bernstein: «La historia del período de entreguerras es la lucha entre la democracia liberal y los modelos totalitarios, fascista y comunista, para la conquista del mundo». *Los regímenes políticos del siglo xx*, Barcelona, Ariel, 1996, p. 19. <<

[7] Francisco J. Romero Salvadó, *España, 1914-1918. Entre la guerra y la revolución*, Barcelona, Crítica, 2002. <<

[8] Raymond Carr, *España, 1808-1975*, Barcelona, Ariel, 1982, p. 575. <<

[9] José Varela Ortega, «Reacción y Revolución frente a Reforma», *Revista Internacional de Sociología* (Barcelona), n.º 3-4, 1972, pp. 253-263. <<

[10] Una panorámica del devenir republicano en Julio Gil Pecharromán, *La Segunda República*, Madrid, UNED, 1995; y Stanley G. Payne, *La primera democracia española. La Segunda República*, Barcelona, Paidós, 1995. <<

[11] Jordi Palafox, *Atraso económico y democracia. La Segunda República y la economía española, 1892-1936*, Barcelona, Crítica, 1991. <<

[12] Rafael Cruz, *El Partido Comunista de España en la Segunda República*, Madrid, Alianza, 1987. Julián Casanova, *De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, 1931-1939*, Barcelona, Crítica, 1997. <<

[13] José Ramón Montero Gibert, *La CEDA. El catolicismo social y político en la Segunda República*, Madrid, Revista de Trabajo, 1977, 2 vols. <<

[14] Julio Gil Pecharromán, *Conservadores subversivos. La derecha autoritaria alfonsina, 1931-1936*, Madrid, Eudema, 1994. Martin Blinkhorn, *Carlismo y contrarrevolución en España, 1931-1939*, Barcelona, Crítica, 1979. S. G. Payne, *Falange. Historia del fascismo español*, París, Ruedo Ibérico, 1965. Joan Maria Thomàs, *Lo que fue la Falange*, Barcelona, Plaza y Janés, 1999. <<

[15] Discurso en el cine Monumental el 15 de octubre de 1933, durante la campaña electoral. Publicado en el diario *El Debate*, 17 de octubre de 1933. Reproducido en Antonio Elorza y Carmen López Alonso, *Arcaísmo y modernidad. Pensamiento político en España. Siglos XIX-XX*, Madrid, Historia 16, 1989, pp. 201-203. Gil-Robles omitió los aspectos más virulentos de esta arenga (denuncia judeo-masónica y apelación a la sangre) en sus *Discursos parlamentarios*, Madrid, Taurus, 1971, pp. 269-270; y en sus memorias: *No fue posible la paz*, Barcelona, Ariel, 1968, p. 98. <<

[16] Octavio Ruiz Manjón-Cabeza, *El Partido Republicano Radical, 1908-1936*, Madrid, Tebas, 1976, cap. 12. Juan Avilés, *La izquierda burguesa en la Segunda República*, Madrid, Espasa Calpe, 1985. Nigel Townson, *La República que no pudo ser. La política de centro en España*, Madrid, Taurus, 2002. <<

[17] Discurso en el cine Europa, 3 de octubre de 1933. Reproducido en A. Elorza y C. López Alonso, *Arcaísmo y modernidad. Pensamiento político en España*, pp. 204-205. Sobre el caballerismo véase S. Juliá, *Los socialistas en la política española, 1879-1982*, Madrid, Taurus, 1997, cap. 6. <<

[18] Discurso en Barcelona, 30 de agosto de 1934. M. Azaña, *Discursos políticos*, Barcelona, Crítica, 2004, p. 390. <<

[19] Declaración parlamentaria de Prieto, 20 de diciembre de 1933. Citada en Santos Juliá, *Los socialistas en la política española*, p. 200. <<

[20] Preston, *La destrucción de la democracia en España. Reacción, reforma y revolución en la Segunda República*, Madrid, Turner, 1978, pp. 158-159. <<

[21] La declaración de Izquierda Republicana en J. Avilés, *La izquierda burguesa en la Segunda República*, p. 249. La proclama de Companys se reproduce en Hilari Raguer, *El general Batet. Franco contra Batet*, Barcelona, Península, 1996, pp. 164-165. <<

[22] David Ruiz, *Insurrección defensiva y revolución obrera. El octubre español de 1934*, Barcelona, Labor, 1988. Adrian Shubert, *Hacia la revolución. Orígenes sociales del movimiento obrero en Asturias*, Barcelona, Crítica, 1984. La versión oficial en: *En servicio de la República. La revolución de octubre en España*, Madrid, Gobierno de la República, 1935.
<<

[23] Prieto, *Discursos fundamentales*, Madrid, Turner, 1976, pp. 257 y 272-273. <<

[24] César M. Lorenzo, *Los anarquistas españoles y el poder*, París, Ruedo Ibérico, 1972, pp. 74-80. <<

[25] Texto reproducido en Ronald Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española*, Barcelona, Crítica, 1979, vol. 1, p. 116. Esta excelente obra recoge el testimonio de más de 300 personas entrevistadas por el autor entre junio de 1973 y mayo de 1975. <<

[26] Reproducido en la introducción de S. Juliá a F. Largo Caballero, *Escritos de la República*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 1985, p. 305. <<

[27] S. G. Payne, *Los militares y la política en la España contemporánea*, París, Ruedo Ibérico, 1968. Manuel Ballbé, *Orden público y militarismo en la España constitucional*, Madrid, Alianza, 1983. <<

[28] Palabras pronunciadas el 12 de enero de 1936. Recogidas en Joaquín Arrarás, *Historia de la Segunda República*, Madrid, Editora Nacional, 1968, vol. 4, p. 13. <<

[29] M. de Unamuno, *Epistolario inédito*, carta n.º 480, pp. 354-355, fechada en Salamanca el 13 de diciembre de 1936. La carta prosigue: «Vencerán, pero no convencerán; conquistarán, pero no convertirán». <<

[30] Anotación de 19 de septiembre de 1937. M. Azaña, *Memorias de guerra*, Barcelona, Grijalbo, 1996, p. 295. <<

[31] Salvador de Madariaga, *España. Ensayo de historia contemporánea*, Madrid, Espasa Calpe, 1989, pp. 407-408. <<

[1] *El Frente Popular en España*, Madrid, Oficina Informativa Española, 1948, p. 88. <<

[2] H. L. Matthews, *Half of Spain Died*, Nueva York, Charles Scribner's Sons, 1973, p. 231. Reproducida en Carlos Rojas, *La guerra civil vista por los exiliados*, Barcelona, Planeta, 1975, pp. 259-260. <<

[3] R. Carr, «Reflexiones sobre la Guerra Civil», *Revista de Libros*, n.º 4, 1996, pp. 17-20 (cita en p. 18). <<

[4] León Tolstói, *Guerra y paz*, Barcelona, Círculo de Lectores, 1967, vol. 2, novena parte, capítulo primero, pp. 647-650. Traducción del original ruso por Serge T. Baranov y N. Balmany. <<

[5] J. Palafox, *Atraso económico y democracia. La Segunda República y la economía española*, pp. 278-280. <<

[6] S. Juliá, *Un siglo de España. Política y sociedad*, pp. 113-116. <<

[7] Shlomo Ben-Ami, «The Republican “take-over”: Prelude to inevitable catastrophe?», en P. Preston (ed.), *Revolution and War in Spain*, Londres, Methuen, 1984, pp. 14-34 (cita en p. 29). <<

[8] R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. 1, p. 28. El juicio de Fraser ha sido refrendado por un joven protagonista del conflicto que tuvo luego altas responsabilidades políticas y militares: el general José Antonio Sáenz de Santa María. Poco antes de su muerte, en agosto de 2003, quien fuera alférez provisional en la guerra y llegaría a teniente general en la democracia declaraba que «la guerra civil fue evitable». Y sentenciaba quiénes habían sido, a su juicio, los responsables de su estallido: «la clase política de entonces». Entrevista para el programa *Epílogo* de Canal Plus, reproducida en el diario ovetense *La Nueva España*, 28 de agosto de 2003. <<

[9] Sigfrido Samet Letichevsky, «Culpa y responsabilidad», *El Catoblepas. Revista crítica del presente* (Oviedo), n.º 12, febrero de 2003, p. 11 (revista electrónica: www.nodulo.org/ec). <<

[10] Ambos testimonios (de 1929 y 1936, respectivamente) en S. Juliá (ed.), *Violencia política en la España del siglo xx*, Madrid, Taurus, 2000, pp. 11-12.

<<

[11] Testimonio de 1984 reproducido en J. M. Cuenca Toribio, *La guerra civil de 1936*, p. 27. <<

[12] Edward Malefakis, «Aspectos históricos y teóricos de la guerra», en E. Malefakis (dir.), *1936-1939. La Guerra de España*, Madrid, El País, 1986, pp. 3-16 (cita en pp. 9-10). <<

[13] El «singular equilibrio» procede de E. Malefakis, *op. cit.*, p. 9. El «equilibrio de incapacidades» en J. Aróstegui, *La guerra civil*, p. 16. La «acumulación de impotencias» en S. Juliá, *Víctimas de la guerra civil*, p. 17.
<<

[¹⁴] A. Trapiello, *Las armas y las letras. Literatura y guerra civil*, p. 43. <<

[15] E. Malefakis, *op. cit.*, p. 16. <<

[16] S. Juliá, «De “guerra contra el invasor” a “guerra fratricida”», en S. Juliá (coord.), *Víctimas de la guerra civil*, Madrid, Temas de Hoy, 1999, p. 16. <<

[17] R. Serrano Suñer, *Entre Hendaya y Gibraltar*, Barcelona, Nauta, 1973, p. 37. <<

[18] G. Cabanellas, *La guerra de los mil días*, Barcelona, Grijalbo, 1973, p. 18.
<<

[19] R. Salas Larrazábal, *Historia del Ejército Popular de la República*, Madrid, Editora Nacional, 1973, vol. 1, p. 170. <<

[20] R. Salas Larrazábal, *Los datos exactos de la guerra civil*, Madrid, Rioduero, 1980, p. 72. <<

[21] R. Salas Larrazábal, *op. cit.*, pp. 63-72. <<

[22] Manuel Goded, *Un «faccioso» cien por cien*, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1939. Se trata del relato de su hijo y militar, que le acompañó en la sublevación y fue detenido y juzgado por ello. Omite la alocución radiada en un intento de exculpar a su padre de la acusación frecuente en ámbitos insurgentes de haberse rendido innecesariamente sin combatir hasta el final.
<<

[23] H. Raguer, *El general Batet*, cap. 9. <<

[1] Una panorámica clásica de esos «tres días de Julio» tan cruciales se ofrece en Luis Romero, *Tres días de Julio: 18, 19 y 20 de 1936*, Barcelona, Ariel, 1967. Una revisión actualizada se ofrece en las colaboraciones de Gabriel Cardona y Fernando Fernández Bastarreche en el vol. 4 de la colección *La guerra civil*, Madrid, Historia 16, 1986, dedicado a «El 18 de julio. La sublevación paso a paso». <<

[2] Josep M. Bricall, «La economía española, 1936-1939», en M. Tuñón de Lara, *La guerra civil española*, pp. 358-417 (cita en p. 365). <<

[3] Fragmento del discurso reproducido en R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, p. 153. <<

[4] Telegrama del cónsul para el ministro Ciano, 25 de julio de 1936. Reproducido en Ismael Saz, *Mussolini contra la Segunda República. Hostilidad, conspiraciones, intervención*, Valencia, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1986, p. 184. <<

[5] Testimonio de Jacinto Borrás, periodista de *Solidaridad Obrera*. Recogido en R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. 1, p. 141. <<

[6] Declaraciones de Azaña a Isidro Fabela, representante de México ante la Sociedad de Naciones, a mediados de 1939. Reproducidas en Santos Martínez Saura, *Memorias del secretario de Azaña*, Barcelona, Planeta, 1999, p. 53. <<

[7] R. Carr y J. P. Fusi, *España, de la dictadura a la democracia*, Barcelona, Planeta, 1979, pp. 14-15. <<

[8] R. Salas Larrazábal, *Historia del Ejército Popular de la República*, vol. 1, pp. XXII y XXIII. <<

[9] Discurso en la Cámara de los Comunes en 1901. Citado en Roy Jenkins, *Churchill*, Barcelona, Península, 2002, p. 99. <<

[10] Declaración del general Sheridan en 1870. Citada en Arthur Marwick, Clire Emsley y Wendy Simpson (eds.), *Total War and Historical Change: Europe, 1914-1945*, Buckingham, Open University Press, 2001, p. 255. <<

[11] Palabras de A. Diego en 1929 en una publicación del Ministerio de la Guerra. Citadas en Elena San Román López, «Las consecuencias pacíficas de la Gran Guerra: la movilización industrial», *Hispania* (Madrid), n.º 187, 1994, pp. 611-658 (cita en p. 619). <<

[12] Informe del mayor E. C. Richards, 25 de noviembre de 1938. Reproducido en E. Moradiellos, *La perfidia de Albión. El gobierno británico y la guerra civil española*, p. 257. Subrayados nuestros. <<

[13] Despacho del 19 de febrero de 1939. *Documents on German Foreign Policy. Germany and the Spanish Civil War*, documento n.º 740, p. 844. <<

[14] Vicente Rojo, *¡Alerta los pueblos! Estudio político-militar del período final de la guerra española*, Barcelona, Ariel, 1974, pp. 183-193. Subrayados originales. <<

[1] G. Cardona, «Entre la revolución y la disciplina: ensayo sobre la dimensión militar de la Guerra Civil», en E. Moradiellos (ed.), *La Guerra Civil*, monográfico de la revista *Ayer*, n.º 50, 2003, p. 41. <<

[2] Fragmento de su Instrucción reservada n.º 5, anterior a la sublevación. Reproducida en H. Raguer, *El general Batet*, pp. 239-240. El cómputo de generales fusilados por los sublevados en R. Salas Larrazábal, *Los datos exactos de la guerra civil*, p. 70. <<

[3] Reproducido en R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. 1, p. 59. <<

[4] Un estudio reciente sobre el proceso de institucionalización insurgente en José Luis Orella, *La formación del Estado Nacional durante la guerra civil española*, Madrid, Actas, 2001. <<

[5] Ismael Saz Campos, «Política en zona nacionalista: la configuración de un régimen», en E. Moradiellos (ed.), *La Guerra Civil*, pp. 55-83. <<

[6] G. Cardona, «Las operaciones militares», en M. Tuñón de Lara, *La Guerra Civil*, p. 264. Los más completos análisis de los aspectos militares de la guerra, tamizados por su partidismo profranquista, se deben al coronel José Manuel Martínez Bande y su equipo del Servicio Histórico Militar: *Monografías de la Guerra de Liberación* (luego *Monografías de la Guerra de España*). La primera se tituló *La marcha sobre Madrid*, Madrid, Editorial San Martín, 1968; la última fue *El final de la Guerra Civil*, Madrid, San Martín, 1985. <<

[7] Despacho del 10 de diciembre de 1936. Citado en E. Moradiellos, *Francisco Franco. Crónica de un Caudillo casi olvidado*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 85. <<

[8] *Ciano's Hidden Diary, 1937-1939*, Nueva York, Dutton, 1953, p. 46. <<

[9] Reproducido en P. Preston, *Franco. Caudillo de España*, Barcelona, Grijalbo, 1994, p. 278. <<

[10] P. Preston, *Franco*, p. 304. Dos percepciones contrapuestas sobre el acierto de esta estrategia bélica en Carlos Blanco Escolá, *La incompetencia militar de Franco*, Madrid, Alianza, 2000; y Rafael Casas de la Vega, *Franco, militar*, Madrid, Fénix, 1995. <<

[11] Cómputo de R. Salas Larrazábal, *Los datos exactos de la guerra civil*, p. 70. <<

[12] Palabras de C. M. Lorenzo en *Los anarquistas españoles y el poder*, p. 105. <<

[13] Michael Alpert, *El ejército republicano en la guerra civil*, Madrid, Siglo XXI, 1989, p. 59. <<

[¹⁴] M. Azaña, «El nuevo Ejército de la República», en *Causas de la guerra de España*, p. 69. <<

[15] J. Casanova, *De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, 1931-1939*, Barcelona, Crítica, 1997, p. 189. Un miliciano anarquista del frente de Aragón, Saturnino Carod, reconocería amargamente que pronto se dio «cuenta de que no podíamos seguir luchando así. Hacía falta más organización». R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. 1, p. 179. <<

[16] G. Cardona, «Entre la revolución y la disciplina», en E. Moradiellos (ed.), *La Guerra Civil*, p. 49. <<

[17] *Spain and China: Intelligence Regarding Air Warfare*, 10 de junio de 1939. Informe de los jefes de Estado Mayor del Reino Unido. Custodiado en el Public Record Office (Archivo Histórico Nacional de Gran Bretaña, sito en Londres), sección «Cabinet Records» (CAB), serie 54 (Chiefs of Staff Sub-Committee), legajo 6. Signatura archivística: CAB 54/6. <<

[18] Informe del 30 de enero de 1939. E. Moradiellos, *La perfidia de Albión. El gobierno británico y la guerra civil española*, p. 337. <<

[19] Gerald Howson, *Armas para España. La historia no contada de la guerra civil española*, Barcelona, Península, 2000, p. 350. Añade este autor en la p. 51: «los fusiles y ametralladoras que (los republicanos) se vieron obligados a comprar utilizaban cartuchos de no menos de diez calibres diferentes». <<

[1] Confesión de Franco a Pemán a mediados de agosto de 1936. P. Preston, *Franco*, p. 227. <<

[2] Carmen Benito del Pozo, *La clase obrera asturiana bajo el franquismo. Empleo, condiciones de trabajo y conflictividad*, Madrid, Siglo XXI, 1993.
<<

[3] Carme Molinero y Pere Ysàs, *Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista*, Madrid, Siglo XXI, 1998, pp. 1-12. <<

[4] J. M. Bricall, «La economía española, 1936-1939», p. 377. <<

[5] J. M. Bricall, *op. cit.*, p. 410. <<

[6] Ángel Viñas, Julio Viñuela, Fernando Eguidazu, Carlos Fernández Pulgar y Senén Florensa, *Política comercial exterior de España (1931-1975)*, Madrid, Banco Exterior de España, 1979, vol. 1, pp. 239-240. Cfr. Ángel Viñas, «La financiación exterior de la guerra civil», en su libro *Guerra, dinero y dictadura: ayuda fascista y autarquía en la España de Franco*, Barcelona, Crítica, 1984, pp. 202-203. <<

[7] Discurso de Azaña en la Universidad de Valencia, 18 de julio de 1937. Reproducido en G. Jackson, *Entre la Reforma y la Revolución. La República y la guerra civil, 1931-1939*, Barcelona, Crítica, 1980, p. 290. La instrucción de Mola se recoge en R. de la Cierva, *Historia de la guerra civil. I. Perspectivas y antecedentes*, Madrid, San Martín, 1969, p. 771. <<

[8] F. Franco Salgado-Araujo, *Mis conversaciones privadas con Franco*, Barcelona, Planeta, 1976, p. 78. Anotación de 5 de febrero de 1955. <<

[9] Alocución del 22 de julio de 1936. R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. 1, pp. 172-173. <<

[10] S. Juliá (coord.), *Víctimas de la guerra civil*, pp. 407-410. J. Casanova (coord.), *Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco*, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 8 y 20. <<

[11] Testimonio en R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. 1, p. 228. <<

[12] H. Raguer, *La pólvora y el incienso*, p. 209. <<

[13] José Ángel Tello, *Ideología y política. La Iglesia católica española, 1936-1959*, Zaragoza, Pórtico, 1984, pp. 87-88. <<

[14] El texto del decreto y el correspondiente discurso radiado de unificación pronunciado por Franco se reproducen en Joan Maria Thomàs, *Lo que fue la Falange*, Barcelona, Plaza y Janés, 1999, pp. 329-339. <<

[15] R. Serrano Suñer, *Entre Hendaya y Gibraltar*, p. 57. J. Tusell, *Franco en la guerra civil*, Barcelona, Tusquets, 1992, p. 139. <<

[16] Ricardo Chueca, *El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET y de las JONS*, Madrid, CIS, 1983. Sheelagh Ellwood, *Prietas las filas. Historia de Falange Española*, Barcelona, Crítica, 1984. <<

[17] Una reciente panorámica sobre esas medidas en José Ángel Sánchez Asiaín, *Economía y finanzas en la Guerra Civil española*, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999. <<

[18] Despacho del 25 de octubre. *Documents on German Foreign Policy. Germany and the Spanish Civil War*, documento n.º 455, p. 480. <<

[19] Despacho de sir Robert Hogdson, 24 de agosto de 1938. E. Moradiellos, *El reñidero de Europa. Las dimensiones internacionales de la guerra civil española*, Barcelona, Península, 2001, p. 236. <<

[20] El estudio más completo sobre el proceso revolucionario republicano es el de B. Bolloten, *La guerra civil española. Revolución y contrarrevolución*, Madrid, Alianza, 1989. <<

[21] M. Azaña, *Memorias de guerra*, p. 90. Anotación de 18 de junio de 1937.
<<

[22] Los datos sobre colectivizaciones agrarias en J. Casanova, *De la calle al frente*, p. 199; los de colectivizaciones urbanas en B. Bolloten, *La guerra civil española*, pp. 109-128. <<

[23] Testimonio de Manuel Castro (pseudónimo). Recogido en R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. 1, p. 176. <<

[24] S. Juliá (coord.), *Víctimas de la guerra civil*, pp. 407-412 (la cita de García Oliver en p. 71). Joan Villarroja, «La vergüenza de la República», *La aventura de la Historia* (Madrid), n.º 3, 1999, pp. 26-33. <<

[25] La cita del órgano de la CNT en J. Casanova, *De la calle al frente*, pp. 160-161. La cita del valido de Largo Caballero en J. Tusell, «Estudio preliminar» a L. Araquistain, *Sobre la guerra civil y en la emigración*, Madrid, Espasa Calpe, 1983, p. 22. <<

[26] A. Reig Tapia, *Ideología e historia. La represión franquista en la guerra civil*, Madrid, Akal, 1984, pp. 8-9. <<

[27] Testimonio recogido en R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. 1, p. 384. <<

[28] J. Aróstegui, «Guerra, poder y revolución. La República española y el impacto de la sublevación», en E. Moradiellos (ed.), *La Guerra Civil*, pp. 85-113. <<

[29] La consigna «productivista» se reproduce en Anna Monjo y Carme Vega, «La clase obrera durante la guerra civil española: una historia silenciada», *Historia y fuente oral* (Barcelona), n.º 3, 1990, p. 75. La conversión de la fiesta en guerra procede de J. Casanova, *De la calle al frente*, p. 156 y cap. 7.
<<

[30] Testimonio recogido en R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. 1, pp. 326-327. <<

[31] Cifras y cálculos de J. M. Bricall, «La economía española, 1936-1939», pp. 376, 378 y 410. <<

[32] J. A. Sánchez Asiaín, *Economía y finanzas en la guerra civil*, pp. 84-85.
<<

[33] La cita de Sardá en *El Banco de España. Una historia económica*, Madrid, Banco de España, 1970, p. 436. Sobre el tema véanse: Ángel Viñas, *El oro de Moscú. Alfa y omega de un mito franquista*, Barcelona, Crítica, 1984; y Pablo Martín Aceña, *El oro de Moscú y el oro de Berlín*, Madrid, Taurus, 2001. <<

[34] J. Casanova, *De la calle al frente*, pp. 220-226. Un detallado examen de la crisis en Helen Graham, *The Spanish Republic at War*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, cap. 5. <<

[35] Dos visiones no totalmente concordantes sobre la estrategia política de la Comintern en A. Elorza y M. Bizcarrondo, *Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España*, Barcelona, Planeta, 1999; y S. G. Payne, *Unión Soviética, comunismo y revolución en España*, Barcelona, Plaza y Janés, 2003. <<

[36] Discurso del 16 de noviembre de 1937. Reproducido en J. M. Cuenca Toribio, *La oratoria parlamentaria española*, Madrid, Centro de Estudios Políticos, 2002, p. 944. <<

[37] J. M. Bricall, «La economía española, 1936-1939», p. 374. <<

[38] Despacho del 25 de octubre. *Documents on German Foreign Policy. Germany and the Spanish Civil War*, documento n.º 455, p. 480. <<

[39] Despacho de R. S. Stevenson, 25 de noviembre de 1938. E. Moradiellos, *El reñidero de Europa*, p. 235. <<

[40] Sobre el golpe de Casado véase Ángel Bahamonde y Javier Cervera, *Así terminó la guerra civil*, Madrid, Marcial Pons, 1999. <<

[1] M. Cabanellas, *Cuatro generales. II. La lucha por el poder*, Barcelona, Planeta, 1977, p. 240. <<

[2] Reproducido en R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. 1, pp. 209-210. <<

[3] Alejandro Pizarroso, «La propaganda, arma de guerra en España, 1936-1939», en *Propaganda en guerra*, Salamanca, Consorcio Salamanca 2002, 2002, pp. 11-30. E. Moradiellos, «Una guerra civil de tinta: la propaganda republicana y nacionalista en Gran Bretaña durante la guerra civil», *Sistema* (Madrid), n.º 164, 2001, pp. 69-97. <<

[4] Antonio Vallejo-Nájera, *Divagaciones intrascendentes* (Valladolid, 1938).
Reproducido en Julio Rodríguez Puértolas, *Literatura fascista española.
Antología*, pp. 520-521. <<

[5] M. Azaña, *Memorias de guerra*, p. 313. Anotación de 6 de octubre de 1937. <<

[6] Citado en J. M. Thomàs, *Lo que fue la Falange*, p. 286. <<

[7] Francisco Franco Salgado-Araujo, *Mis conversaciones privadas con Franco*, Barcelona, Planeta, 1976, p. 142. Y añadía: «Lo demás... Movimiento, sindicatos, Falange y demás tinglados políticos, no han arraigado en el país después de diecinueve años del Alzamiento; es triste consignarlo, pero es la pura verdad». <<

[8] Anotación de 26 de agosto de 1937. M. Azaña, *Memorias de guerra*, p. 236. <<

[9] Anotación del 31 de mayo de 1937. M. Azaña, *op. cit.*, p. 56. Cfr. Santiago de Pablo, «La guerra civil en el País Vasco: ¿un conflicto diferente?», en E. Moradiellos (ed.), *La Guerra Civil*, pp. 115-141. El panorama catalán en Enric Ucelay-Da Cal, *La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l'etapa republicana, 1931-1939*, Barcelona, La Magrana, 1982. <<

[10] José María Garmendia, «El Pacto de Santoña», en C. Garitaonaindía y J. L. de la Granja (eds.), *La Guerra Civil en el País Vasco. 50 años después*, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1987, pp. 157-180. Sobre las gestiones de la Generalitat para encontrar una paz por separado véase E. Moradiellos, «El gobierno británico y Cataluña durante la República y la guerra civil», *El Basilisco* (Oviedo), n.º 27, 2000, pp. 21-36. <<

[11] Testimonio recogido en R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. 1, p. 265. <<

[12] Custodiada en el Public Record Office, sección «Foreign Office Records» (FO: archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores), serie «Eden Papers» (documentación de *sir* Anthony Eden), legajo 27. Signatura archivística: FO 954/27. <<

[13] Rafael Borrás (dir.), *Crónica de la guerra civil española*, Barcelona, Plaza y Janés-Círculo de Lectores, 1996, pp. 319-321. <<

[14] Número del 29 de agosto de 1936. Reproducido en B. Bolloten, *La guerra civil española*, p. 135. La cita del 17 de julio se recoge en R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. 1, p. 184. <<

[15] Discurso pronunciado en Barcelona el 6 de septiembre de 1936. A. Nin, *Los problemas de la revolución española*, Barcelona, Fontamara, 1978, pp. 214 y 220. <<

[16] R. Salas Larrazábal, *Historia del Ejército Popular de la República*, vol. 2, p. 1973. <<

[17] Informe del 21 de mayo de 1939. P. Togliatti, *Escritos sobre la guerra de España*, Barcelona, Crítica, 1980, pp. 270-271. <<

[1] «Europe and Spain», *The Times*, 8 de septiembre de 1936. <<

[2] La hipótesis de la participación germano-italiana ha quedado desmentida (sin menoscabo de la existencia de contactos entre los conspiradores militares y autoridades nazis y fascistas) por los trabajos de Ángel Viñas (*La Alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes de la intervención alemana en la guerra civil española*, Madrid, Alianza, 1977) e Ismael Saz (*Mussolini contra la Segunda República. Hostilidad, conspiraciones, intervención*, Valencia, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1986). Por su parte, Herbert R. Southworth (*El mito de la Cruzada de Franco*, Barcelona, Plaza y Janés, 1986) demostró la falsedad del supuesto plan revolucionario soviético para tomar el poder en España y su función política legitimadora: justificar la insurrección militar como un mero golpe preventivo que se anticipaba a una inminente sublevación comunista. <<

[3] Una introducción clásica sobre ese período en P. M. H. Bell, *The Origins of the Second World War in Europe*, Londres, Longman, 1993. <<

[4] Renzo de Felice, *Mussolini it Duce*, Turín, Einaudi, 1974-1981, 2 vols. Robert J. B. Bosworth, *Mussolini*, Barcelona, Península, 2003. MacGregor Knox, *Mussolini Unleashed, 1939-1941. Politics and Strategy in Fascist Italy's Last War*, Cambridge, Cambridge University Press, 1986. <<

[5] Klaus Hildebrand, *The Foreign Policy of the Third Reich*, Londres, Batsford, 1973; Gerhard L. Weinberg, *The Foreign Policy of Hitler's Germany, 1933-1936*, Chicago, University of Chicago, 1983; Ian Kershaw, *Hitler, 1889-1936*, Barcelona, Península, 2000. <<

[6] Jean-Baptiste Duroselle, *Politique étrangère de la France. La décadence, 1932-1939*, París, Imprimerie Nationale, 1979. Martin Thomas, *Britain, France and Appeasement*, Oxford, Berg, 1997. R. A. C. Parker, *Chamberlain and Appeasement. British Politics and the Coming of the Second World War*, Londres, Macmillan, 1993. <<

[7] Jonathan Haslam, *The Soviet Union and the Struggle for Collective Security in Europe, 1933-1940*, Londres, Macmillan, 1984. Geoffrey Roberts, *The Soviet Union and the Origins of the Second World War*, Londres, Macmillan, 1995. <<

[8] John Coverdale, *La intervención fascista en la guerra civil española*, Madrid, Alianza, 1979. Morten Heiberg, *Emperadores del Mediterráneo. Franco, Mussolini y la guerra civil española*, Barcelona, Crítica, 2003. Robert Whealey, *Hitler and Spain. The Nazi Role in the Spanish Civil War*, Lexington, University Press of Kentucky, 1989. Angel Viñas, *Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil*, Madrid, Alianza, 2001. <<

[9] Directrices de noviembre de 1936. A. Viñas, *La Alemania nazi y el 18 de julio*, p. 363, nota 6. <<

[10] *Documents on German Foreign Policy. Germany and the Spanish Civil War*, documento n.º 157. <<

[11] Se trataba del semanario *Candide*. Charles A. Micaud, *The French Right and Nazi Germany, 1933-1939. A Study of Public Opinion*, Nueva York, Octagon Books, 1972, p. 114. Cfr. Juan Avilés, *Pasión y farsa. Franceses y británicos ante la guerra civil española*, Madrid, Eudema, 1994. <<

[12] Testimonio del capitán Desfrasne en Jaime Martínez Parrilla, *Las fuerzas armadas francesas ante la guerra civil española*, Madrid, Ediciones Ejército, 1987, p. 206. <<

[13] La instrucción de Stanley Baldwin para Anthony Eden (del 26 de julio) y la minuta de *sir* Samuel Hoare (del 5 de agosto de 1936), en E. Moradiellos, *La perfidia de Albión*, pp. 58 y 68. <<

[¹⁴] César Oliveira, *Salazar e a guerra civil de Espanha*, Lisboa, O Jornal, 1987. Fernando Rosas (ed.), *Portugal e a guerra civil espanhola*, Lisboa, Colibri, 1998. <<

[15] José Antonio Matesanz, *Las raíces del exilio. México ante la guerra civil española*, México, Colegio de México-Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. <<

[16] Richard P. Traína, *American Diplomacy and the Spanish Civil War*, Bloomington, Indiana University, 1968. Mark Falcoff y Frederick Pike (dirs.), *The Spanish Civil War. American Hemispheric Perspectives*, Lincoln, University of Nebraska, 1982. <<

[17] J. Tusell y G. García Queipo de Llano, *El catolicismo mundial y la guerra de España*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1993. Robert A. Stradling, «Campo de batalla de reputaciones: Irlanda y la guerra civil española», en P. Preston (ed.), *La República asediada*, Barcelona, Península, 1999, pp. 119-143. <<

[18] María Rosa de Madariaga, *Los moros que trajo Franco. La intervención de tropas coloniales en la guerra civil*, Barcelona, Martínez Roca, 2002. <<

[19] A. Elorza y M. Bizcarrondo, *Queridos camaradas. La Internacional Comunista y España*, p. 460. <<

[20] Informe del 20 de febrero de 1937. Ronald Radosh, Mary R. Habeck y Grigory Sevostianov (eds.), *La España traicionada. Stalin y la guerra civil*, Barcelona, Planeta, 2001, p. 174. <<

[21] La primera cifra procede de R. Radosh y su equipo, *España traicionada*, p. 549. La segunda de Rémi Skoutelsky, *L'Espoir guidait leurs pas. Les volontaires français dans les Brigades Internationales*, París, Grasset, 1998, p. 330. <<

[22] Daniel Kowalsky, *La Unión Soviética y la guerra civil española. Una revisión crítica*, Barcelona, Crítica, 2003, p. 258. Cfr. G. Howson, *Armas para España*, caps. 17-20; y Academia de Ciencias de la URSS: *International Solidarity with the Spanish Republic*, Moscú, Progreso, 1975. <<

[23] Raymond L. Proctor, *Hitler's Luftwaffe in the Spanish Civil War*, Westport, Greenwood Press, 1983. Á. Viñas, *Franco, Hitler y el estallido de la guerra civil*, pp. 448-453. <<

[24] J. Coverdale, *La intervención fascista en la guerra civil*, p. 372. I. Saz y J. Tusell (eds.), *Fascistas en España. La intervención italiana a través de los telegramas de la «Missione Militare Italiana in Spagna»*, Madrid, CSIC, 1981. <<

[25] El texto completo en G. Howson, *Armas para España*, p. 182. Aunque la carta aparece fechada en 1936, se trata de un error y corresponde a 1937. <<

[26] Carta del embajador en París a Roosevelt, 30 de julio de 1937. *For the President. Personal and Secret. Correspondence Between Franklin D. Roosevelt and William C. Bullitt*, Boston, Houghton Mifflin Co., 1972, pp. 221-222. <<

[27] Despacho de Claude G. Bowers, 20 de julio de 1937. *Foreign Relations of the United States. 1937*, Washington, Government Printing Office, 1953, vol. 1, p. 364. Las memorias del embajador en *Misión en España*, México, Grijalbo, 1955. <<

[28] Juan Simeón Vidarte, *Todos fuimos culpables*, México, Fondo de Cultura Económica, 1973, pp. 764-765. El autor era dirigente socialista y sería durante la guerra subsecretario del Ministerio de Gobernación. Por el contexto, la confesión parece hecha a fines de septiembre de 1937. <<

[29] Memorándum del conde de Torrellano, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores franquista, 20 de mayo de 1938. E. Moradiellos, *El reñidero de Europa*, pp. 215-216. <<

[30] «Non-Intervention», *The Manchester Guardian*, 5 de marzo de 1938. <<

[31] R. Serrano Suñer, *Entre Hendaya y Gibraltar*, p. 235. <<

[1] Datos procedentes de Josep Fontana, «Introducción», *Enseñar historia con una guerra civil por medio*, Barcelona, Crítica, 1999, pp. 10-13. <<

[2] La confesión de Negrín y el juicio de Zugazagoitia en la obra de éste: *Guerra y vicisitudes de los españoles*, Barcelona, Tusquets, 2001, pp. 33 y 67.
<<

[3] F. Franco, *Palabras del Caudillo. 19 abril 1937-31 diciembre 1938*, Barcelona, Ediciones FE, 1939, p. 136. <<

[4] J. Tusell, «Estudio preliminar» a la obra de L. Araquistain, *Sobre la guerra civil y en la emigración*, Madrid, Espasa, 1983, pp. 56-57. <<

[5] Inexcusables para perfilar la biografía de Negrín son Ricardo Miralles, *Juan Negrín*, Madrid, Temas de Hoy, 2003; Santiago Álvarez, *Negrín*, Madrid, Ediciones de la Torre, 1994, 2 vols.; y José Medina Jiménez, *La familia Negrín en Gran Canaria*, Las Palmas, s. e., 2003. <<

[6] Bonifacio N. Díaz Chico, «El legado científico de Juan Negrín», en M. Tuñón de Lara y otros, *Juan Negrín López*, Las Palmas, Gobierno de Canarias, 1996, pp. 193-246. Alfredo Rodríguez Quiroga, «Juan Negrín, fisiólogo», *Arbor*, n.º 608, 1996, pp. 73-95; y «De la fisiología experimental al cultivo de la bioquímica moderna: la Escuela de Fisiología de Juan Negrín», *Arbor*, n.º 634, 1998, pp. 121-140. <<

[7] Sobre esta etapa científica madrileña véase el favorable retrato elaborado por el doctor J. Álvarez Sierra en el libro escrito en colaboración con J. Gutiérrez-Rave, *Dr. Juan Negrín*, Madrid, Celebrities, 1966. Su valor testimonial se acrecienta debido a la fecha y lugar de edición y por contraste con la furibunda crítica política hacia Negrín que contiene. <<

[8] B. N. Díaz Chico, *op. cit.*, pp. 225-238. Severo Ochoa, *Escritos*, Oviedo, Caja de Ahorros de Asturias, 1989, pp. 58-59. Rafael Méndez, *Caminos inversos. Vivencias de ciencia y guerra*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 18-19. <<

[9] Palabras de Negrín el 1 de diciembre de 1929 en una conferencia en la Casa del Pueblo de Madrid. Recogidas en Juan Marichal, «Ciencia y gobierno: la significación histórica de Juan Negrín», en M. Ramírez (ed.), *Estudios sobre la Segunda República*, Madrid, Tecnos, 1975, pp. 185-200 (la cita en p. 191). <<

[10] J. Marichal, «Ciencia y gobierno», p. 192. <<

[11] Véase el recuento de la actividad parlamentaria de Negrín en Aurelio Martín Nájera, *El grupo parlamentario socialista en la Segunda República*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2000, vol. 2, pp. 971-975. <<

[12] Mariano Ansó, *Yo fui ministro de Negrín*, Barcelona, Planeta, 1976, p. 140. Ansó fue durante la guerra subsecretario del Ministerio de Justicia y luego ministro entre febrero y abril de 1938. <<

[13] La atribución a Prieto del nombramiento y la reacción negativa de Negrín se recoge en J. S. Vidarte, *Todos fuimos culpables*, pp. 481-482. También da cuenta de ella Zugazagoitia, *Guerra y vicisitudes de los españoles*, pp. 164-165. La opinión de Negrín sobre el gobierno de Largo Caballero en su carta a Prieto de 23 de junio de 1939. *Epistolario Prieto-Negrín. Puntos de vista sobre el desarrollo y consecuencias de la guerra civil española*, Barcelona, Planeta, 1990, p. 51. <<

[14] Como ya se ha señalado en el capítulo 7, las obras clave sobre la gestión financiera de Negrín son las de A. Viñas, *El oro de Moscú. Alfa y omega de un mito franquista*, y P. Martín Aceña, *El oro de Moscú y el oro de Berlín*. <<

[15] El historiador que más eco se ha hecho de las denuncias sobre el «criptocomunismo» de Negrín ha sido el galés B. Bolloten, *La guerra civil española*, caps. 13 y 45. <<

[16] Anotación del 20 y 31 de mayo de 1937. M. Azaña, *Memorias de guerra*, pp. 55-57. <<

[17] H. Graham, *Socialism and War. The Spanish Socialist Party in Power and Crisis, 1936-1939*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991. <<

[18] Reproducido en I. Prieto, *Cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional*, Barcelona, Planeta, 1989, pp. 61-62. <<

[19] J. S. Vidarte, *Todos fuimos culpables*, pp. 855 y 857. La cita previa de Martínez Barrio en M. Azaña, *op. cit.*, p. 404. Anotación correspondiente al 6 de septiembre de 1938. <<

[20] Informe de Denys Cowan, 12 de septiembre de 1938. E. Moradiellos, «El enigma del doctor Negrín: perfil político de un gobernante socialista», *Revista de estudios políticos* (Madrid), n.º 109, 2000, pp. 245-263 (cita en p. 257). <<

[21] Despacho de Skrine Stevenson, 31 de octubre de 1938. E. Moradiellos, «El enigma del doctor Negrín», p. 257. <<

[22] Sobre la visita a Suiza véanse: J. Zugazagoitia, *Guerra y vicisitudes de los españoles*, pp. 484-488 y 492-493. I. Prieto, *Convulsiones de España*, México, Oasis, 1967, vol. 1, p. 224. M. Ansón, *Yo fui ministro de Negrín*, pp. 228-229. M. Azaña, *op. cit.*, p. 403. R. Méndez, *Caminos inversos*, pp. 101-103. <<

[23] J. S. Vidarte, *Todos fuimos culpables*, p. 885. <<

[24] J. S. Vidarte, *op. cit.*, p. 788. <<

[25] Sobre las últimas gestiones de Negrín en Cataluña véase E. Moradiellos, *La perfidia de Albión*, pp. 347-350. <<

[26] J. Zugazagoita, *Guerra y vicisitudes de los españoles*, París, Librería Española, 1968, vol. 2, pp. 241-242. La reedición de esta obra (Barcelona, Tusquets, 2001) transcribe así este comentario: «¡Veremos cómo liquidamos la segunda parte! Ésa será más difícil» (p. 545). Ignoramos la razón del cambio. <<

[27] Recogida en C. Rojas, *La guerra civil vista por los exiliados*, p. 277. <<

[28] Citado en M. Tuñón de Lara y otros, *Juan Negrín López*, p. 183. Reiteraría Negrín a Prieto en carta de 23 de junio de 1939: «Resistir ¿por qué? Pues sencillamente porque sabíamos cuál sería el final de la capitulación». *Epistolario Prieto-Negrín*, pp. 47 y 55. <<

[29] El exilio de Negrín se analiza en J. Marichal, «Juan Negrín y la continuidad de la Segunda República»; y M. Alpert, «Don Juan Negrín en Londres, 1940-1956», ambos en J. Tusell y otros, *La oposición al régimen de Franco*, Madrid, UNED, 1990, tomo I, vol. 1, pp. 67-72 y 73-90. <<

[30] David Wingeate Pike, *In the Service of Stalin. The Spanish Communists in Exile, 1939-1945*, Oxford, Oxford University Press, 1993, pp. 24-25. <<

[31] Se reproducen en M. Ansó, *Yo fui ministro de Negrín*, pp. 337-342. <<

[32] Textos citados en M. Tuñón de Lara y otros, *Juan Negrín López*, pp. 162 y 187. <<

[1] La liturgia ceremonial de ese acto se describe en H. Raguer, *La pólvora y el incienso*, pp. 396-399; y Giuliana di Febo, *Ritos de guerra y de victoria en la España franquista*, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2002, pp. 161-172. <<

[2] S. Ellwood, «Entrevista con Julián Rubio López», en *La Guerra Civil*, Madrid, Historia 16, 1986, vol. 19, pp. 112-116. <<

[3] Alberto Oliart, *Contra el olvido*, Barcelona, Tusquets, 1998, p. 137. <<

[4] P. Preston, *Franco*, pp. 19-31. Luis Suárez Fernández, *Francisco Franco y su tiempo*, Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1984, vol. 1, pp. 79-115. Ambas son las biografías más completas documentalmente, amén de contrapuestas en su tratamiento del personaje. <<

[5] Así se definió en una entrevista publicada a finales de mayo de 1929 en la revista *Estampa*. P. Preston, *Franco*, p. 81. <<

[6] Palabras de Alfonso XIII en 1902. Citadas en S. G. Payne, *Los militares y la política en la España contemporánea*, París, Ruedo Ibérico, 1968, pp. 79-80. <<

[7] F. Franco, *Papeles de la guerra de Marruecos*, Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1986. <<

[8] Citado en E. Moradiellos, *Francisco Franco. Crónica de un Caudillo casi olvidado*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 35. <<

[9] José Antonio Ferrer Benimeli, «Franco y la masonería», en J. Fontana (ed.), *España bajo el franquismo*, Barcelona, Crítica, 1986, pp. 246-268. <<

[10] Francisco Franco Salgado-Araujo, *Mis conversaciones privadas con Franco*, Barcelona, Planeta, 1976, p. 425. <<

[11] M. Azaña, *Memorias políticas y de guerra*, Barcelona, Grijalbo, 1978, vol. 1, pp. 47 y 100. El juicio previo de Sanjurjo en P. Preston, *Franco*, p. 119. Pilar Franco, *Nosotros, los Franco*, Barcelona, Planeta, 1980, p. 73.
<<

[12] J. Arrarás Iribarren, *Franco*, Valladolid, Santarén, 1939, p. 226. <<

[13] I. Prieto, *Discursos fundamentales*, Madrid, Turner, 1975, p. 257. <<

[¹⁴] P. Preston, *Franco*, p. 168. J. Arrarás Iribarren, *Historia de la Segunda República*, Madrid, Editora Nacional, 1963, vol. 4, p. 304. L. Suárez Fernández, *Francisco Franco*, vol. 2, pp. 24-25. <<

[15] El texto del Manifiesto en J. Arrarás, *Historia de la Segunda República*, vol. 4, p. 409. <<

[16] Antonio González-Betes, *Franco y el «Dragon Rapide»*, Madrid, Rialp, 1987. <<

[17] P. Preston, *Franco*, pp. 187 y 194. Ricardo de la Cierva, *Franco*, Barcelona, Planeta, 1986, p. 164. P. Franco, *Nosotros, los Franco*, p. 89. <<

[18] Dos percepciones contrapuestas sobre el acierto de la estrategia bélica franquista se hallan en las obras ya citadas del coronel Blanco Escolá, *La incompetencia militar de Franco*; y del general Casas de la Vega, *Franco, militar*. <<

[19] Sobre el proceso de institucionalización administrativa franquista y sus modelos políticos véase José Luis Orella, *La formación del Estado Nacional durante la guerra civil española*, Madrid, Actas, 2001. <<

[20] P. Preston, *Franco*, p. 234. <<

[21] F. Franco, *Discursos y escritos del Caudillo*, Madrid, s. e., 1939, p. 12. <<

[22] Confesión hecha en el ocaso de su vida, ya en 1974, a su médico personal. Vicente Pozuelo, *Los últimos 476 días de Franco*, Barcelona, Planeta, 1980, p. 46. <<

[23] M. L. Rodríguez Aisa, *El cardenal Gomá y la guerra de España*, pp. 95, 97 y 148. <<

[24] Declaraciones del padre Bulart recogidas en Rogelio Baón, *La cara humana de un Caudillo. 400 anécdotas*, Madrid, San Martín, 1975, pp. 33-34.
<<

[25] Giuliana di Febo, *La santa de la raza. Un culto barroco en la España de Franco*, Barcelona, Icaria, 1988. Anotación del 8 de marzo de 1958 de F. Franco Salgado-Araujo, *Mis conversaciones privadas con Franco*, p. 90.
<<

[26] Ricardo Chueca, *El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET-JONS*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1983. Joan Maria Thomàs, *La Falange de Franco. El proyecto fascista del régimen*, Barcelona, Plaza y Janés, 2001. <<

[27] Palabras de R. Serrano Suñer, *Entre Hendaya y Gibraltar*, pp. 57, 59 y 117. <<

[28] Según cómputo de J. Tusell en *Franco en la guerra civil. Una biografía política*, Barcelona, Tusquets, 1992, p. 139. <<

[29] Sobre la duradera polémica acerca de la tipificación del régimen franquista véase E. Moradiellos, *La España de Franco. Política y sociedad*, Madrid, Síntesis, 2000, pp. 209-225. <<

[30] F. Franco, *Palabras del Caudillo, 19 abril 1937-31 diciembre 1939*, Barcelona, Ediciones Fe, 1939, p. 148. <<

[31] R. Serrano Suñer, *Entre Hendaya y Gibraltar*, pp. 49 y 54. <<

[32] E. Moradiellos, «El general apacible. La imagen oficial británica de Franco durante la guerra civil», en P. Preston (ed.), *La República asediada*, p. 34. <<

[33] J. Tusell, *Franco en la guerra civil*, pp. 228-233. <<

[³⁴] F. Franco, *Palabras del Caudillo*, p. 168. <<

[1] Palabras pronunciadas por el general De Gaulle en 1970 durante su visita a Toledo, cuyo Alcázar se negó a visitar. Recogidas en A. Reig Tapia, *Memoria de la guerra civil*, p. 35. <<

[2] El poema dedicado a Franco, bajo el título «¡Bienvenido Capitán!», celebraba el desfile de la Victoria y fue publicado con dicha ocasión en mayo de 1939. Recogido en J. Rodríguez Puértolas, *Literatura fascista española. Antología*, p. 568. El sahumero a José Antonio, de 1937, se reproduce en Manuel Rubio Cabeza, «Dos hermanos frente a frente: Antonio y Manuel Machado», en su obra *Los intelectuales españoles y el 18 de julio*, Barcelona, Acervo, 1975, pp. 149-158. <<

[3] Reproducido en M. Rubio Cabeza, «Dos hermanos frente a frente: Antonio y Manuel Machado», p. 158. <<

[4] Pedro Laín Entralgo, *Descargo de conciencia (1931-1960)*, Madrid, Alianza, 1989. <<

[5] Testimonio de Juan Crespo, estudiante monárquico salmantino y recluta voluntario en las primeras fuerzas insurgentes que combatían en Guadarrama. Hablaba con conocimiento de causa: su tío, el alcalde republicano de Salamanca, el doctor Casto Prieto, azañista y catedrático de universidad, había sido detenido y fusilado por los sublevados. Otro tío suyo sería detenido, juzgado y condenado por idéntica afiliación política y parentesco. Recogido en R. Fraser, *Recuérdalo tú y recuérdalo a otros*, vol. 1, pp. 155-156 y 232-237 (la cita en p. 235). <<

[6] Prólogo al primer acto de *La guerre civile* (París, 1965). Citado en Charles Zorgbibe, *La guerra civil*, Barcelona, Dopesa, 1975, p. 7. <<

[7] «Mihi enim omnis pax cum civibus bello civili utilior videbatur»
Fragmento de sus Filípicas (II, XV), los discursos pronunciados en el Senado
de Roma contra Marco Antonio en el transcurso de la última guerra civil entre
éste y Augusto. <<

[8] M. Azaña, *Discursos políticos*, p. 494. <<